

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO II



TESIS DOCTORAL

**El tratamiento de los medios comunitarios en el marco de la Ley
General de la Comunicación Audiovisual**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA

PRESENTADA POR

Miriam Meda González

Director

Luis Miguel Martínez Fernández

Madrid, 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Departamento de Periodismo II



**EL TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN EL MARCO
DE LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA
PRESENTADA POR




Miriam Meda González

Bajo la dirección del doctor
Luis Miguel Martínez Fernández

Madrid, 2014

Título original: *El tratamiento de los medios comunitarios en el marco de la Ley General de la Comunicación Audiovisual*

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons. Se permite su libre utilización y copia bajo las siguientes premisas:

-  **Reconocimiento (Attribution):** En cualquier explotación de la obra hará falta reconocer la autoría.
-  **No Comercial (Non commercial):** La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
-  **Compartir Igual (Share alike):** La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Registro de la Propiedad Intelectual: SAFE CREATIVE.
Código de Registro: 1410282413907



Miriam Meda González, 2014.
EDICIONES DISCORDIA.

Printed in Spain.

AGRADECIMIENTOS

A todos los profesores y profesoras del sistema público que me han acompañado durante más de dos décadas, especialmente a los profesionales del Instituto Salvador Allende de Fuenlabrada.

Sin todos ellos jamás estaría escribiendo estas líneas ni me habría embarcado en innumerables aventuras.

A Santiago Ramón y Cajal porque nos legó, sin conocernos pero presintiéndonos, *Los Tónicos de la voluntad*, sabiendo que los jóvenes investigadores seríamos los hijos que devoran los mismos Saturnos que nos han creado, y que por ello necesitaríamos motivos que nos ayudaran a seguir caminando.

Al guía y sextante de todo este largo, meditado e intelectual proceso: mi tutor de tesis.

DESAGRADECIMIENTOS

A José Ignacio Wert y a su claqué.

EL TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

SUMARIO

INTRODUCCIÓN	15
RAZONES PARA UNA TESIS	20
PREGUNTAS E HIPÓTESIS	24
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	26
1. Objetivos generales	26
2. Objetivos específicos	27
ESTADO DE LA CUESTIÓN Y DELIMITACIÓN DEL CAMPO	31
METODOLOGÍA, FUENTES Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS UTILIZADAS	38
CAPÍTULO 1: MARCO HISTÓRICO, TEÓRICO Y LEGISLATIVO DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓN	55
1.1. ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓN	55
1.2. CONCEPTOS Y TRADICIONES	63
1.2.1. Conceptos	63
1.2.2. Inicios: la comunicación para el desarrollo	66
1.2.3. El paradigma de Laswell	68
1.2.4. La teoría de los dos pasos	69
1.2.5. Teorías del desarrollo	71
1.2.6. Modelo en cascada	72
1.2.7. Críticas a las primeras teorías	75
1.2.8. Informe MacBride	78
1.2.9. Década de los ochenta: continúan las críticas	80
1.2.10. Década de los noventa: reconversión del término "desarrollo"	81
1.2.11. Llegada del nuevo siglo y nuevos modelos comunicacionales ciudadanos y medios alternativos	82
1.3. ESTUDIOS SOBRE LEGISLACIONES	94
1.3.1. Tradición legal del sistema de medios en el Estado español	94
1.3.2. Estudios relacionados con la legislación y el Tercer Sector de la Comunicación en Latinoamérica	99
1.3.3. Estudios relacionados con la legislación y el Tercer Sector de la Comunicación en Europa	102

CAPÍTULO 2: LA LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA DEL ESTADO ESPAÑOL Y LOS MEDIOS COMUNITARIOS (1977 – 2009)..... 109

2.1. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA, TAMBIÉN EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN.	109
---	-----

2.2. LA EXCLUSIÓN SISTEMÁTICA DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS DEL SISTEMA DE LICENCIAS.....	114
--	-----

2.3. LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE MEDIOS COMUNITARIOS PREVIA A LA LEY DE 2010 (1977-2009).	128
--	-----

2.3.1. Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de 1978.....	128
2.3.2. Plan Técnico Transitorio del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de 1979.....	128
2.3.3. Estatuto de la radio y la televisión española de 1980.....	129
2.3.4. Primer reparto de frecuencias de FM en la democracia (1981 – 1982).	130
2.3.5. Ley Estatal de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987.	131
2.3.6. El Plan Técnico de 1989.....	133
2.3.7. Ley de organización y control de las emisoras municipales de 1991.	135
2.3.8. Plan Técnico Nacional de radiodifusión sonora en ondas medias de 1993.	136
2.3.9. Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres de 1995.....	136
2.3.10. Plan Técnico de Radiodifusión en FM de 1997.	137
2.3.11. Ley General de Telecomunicaciones de 2003.....	138
2.3.12. Plan Técnico Nacional de Radiodifusión en FM de 2006.....	138
2.3.12. Ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal de 2006.	139
2.3.13. Ley de Impulso de la Sociedad de la Información de 2007.	140
2.3.14. Tabla-resumen de la legislación estatal previa a la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	141

2.4. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE MEDIOS COMUNITARIOS PREVIA A LA LEY DE 2010 (1977-2009).	144
---	-----

2.4.1. El País Vasco y la iniciativa social en medios.	145
2.4.2. La Comunidad Valenciana y la desaparición progresiva de los medios comunitarios en los decretos.	147
2.4.3. Galicia y otra de las desapariciones de las menciones a los medios comunitarios.	149
2.4.4. Castilla-La Mancha: de triple diferenciación a personas jurídicas.	150
2.4.5. Extremadura y la consideración de emisoras culturales.....	151
2.4.6. La Rioja y su distinción de emisoras no lucrativas.	152
2.4.7. Andalucía: plenitud de normativas pero falta de concesión de licencias a medios comunitarios.....	153
2.4.8. Castilla y León: radio sí, pero televisión no.....	157
2.4.9. Murcia y su eliminación explícita de los medios comunitarios en el apartado normativo.....	158
2.4.10. Canarias nunca ha reconocido a los medios comunitarios.....	159
2.4.11. Madrid llevado a juicio por los medios comunitarios.....	161
2.4.12. Cataluña: sin voluntad de independencia del Estado en materia de medios comunitarios.	165
2.4.13. Aragón y su legislación para proyectos "con ánimo de lucro".....	170
2.4.14. Asturias nunca ha apostado por los medios comunitarios.....	170

2.4.15. Baleares y las "emisoras de carácter no lucrativo"	171
2.4.16. Cantabria y la competición desigual por las licencias de emisión.	173
2.4.17. Navarra y las emisoras privadas de gestión indirecta.	174
2.4.18. Tabla-resumen de la legislación autonómica previa a la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	174

CAPÍTULO 3: LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: CÓMO, POR QUÉ, PARA QUÉ Y PARA QUIÉN 181

3.1. INTRODUCCIÓN.	181
3.2. PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: CALENDARIO Y LEGISLADORES.	183
3.3. LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA PRONUNCIA SUS DUDAS FRENTE A LA NUEVA LEY.	188
3.3.1. Los sindicatos de periodistas.	188
3.3.2. La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA).	189
3.3.3. El Foro para la Investigación y el Desarrollo de la Cultura Audiovisual	190
3.3.4. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)....	190
3.3.5. Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).	190
3.4. TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.	191
3.5. EVOLUCIÓN DEL ARTICULADO DE LA LEY.	197
3.5.1. Cambios propuestos en el articulado general de la Ley.	197
3.5.2. Cambios propuestos en el artículo concreto sobre medios comunitarios (Art 32).	204
3.5.3. Otros cambios propuestos por la Red de Medios Comunitarios para el campo audiovisual en general.	214

CAPÍTULO 4: LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y LA NORMATIVA AUDIOVISUAL HOY. CAMBIOS PRÁCTICOS..... 243

4.1. CREACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES	244
4.2. DESARROLLO DE LOS REGLAMENTOS REGULADORES DEL MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS.	246
4.3. AUTONOMÍAS QUE HAN MODIFICADO SU NORMATIVA PARA ADAPTARLA A LA LEY MARCO.	248
4.4. CONCURSOS DE LICENCIAS REALIZADOS.....	254
4.5. DE LA NEGATIVA LEGAL A LA PERSECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN CIUDADANA.	262

CAPÍTULO 5: PRESENCIA DE LA CIUDADANÍA POR EL DERECHO A EMITIR. EXPERIENCIAS DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS	265
5.1. ANTECEDENTES INMEDIATOS.....	265
5.2. LA LLEGADA DEL NUEVO MILENIO.....	269
5.3. EXPERIENCIAS EMBLEMÁTICAS DE MEDIOS COMUNITARIOS LOCALES.....	275
5.3.1. RTV Cardedeu: una información local estrella.....	275
5.3.2. Tele K: entre la lucha política y la formación audiovisual.....	277
5.3.3. Cuac FM: el gobierno autonómico en los tribunales.....	277
5.3.4. Onda Color: dentro de un proceso de regulación autonómico.....	278
5.4. NUEVOS RETOS Y CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS.....	279
5.5. EL RETROCESO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ESPAÑA Y LOS NUEVOS MEDIOS E INICIATIVAS CIUDADANAS.....	282
CAPÍTULO 6: TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN LAS LEGISLACIONES EUROPEAS Y LATINOAMERICANAS	291
6.1. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN NORUEGA: PREEMINENCIA DE LAS RADIOS FRENTE A LAS TELEVISIONES.....	295
6.2. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN DINAMARCA: EL CASO SINGULAR DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE COMUNITARIA.....	300
6.3: SUECIA: ALTA ACTIVIDAD Y NÚMERO DE MEDIOS COMUNITARIOS.....	305
6.4: ALEMANIA: ESTADO FEDERAL CON DIFERENTES SISTEMAS DE MEDIOS.....	311
6.5: IRLANDA: HOMOLOGACIÓN FORMATIVA EN RADIO COMUNITARIA SIN PRECEDENTES.....	322
6.6. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN ARGENTINA: CINCO AÑOS DE INCERTIDUMBRE.....	326
6.7. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN URUGUAY: OTRA LEY “MODELO” Y FALTA DE AUTORIDAD AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE.....	334
6.8. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN BOLIVIA: PARADOJAS EN LAS RADIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS.....	342

6.9. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN ECUADOR: NUEVAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO GRACIAS A LA LEY.....	349
6.10. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN VENEZUELA: DE LOS MEDIOS IMPRESOS A LOS MEDIOS DE RADIODIFUSIÓN.....	354
6.11. EL <i>BIS</i> DE FRANCIA Y PAÍSES BAJOS.....	362
CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LEGISLAR A LOS MEDIOS COMUNITARIOS.....	365
7.1. COMPARACIÓN ENTRE EL <i>DEBE</i> Y EL <i>ES</i> EN EL TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓN ESPAÑOL.....	367
7.2. APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.	395
CONCLUSIONES.....	405
AMPLIO RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN	419
INTRODUCTION.....	419
OBJECTIVES	420
RESULTS.....	421
CONCLUSIONS.....	422
BIBLIOGRAFÍA.....	423
BIBLIOGRAFÍA ACADÉMICA	423
ARTÍCULOS DE PRENSA.....	442
FUENTES JURÍDICAS.....	446

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 0.1. Cuadro de objetivos de la investigación.....	30
Tabla 0.2. Cuadro de delimitación del campo por clasificaciones.....	35
Tabla 0.3. Referencias y recomendaciones internacionales.....	40
Tabla 0.4. Legislaciones relevantes en Europa y Latinoamérica	43
Tabla 0.5. Legislación española estatal y autonómica	49
Tabla 0.6. Enmiendas desde la sociedad civil organizada.	51
Tabla 1.1: ¿Alternativos? ¿Radicales? ¿Ciudadanos? Aproximaciones tipológicas.....	86
Tabla 1.2: Diferentes tradiciones de medios alternativos	89
Tabla 1.3. CMFE Rating System Criteria for Community Media	104
Tabla 2.1: Gestión directa e indirecta del espectro radioeléctrico	116
Tabla 2.2. Licencias: cuestión de Estado vs. autonomías.	127

Tabla 2.3. Legislación previa a la Ley General de la Comunicación Audiovisual	144
Tabla 2. 4. Legislación autonómica previa a la Ley General de la Comunicación Audiovisual	180
Tabla 3.1. Proceso de tramitación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual	185
Tabla 3.2. Cambios sobre la reserva de frecuencias	199
Tabla 3.3. Cambios sobre medios comunitarios y pluralidad	199
Tabla 3.4. Diferenciación del TSC	200
Tabla 3.5. Financiación y tasas	201
Tabla 3.6. Regulación de medios existentes	202
Tabla 3.7. Denominación para el TSC	205
Tabla 3.8. Definición para el TSC.....	206
Tabla 3.9. Participación de la ciudadanía en los medios.....	208
Tabla 3.10. Reserva de espectro radioeléctrico	208
Tabla 3.11. Otorgamiento de licencias.....	210
Tabla 3.12. Negocios con las licencias de medios comunitarios	211
Tabla 3.13. Emisión de publicidad y canal en abierto	212
Tabla 3.14. Limitación y fiscalización de las cuentas.....	213
Tabla 3.15. Pago de cánones y tasas	213
Tabla 3.16. Sobre el término “mercado audiovisual”.	214
Tabla 3.17. Diversidad cultural y lingüística.	215
Tabla 3.18. Libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual.....	216
Tabla 3.19. Régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual de interés general.....	217
Tabla 3.20. Programación en cadena	218
Tabla 3.21. Criterios de adjudicación de licencias.....	222
Tabla 3.22. Período de otorgamiento de licencias.	223
Tabla 3.23. Renovación de las licencias.	225
Tabla 3.24. Negocios jurídicos sobre las licencias de comunicación audiovisual	226
Tabla 3.25. Sobre un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural (1).....	227
Tabla 3.26. Sobre un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural (2).....	231
Tabla 3.27. Función de servicio público	237
Tabla 3.28. Cuadro de enmiendas aprobadas y denegadas	239
Tabla 4.1. Decretos y concursos de licencias FM tras la LGCA	261
Tabla 5.1. Proyectos integrados en la ReMC.....	273
Tabla 6.1: Muestra de países europeos y latinoamericanos de la comparativa legislativa	293
Tabla 6.2. Dinamarca: definiciones.....	301
Tabla 6.3. Dinamarca: subvenciones.....	305
Tabla 6.4. Alemania: <i>länder</i> con legislación en medios comunitarios.	313
Tabla 6.5. Alemania: definiciones.....	314
Tabla 6.6. Alemania: posibilidad de emisión de los medios comunitarios	315
Tabla 6.7. Alemania: área de emisión	316
Tabla 6.8. Alemania: receptores de las licencias	317
Tabla 6.9. Alemania: duración de la licencia	318
Tabla 6.10. Alemania: emisión de publicidad.....	319
Tabla 6.11. Alemania: subvenciones.....	321
Tabla 6.12. Alemania: resumen de <i>länder</i>	321
Tabla 6.13: Uruguay: definiciones	336
Tabla 6.14: Uruguay: posibilidad de emisión de los medios comunitarios	338
Tabla 6.15: Uruguay: receptores de licencias.	339
Tabla 6.16: Uruguay: Consejo Audiovisual	342

Tabla 6.17. Bolivia: definiciones.	344
Tabla 6.18. Bolivia: otorgante de las licencias.....	345
Tabla 6.19. Bolivia: tasas	349
Tabla 6.19. Venezuela: tasas	362
Tabla 7.1. La Ley General de la Comunicación Audiovisual frente a las recomendaciones internacionales	394
Tabla 7.2. Adecuación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual a las recomendaciones internacionales	396
Tabla 7.3. Cuestionario autoridades u organismos audiovisuales.....	399

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1. Paradigma de Lasswell	68
Figura 1.2. Teoría de la aguja hipodérmica.....	69
Figura 1.3. Modelo de difusión	70
Figura 1.4. Modelo en cascada.....	73
Figura 1.5. Teoría de la difusión de las innovaciones	74
Figura 1.6. Modelo de comunicación para el desarrollo de la ciudadanía	83

"Todas las personas tienen derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad".

Art. 4, Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.

INTRODUCCIÓN

La tesis doctoral que nos ocupa trata sobre las oportunidades o escollos legales que tienen los medios comunitarios para emitir en once países diferentes. Esta investigación se desarrolla en el contexto del sistema legal audiovisual del Estado español en democracia (tanto nacional como de sus autonomías) comparándolo con cinco naciones europeas y cinco latinoamericanas escogidas en función del posicionamiento de estas en listas internacionales de mayor desarrollo del Tercer Sector de la Comunicación.

El nacimiento de los medios comunitarios en este lado del mundo fue tardío en comparación con los continentes estudiados (la aparición de este tipo de proyectos en Latinoamérica data de la década de los cuarenta, mientras que en Europa sucedió lo propio a finales de la década de los sesenta). El sistema de medios audiovisuales español durante la dictadura no había dejado excesivo lugar a la imaginación, encontrándonos tan solo con un sistema de dos canales públicos de televisión junto con una radio pública que convivía con un puñado de iniciativas privadas. No será hasta finales de los años 70, con los primeros pasos del sistema democrático actual, cuando aparezcan los primeros medios de televisión y radio independientes y gestionados por la propia ciudadanía en Catalunya y en Madrid.

Si las cuestiones audiovisuales durante el período franquista eran, como es de esperar, propias de una dictadura que controla todas las comunicaciones masivas que se realizan en su territorio nacional a través de los medios de comunicación, el período democrático se ha caracterizado por una gran desregulación en esta materia que ha beneficiado enormemente a los conglomerados mediáticos privados en detrimento de los medios públicos y los medios comunitarios. Y todo ello a pesar del artículo 20 de la Constitución Española que reconoce y protege el derecho de cualquier persona a utilizar cualquier medio de difusión (por lo tanto, también las ondas) para difundir libremente sus pensamientos, ideas, opiniones e información veraz.

Este sentido teórico choca frontalmente en la práctica, siendo una reciente sentencia de la Audiencia Nacional (julio de 2014) solo un ejemplo de los muchos que se están viviendo actualmente en el Estado español: este órgano judicial absolvió a casi una veintena de ciudadanos acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado y otro de atentado a la autoridad por cercar el Parlament catalán con una manifestación y realizar una confrontación directa en la calle con los diputados para protestar contra la sesión parlamentaria de ese día que estuvo dedicada a los recortes económico-sociales. Lo relevante de la sentencia para el caso que nos ocupa es que dice así:

Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de las personas y grupos para que los

*derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar.*¹

Cabe preguntarse, por lo tanto, qué posibilidades tiene la ciudadanía española de participar en el debate político y social a través de una figura completamente legítima, y también legal, como es de los medios comunitarios gestionados por entidades sin ánimo de lucro o por un colectivo organizado de personas, y qué dinámicas se producen en este sentido en los países vecinos (bien geográfica y políticamente, Europa, como cultural e idiomáticamente, Latinoamérica) en comparación con las que se suceden en el Estado español.

Tras décadas de retraso y de dispersión de la normativa referida a los medios de comunicación audiovisuales en este país, finalmente en el año 2010 se aprobó una Ley General de la Comunicación Audiovisual, la primera de su categoría en el actual período democrático, que pretendía ordenar todas las cuestiones pendientes en una materia que de por sí ha estado muy desregularizada todos estos años. Creemos que este es un hito lo suficientemente importante para la comunicación como para recorrer de forma estructurada y sistemática los pormenores, ventajas, desventajas, intereses, hechos pasados y posibilidades de futuro que tiene la información ciudadana de abrirse paso en el contexto audiovisual con iniciativas exentas de lucro y sustituyendo, para bien o para mal, la calidad y el servicio público que se le presuponen a los medios del Estado, autonomías y municipios pero que estos están dejando de lado en favor de intereses partidarios y proselitismos políticos.

Somos plenamente conscientes de las desconfianzas, escepticismos y aprensiones que puede despertar la carga legal analizada en la presente tesis doctoral, pero precisamente por ser el núcleo y la base del sistema de medios, el que nos permite hablar de su existencia o su inexistencia, hemos tomado el reto de simplificar la cuestión legal para que las personas estudiosas e interesadas en el periodismo puedan entender que la estructura de la

¹ España. Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 31/2014 de 7 de julio.

comunicación, la pluralidad, el servicio público, la ética periodística, la información veraz, el derecho a la información y la libertad de expresión quedan incompletas, inexplicables y sufren continuos retrocesos si no se realiza un mínimo acercamiento a las condiciones legales de igualdad y equidad que permiten, o permitirían, un ejercicio democrático de la comunicación. Y ese acercamiento es tan necesario hacerlo tanto desde una perspectiva profesional del Derecho como una perspectiva profesional del periodismo porque si nos limitamos solo a la primera quedarían campos fundamentales inexplorados. Más allá de eso, es incomprensible y, más aún, condenable intelectualmente, pretender que la comunicación esté aislada de otros contextos como los lingüísticos, económicos, antropológicos, históricos, políticos, sociológicos, psicológicos y por supuesto legales y que, por tanto, sean otros profesionales o facultades los que deban realizar estos acercamientos a transversalidades de la materia del periodismo y la comunicación.

Los medios alternativos, libres y comunitarios (Tercer Sector de la Comunicación) son un fenómeno que se ha desarrollado en todo el mundo (Asociación Mundial de Radios Comunitarias, 2009; Downing, J., 2010; Buckley, S., 2011). En estos últimos años han tenido un papel esencial en la llamada *Primavera Árabe*, una serie de manifestaciones y protestas ocurridas en el mundo árabe y que comenzaron a finales de 2010. Sus revueltas se han extendido por Túnez, Egipto, Libia, Bahrein, Siria, Yemen, Algeria, Irak, Jordania, Marruecos y Omán, y varias de ellas tuvieron como resultado la caída de diversos gobiernos. En este contexto, los medios comunitarios y alternativos han provisto a la ciudadanía de esos países de una información independiente, un lugar para organizarse colectivamente y un núcleo de demandas reformistas (Kuttab, D., 2011).

La implantación de este tipo de medios en los distintos países nos permite observar cómo cada sociedad ha ido construyendo su propio sistema de comunicación y cómo han actuado los distintos gobiernos ante esta dinámica: si reconociendo y apoyando estas iniciativas ciudadanas o si, por el contrario, han optado por obstaculizar su existencia y desarrollo, bien mediante la represión directa o bien a través de políticas de comunicación que han dejado al

margen a estos proyectos.

En este sentido, en los últimos años estamos asistiendo a cambios y revisiones por parte de algunos Estados en sus políticas de comunicación. En América Latina países como Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador o Venezuela están destacando su apuesta por los medios comunitarios, al igual que países europeos como Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania e Irlanda, mientras que en otros países, como el Estado español, Hungría, Chile o Brasil, las emisoras sin ánimo de lucro tienen un reconocimiento legal muy limitado y se encuentran ante un incierto futuro. Este vacío provoca, asimismo, indecisiones en temas como la sostenibilidad diaria de este tipo de proyectos o la imposibilidad de acceder a concursos de licencias (Meda, M., 2012) de forma que no tengan que competir en desigualdad de oportunidades con las empresas comerciales.

Por tanto, consideramos de vital importancia analizar las normas jurídicas audiovisuales de diversos Estados de derecho, teniendo como núcleo central de la investigación el sistema de leyes e instituciones español, puesto que los medios de comunicación juegan un papel esencial en la construcción de una sociedad democrática y plural. Los medios comunitarios amplían el derecho a la comunicación, incluyendo el derecho a ser escuchado y no sólo a ser informado. La incidencia social de estos proyectos es intrínseca, ya que la mera existencia de los mismos democratiza las comunicaciones y establece una agenda ciudadana por parte de las organizaciones de la sociedad civil (García García, J., 2013). El derecho a la información se inscribe en los contextos políticos, económicos y sociales, y no solo como la preocupación de los periodistas o de las empresas mediáticas, dado que en la Constitución Española de 1978 no se especifica de ningún modo que la emisión de información sea menester único y exclusivo de los profesionales del periodismo y, mucho menos aún, de los grandes conglomerados mediáticos.

Debemos también destacar que esta investigación es una ampliación mucho más pormenorizada, analítica, compleja y exhaustiva de la realizada por mí misma para el *Trabajo*

Fin de Máster del *Máster en Comunicación con fines sociales: estrategias y campañas* de la Universidad de Valladolid (2010). Además de eso, la comparación de los dos trabajos puede resultar interesante puesto que el citado se escribió tan solo tres meses después de la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, mientras que la tesis presente analiza los cuatro últimos años desde la aprobación de dicha normativa, y se puede ver la evolución (o no evolución) desde el corto plazo (trabajo fin de máster) y desde el largo plazo (tesis doctoral).

RAZONES PARA UNA TESIS.

Los motivos, el espíritu de investigación y la curiosidad que nos mueven a responder a las preguntas e hipótesis que hemos formulado son los siguientes:

1. Actualidad: Es un tema muy actual cuyo estudio puede reportar una infinidad de nuevos datos y conclusiones no analizadas por el momento de manera tan exhaustiva, puesto que la Ley General de la Comunicación Audiovisual acaba de entrar en vigor hace cuatro años. Si bien es cierto que ha habido pequeños asomos al Derecho comparado audiovisual comunitario por diversos autores, estos se han centrado más en análisis bilaterales (por ejemplo, entre la legislación española y argentina, véase Hernández, M., 2012; y entre la legislación española y brasileña, véase Cabral, A., 2013) o en análisis geográficos de países muy concretos (por ejemplo, para Latinoamérica véase Ramos, J., 2012 y 2013; Malerba, J., 2012; Fundación Libertad de Expresión + Democracia, 2013; Badillo, Á., *et al*, 2013; y para Europa véase Mediadem Consortium, 2012; CMFE 2012 y 2013). Un estudio mucho más amplio que analiza trece países de los cinco continentes fue llevado a cabo por la UNESCO en 2003, lo que sucede es que en esta última década muchas de las legislaciones que se muestran y comparan en ese estudio han cambiado. También hemos de destacar el interés en esta materia que se desprende de autores y autoras catalanes en esta materia, casi siempre comparando la parte legislativa y los procesos normativos de Catalunya con el caso Europeo (Fleischman, L.;

Reguero. N.; Sáez. Ch.; Guimerá J.A.; Bergés, L; Mayugo, C.). Igualmente, hay otras investigaciones de autores españoles sobre radio local municipal que, si bien dichas radios, al ser propiedad de los ayuntamientos, no son consideradas comunitarias para este estudio debido a que no encajan dentro de las definiciones internacionales que manejamos, a veces sí que incluyen aspectos de radios comunitarias o bien las fronteras de participación y de desarrollo de estos proyectos locales no son tan estrictas o tan definidas como podría parecer en un primer momento, acercándose más a los procesos comunitarios y alternativos (Chaparro, M.). Por último, también han sido relevantes las contribuciones sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual realizadas por autores como Ramón Zallo o Elvira Calvo.

2. Aumento del conocimiento del sector: A pesar de que todas las personas tienen unos conocimientos básicos o de cultura general sobre el mundo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y del asociacionismo, si nos referimos al “Tercer Sector de la Comunicación” no está tan claro cómo puede ser que los medios de comunicación sean sin ánimo de lucro y que cualquier ciudadano/a pueda hacer su propia información por los canales analógicos habituales y no tanto por Internet, que sí se entiende como un elemento imprescindible del llamado “periodismo ciudadano”. Es decir, en el Estado español (no tanto en Latinoamérica) existe un desconocimiento amplio y grave sobre todo lo que no sean medios comerciales o medios públicos, incluso desafortunadamente en el ámbito universitario relacionado con las facultades en las que se imparten estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual (Barranquero, A. y Saéz, Ch., 2010).

3. Visibilidad de la organización colectiva del sector: Vivimos también actualmente uno de los hitos en el Estado español de la organización, estructuración, trabajo conjunto y defensa de los derechos de los medios comunitarios debido a la creación de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), la primera y única de este estilo, formalizada legalmente y con un alcance geográfico estatal. Esta entidad fue legalmente constituida en mayo de 2009, pero ya

tenía un funcionamiento informal desde 2005². Se constituyó como una Federación de Asociaciones de ámbito estatal y a partir de entonces ha conseguido con sus intervenciones, alegaciones y enmiendas presentadas cambiar aspectos del articulado de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que les perjudicaban, tanto a su paso por el Congreso como por el Senado, además de realizar otro tipo de acciones legales relacionadas con el ámbito de la comunicación audiovisual y las cuales detallaremos a lo largo de esta tesis.

4. Retos del paso de las tecnologías analógicas a las digitales: Si los medios comunitarios que utilizan el espacio radioeléctrico para sus emisiones no consiguen un reconocimiento legal adecuado mientras emiten en analógico, muy probablemente estén condenados a la desaparición tras la llegada de los encendidos digitales (ya efectivo en el caso de la televisión y aún sin fecha prevista en el caso de la radio). No resulta descabellado realizar esta hipótesis en el caso de la radio digital debido a los antecedentes legales respecto de esta tecnología en el Estado español: cuando la televisión procedió a su apagón analógico, la mayoría de los canales y su ubicación en los múltiples³ disponibles fueron concedidos en un primer momento a los operadores de televisión que ya estaban emitiendo dentro de la legalidad⁴ (aunque luego se amplió de alguna manera la oferta tanto legal como ilegal).⁵ Como hemos adelantado en las

² Del primer Encuentro Estatal informal de este tipo de medios, celebrado en Madrid en 2005, he consultado las actas. A partir del segundo encuentro, realizado en Salamanca en 2006 y hasta la fecha de escritura de esta tesis, he participado y presenciado todos los acontecimientos relacionados con la ReMC, incluida su constitución legal en 2009 y formando parte de su Comisión de Coordinación.

³ Un "canal múltiple digital" o "múltiplex" es un espacio donde se pueden emitir más canales que en el sistema analógico, dependiendo de ratio de compresión empleado y, por tanto, de calidad, pudiéndose además utilizar el espacio sobrante para otros usos. Por ejemplo, en el espacio donde antes teníamos un canal analógico ahora tenemos un múltiplex en el que caben cuatro canales en definición estándar o dos canales en alta definición, además de, en ambos casos, permitir que el espacio sobrante se utilice para contenidos interactivos, teletextos, etc.

⁴ España. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. *Boletín Oficial del Estado*, 30 de julio de 2005, núm. 181, p. 27006. Disponible en <http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf> [Recuperado el 11 de septiembre de 2012].

⁵ España. Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. *Boletín*

hipótesis, varias de estas primeras concesiones han sido anuladas por el Tribunal Supremo al no respetar los cauces legales de concursos de licencias públicos y abiertos.

5. Crisis laboral en la comunicación y en el periodismo: Dada la crisis laboral que estamos viviendo en el campo de la comunicación y en el periodismo y los constantes cierres de medios de comunicación con los que nos ha recibido esta segunda década del tercer milenio (según el Informe Anual de la Profesión Periodística de 2012, ese año hubo más de 27.000 periodistas en situación de desempleo, y según el Informe de 2013 desde 2008 se han perdido 11.151 empleos y han cerrado 284 medios –a lo que hay que sumar el número de licenciados cada año- y muchos más han visto empeoradas sus condiciones de trabajo y reducidos los salarios), cuanto más conocimiento, investigaciones y difusión de lo que es el Tercer Sector de la Comunicación se haga, más probabilidades tendrán los nuevos egresados, los periodistas y los comunicadores en paro de encontrar o de crear un empleo, puesto que hay medios comunitarios que tienen una plantilla contratada. Para que esto pueda suceder han de darse dos factores fundamentales: el fomento y el desarrollo de este tipo de medios sin ánimo de lucro por parte de los poderes públicos (que veremos a lo largo de toda esta tesis) y la difusión y enseñanza de este tipo de comunicación que, como nos enseñan Barranquero y Sáez (2010) y Barranquero y Herrera (2012), no suele producirse en los ámbitos universitarios españoles ni a nivel de docencia ni a nivel de grupos de investigación, salvo excepciones (másteres en la Universidad de Valladolid o en la Universitat Autònoma de Barcelona, e investigaciones en grupos como REAL-CODE, COMandalucía, ULEPICC o Compóliticas).

6. Ejemplo de regulación para otros países: Actualmente existen países, como Brasil o la República Checa, que están inmersos en un proceso legal para cambiar sus legislaciones audiovisuales nacionales, y las organizaciones ciudadanas que desean que en esas modificaciones se reconozca el Tercer Sector de la Comunicación están mirando

Oficial del Estado, 3 de abril de 2010, núm. 81, p. 30750. Disponible en <http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/03/pdfs/BOE-A-2010-5400.pdf> [Recuperado el 11 de septiembre de 2012].

inevitablemente hacia países que recientemente hayan legislado este campo, como el Estado español, el argentino, el ecuatoriano o el uruguayo. Un análisis riguroso del antes, el durante y el después de la aprobación de las leyes, así como de las acciones de los movimientos ciudadanos involucrados y del qué ha cambiado en la práctica varios años después pueden ayudar a estos países a realizar una regulación que ya prevea las situaciones que se pueden dar y evite los errores, si los hubiera, de otras legislaciones.

7. Concepto de "reversibilidad": La presente tesis, al contener numerosos ejemplos concretos y partir de un espíritu de transformación de la realidad, trae desde la sociedad una serie de experiencias y procesos que, una vez diseccionados y reflexionados podrán volver a esta para su uso por parte del Tercer Sector de la Comunicación. Por un lado, el intento de simplificar las cuestiones legales que, sin embargo, se entiendan o no afectan a todas las personas implicadas en medios comunitarios y a las potenciales audiencias, puede animar a dichas personas a presentar recursos y alegaciones ante las nuevas normativas que les afecten. Por otro, provocará en la ciudadanía una mayor conciencia y conocimiento de su derecho a la comunicación y emisión de información y la necesidad de reclamar este derecho en las instituciones. Por último, este trabajo contribuirá a una mayor visibilización y concienciación docente sobre un sector de la comunicación ignorado en las enseñanzas superiores paradójicamente dedicadas al periodismo.

PREGUNTAS E HIPÓTESIS.

Una vez ubicados en este contexto, la pregunta principal que se hace en esta tesis es ¿ha tenido en cuenta el Estado español toda la tendencia legal internacional en los últimos años en materia del audiovisual a la hora de desarrollar en el último período democrático la primera ley marco general que va a regir a este sector en los próximos años? Dado que la regulación audiovisual es una materia también descentralizada y responsabilidad de las autonomías, ¿cómo están estas administraciones públicas actuando para desarrollar el campo legal de la

comunicación comunitaria? Lo cual, inevitablemente, nos lleva también a la pregunta ¿cómo han legislado los países europeos y latinoamericanos esta materia, y en que posición se encuentra el Estado español en comparación con ellos? Toda esta inquietud provoca que la tesis tenga el carácter inevitable de una comparativa internacional entre España y diversos países de Europa y Latinoamérica.

Para resolver estas preguntas partimos de una doble hipótesis:

1. El Estado español ha sufrido un retraso en la desregulación audiovisual respecto de otros países occidentales (Bustamante, E., 2006; Segovia, A., Luján, L., 2010) debido al control del régimen dictatorial franquista y su herencia (1939-1975), de manera que España no ha aprendido nada de la experiencia ajena "sino más bien todo lo contrario". (Bustamante, E., 2006, p. 137). Creemos que en el caso de la regulación explícita de los medios de comunicación comunitarios esta tendencia española de ignorar el contexto democrático europeo y mundial se ha mantenido incólume.

2. Las concesiones de licencias de emisión son realizadas en última instancia por las autonomías, no por el Estado central. Según Enrique Bustamante (2006), existe una perpetuación de la tradición anterior en las que dichas concesiones se realizan de manera opaca y decidida sólo por los gobiernos "en función de las coyunturas y los amigos políticos" (p. 136). Si a esto le sumamos que la autoridad independiente audiovisual que podría vigilar el correcto desarrollo en igualdad de oportunidades de los concursos de licencias -un Consejo Audiovisual-, no existe en el Estado español de forma unitaria (siendo el único país de la Unión Europea que carece de él) sino integrado en un *superregulador* (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia); y que desde el reconocimiento en la teoría (la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010) de los medios comunitarios, estos no han visto aplicación en la práctica legal ni han experimentado un aumento de los permisos legales de emisión (excepto en Navarra); creemos que los poderes públicos y gubernamentales continúan efectivamente actuando en connivencia con el sector audiovisual privado comercial

en detrimento del sector audiovisual público y del sector audiovisual sin ánimo de lucro. Uno de los hechos constatados más representativos de esta dinámica de "amigos políticos" es la reciente anulación, en diciembre de 2012, el acuerdo del Gobierno del PSOE que procedía al reparto de los canales de la Televisión Digital Terrestre tras el apagón analógico de 2010. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo⁶, que ha afectado a los conglomerados de comunicación Mediaset, Atresmedia, Veo Televisión y Net Televisión, la asignación de canales adicional se realizó sin la convocatoria y resolución de un concurso público tal y como exige la regulación vigente, y por tanto estos grupos han tenido que cerrar muy recientemente, el pasado 6 de mayo, un total de nueve canales de televisión.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

Estas razones de estudio persiguen la consecución de unos objetivos tanto generales como específicos, que analizaremos en las conclusiones finales para ver si se han cumplido o no y que ayudarán a delimitar al final cuáles son los caminos que quedan abiertos a la investigación gracias a esta tesis:

1. Objetivos generales:

-Identificar cuáles son las legislaciones europeas y latinoamericanas que mejor regulan los medios de comunicación del Tercer Sector según diversos organismos y estudios comparativos ya realizados, para contraponer sus contenidos al de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

⁶ España. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª). Auto del recurso ordinario 442/2010 de 18 de diciembre de 2013; España. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª). Auto del recurso ordinario 442/2010 de 25 de marzo de 2014.

- Detallar de forma tanto descriptiva como analítica el proceso de elaboración, el entramado y los contenidos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual española de 2010.
- Comparar y determinar si la legislación española, tanto estatal como autonómica, referida al Tercer Sector de la Comunicación, se acerca o se aleja de las legislaciones europeas y latinoamericanas, y de las posiciones que los relatores internacionales de la libertad de expresión tienen ante este fenómeno.
- Describir qué procesos sociales y/o legales han permitido a los colectivos civiles participar en las modificaciones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.
- Poner en valor las movilizaciones más importantes que han realizado esos mismos colectivos civiles durante la tramitación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.
- Analizar si en la práctica han cambiado las condiciones de desarrollo y reconocimiento del Tercer Sector de la Comunicación en el Estado español en estos cuatro años en los que la nueva norma audiovisual ya ha estado en vigor y en funcionamiento.

2. Objetivos específicos:

- Conocer las actuaciones realizadas por diversos gobiernos y organismos internacionales en materia de legislación de acceso a la comunicación por parte de la ciudadanía.
- Identificar los años en los que fueron elaboradas diversas legislaciones internacionales para comparar la madurez de los procesos de acceso al derecho de la comunicación con la regulación audiovisual de la historia de la democracia del Estado español.
- Conocer las actuaciones y debates llevados a cabo por el Gobierno español y las dos

Cámaras legislativas en relación a la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

-Averiguar si el Gobierno español se ha reunido con todos los agentes interesados e implicados en el sector audiovisual para redactar y dar el visto bueno a la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

-Investigar y dar a conocer el hecho de que el Estado español y las autonomías no han concedido apenas frecuencias del espacio radioeléctrico a los medios comunitarios, solo en tres ocasiones a lo largo de las últimas tres décadas.

-Identificar el grado de coherencia y correspondencia de la legislación audiovisual española y autonómica con resoluciones y dictámenes de los organismos supranacionales a los que pertenece, tales como la Unión Europea, y su adecuación a recomendaciones internacionales sobre cómo legislar la materia del Tercer Sector de la Comunicación.

-Mostrar los procesos concretos de diversos movimientos sociales y la descripción de su desarrollo e influencia para aportar cambios desde la sociedad civil a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, por si pudiera servir de ejemplo para otro tipo de demandas de la ciudadanía organizada hacia la clase legisladora.

-Analizar los últimos concursos de licencias y legislaciones autonómicas emanados de los poderes públicos tras la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para ver si han redundado en cambios en la práctica y la legalidad de los medios comunitarios del Estado español.

Objetivos generales	Objetivos específicos
1. Identificar cuáles son las legislaciones europeas y latinoamericanas que mejor regulan los medios de comunicación del Tercer Sector según diversos organismos y estudios comparativos ya realizados, para contraponer sus contenidos al de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	1. Conocer las actuaciones realizadas por diversos gobiernos y organismos internacionales en materia de legislación de acceso a la comunicación por parte de la ciudadanía.
	2. Identificar los años en los que fueron elaboradas diversas legislaciones internacionales para comparar la madurez de los procesos de acceso al derecho de la comunicación con la regulación audiovisual de la historia de la democracia del Estado español.
2. Detallar de forma tanto descriptiva como analítica el proceso de elaboración, el entramado y los contenidos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	3. Conocer las actuaciones y debates llevados a cabo por el Gobierno español y las dos Cámaras legislativas en relación a la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.
	4. Averiguar si el Gobierno español se ha reunido con todos los agentes interesados e implicados en el sector audiovisual para redactar y dar el visto bueno a la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.
3. Comparar y determinar si la legislación española, tanto estatal como autonómica, referida al Tercer Sector de la Comunicación se acerca o se aleja de las legislaciones europea y	5. Investigar y dar a conocer el hecho de que el Estado español y las autonomías no han concedido frecuencias del espacio radioeléctrico a los medios comunitarios, excepto en tres ocasiones a lo largo de las últimas tres décadas.

latinoamericanas, y de las posiciones que los relatores internacionales de la libertad de expresión tienen ante este fenómeno.	6. Identificar el grado de coherencia y correspondencia de la legislación audiovisual española y autonómica con resoluciones y dictámenes de los organismos supranacionales a los que pertenece, tales como la Unión Europea, y su adecuación a recomendaciones internacionales sobre cómo legislar la materia del Tercer Sector de la Comunicación.
4. Describir qué procesos sociales y/o legales han permitido a los colectivos civiles participar en las modificaciones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	7. Mostrar los procesos concretos de diversos movimientos sociales y la descripción de su desarrollo e influencia para aportar cambios desde la sociedad civil a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, por si pudiera servir de ejemplo para otro tipo de demandas de la ciudadanía organizada hacia la clase legisladora.
5. Poner en valor las movilizaciones más importantes que han realizado esos mismos colectivos civiles durante la tramitación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	
6. Analizar si en la práctica han cambiado las condiciones de desarrollo y reconocimiento del Tercer Sector de la Comunicación en el Estado español en estos cuatro años en los que la nueva norma audiovisual ya ha estado en vigor y en funcionamiento.	8. Analizar los últimos concursos de licencias y legislaciones autonómicas emanados de los poderes públicos tras la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para ver si han redundado en cambios en la práctica y la legalidad de los medios comunitarios del Estado español.

Tabla 0.1. Cuadro de objetivos de la investigación (elaboración propia).

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y DELIMITACIÓN DEL CAMPO.

Aunque consideramos que la totalidad del contexto va a ser analizado con detalle en el Capítulo 1, nos gustaría adelantar en esta introducción algunos puntos clave del mismo porque lo vemos necesario para un mejor entendimiento de las preguntas de investigación que nos vamos a plantear. La comunicación alternativa surge como expresión de resistencia de la cultura popular desde sus propias condiciones de existencia y formas de sociabilidad (Bajhtin, Freire, M. de Certeau, Thompson, Downing o Williams). Este tipo de comunicación tiene sus propios conceptos y procesos básicos diferenciados en gran medida de las comunicaciones estatales y privadas comerciales (Kaplún, Gumucio, Beltrán, Moragas, C. Rodríguez, Langlois, Dubois, Pasquinelli...).

Los medios comunitarios tienen una larga tradición, sobre todo en el caso de las radios. En 1940 aparece en Colombia la Radio Sutatenza, con ánimo de educación popular para la alfabetización. En la misma década comienzan a aparecer en Bolivia las radios sindicales mineras, como Radio La Voz del Minero, mucho más politizadas que la anterior.

En el caso europeo, las primeras radios comienzan a surgir de forma pirata entre los años 60 y 70, como Radio Student (Eslovenia, 1969), mientras que la primera Federación Nacional de Radios Comunitarias nació en el Reino Unido en 1983. Fue en esta década de los 80 cuando diversos países europeos empezaron a liberalizar el sector audiovisual y también en ellos los medios comunitarios empezaron a gozar de garantías legales, emergiendo como una alternativa y un desafío al monopolio de las emisiones estatales (Juppi, P., 2009).

En el Estado español entre los años 1976 y 1979 nacen La Voz del Pobre (Madrid), Ona Lliure (Barcelona), Osina Irratia, Radio Paraíso y Satorra Irratia (Euskadi) y Radio Maduixa (Granollers). En el caso de la televisión, Cardedeu (Barcelona), sin ánimo de lucro, fue la primera alternativa a TVE y La 2 en esta misma década, el primer tercer canal (1981), que aún sigue en funcionamiento. En el año 1991 se concedieron las dos primeras licencias para

radio comunitaria en el Estado español: una para Radio Klara en Valencia, que aún la mantiene, y la otra para la Federación de Radios Libres de entonces (ubicada en Chinchón, Madrid), cuyo proyecto finalmente se disolvió y su licencia se vendió.

Debido al aumento de la participación ciudadana en la comunicación tanto interpersonal como de masas en las democracias modernas (bitácoras, páginas webs, radios, televisiones, revistas, periódicos, folletos...) son diversos los organismos internacionales que apuestan y recomiendan un marco legal que proteja y desarrolle las iniciativas ciudadanas y sin ánimo de lucro de la comunicación. Tanto el Parlamento Europeo (2008), el Comité de Ministros del Consejo de Europa (2008), la UNESCO (2008), las Relatorías Especiales sobre Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (2007) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (2009) recomiendan a los poderes legislativos nacionales que desarrollen normativas que amparen y regulen este tipo de comunicaciones audiovisuales.

Sin embargo, actualmente, tras cuatro años con una legislación estatal vigente que en el Estado español reconoce y regula la existencia de los medios de comunicación libres y comunitarios a través de su Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010), sólo una administración autonómica, la navarra, ha concedido licencias a proyectos sin ánimo de lucro. Es decir, actualmente sólo tres radios comunitarias de las aproximadamente 150 que contabiliza el Community Media Forum of Europe (2013) en el Estado español tiene licencias para emitir (cinco licencias entre Radio Klara, Pausu Media y Xorroxin Irratia), mientras que todavía ninguna televisión comunitaria de las 15 actualmente operativas (Reguero, N., Fernández, A., 2013) ha obtenido ese reconocimiento explícito legal para ejercer sus emisiones audiovisuales. Debido a esta desprotección legal, internet se está convirtiendo en el punto de entrada actual de los medios libres y alternativos en el sistema de la comunicación (Buckley, S., 2011).

La problemática de estudio que nos ocupa es la legislación que utilizan diversos países de Latinoamérica y de la Unión Europea para regular el Tercer Sector de la Comunicación comparada con la legislación española, tanto estatal como autonómica (debido a que las competencias audiovisuales en este país están descentralizadas, como ya hemos apuntado).

El campo y el análisis de derecho audiovisual comparado va a contar con una triple delimitación que pasamos a justificar a continuación:

1. Referencia de buenas prácticas legales audiovisuales en materia del Tercer Sector de la Comunicación con las que compararemos la legislación española, para ver qué resoluciones y recomendaciones se ven recogidas en su texto normativo y cuáles no. Para elegir estas referencias nos hemos basado en tres premisas básicas:

a) Que tuvieran un carácter y espíritu internacional, dado que eliminando la localidad o concreción geográfica es mucho más sencillo poder superar las idiosincrasias nacionales e implantar aspectos internacionales en las normas jurídicas.

b) Que pertenecieran a organismos internacionales donde el Estado español fuera miembro o donde las iniciativas del Tercer Sector de la Comunicación del mismo fueran asociadas, dado que con estas alianzas queda implícito, al menos en la teoría, que hay una voluntad de supeditar las propias tendencias individuales y nacionales a los acuerdos y recomendaciones de las supraorganizaciones a las que se pertenece.

c) Que fueran actuales, es decir, que no sobrepasaran un lustro desde que habían sido formuladas.

2. Legislaciones audiovisuales en Europa y Latinoamérica que sean relevantes o puntas de lanza en la regulación del Tercer Sector de la Comunicación. Para escoger estas normativas nos hemos basado en dos características fundamentales:

a) Que en el texto de su ley general nacional recojan o nombren explícitamente en algún artículo o sección a los medios de comunicación comunitarios.

b) Que, cumpliendo esta primera premisa, en el caso europeo fueran los cinco primeros países que estuvieran presentes en la primera clasificación de países de Europa y desarrollo de medios comunitarios que ha realizado el Community Media Forum of Europe (CMFE) en 2012; y en el caso de Latinoamérica fueran los cinco primeros países que estuvieran presentes en la última comparativa legislativa de medios comunitarios realizada, en este caso, por el investigador João Malerba (2012 también).

Por tanto, estamos hablando en esta segunda segunda delimitación de la siguiente tabla:

Contexto	País	Posición en las clasificaciones correspondientes (CMFE y Malerba. J., 2012)	¿Contiene su legislación mención explícita a medios comunitarios y, por tanto, es susceptible de aparecer en este estudio?
Europa	Noruega	1	Sí
	Dinamarca	2	Sí
	Países Bajos	3	No bajo la definición de medios comunitarios, sino públicos.
	Austria	4	No
	Suecia	5	Sí
	Alemania	6	Sí

	Irlanda	7	Sí
Latinoamérica	Argentina	1	Sí
	Uruguay	2	Sí
	Bolivia	3	Sí
	Ecuador	4	Sí
	Venezuela	5	Sí

Tabla 0.2. Cuadro de delimitación del campo por clasificaciones (elaboración propia).

Consideramos interesante destacar aquí que el Estado español (que constituye la siguiente y última delimitación del campo de estudio), ocupa en la clasificación de desarrollo de medios comunitarios realizado por el CMFE la posición número 13, por debajo de países que no tienen reconocidos explícitamente en su legislación al Tercer Sector de la Comunicación. ¿Cómo es esto posible? También habrá un apartado en la tesis que comente, brevemente, cómo puede ser que países que no tienen una legislación propia para este tipo de medios tengan un sector más desarrollado que aquellos que sí la tienen. Además, en este sentido, dedicaremos unas breves líneas, para que quede constancia, al caso holandés que como se puede observar en la tabla regula a los medios comunitarios como medios públicos; y también al caso francés, puesto que no aparece en una posición elevada de la clasificación del CMFE porque su sector de televisión comunitaria está muy poco desarrollado, y sin embargo el de radio comunitaria es un ejemplo a seguir para el resto del continente. Son paradigmas que merece la pena conocer, al menos superficialmente, aunque no entren dentro de la delimitación estricta que hemos escogido por razones de rigor investigativo.

3. Legislación audiovisual propia del Estado español y de sus autonomías. Las competencias audiovisuales en el Estado están descentralizadas hacia las autonomías. Si bien es cierto que la propiedad (titularidad) del espectro radioeléctrico es estatal y su ordenación general debe ser realizada por el Ministerio de Industria (asignando frecuencias y aprobando planes y reglamentos técnicos, sobre todo), quienes conceden en última instancia las licencias de emisión de acuerdo a la asignación y planificación estatal son los gobiernos autonómicos.

Por tanto, y atendiendo sólo al último período democrático del Estado (1975 – 2014), el estudio contempla aquellas regulaciones que:

a) Constituyan un ordenamiento jurídico de carácter general estatal de todo el sector audiovisual en el período 1975 – 2014.

b) Constituyan un ordenamiento jurídico de carácter autonómico de todo el sector audiovisual y que estén vigentes. En este caso no se consideran todos los decretos (los ya derogados) por dos motivos: a) Por el volumen ingente de documentación y cambios al respecto, y b) Porque en este caso concreto autonómico consideramos más interesante para las conclusiones analizar la legislación vigente para ver si, tal y como exige el ordenamiento jurídico español, la norma estatal de 2010 ha sido regulada en normas autonómicas o si se está posponiendo esta obligación.

Por último, dado que las legislaciones no nacen por abiogénesis o generación espontánea, sino que diversos individuos inmersos en determinados contextos históricos, políticos, sociales y económicos deciden iniciar un proceso que culminará con una norma que los ciudadanos han de cumplir, creemos fundamental dedicar un capítulo a los cambios que ha sufrido la Ley General de la Comunicación Audiovisual española desde su primer borrador disponible (2005) hasta su aprobación (2010), y cómo mediante enmiendas a la ley diversos colectivos sociales españoles han realizado aportaciones a la misma, centrándonos sólo en la parte del articulado referido a los medios comunitarios, que es el núcleo de la presente tesis. Solo analizando el proceso y el recorrido se podrá llegar a unas correctas conclusiones finales que, mediante la contextualización de este camino, se unan a los resultados finales del estudio comparativo y, de esta manera, quede cerrado todo en un círculo de estudio.

De esta forma, la estructura final del presente estudio queda ordenado de la siguiente manera:

-Capítulo de introducción en donde se reflejan todas las claves de la investigación y el desarrollo lógico con los que alcanzaremos los parámetros de científicidad (sistematicidad, coherencia y precisión) exigibles y deseables en la misión que nos ocupa.

-Capítulo 1 que contextualiza de manera pormenorizada el marco teórico que inspira el estudio realizado, sus antecedentes, su desarrollo previo y las tendencias actuales relacionadas con el estado de la cuestión expuesto.

-Capítulo 2 en donde se desgrana la legislación española en materia de medios comunitarios en el período democrático 1975-2010, para constituir un punto de partida y de referencia y ver cómo ha evolucionado el tratamiento legal del audiovisual a lo largo de más de tres décadas.

-Capítulo 3 que describe cómo, por qué, para qué y para quién ha sido realizada la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, es decir, su proceso de tramitación, la evolución del articulado desde el primer anteproyecto, el calendario y los legisladores.

-Capítulo 4 que marca una línea temporal desde la aprobación de la ley audiovisual española hasta 2014 y analizando si en la práctica se está aplicando esta normativa o no y en qué grado.

-Capítulo 5 dedicado al desarrollo de los medios comunitarios, su idiosincrasia y, lo más importante, exposición de ejemplos concretos de experiencias que han sido relevantes en el Tercer Sector de la Comunicación del Estado. Es necesario bajar al campo de la realidad práctica para entender las cuestiones más teóricas expuestas y entender por qué ahora se hace más imperativo incluso que antes el reconocimiento legal de este tipo de proyectos y su papel esencial tanto en el sistema de medios como en la democracia actual.

-Capítulos 6 y 7 que entran en materia directa internacional describiendo las legislaciones escogidas de los países latinoamericanos y europeos, para establecer sus tendencias en el

desarrollo de la normativa que afecta a los medios comunitarios, así como las recomendaciones realizadas por organismos internacionales.

-Capítulo de conclusiones donde se resuelven y argumentan los resultados a dónde nos ha llevado la investigación, así como se reflexiona acerca de la consecución (o no) de objetivos propuestos en el Capítulo de Introducción.

METODOLOGÍA, FUENTES Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS UTILIZADAS.

La **metodología** de la cual nos vamos a servir para desmenuzar el estado de la cuestión y alcanzar los objetivos descritos es doble.

Por un lado, en un **nivel macro** realizaremos un breve estudio cualitativo sobre los marcos teóricos que marcan los horizontes de este análisis. Aunque el estudio que nos ocupa se centra especialmente en los aspectos legales (si bien en algún momento se traten otras teorías o pensamientos para justificar por qué unos caminos legislativos son más deseables que otros), se estima pertinente contextualizar unas bases teóricas sobre el casi desconocido Tercer Sector de la Comunicación en el Estado español, como ya hemos apuntado antes, una materia apenas enseñada en las facultades de periodismo (a veces, ni nombrada), y también ignorada por una gran parte de la ciudadanía española acostumbrada a los medios públicos y privados comerciales.

Hemos de aclarar que dentro de la propia dinámica de trabajo de los medios sociales sin ánimo de lucro y de los diversos marcos teóricos, existen multitud de denominaciones con matices: medios libres, independientes, de contrainformación, sociales, culturales, comunitarios... (Rodríguez, C., 2010). A lo largo de todo el texto vamos a utilizar este último calificativo, el de "comunitarios", con la intención de economizar el lenguaje y, lo más relevante para el caso que nos ocupa, porque es el término que se utiliza en la inmensa

mayoría de las legislaciones actuales en esta materia.

Por otro lado, en un **nivel micro**, realizaremos un doble análisis con técnicas tanto cualitativas como cuantitativas que estarán centradas en los siguientes aspectos:

1. Análisis de las fuentes documentales con sus respectivas unidades de análisis:

Contaremos con las fuentes primarias del Derecho, que son las diferentes leyes de los países que vamos a analizar y que han sido elegidos en función de las causas explicadas en la delimitación del campo de estudio:

-Referidas a la primera delimitación (referencias y recomendaciones internacionales):

Organismo internacional	Justificación de la posición del Estado español o sus organizaciones del Tercer Sector de la Comunicación en dicho organismo	Unidad de análisis	Año
Relatorías especiales sobre Libertad de Opinión y Expresión de la ONU – OSCE	El Estado español pertenece a la Organización Mundial de las Naciones Unidas desde 1955 y además fue uno de los miembros fundadores de la Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa en 1994.	<i>Declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión.</i>	2007
	España pertenece a la Unión	<i>Resolución del Parlamento</i>	2008

Parlamento Europeo	Europea desde el año 1986. El Parlamento Europeo es un órgano legislativo de esta supraorganización.	<i>Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre los medios del Tercer Sector de la Comunicación.</i>	
UNESCO	España pertenece a la UNESCO desde el año 1952.	<i>Declaración de Maputo: Promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas.</i>	2008
Comité de Ministros del Consejo de Europa	España pertenece al Consejo de Europa desde el año 1977.	<i>Declaración del Comité de Ministros sobre el rol de los medios comunitarios en la promoción de la cohesión social y el diálogo intercultural.</i>	2009
Asociación Mundial de Radios Comunitarias	Los proyectos españoles de radios comunitarias (no se especifica aquí televisión porque no existe una organización similar a nivel mundial) pertenecen a esta asociación y reconocen sus resoluciones y recomendaciones hacia los Estados desde finales de los años 80.	<i>Principios para un marco regulatorio democrático sobre Radio y TV Comunitaria.</i>	2009

Tabla 0.3. Referencias y recomendaciones internacionales (elaboración propia).

-Referidas a la segunda delimitación (legislaciones en Europa y Latinoamérica):

País	Unidad de análisis	Año
Noruega	<i>Provisions of Broadcasting.</i>	1997
Dinamarca	<i>Reglamento de Radiodifusión local.</i>	2009
	<i>Reglamento de televisión no comercial en multiplex digital.</i>	2011
	<i>Decreto para el apoyo a la formación para las actividades de radio y televisión locales no comerciales.</i>	2013
Suecia	<i>Radio and Television Act.</i>	2010
Alemania (dividida en länder)	<i>Ley de Medios de Hamburgo y Scheleswig-Holstein.</i>	2007
	<i>Ley Estatal de Medios de Bremen.</i>	2012
	<i>Ley de Medios de Baja Sajonia.</i>	2010
	<i>Directiva de la NLM sobre la concesión de ayudas para promover la radiodifusión ciudadana.</i>	2001
	<i>Ley de Medios de Renania del Norte-Westfalia.</i>	2009
	<i>Ley de Medios de Sajonia-Anhalt.</i>	2004
	<i>Directiva del Instituto de Medios de Sajonia – Anhalt sobre la concesión de ayudas para la promoción de canales abiertos, emisoras de radio no comerciales y proyectos de educación en medios.</i>	2011
	<i>Ley de Medios del Estado de Turingia.</i>	2014

	<i>Ley de Radiodifusión Privada de Hesse.</i>	2012
	<i>Estatuto del Instituto Estatal de Hesse para la Radiodifusión Privada y Nuevos Medios sobre la recaudación de tasas y costes.</i>	2012
Irlanda	<i>Ley Audiovisual.</i>	2009
Países Bajos	<i>Ley de Medios.</i>	2008
Francia	<i>Ley 2004-669 relativa a la libertad de comunicación.</i>	2004
	<i>Decreto 2006-1067 relativo a la libertad de comunicación.</i>	2006
	<i>Orden de 5 de julio de 2012 relativo a los baremos de subvención.</i>	2012
Argentina	<i>Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.</i>	2009
Uruguay	<i>Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.</i>	2013
	<i>Servicios de Radiodifusión Comunitaria.</i>	2007
Bolivia	<i>Reglamento de provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales del territorio nacional.</i>	2007
	<i>Ley General de Telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación.</i>	2011
Ecuador	<i>Ley Orgánica de Comunicación.</i>	2013
Venezuela	<i>Reglamento de Radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro.</i>	2002
	<i>Decreto mediante el cual se exonera del pago de todos los tributos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones a los operadores debidamente habilitados para la prestación de servicios de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria.</i>	2002

	<i>Ley Orgánica de Telecomunicaciones.</i>	2010
--	--	------

Tabla 0.4. Legislaciones relevantes en Europa y Latinoamérica (elaboración propia).

-Referidas a la tercera limitación (legislación española y autonómica):

Ámbito de aplicación	Unidad de análisis	Año
Estado español	<i>Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora.</i>	1978
	<i>Plan Técnico transitorio del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1979
	<i>Estatuto de Radio y Televisión Española</i>	1980
	<i>Ley Orgánica de las Telecomunicaciones.</i>	1987
	<i>Plan técnico nacional de radiodifusión en FM.</i>	1989
	<i>Ley de organización y control de las emisoras municipales.</i>	1991
	<i>Plan Técnico Nacional de radiodifusión sonora en ondas medias.</i>	1993
	<i>Ley de televisión local por ondas terrestres.</i>	1995
	<i>Plan técnico nacional de radiodifusión en FM.</i>	1997
	<i>Ley General de Telecomunicaciones.</i>	2003
	<i>Plan técnico nacional de radiodifusión en FM.</i>	2006

	<i>Ley de Radio y Televisión de titularidad estatal.</i>	2006
	<i>Ley de Impulso de la Sociedad de la Información.</i>	2007
	<i>Ley General de la Comunicación Audiovisual.</i>	2010
Galicia	<i>Decreto 156/1989 por el que se regula el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1989
	<i>Ley 6/1999 del audiovisual de Galicia.</i>	1999
	<i>Decreto 102/2012 por el que se desarrolla el servicio de comunicación audiovisual radiofónica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.</i>	2012
Asturias	<i>Decreto 31/1997 por el que se regula el régimen concesional del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y se crea el registro de empresas radiodifusoras del Principado de Asturias.</i>	1997
Cantabria	<i>Decreto 112/1997 por el que se establece el régimen jurídico de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1997
	<i>Decreto 127/2004 por el que se establece el régimen jurídico de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	2004
	<i>Decreto 46/2013 sobre servicios de comunicación audiovisual.</i>	2013

País Vasco	<i>Decreto 240/1986 por el que se establece el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión en ondas métricas con frecuencia modulada.</i>	1986
	<i>Decreto 190/2006 por el que se regula el servicio de televisión local por ondas terrestres.</i>	2006
	<i>Decreto 231/2011 sobre la Comunicación Audiovisual.</i>	2011
Navarra	<i>Decreto Foral 313/1996 por el que se regula el régimen jurídico de la gestión, mediante concesión administrativa, del servicio de televisión local por ondas terrestres.</i>	1996
	<i>Decreto foral 336/1997 por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1997
	<i>Decreto Foral 5/2012 sobre servicios de comunicación audiovisual en la Comunidad Foral de Navarra.</i>	2012
Castilla y León	<i>Decreto 12/1998 por el que se regula el Régimen Jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1998
	<i>Decreto 64/2005 por el que se regula el régimen jurídico del servicio público de televisión digital local por ondas terrestres.</i>	2005
	<i>Decreto 71/2008 por el que se regula el régimen jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	2008

La Rioja	<i>Decreto 44/1997 por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1997
	<i>Decreto 64/2012 por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual y el registro de prestadores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.</i>	2012
Castilla-La Mancha	<i>Decreto 59/1998 por el que se regula la gestión indirecta del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1998
	<i>Ley 10/2007 de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha.</i>	2007
Madrid	<i>Decreto 57/1997 por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1997
	<i>Decreto 29/2003 de modificación del decreto 57/1997 relativo al régimen de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	2003
Aragón	<i>Decreto 15/1997 por el que se regula el régimen concesional del Servicio Público de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia.</i>	1997
Cataluña	<i>Decreto 175/1980 que regula la concesión de emisoras de radiodifusión, institucionales y privadas, en ondas métricas con modulación de frecuencias.</i>	1980
	<i>Decreto 80/1989 de regulación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1989

	<i>Decreto 320/1996 de regulación del régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres.</i>	1996
	<i>Decreto 269/1998 del régimen jurídico de las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia para las emisoras comerciales.</i>	1998
	<i>Decreto 15/2003 por el cual se regula el régimen jurídico transitorio de las televisiones locales por ondas terrestres.</i>	2003
	<i>Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Catalunya.</i>	2005
	<i>Proyecto de decreto de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro en Catalunya.</i>	2010
	<i>Ley 2/2012 de modificación de varias leyes en materia audiovisual.</i>	2012
Comunidad Valenciana	<i>Decreto 40/1989 por el que se regula el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1989
	<i>Decreto 38/1998 por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1998
	<i>Ley 1/2006 de la Generalitat, del sector audiovisual.</i>	2006
Balears	<i>Decreto 86/1995 por el que se regula el régimen y procedimiento de adjudicación de concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1995
	<i>Decreto 62/1997 por el que se modifica el Decreto 86/1995.</i>	1997

	<i>Decreto 36/2008 por el que se regula el régimen jurídico aplicable al otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por ondas terrestres.</i>	2008
	<i>Ley 5/2013, audiovisual de las Illes Balears.</i>	2013
Murcia	<i>Decreto 17/1995 por el que se establece el régimen de concesión de emisoras y de inscripción en el registro de empresas de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1995
	<i>Decreto 47/2002 por el que se establece el régimen jurídico para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	2002
Andalucía	<i>Decreto 86/1982 por el que se regula la concesión de Emisoras de Radiodifusión -Institucionales y Privadas- en Ondas Métricas con Frecuencia Modulada.</i>	1982
	<i>Decreto 75/1989 por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1989
	<i>Decreto 414/2000 por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres.</i>	2000
	<i>Decreto 174/2002 por el que se regula el régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	2002

	<i>Orden del 24 de septiembre de 2003, por la que se regula el procedimiento de concesión de emisoras culturales de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	2003
	<i>Decreto 1/2006 por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres.</i>	2006
Extremadura	<i>Decreto 131/1994 por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	1994
	<i>Decreto 134/2013 de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura.</i>	2013
Canarias	<i>Decreto 37/1989 por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión con modulación de frecuencia.</i>	1989
	<i>Decreto 163/2006 por el que se aprueba el reglamento que regula el procedimiento de otorgamiento de las concesiones y el régimen de gestión directa, por corporaciones municipales insulares, de canales digitales de televisión de ámbito local.</i>	2006
	<i>Decreto 89/2009 por el que se aprueba el reglamento de la concesión administrativa del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.</i>	2009
	<i>Decreto 80/2010 sobre servicios de comunicación audiovisual.</i>	2010

Tabla 0.5. Legislación española estatal y autonómica (elaboración propia).

Dado que en el apartado anterior sobre el estado de la cuestión y la delimitación del campo de estudio hemos considerado fundamental aludir al proceso que culminó en la promulgación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual española, se hace necesario acudir también a

otra serie de unidades de análisis, por un lado emanadas de los poderes legislativos y, por otro, emanadas de la sociedad civil y que mediante enmiendas consiguieron introducir cambios en la ley.⁷

Emisor de la unidad de análisis	Unidad de análisis	Año
Gobierno español	<i>Anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual.</i>	2005
	<i>Anteproyecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.</i>	2009
	<i>Ley 3/2010, Ley General de la Comunicación Audiovisual.</i>	2010
Red de Medios Comunitarios	<i>Enmiendas de la Red de Medios Comunitarios.</i>	2009
Asociación de Usuarios de la Comunicación	<i>Observaciones de la AUC ante el Proyecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.</i>	2009
Foro de Investigación para el Desarrollo de la Cultural Audiovisual	<i>Enmiendas parciales al texto de proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.</i>	2009

⁷ Cuando un Gobierno prepara una ley y remite su proyecto tanto al Congreso como al Senado, se ordena la apertura de un plazo de presentación de enmiendas para que sean enviadas a la comisión correspondiente encargada de dicho proyecto de ley. En este caso, las asociaciones representativas o afectadas por este proyecto suelen remitir sus observaciones tanto a diputados, como a senadores, como a diferentes grupos parlamentarios (normalmente a aquellos que crean que pueden ser más receptivos al caso que se está tratando) y dichos grupos y personas pueden adoptar estas observaciones y enmiendas en su nombre y presentarlas a la comisión para su valoración y, en último caso, su introducción o modificación en la ley que se vote y publique definitivamente.

Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales	<i>Propuesta de enmiendas a la Ley General de la Comunicación Audiovisual.</i>	2009
Comisiones Obreras (CCOO)	<i>Enmiendas al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.</i>	2009
Unión General de Trabajadores (UGT)	<i>Propuesta de enmiendas de la Federación de Servicios de UGT al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.</i>	2009
Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)	<i>Consideraciones del FOP al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual</i>	2009
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)	<i>Propuestas de enmiendas del sector social de la discapacidad presentado por el CERMI al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, para garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.</i>	2009

Tabla 0.6. Enmiendas desde la sociedad civil organizada (elaboración propia).

2. Observación participante no estructurada, observación de campo e Investigación - Acción Participativa (IAP): dado que en el apartado de "Razones para una tesis" hemos explicado que confiamos en el concepto de reversibilidad de la investigación (sociedad - análisis - vuelta a la sociedad), la técnica más útil para mejorar situaciones colectivas es basar la investigación en la participación dentro de los propios colectivos de los que se está extrayendo la información. En este caso, hemos participado y visitado numerosos medios comunitarios en el Estado y también en Europa, así como hemos asistido a reuniones, debates y procesos de actuación de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), de la Asociación

Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y del Community Media Forum of Europe (CMFE).

Las **técnicas e instrumentos de análisis** escogidos para llevar a cabo esta investigación son:

Técnicas cuantitativas:

-Análisis de contenido de los textos legales: se realizarán cuadros comparativos entre las diferentes leyes para extraer conceptos comunes del derecho a la emisión de información y ver si esos conceptos están presentes o no en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. El esfuerzo de acudir a los documentos primarios y realizarles un análisis de contenidos es la única técnica que nos permitirá conocer de primera mano y si contaminaciones intermediarias cuál es el tipo de tratamiento que se le da a los medios comunitarios en las redacciones legales.

Técnicas cualitativas:

Análisis crítico del discurso: no sólo queremos obtener los conceptos y los hechos que se publican sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual, sino también cómo es el enfoque que se le da a la narración. ¿Se escribe sobre este derecho humano desde una perspectiva social, política... o se hace para legitimar las acciones del Gobierno en esta materia?

Estudio de caso: analizaremos de forma factual los ejemplos de medios comunitarios y de sus organizaciones que puedan ayudarnos a comprender mejor la situación actual de este tipo de proyectos audiovisuales, tales como la Red de Medios Comunitarios, Cardedeu RTV, Tele K, Cuac FM y Onda Color. En el caso de la Red se ha escogido porque es la única entidad de ámbito estatal legalmente constituida que representa a los medios del Tercer Sector de la Comunicación, mientras que para los cuatro proyectos locales se ha tenido en cuenta:

- a) Que estuvieran representados tanto televisiones como radios.
- b) Que en el caso de las televisiones hubieran superado el tránsito de la tecnología analógica y a la digital.
- c) Que estuvieran ubicados en diferentes territorios.
- d) Que fueran miembros de la Red de Medios Comunitarios.
- e) Que hubieran participado activamente en algún cambio legislativo actual que les afectase.

Entrevistas: para averiguar la opinión de las autoridades audiovisuales frente a la duda que planteábamos en la delimitación del campo sobre por qué algunos países no contienen a los medios comunitarios en sus leyes, pero en las clasificaciones sobre este sector aparecen más desarrollados que aquellos países que sí los contemplan, hemos realizado un breve cuestionario de dos preguntas mediante correo electrónico a las autoridades audiovisuales de los once países analizados en la presente comparativa. Las preguntas que se les ha planteado han sido las siguientes:

1. ¿Por qué, con su experiencia del tema, opina que una regulación audiovisual en medios comunitarios en la teoría no siempre va de la mano de buenas prácticas políticas o un mayor desarrollo del sector? (por ejemplo, en la concesión de licencias y similares).

2. Así que, si un país tiene un reconocimiento en sus regulaciones de medios comunitarios, ¿es necesario algo más para desarrollar el sector o es suficiente con tener una legislación propicia?

Para finalizar este capítulo de introducción aclararemos que dado que todas las fuentes jurídicas (textos legales) en los que se basa la investigación están disponibles en línea, hemos prescindido de los anexos (de imprimir más de 1.000 páginas con el correspondiente daño medioambiental y económico particular) y en la bibliografía hemos indicado dónde encontrar cada uno de los documentos cómodamente.

El esquema clásico "emisor-mensaje-receptor" nos acostumbró a poner al emisor al inicio del proceso comunicativo, como el que determina los contenidos del mismo y las ideas que quiere comunicar; en tanto el destinatario está al final, como receptor, recibiendo el mensaje. La experiencia nos enseña, sin embargo que si se desea comenzar un real proceso de comunicación en una comunidad, el primer paso debiera consistir en poner al destinatario no al final de un esquema, sino también al principio: originando los mensajes, inspirándolos, como fuente de pre-alimentación.

Mario Kaplún, *El comunicador popular*.

CAPÍTULO 1: MARCO HISTÓRICO, TEÓRICO Y LEGISLATIVO DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓN

1.1. ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓN.

El 1 de abril de 2010 salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la *Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual*, después de que durante las últimas dos décadas los diversos gobiernos que se han sucedido promulgaran normas muy dispersas y atomizadas sobre las cuestiones relacionadas con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Este cambio legislativo en el ámbito estatal constituye un intento de reunir todo lo relacionado con el audiovisual en una misma norma ordinaria. Cabe destacar que esta ley fue promesa del Ejecutivo español en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, 2004-2008).

Uno de los aspectos más importantes que contempla esta norma ordinaria de carácter estatal es que, por primera vez en la historia de la democracia española, se introduce en el texto de una ley de este calado el reconocimiento explícito de la existencia de los llamados medios comunitarios o medios de comunicación del Tercer Sector. Estos medios de comunicación tienen las siguientes características:

1. La propiedad del medio corresponde a una asociación o colectivo sin ánimo de lucro (por ejemplo, una asociación juvenil, o de vecinos, o cultural...).
2. Este mismo colectivo es el que se encarga de dirigir su gestión y funcionamiento diario, independientemente de cuál sea la edad, sexo, nacionalidad, formación o profesión de las personas que integran la asociación.
3. La financiación obtenida por diversas vías se destina íntegramente al proyecto, sin que haya un reparto de beneficios de ningún tipo o similar.
4. La gestión se realiza de manera participativa y horizontal, sin estructuras jerárquicas de facto en su toma de decisiones y en su trabajo diario (es habitual que en ellos no existan las denominaciones propias de la empresa periodística, tales como directores, redactores jefe, jefes de sección, etc.)
5. Sus objetivos principales son, por un lado, profundizar en la democracia desarrollando el derecho a la emisión de información por cualquier vía de difusión que todos los ciudadanos tienen, tal y como marcan normativas aplicables en España como la Constitución Española (artículo 20.1.d) o la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19). Por otro, estos medios intentan transformar los procesos sociales presentes hablando de lo que otros medios no hablan, puesto que carecen de presiones de intereses políticos y económicos.

De ninguna manera se puede considerar medio comunitario:

1. Aquel que posee ánimo de lucro a través del reparto de beneficios característico de las organizaciones con socios capitalistas.

2. Aquel que, sin tener ánimo de lucro, tampoco tiene una actividad ni unos objetivos sociales. Internet ha abaratado muchísimo los costes de emisión y esto hace que cualquier persona pueda obtener y mantener un equipo audiovisual en su propia casa, o bien una web periodística para realizar y difundir sus propios contenidos informativos o de entretenimiento. Sin embargo, y a pesar de la ausencia de lucro, si estos elementos no reúnen además las características descritas anteriormente (fundamentalmente las referidas a la propiedad del medio o la gestión horizontal), entonces no serán considerados como medios comunitarios, sino sencillamente como medios independientes.

Además, en este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo del 25 de septiembre de 2008, referido a la protección de los medios comunitarios en Europa, añade que estos medios son responsables de la comunidad a la que sirven y en la que se integran, abriendo a la participación en sus contenidos. Asimismo, este texto afirma que las contribuciones sociales de los medios comunitarios son:

1. Reforzar la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la identidad local. Los medios comunitarios pueden promover identidades y al mismo tiempo involucrar diferentes grupos sociales, por ejemplo, contribuyen a la integración de los inmigrantes.

2. Actuar como catalizador para la creatividad local y mejorar la alfabetización mediática de la ciudadanía.

3. Contribuir a las políticas relacionadas con la igualdad y la no discriminación al incluir a minorías étnicas desfavorecidas.

4. Posiblemente sean las únicas fuentes de noticias locales que contrastan con la tendencia de los medios comerciales a reducir los contenidos locales, y ayudan a fortalecer el pluralismo de los medios ya que proveen de enfoques diferentes a las informaciones convencionales.

No existe un soporte específico de difusión para este tipo de iniciativa social. Estos medios pueden ser audiovisuales (radio y televisión), impresos (prensa semanal o quincenal, habitualmente) o electrónicos (internet). Sin embargo, el soporte utilizado sí que determina la legislación vigente a la cual se han de atener estos proyectos. Los medios de difusión de radio y televisión utilizan el espacio radioeléctrico, un recurso natural, de carácter limitado, que es gestionado por el Estado (*Ley General de Telecomunicaciones* de 2003). En él se sitúan el conjunto de frecuencias (entre 9kHz y 3.000 GHz) que, conforme a la tecnología disponible, pueden ser empleadas para emitir ondas que permitan transportar información. No solo es un bien público que, por tanto, pertenece a toda la ciudadanía, sino que reconoce al espectro radioeléctrico como patrimonio común de la humanidad, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (*Tratado de Torremolinos*, 1992) y el artículo 33 del *Convenio Internacional de Telecomunicaciones* (con el ajuste alcanzado en Nairobi, 1982) por lo que debe utilizarse de forma racional, eficaz y económica.

Teniendo en cuenta estas características del espectro radioeléctrico necesario para que los medios comunitarios audiovisuales puedan realizar sus emisiones tanto en señal analógica de Frecuencia Modulada (FM), como en señal digital (Digital Audio Broadcasting, Digital Radio Mondiale o Televisión Digital Terrestre), organismos públicos internacionales como el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros Europeo y las relatorías de la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recogen los amplios derechos de las personas para fundar sus propios medios de comunicación. Más allá, todos estos organismos internacionales hacen hincapié en la necesidad de que los Estados reconozcan la existencia de los medios de comunicación comunitarios y, además, se les otorguen los permisos necesarios

y las vías legales de utilización del espacio radioeléctrico:

1. Según el Parlamento Europeo (Resolución de 24 de junio de 2008), los medios del Tercer Sector de la Comunicación son un medio eficaz para reforzar la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la identidad local; que contribuyen al diálogo intercultural; que corrigen las ideas divulgadas por los medios de comunicación de masas respecto de categorías sociales amenazadas de exclusión, como los refugiados, los inmigrantes, y minorías étnicas y religiosas; que permiten a las personas desfavorecidas de la sociedad a convertirse en participantes activos al intervenir en debates importantes para ellas; que contribuyen a alcanzar el objetivo de mejorar la alfabetización mediática de los ciudadanos mediante su participación directa en la creación y la difusión de contenidos y preconiza la creación de canales comunitarios en los centros de enseñanza con el fin de desarrollar el civismo entre los jóvenes, incrementar los conocimientos mediáticos y crear una serie de competencias que se podrán utilizar para la participación en los medios comunitarios.

También destaca que, habida cuenta de la supresión o la inexistencia de medios de comunicación públicos y comerciales en determinadas zonas, incluidas las periféricas, y la tendencia de los medios de comunicación comerciales a reducir el contenido local, los medios del Tercer Sector de la Comunicación podrían constituir la única fuente de noticias e información locales y la única voz de las comunidades locales.

En el núcleo fundamental que nos ocupa, el legal, este informe del Parlamento Europeo recomienda a los Estados miembros que den reconocimiento legal a los medios del Tercer Sector como grupo definido, junto a los medios de comunicación comerciales y públicos, cuando no exista este reconocimiento legal, sin que ello vaya en detrimento de los medios de comunicación tradicionales. Además, pide a dichos Estados miembros que pongan a disposición de estos proyectos el espectro necesario de frecuencias, analógico y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios de comunicación comunitaria no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o

justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa.

2. Según el Comité de Ministros del Consejo de Europa (en una compilación realizada en julio de 2008), es preciso reconocer a los medios comunitarios como un sector audiovisual diferenciado, junto al servicio público y a los medios de comunicación comerciales privados. Además, anima a los Estados miembros de la Unión Europea a que creen infraestructuras legales donde se puedan desarrollar los medios comunitarios y preservar frecuencias analógicas que pueden, en algunos países, seguir siendo necesarias tras el encendido digital, asegurando además que este tipo de medios no se encuentren en desventaja en un ambiente digital.

Asimismo, este organismo pide que se reconozca el valor social de los medios comunitarios y su rol como servicio público proveyendo de financiación a este sector, bien directamente, con aportaciones desde el sector audiovisual comercial (como en el caso de Francia, que explicaremos más adelante), distribuyendo una parte de las tasas del reparto de frecuencias (como Irlanda o algunos *länder* alemanes) y disminuyendo el coste de las licencias; o bien indirectamente, financiando proyectos directamente relacionados con la salud, el desarrollo de la comunidad, educación, inclusión social, apoyo de minorías étnicas, etc.

3. Según la UNESCO (en su Declaración de Maputo de 2008), en un marco en el que la libertad de expresión y el acceso a la información son indispensables para un uso democrático y un debate abierto y fundamentado, que a su vez favorecen la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, la emancipación de las personas y la participación de los ciudadanos; piden a los Estados miembros que creen un entorno que promueva el desarrollo de las tres categorías de emisoras de radiotelevisión y, en particular, mejoren las condiciones para el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios y la participación de las mujeres en dichos medios.

Además, esta declaración señala que la UNESCO deberá sensibilizar a los gobiernos, los

legisladores y los organismos públicos a la importancia de la libertad de expresión, incluida la libertad de acceder a la información, producirla y compartirla.

4. Según los relatores internacionales sobre la libertad de expresión (en su Declaración Conjunta sobre Diversidad en Radiodifusión de 2007), los diferentes tipos de medios de comunicación -comerciales, de servicio público y comunitarios- deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a, todas las plataformas de transmisión disponibles.

Igualmente, este documento recomienda que la radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas reducidas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad y patrocinio como una parte más de sus posibles ingresos.

5. Según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (*Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria* de 2009), el marco regulatorio debe explicitar el reconocimiento de tres diferentes sectores o modalidad de radiodifusión: público/estatal, comercial y social/sin fines de lucro, el cual incluye los medios propiamente comunitarios. También hace hincapié en que el reconocimiento y diferenciación de los medios comunitarios en la legislación nacional de radiodifusión tiene como objetivo garantizar el derecho a la información a la comunicación y a la libertad de expresión, asegurar la diversidad y pluralidad de medios y promover este sector. Este reconocimiento necesita acompañarse con procedimientos, condiciones y políticas públicas de respeto, protección y promoción para garantizar su existencia y desarrollo.

Podríamos englobar y resumir todas estas recomendaciones internacionales en las siguientes premisas coincidentes en todas ellas:

1. Los medios de comunicación comunitarios tienen una finalidad social clave para el desarrollo de las libertades y de las democracias, emitiendo, por un lado, una información independiente de los poderes políticos y económicos establecidos en el statu quo y, por otro, permitiendo a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, edad, sexo, nacionalidad u otras características acceder a la emisión y difusión de información, siendo este un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por las constituciones nacionales.
2. Desde el punto de vista de la comunicación, los medios comunitarios gozan de libertad suficiente para aportar a la sociedad una información que es silenciada en muchas ocasiones por los grandes medios de masas, debido a que tratan temas que pueden atentar contra los intereses de los poderes establecidos, que versan sobre minorías (étnicas, lingüísticas, etc.) o que ponen de manifiesto situaciones incómodas para algunos sectores políticos y/o económicos (principalmente).
3. Para que este tipo de medios se desarrollen es imprescindible que obtengan un reconocimiento legal equitativo con el que ya gozan los medios públicos y comerciales. Es necesario establecer en cada país un sector audiovisual diferenciado que englobe a los medios comunitarios: el Tercer Sector de la Comunicación (siendo el primero el de los medios públicos y, el segundo, el de los comerciales), estando esta diferenciación necesariamente marcada en las legislaciones audiovisuales de cada país.
4. El acceso a los permisos de emisión y licencias ha de ser equitativo entre los tres sectores. Además, se recomienda facilitar el acceso a estos permisos a los medios comunitarios mediante la no imposición de restricciones económicas o tecnológicas, y facilitar el pago de los impuestos generados por la licencia mediante unas tarifas beneficiosas y asequibles para este tipo de proyectos ciudadanos.

1.2. CONCEPTOS Y TRADICIONES.

1.2.1. Conceptos.

Aunque esta tesis no pretende ser una disertación pormenorizada de las teorías de la comunicación, en general, ni de las teorías de la comunicación del Tercer Sector, en particular, sí que creemos absolutamente imprescindible situar al lector en un escenario contextual acorde con el objeto de estudio. Máxime cuando dicho objeto permanece invisibilizado en la mayoría de los programas curriculares de los grados universitarios de la comunicación (Barranquero, A. y Sáez, Ch., 2010), aunque cada vez sean más los posgrados que sí están dedicados a esa "otra" comunicación (Fernández Viso, A., 2012). El modelo tradicional de comunicación entiende a la misma con un sentido unilineal de la información, la profesionalización de la emisión y la pasividad del receptor (Barranquero A. y Sáez, Ch., 2010). Es imprescindible hacer un recorrido por este tipo de conceptos teóricos y tendencias porque dependiendo de cómo entienda una sociedad y sus expertos su estructura de la información, sus agentes, su naturaleza, sus objetivos y sus consecuencias, este entendimiento se reflejará en la forma de legislar los asuntos audiovisuales y de la comunicación de manera indiscutible.

Como hemos visto más arriba, la comunicación comunitaria se caracteriza porque el *emisor* se convierte en *receptor*, el *receptor* en *emisor* y la *participación* se convierte en el *ser*. Aquí el medio no es el mensaje: el medio es el propio ciudadano organizado colectivamente. Por lo tanto, a la hora de armar nuestra estructura teórica e histórica en esta tesis, hemos de acudir a teorías a veces totalmente contrarias a las que predica la comunicación tradicional, es decir, contrarias a las que insisten fundamentalmente en perseguir la cualificación instrumental para satisfacer la demanda empresarial (Chaparro, M., 2010).

Han sido y son numerosos los conceptos utilizados para definir a los medios que se nutren de una dialógica participativa y democratizadora de los fenómenos comunicativos con potencial

para generar mejoras sustanciales en las condiciones y las oportunidades de vida de la personas (Gumucio-Dagron, A. y Tufte, T. 2006). Depende, en parte, de la década que estemos analizando, así como de nuestra posición geográfica, llegando incluso a provocar, de alguna manera, la evolución de otros conceptos como, por ejemplo, el de "ciudadano" (cuando la investigadora Clemencia Rodríguez propone el concepto de "medio ciudadano" está también explícitamente tomando la teoría de Chantal Mouffe sobre democracia radical y ciudadanía que definen a dicha ciudadanía a partir de la acción y el compromiso político cotidiano, no como un estatus otorgado por el Estado (Rodríguez, C. 2010)).

Hemos de realizar un repaso por estos conceptos: medios alternativos, comunitarios, radicales, ciudadanos, autónomos, libres, populares... Según Clemencia Rodríguez (2010) fue el francés Benjamin Ferron quien enumeró en 2006 los términos que se utilizan actualmente para las iniciativas de medios de comunicación alternativos en el mundo: alternativos, radicales, ciudadanos, marginales, participativos, de contra-información, paralelos, comunitarios, *underground*, populares, libres, disidentes, de resistencia, piratas, clandestinos, autónomos, jóvenes y *micro-medios*. Yendo más allá, Natalia Vinelli añade en el compendio de la *Enciclopedia de Movimientos Sociales* editado por John Downing en 2010 otros términos como medios activistas, emancipatorios y autogestionados. Incluso Vinelli hace una crítica tanto al extremo de la proliferación de estos términos como, a veces, al extremo de su simplificación en las definiciones (sobre la "simplificación" volveremos más adelante cuando analicemos las diferentes legislaciones en materia de comunicación audiovisual comunitaria):

[...] Destacan diferentes aspectos de una noción (parcial) de lo alternativo y, en alguna medida, están influenciados por los movimientos teóricos y conceptuales de las ciencias sociales de los años sesenta hasta el presente. El problema está en que esta indeterminación conceptual que sufren estos términos es frecuentemente tediosa para aquellos que disfrutan

investigando acerca de los debates y tensiones comunes producidas en este campo de fuerzas.

[...] Esto termina poniendo diferentes, e incluso contradictorias, experiencias en el mismo saco, desde aquellos contenidos en el Tercer Sector de la Comunicación hasta la prensa de los movimientos sociales y organizaciones políticas ciudadanas, pasando por grupos revolucionarios latinoamericanos [...]. (Vinelli, N. en Downing, J., 2010, pp. 27).

Los términos utilizados dependerán mucho del lugar geográfico en el que nos encontremos. Por ejemplo, en España los términos más utilizados son "libres" y "comunitarios", y la mayoría de sus activistas rechazan la denominación de "piratas". En Francia, por otro lado, se utiliza más el término "asociatif" (asociativo) o "libre", mientras la palabra "communautaire" (comunitario) tiene más una connotación referida a la Unión Europea (según una conversación informal que mantuve con los responsables del Syndicat National des Radios Libres, SNRL, en enero de 2012). Si continuamos en el contexto europeo encontramos incluso casos en los que este tipo de medios son nombrados (en las legislaciones audiovisuales) como “medios locales”, “medios locales independientes”, “servicio público local de televisión / radio”, “radios estudiantes” (principalmente esta terminología se adscribe a Eslovenia) o “canales abiertos” (Roksa, A., 2013).

Pero ¿cómo, y por qué, llegamos finalmente al concepto de "Tercer Sector de la Comunicación"? De todos estos términos, ¿cuáles son los escogidos por los poderes legislativos para denominar y regular a los medios sin ánimo de lucro sobre el papel de la ley? Iremos analizando la cuestión en un orden cronológico general y, dado que el análisis y comparación legislativa la vamos a realizar entre el Estado español y diversos países de Europa y Latinoamérica, ceñiremos el contexto a las tradiciones europea y latinoamericana.

1.2.2. Inicios: la comunicación para el desarrollo.

La comunicación para el desarrollo aparece como concepto en el siglo XX. En el modelo dominante de desarrollo del sistema mundial de la información en estos años, Jan Servaes propuso en 1999 una división de la comunicación y sus prácticas en tres fases: a) El enfoque de la modernización, b) El enfoque de la dependencia (1965-1980) y c) el enfoque de la multiplicidad (1980 hasta la escritura del artículo). Algo más actual (2004) es la división de Francisco Sierra de este período en cuatro etapas:

a) La etapa diplomática, desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta la crisis del petróleo (1973), que se caracterizó por el soporte de los medios de comunicación a la política exterior estadounidense, a la seguridad nacional y al modelo de vida americano.

b) La etapa "del giro tercermundista", desde 1973 hasta 1980, en la cual el fuerte impacto de crisis producido en las economías latinoamericanas debido a su deuda hace que estos exijan un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) en la que no se encuentren dependientes del Norte en cuanto a información (predominancia de las agencias de noticias occidentales), sociedad y cultura.

c) La etapa de reestructuración de la hegemonía estadounidense (1980-1991), en la que EEUU y Gran Bretaña abortaron el no nacido NOMIC, abandonaron la UNESCO de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente, y acusaron a los países del Sur de intentar crear con el nuevo orden estructuras comunicacionales de inspiración socialista. Por el contrario, los países anglosajones impusieron la doctrina del libre flujo de la información.

d) La era del nuevo orden mundial (1991 hasta la escritura del artículo citado), en la que el constructo de "aldea global" queda aceptada como una red mundial de telecomunicaciones, instaurando así un nuevo orden mundial de la globalización capitalista.

En la primera etapa, sobre todo a mediados de los años 50, comenzó a imperar el concepto de “comunicación para el desarrollo” para referirse a las estrategias que podían llevar a cabo los medios de comunicación en los llamados países del Tercer Mundo con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y, en última instancia, provocar un cambio social general. A esto debemos sumarle el nacimiento del sistema de cooperación y el desarrollo en el contexto de la Guerra Fría (Barranquero, A., 2012): FAO, UNESCO, Banco Mundial, USAID, etc y también las teorías acerca del esquema tradicional de la comunicación de Harold Laswell (1948), la teoría de la modernización de Daniel Lerner (1958) y cómo la parte (subdesarrollada) receptora de información, acciones, logros y limitaciones del esfuerzo pro-desarrollo puede hacerse partícipe del proceso de toma de decisiones así como de la adquisición de aptitudes y actitudes para mejorar sus condiciones de vida (Schramm, 1964).

Sin embargo, casi a la vez que nacía esta concepción de la “comunicación para el desarrollo” también lo hacían las críticas al modelo provenientes de diversos comunicólogos, como Paulo Freire, Mario Kaplún o Luis Ramiro Beltrán, puesto que no parecía ser más que un modelo paternalista, de arriba a abajo, que entendía el desarrollo como la imitación del modelo del Norte, moderno y "deseable". En contraposición, los latinoamericanos debatieron e investigaron sobre una perspectiva más crítica que estaba relacionada con los movimientos sociales emancipatorios del continente como las radios mineras (Bolivia), la educomunicación (Brasil) y las radios alfabetizadoras (Colombia) (Barranquero, A., 2012).

Para comprender estas teorías imperantes de la época en materia de comunicación al desarrollo, así como sus críticas, es necesario dividir el contexto de entonces en los pensamientos sobre "comunicación", por un lado, y sobre "desarrollo", por el otro.

1.2.3. El paradigma de Lasswell.

a) El esquema tradicional emisor - mensaje - canal - receptor - efecto fue promulgado por Harold Lasswell en 1948 y aún se estudia en las escuelas más elementales. Este paradigma nos enseña que existe alguien (un emisor) que transmite una comunicación con cierta intencionalidad (mensaje), por una vía determinada de transmisión (canal), a otro alguien (receptor) y que este proceso conlleva unas consecuencias (efecto). Es un modelo, como se puede observar, muy unidireccional.

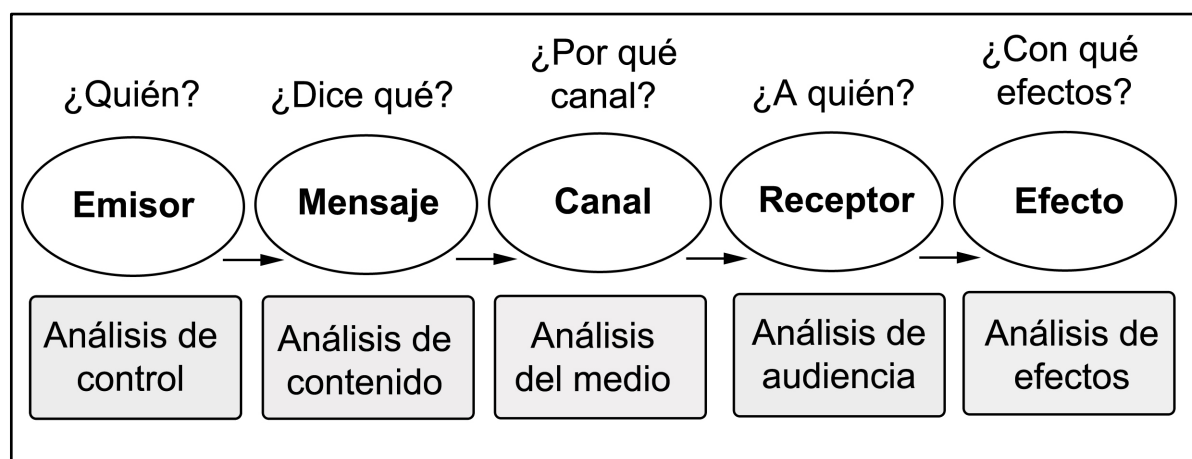


Figura 1.1. Paradigma de Lasswell (elaboración propia).

Este llamado "modelo del telégrafo" deriva directamente de otra teoría enunciada por el mismo Lasswell y Charles Wright en 1927 y denominada la "teoría de la aguja hipodérmica", que afirmaba que mediante los medios de comunicación de masas se podía manipular a las personas ya que estas recibían los mensajes sin oponer ningún tipo de resistencia y realizando una respuesta inmediata (generalmente, la que quería el emisor y su intencionalidad). Es decir, que la relación causa-efecto era inmediata. Para esto se requería una "masa", pero no tanto una masa entendida como algo cuantitativo (como, por ejemplo, las masas obreras de Marx: gran cantidad de personas y escasez de empleos), sino más bien se refiere a un concepto cualitativo como el de Ortega y Gasset (1930), que entendía al "hombre-masa"

como aquel que está entre el ignorante y el sabio, el que cree saber pero no sabe, y el que no sabe lo que debería saber. Según el filósofo español, este tipo de ser humano está vacío de contenido, no ha tenido que luchar por ninguno de los derechos de los que ahora disfruta, utiliza los mensajes plenamente manipulados emitidos por el "Sistema" y sólo le preocupa alcanzar un mayor grado de bienestar material.

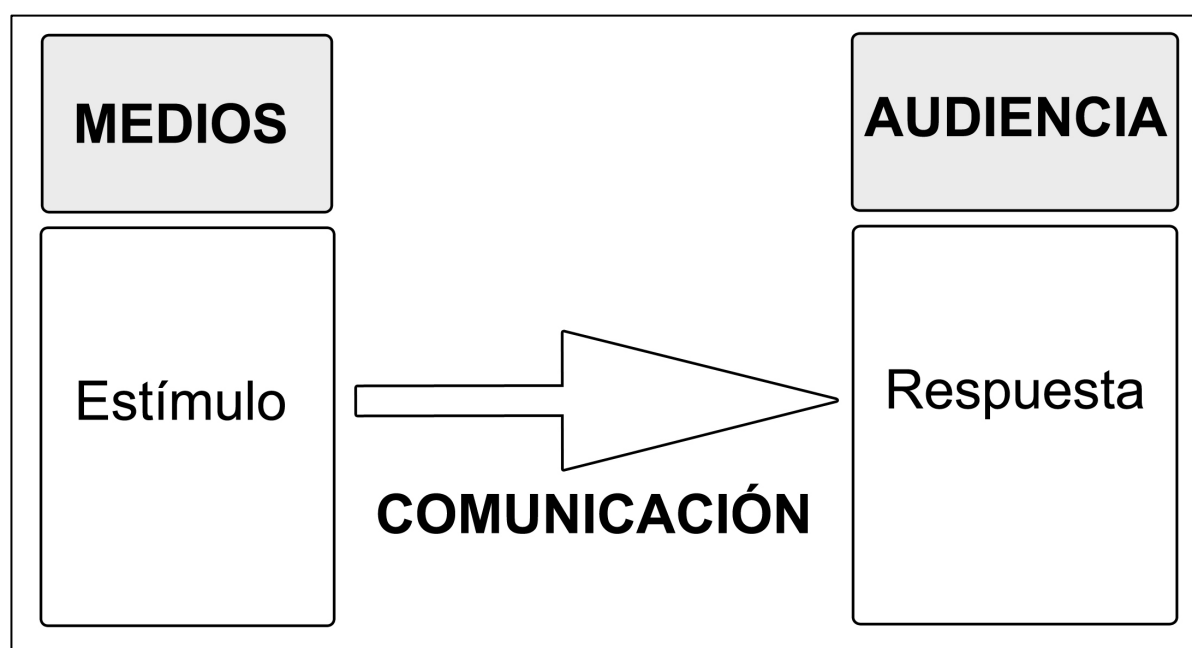


Figura 1.2. Teoría de la aguja hipodérmica (elaboración propia).

1.2.4. La teoría de los dos pasos.

En 1955, el investigador Paul Lazarsfeld introduce la llamada "Teoría de los dos pasos" (o "modelo de difusión"), en la que cuestiona que el impacto de los mensajes mediáticos sea directo en las personas, y divide la masa homogénea (tal y como ya lo había hecho Ortega y Gasset) en dos grupos de personas: los líderes de opinión (minoría) y el resto de individuos de una colectividad (mayoría). Los líderes serían aquellos que tienen un conocimiento muy

grande sobre un tema y que además están mucho más implicados e interesados en él, por tanto recibirían en mayor grado los mensajes mediáticos que se trataran sobre ese tema. Además de estos líderes, las personas se ubican dentro de un contexto en el que realizan comunicaciones interpersonales con amigos, familiares y otros individuos de referencia, y Lazarsfeld apuntó que se tienen mucho más en cuenta esas comunicaciones que aquellas recibidas mediante un medio de masas. Por ello, si los líderes o referentes, más los familiares y amigos, tienen una influencia decisiva en la opinión de las personas, los medios de comunicación por sí solos no tendrían el poder que se le estaba otorgando mediante otras teorías.

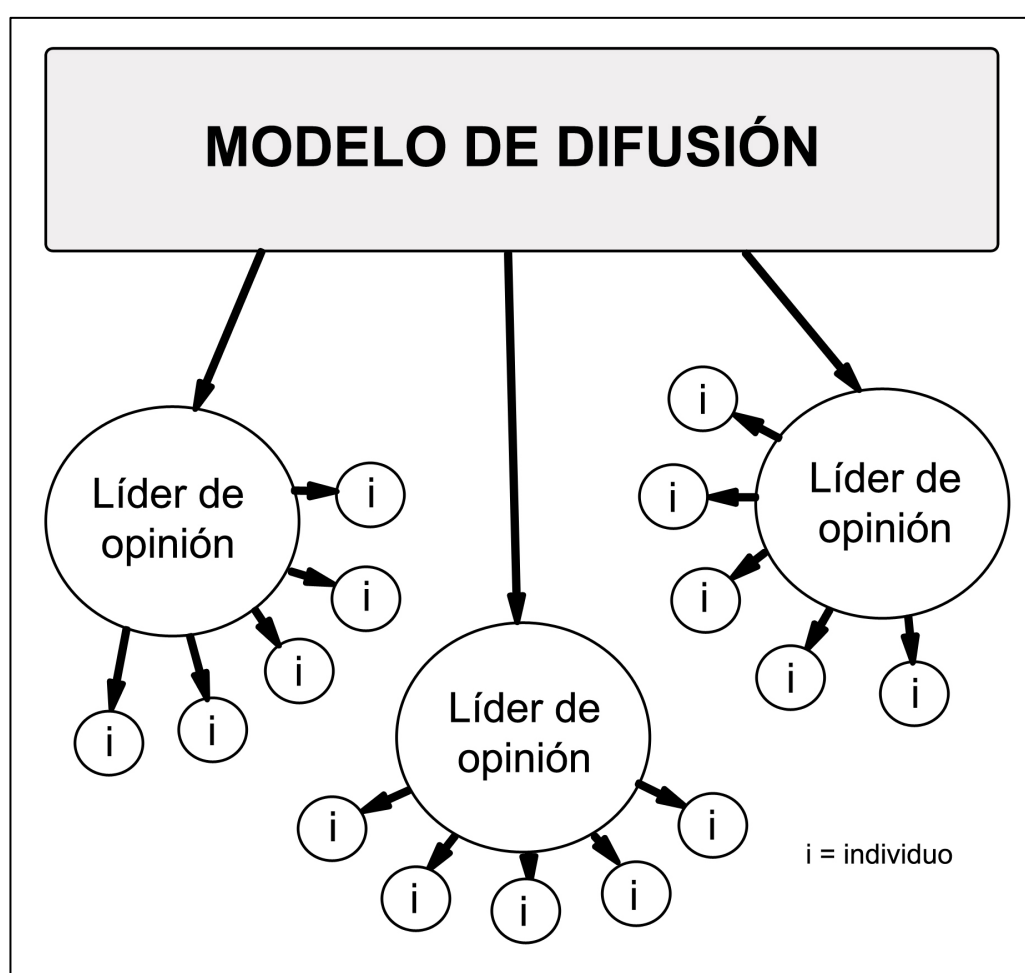


Figura 1.3. Modelo de difusión (elaboración propia).

1.2.5. Teorías del desarrollo.

Dentro de las llamadas "Teorías del Desarrollo", el sociólogo Daniel Lerner (1958) analizó la situación de más de 100 países con la intención de explicar cómo se había extinguido la sociedad tradicional (teocrática, piramidal, rural...) y había surgido la modernización (democrática, igualitaria, urbana...). Según Lerner, la propaganda mediante medios de comunicación masivos, con la televisión a la cabeza, podía generar una proyección positiva de estímulos y transmisión de conocimientos capaz de remover los estados psicológicos y culturales del subdesarrollo.

Es decir, si los medios de comunicación transmitían mensajes positivos o acerca del "cómo hacer" en cuestiones de sanidad, educación, agricultura, higiene, etc. las personas podrían tener el conocimiento necesario y, una vez adquirido este conocimiento, podrían actuar en consecuencia y aspirar a ese modelo de modernización que imperaba en los países desarrollados y que, en este sentido, parecía ser el deseable, el modelo a imitar. Podemos reconocer en la teoría de Lerner la aceptación de esa causa-efecto inmediata que hemos tratado en el punto a) del paradigma de Laswell.

Continuando en estos años, en 1964 otro de los padres fundadores de los estudios en comunicación, Wilbur Schramm, publicó lo que se convertiría en la biblia de la comunicación para el desarrollo (*Mass Media and National Development*), reforzando y difundiendo aún más las creencias de que el Tercer Mundo iba a desarrollarse al modo de occidente gracias al tipo de mensajes que difundieran los medios masivos, y cómo la receptora de la información (la parte subdesarrollada) iba a poder mejorar sus condiciones de vida a través de los logros, el esfuerzo, la toma de decisiones y la adquisición de aptitudes y actitudes que les transmitieran dichos medios.

1.2.6. Modelo en cascada.

En una teoría que recuerda un poco a la de "Los dos pasos", K.W. Deutsch propuso en 1974 un modelo sobre formación de la opinión pública denominado "Modelo en cascada". En este caso concreto, los pasos que en principio parecería dar la información son cinco, no dos:

- En lo alto del todo se sitúan las ideas de las elites económicas y sociales.
- Le siguen las elites políticas y de gobierno.
- Las informaciones de estos primeros niveles circulan ahora por los medios de comunicación de masas.
- Estas informaciones son tomadas por los líderes de opinión (que ya citaba Lazarsfeld veinte años atrás).
- Y finalmente todo llega al *demos*, que sería el estanque del público masivo.

Aquí se puede destacar el hecho de que Deutsch introduce un atisbo de retroalimentación en el sistema por parte de los receptores que al ordenar sus vidas y toma de decisiones en función de cómo procesan la información que les llega, los resultados que se producen o las consecuencias que se derivan, sirven como indicador que reactivan e impulsan el flujo de información (esto encaja a la perfección con lo que se pretendía con la comunicación para el desarrollo: que las personas cambiasen o adaptasen su modo de vida a otras dinámicas más occidentales).

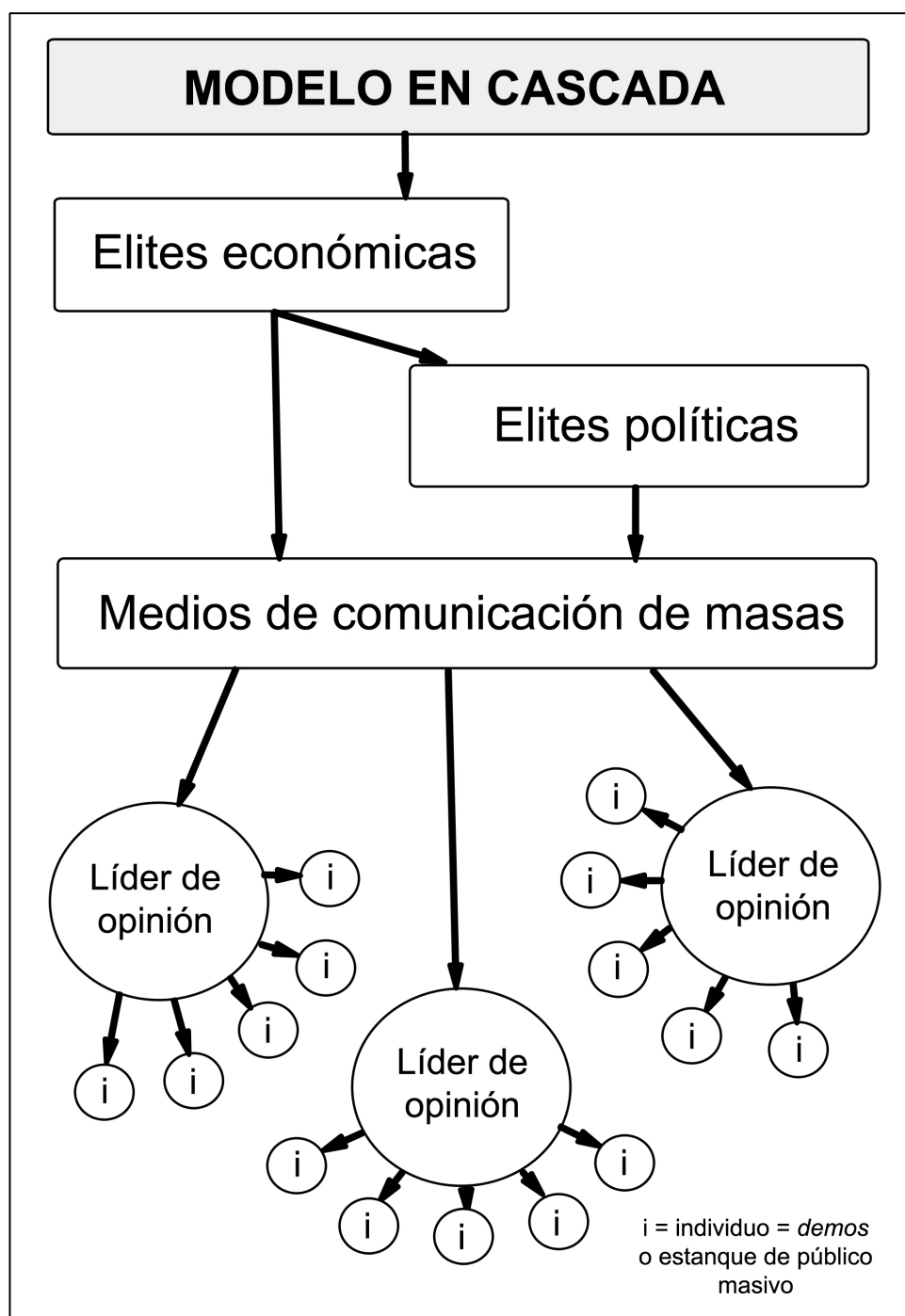


Figura 1.4. Modelo en cascada (elaboración propia).

Estas afirmaciones sobre la supuesta eficacia de lanzar mensajes de forma masiva para que la población fuera cambiando poco a poco sus modos de vida para "desarrollarse" tuvo también su caldo de cultivo en un paradigma que, sin ser estrictamente comunicacional, se ve claramente reflejado en otras disciplinas. Se trata de la "Teoría de la difusión de innovaciones" formulada por el sociólogo estadounidense Everett Rogers en 1962. Según este paradigma, cuando se desea introducir un cambio en la sociedad (preferentemente tecnológico), y este es comunicado por una serie de canales, las personas pasan por distintas etapas para su aceptación (conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación), pero no todas las personas lo hacen al mismo tiempo. Hay un conjunto de la población que adopta la innovación (cambio, tecnología, producto...) al principio del todo, y son los innovadores (2,5%). Después hay unos primeros seguidores (13,5%), una mayoría precoz (34%), una mayoría tardía (34%) y, finalmente, unos rezagados (16%) que incluso puede que nunca se adapten o acojan la innovación en su modo de vida.

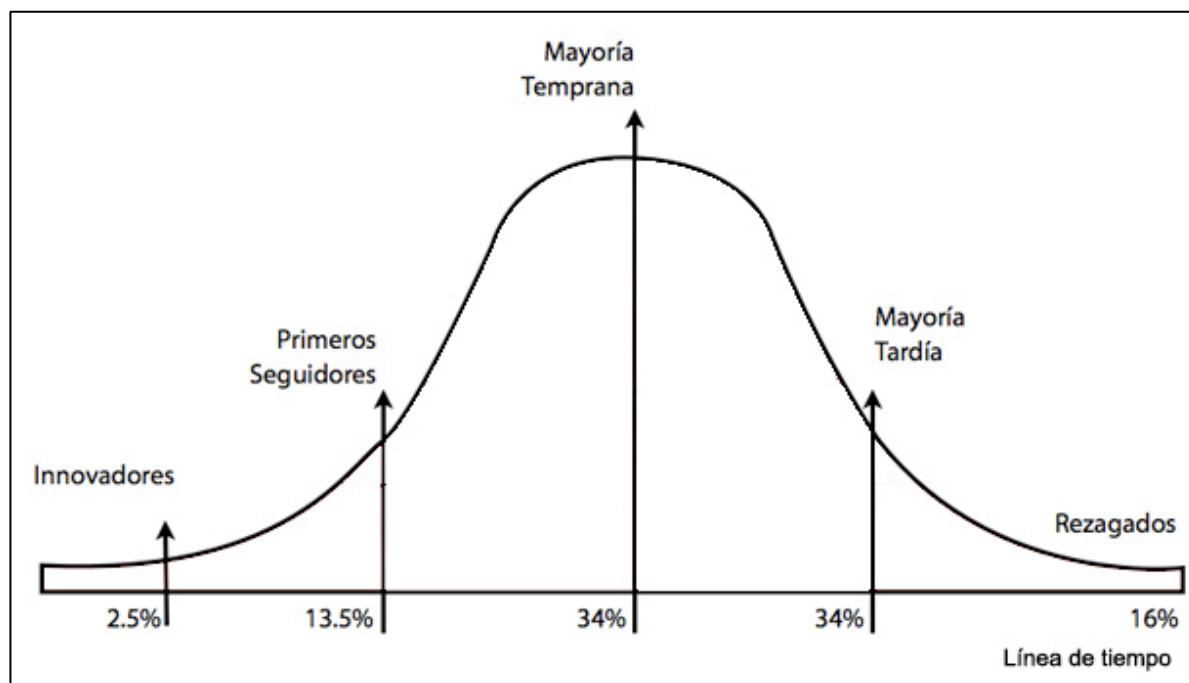


Figura 1.5. Teoría de la difusión de las innovaciones (Wikipedia).

1.2.7. Críticas a las primeras teorías.

Ahora bien, como hemos comentado un poco más arriba, todos estos esquemas sufrieron tarde o temprano críticas, incluso desde sus propios discípulos, según Luis Ramiro Beltrán (1979), David K. Berlo, alumno de Schramm y Director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Estado de Michigan, argumentó contra lo que él denominaba la "teoría del balde" en comunicación (1963):

Este punto de vista supone que los significados se encuentran en las palabras o en otros símbolos y que la comunicación consiste en la transmisión de ideas de un individuo a otro, por medio del uso de símbolos. Esto puede caracterizarse como el proceso de verter las ideas desde una fuente hacia un balde -tal como una película, un libro, un programa de televisión o lo que sea- y, lanzando ese balde sobre el receptor, vaciar el contenido dentro de su cabeza. (Beltrán, L.R., 1979, pp. 6).

En 1968, en su *Pedagogía del oprimido*, Paulo Freire describe un proceso de "educación bancaria" como aquel en el que el educador y el educando mantienen una relación unidireccional en la que el que "sabe" (el educador) vierte sus conocimientos preestablecidos dentro del que "no sabe" (el educando). Esto, según Freire, produce una situación en la que a la larga es fácil dominar a las personas puesto que no hay un lugar para el diálogo o el intercambio de saberes. Las doctrinas del educador brasileño, según señala James Hallorann en Hartmann y otros (1989), no han sido muy populares entre los planificadores de políticas de comunicación, ni de Occidente ni del Sur.

Es importante este proceso de "educación bancaria" porque Mario Kaplún tomó en su *Una pedagogía de la comunicación* este concepto para adaptar su metodología e ideas a dicha

comunicación. Realiza un paralelismo metafórico afirmando que el emisor también deposita informaciones en la mente del receptor, obteniendo una "comunicación bancaria":

A cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y una determinada práctica de comunicación [...] Así como existe una educación "bancaria", existe una comunicación "bancaria". El emisor es el educador que habla frente a un educando que debe escucharlo pasivamente. O es el comunicador que "sabe" emitiendo su mensaje (su artículo periodístico, su programa de radio, su impreso, su vídeo, etc.) desde su propia visión, con sus propios contenidos, a un lector (u oyente o espectador) que "no sabe" y al que no se le reconoce otro papel que el de receptor de la información. Su modo de comunicación es, pues, el monólogo. (Kaplún, M., 1998, p. 25).

Una de las alternativas que ofrece Kaplún es la de la promoción del término "emirec" (EMIisor - RECeptor) que acuñó un canadiense, Jean Cloutier, en 1973 para transformar el modelo y convertirlo en un diálogo con la sociedad. Es decir, todas las personas que participaban en un proceso de comunicación (incluidos los receptores) podían convertirse también en emisores de mensajes, y no sólo en un círculo social reducido, sino también a un nivel de masas propio de los grandes medios de difusión. Cloutier consideraba que de esta manera se podía contrarrestar las dinámicas comunicativas impuestas por dichos medios, alzadas como herramientas de control social y manipulación de la opinión pública.

Más críticas sobre el concepto y el trasfondo de la comunicación para el desarrollo fueron provocadas por Jean D'Arcy (1969), considerado el padre de la televisión francesa, puesto que también defendía un diálogo y una participación activa de la sociedad en la comunicación. Tanto es así que está marcado como la primera persona que definió y reivindicó que el derecho a la comunicación fuera considerado con un nuevo derecho humano incluso más allá del derecho a la información (a la recepción como mero depósito de ideas) (Gumucio-Dagron,

A. y Tufte, T. 2006). Era consciente de que para que esto pudiera realizarse deberían darse los canales legales necesarios y, en esta línea, defendió que el espectro radioeléctrico, incluso las emisiones vía satélite, fueran consideradas como una propiedad de toda la humanidad y no solo de conglomerados corporativos o poderes estatales. De esta manera se constituyó el germen del actual derecho internacional de telecomunicaciones.

Por otra parte, Ricardo Nosedá (1972) creía que “comunicación es el proceso por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común” (en Kaplún, M., 1998, pp. 63, 64). Esta afirmación recuerda a las teorías del filósofo alemán Hegel (conciencia común), quien explica la dialéctica como una transformación incesante de cada cosa para llegar a lo que sería la *Verdad* o el más alto límite de una “mente universal”. En el proceso, un concepto (tesis) se enfrentaría a su opuesto (antítesis) para dialogar sobre su naturaleza y que el resultado de este conflicto se alzaría una síntesis, que se encuentra más cargada de verdad que los conceptos de los que se partía en un principio. No deteniéndonos en este resultado, esa nueva síntesis también se enfrentaría a su antítesis, y así hasta el infinito, hasta alcanzar esa “mente universal”.

Obviamente, en las descripciones que hemos realizado anteriormente sobre el concepto de comunicación para el desarrollo no se trata de un proceso de cooperación mental, sino de depósito de unas ideas ya preconcebidas en la mente de otras personas (aquellas que deben desarrollarse).

Este fenómeno de depósito de ideas lo calificaba Rafael Roncagliolo (1977) de

Reducción de la comunicación humana -concepto que implica reciprocidad- en favor de la información y la difusión, esto es, de todas las formas modernas de imposición de los transmisores sobre los receptores, a las que continuamos llamando erróneamente comunicación de masas.
(Kaplún, M., 1998, p. 61).

Y en ese mismo año, al otro lado del charco, los europeos Nowak, Rosengren y Sigurd también parecían tener clara la distinción entre comunicación e información:

Comunicarse se refiere a un proceso bilateral que tiene elementos tanto emocionales como cognoscitivos y que ocurre tanto en forma verbal como no verbal. Informar, por otra parte, se refiere a un proceso unilateral de comunicación verbal predominante dirigido hacia el conocimiento.
(Nowak, K. et al., 1977, p. 45).

1.2.8. Informe MacBride.

Es en estos momentos cuando el mundo llega a una especie de consenso sobre las múltiples voces que contiene el planeta en el Informe MacBride patrocinado por la UNESCO (1980). Su objetivo final era la instauración de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), el cual ya hemos citado unas líneas más arriba. Este informe nació de un mandato de la XIX Conferencia General de la UNESCO, que se celebró en Nairobi (Kenia) en noviembre de 1976. Al frente de la investigación se situó el cofundador de Amnistía Internacional, Seán MacBride, irlandés y Premio Nobel (1974) y Lenin (1977) de la Paz. Sus objetivos podrían resumirse en la frase que precedía al estudio, que rezaba: “Hacia un nuevo orden mundial de información y comunicación, más justo y más eficiente” (MacBride, S., et al., 1980, p. 8).

Para conseguirlo, en última instancia, los autores realizaban una serie de recomendaciones y puntos a seguir basándose en cuestiones como la dimensión histórica e internacional de la comunicación, sus infraestructuras, integración, disparidades, propiedad, control, el marco donde circula la información, el contenido y la democratización, el marco institucional y profesional, las políticas, los recursos materiales, las normas de conducta y finalmente aspectos pendientes de una investigación más profunda.

Sin embargo, y tal y como afirma el argentino Héctor Schmucler (2005), en el momento mismo de ver la luz, en el momento mismo de aprobarlo la Asamblea General de la UNESCO en 1980, el informe MacBride comenzó a pertenecer a pasado: “Estrictamente, el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación que el informe venía a sustentar, no existió jamás” (Schmucler, H., 2005, p. 29).

El principal motivo de este "lo que pudo ser y no fue" tiene su origen en la oposición directa de EEUU y Reino Unido, que vieron supuestamente amenazados su orden de libertad de flujo de información (Tresserras, J.M., ed. 2005) hasta tal punto que la primera potencia mundial abandonó la UNESCO y no se reincorporó a ella hasta el año 2003. Es más, el informe fue tachado de “Un conjunto de proyectos sovietizantes incompatibles con las libertades básicas de una sociedad democrática” (Harris, 1984; U.S Departament of State 1984; en Tresserras, J.M., ed. 2005, p. 72).

Hemos de tener en cuenta que seguimos, tal y como hemos ido narrando, en un contexto en el que la comunicación para el desarrollo, en la que se apoya el Informe MacBride, había sido criticado en muchos de sus planteamientos por diversos investigadores y estudiosos de la comunicación. Por lo tanto, e independientemente de lo que sucedió a nivel político con este intento de democratizar los procesos y herramientas de la misma, también se alzaron voces que destapaban los puntos débiles que tenía el estudio que había realizado la comisión de la UNESCO. Tal y como cita el finlandés Kaarle Nordenstreng (en *ibid*), una de las primeras personas en realizar críticas desde posiciones de izquierda fue el holandés Cees Hamelink en 1980 y en 1987. Según Hamelink, el análisis que realizaba el informe descontextualizaba la realidad social, cultural y económica (por ejemplo, algunos de los países que defendían el NOMIC tenían una ausencia de democracia interna -tales como Zaire, Indonesia, Chile o la URSS, por citar algunos-) así como del papel que cumplían en realidad las multinacionales de la comunicación. Este mismo autor también afirma que todas o casi todas de las 82 recomendaciones de las que consta el informe jamás se aplicaron. Y también hay otros investigadores (Calabrese, Mattelart o Mowlana, en *ibid*) que subrayan la falta de análisis en

la relación entre cultura y políticas de comunicación, la perspectiva de género y sobre todo la falta de referencias a la sociedad civil.

1.2.9. Década de los ochenta: continúan las críticas.

Terminando la década de los años ochenta se seguían sucediendo las críticas tanto al término como al transfondo de la llamada "comunicación para el desarrollo". En 1988, otro discípulo de Schramm, Robert C. Hornik, lanzó una crítica llamada *Por qué la comunicación para el desarrollo rara vez funciona*, donde identifica tres causas principales a este respecto:

Dos categorías amplias, fracasos de la teoría (como resultado incorrecto de que un problema de desarrollo dado responderá a una solución basada en la comunicación) y fracasos del programa (resultado de un proyecto diseñado o implementado inadecuadamente). También añadimos una tercera categoría: fracasos de política. (Hornik, R. en Gumucio-Dagron, A. y Tufte, T., 2006, p. 350).

En este mismo sentido, Robert Chambers hace alusión a los posibles cambios de denominación que pueda tener este tipo de estudios o análisis en comunicación que, tengan el nombre que tengan, indefectiblemente estará establecido un sistema de "benefactores" y un sistema de "beneficiarios" que marcará un proceso y unas dinámicas paternas con un flujo de arriba hacia abajo, no horizontal y en igualdad de condiciones:

Por más que la retórica cambie a "participación", "investigación participativa", "participación de la comunidad" y demás, al final del día sigue habiendo un extraño que quiere cambiar las cosas. Marxista, socialista, capitalista, mahometano, cristiano, indú budista, humanista, masculino, femenino, joven, viejo, nacional, extranjero, negro, marrón,

blanco... el forastero puede cambiar, pero la relación es la misma. Una persona más fuerte quiere cambiar las cosas para una persona que es más débil. No hay una escapatoria completa a esta trampa paternalista. (Chambers, R. en *Íbid*, p. 235).

Pero no sólo el clásico esquema de Lasswell fue puesto en entredicho a medida que se sucedían las diferentes décadas del siglo pasado. Hartmann, Patil y Dighe (1989) cuestionaron las teorías que hablaban de la comunicación "en cascada" y la de "los dos pasos". Las consideraban demasiado mecánicas y además les parecía

Reconfortantes en la medida en que elimina la necesidad de preocuparse demasiado por las desigualdades y justifica la concentración de los esfuerzos por el desarrollo en una población comparativamente avanzada que luego difundiría la información. (Kivikuru, U. en *Íbid*, p. 413).

Por tanto, y a la vista de los autores aquí presentados, podemos afirmar que la comunicación para el desarrollo está lastrada desde su nacimiento, por un lado, por el concepto de comunicación tradicional como una operación lineal similar, parafraseando a Schramm, a la de una pelota de béisbol que pasa del *pitcher* (lanzador) al *catcher* (receptor), y por otro, al concepto desarrollista occidental basado en una modernización decidida unilateralmente y dejando de lado a los países receptores de las ayudas.

1.2.10. Década de los noventa: reconversión del término "desarrollo".

En la década de los años noventa se hace necesario reconvertir el término "desarrollo" (Marí, V., 2013) para superar las limitaciones y los errores de las etapas históricas anteriores. En este momento, las Naciones Unidas deciden adoptar el concepto "desarrollo humano", describiéndolo como un acceso equitativo de toda la población a los recursos, dichos recursos

e instituciones han de ser sostenibles, la diseminación del conocimiento humano y la participación de la sociedad en sus propios procesos. Esta revisión provoca, a su vez, que el término "comunicación para el desarrollo" deba ser también redefinido, y en este caso el último descriptor, el de "participación" va a ser el que surja como "comunicación participativa". En un estudio llevado a cabo por J.E. Fair y H. Shah en 1998 (citado por Marí, V., 2013), los investigadores realizaron una revisión histórica de la investigación en comunicación del período 1987-1996 y descubrieron que en la nueva década las teorías de difusión y modernización de Lerner ya no eran de ninguna manera el paradigma dominante.

A la muerte del siglo, por tanto, coexistían aproximaciones al campo tales como la de "comunicación popular" (Mario Kaplún), "comunicación comunitaria" (A. Gumucio-Dagron, Armand Matterlart, Jean-Marie Piemme), "comunicación alternativa para el desarrollo democrático" (Luis Ramiro Beltrán), "comunicación de proximidad" (Miquel de Moragas), "comunicación libre" (tradición europea) y "comunicación radical" (John Downing).

1.2.11. Llegada del nuevo siglo y nuevos modelos comunicacionales ciudadanos y medios alternativos.

En este cambio de paradigmas, estudiosos como el boliviano Carlos Camacho (2002) proponen un nuevo modelo de comunicación que implica activamente a la ciudadanía. Este enfoque parte de una reflexión generada por el Informe de Desarrollo Humano del país del autor, Bolivia, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2002. En dicho informe se hace patente la necesidad de realizar una construcción de la ciudadanía que permita que esta sea un agente activo en la democracia y en el desarrollo, con el objetivo, en este caso, de luchar contra la pobreza. En este contexto Camacho entiende que la información como derecho fundamental

Puede coadyuvar en la formación y ejercicio activo y responsable de la ciudadanía en el marco del desarrollo humano. Por lo tanto, aquí se diseña y fundamenta un modelo teórico de ciudadanía comunicativa. Mediante ésta las personas asumen, por medio del consumo cultural de la oferta informativa noticiosa, una competencia política que coadyuva en la generación de esferas públicas. Esto es, un conjunto específico de roles sociales a través de los cuales los ciudadanos se interesan sobre un hecho de interés público, forman un juicio al respecto y lo expresan (opinión pública, además de que toman decisiones, fiscalizan, demandan y ejecutan todas aquellas acciones que los lleven a defender intereses comunes en un contexto deliberativo (participación ciudadana). (Camacho, C., 2003, pp.5).

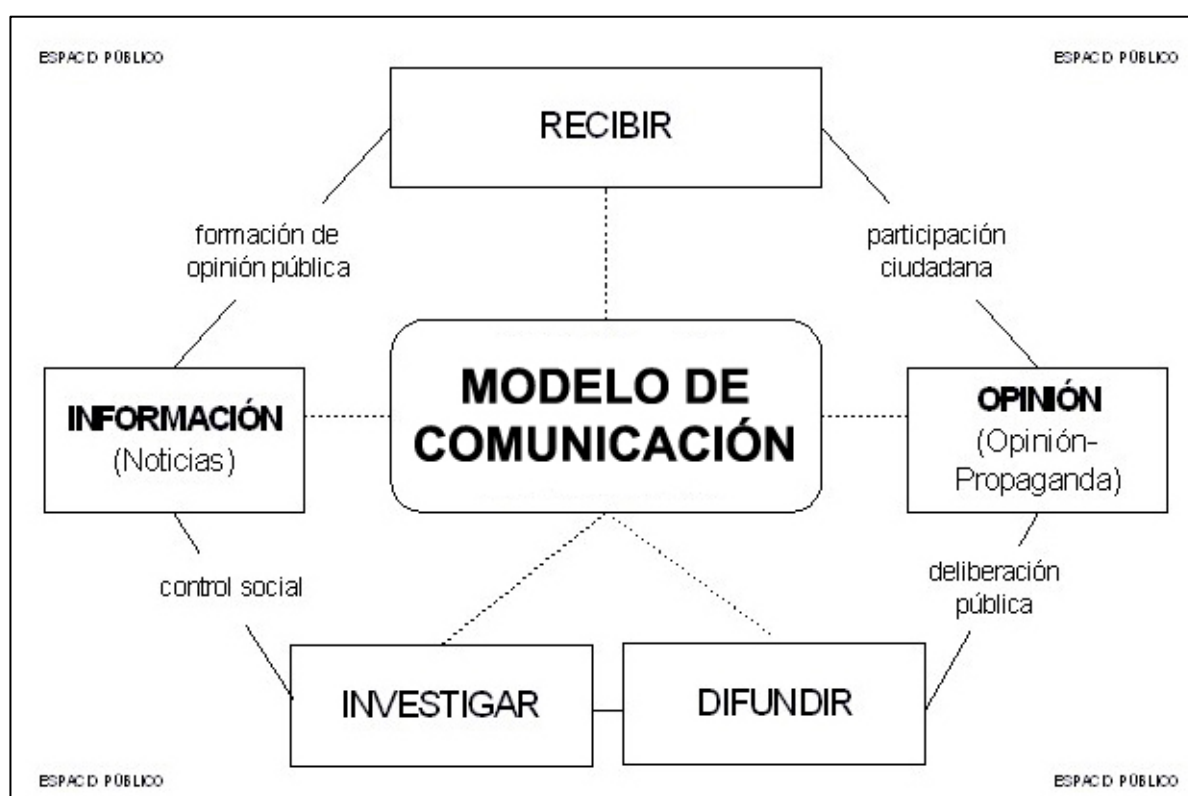


Figura 1.6. Modelo de comunicación para el desarrollo de la ciudadanía (Carlos Camacho).

Nótese que en este modelo el peso de la posibilidad de investigar la información recibida, así como de difundir aquellas comunicaciones y/u opiniones que la ciudadanía considere oportunas, es ingente en comparación con las anteriores teorías en las que se consideraba a las personas como un mero recipiente donde depositar mensajes. Volveremos sobre esta cuestión más adelante puesto que aunque hay numerosas legislaciones tanto nacionales como internacionales que protegen este derecho de emisión (y no sólo de recepción) de información, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la propia Constitución Española de 1978, en la práctica las reglamentaciones y normas específicas sobre telecomunicaciones, cuestiones audiovisuales y profesión periodística siguen primando el concepto de persona ciudadana como receptora de noticias, y empresas, Estado y periodistas profesionales como únicos emisores válidos y reconocidos. Cabría preguntarse si esta tendencia responde al hecho histórico de que las teorías de la comunicación de la academia hayan efectivamente utilizado a los ciudadanos como objetos y no como sujetos de estos procesos.

Con el comienzo del nuevo siglo se hace cada vez más patente el baile de denominaciones para aquellos medios de comunicación que eran dirigidos, gestionados y difundidos por los ciudadanos, generalmente desde una asociación o colectivo más o menos organizado. Ya apuntábamos al comienzo de este capítulo que Clemencia Rodríguez (2010) atribuía al francés Benjamin Ferron una enumeración de conceptos en 2006 que incluía las siguientes denominaciones: alternativos, radicales, ciudadanos, marginales, participativos, de contra-información, paralelos, comunitarios, *underground*, populares, libres, disidentes, de resistencia, piratas, clandestinos, autónomos, jóvenes y *micro-medios*. Efectivamente, en la tesis de Ferron (2012) se analiza la etapa 1994-2006 de *Los repertorios mediáticos de las movilizaciones altermundistas. Contribuciones a un análisis de la sociedad transnacional* en los contextos de México-Chiapas e Israel-Palestina y a lo largo de la tesis (sobre todo en su comienzo, en su sección primeras, donde se describe la construcción del objeto de estudio) aparece esta lista de concepto englobada o simplificada en la mayoría de las ocasiones bajo el

término "alternativos". El cuadro comparativo que realiza Ferron entre estos actores de la "comunicación democrática" y los medios convencionales es el siguiente:

	Medios convencionales	Medios alternativos
Tipo de organización, estatus legal	Empresa capitalista y lucrativa (sector privado) o empresa de servicio público (sector público)	Asociación voluntaria y no lucrativa (Tercer Sector) o colectivo informal (sector paralelo).
Principales fuentes de financiación	Venta publicitaria y/o ayudas públicas del Estado	Autogestión, ausencia o limitación de la publicidad, ausencia o limitación de las ayudas públicas.
Función interna de la redacción	Jerarquías formales (verticales) y periodistas profesionales. Búsqueda de rentabilidad y economía de escala	Ausencia o limitación de las jerarquías formales (horizontalidad). Periodistas no profesionales, priorización de los "valores" colectivos sobre las cuestiones económicas.
Línea editorial y contenidos	Proximidad a las élites sociales, reproducción de la ideología dominante. Lógica de exclusivas, homogeneidad de las informaciones y de los programas.	Proximidad de clases populares y minorías, multiplicidad de puntos de vista, informaciones inéditas.

Circuitos de difusión	Espacio público comercial u oficial.	Espacios públicos alternativos (cafés, librerías, espacios culturales <i>underground</i> , locales comunitarios, manifestaciones, asambleas políticas...)
Forma de comunicación	Comunicación instrumental: producción impuesta del mensaje al receptor.	Comunicación participativa: interacciones igualitarias entre emisores y receptores.
Percepción de efectos políticos	Refuerzo del statu quo, estabilización del orden político.	Ruptura del statu quo y desestabilización del orden político.

Tabla 1.1: ¿Alternativos? ¿Radicales? ¿Ciudadanos? Aproximaciones tipológicas (Benjamin Ferron, 2012).

A pesar de las características generales difundidas en este cuadro y que suelen ser los paradigmas más extendidos, Ferron hace algunas puntualizaciones a propósito de la tabla:

-Hay algunos medios que se reivindican como "alternativos" pero en la realidad pertenecen a empresas comerciales.

-Una condición básica para constituir una alternativa viable a los medios convencionales es la consecución de cierta profesionalización (es decir, no es suficiente en muchas ocasiones con la "benevolencia" emanada del *amateurismo*).

-La duración del proyecto está condicionada y limitada por la estructura necesaria poco formalizada y además los problemas de estructuración internos puede ser cuestiones importantes para los actores de este tipo de medios alternativos.

Ahondando aún más en las definiciones sobre este tipo de medios, Natalia Vinelli añade en el compendio de la *Enciclopedia de Movimientos Sociales* editado por John Downing en 2011 otros términos como medios activistas, emancipatorios y autogestionados. Si damos un repaso rápido por otros autores reconocidos en la academia, los términos se repiten pero son escogidos en función de quién o quiénes escriban los artículos: "medios comunitarios" (Gumucio-Dagron, 2001), "medios alternativos" (Atton, 2002), "medios autónomos" (Langlois y Dubois, 2005), "medios participativos", "medios tácticos" (Lovnik y García, 1999), "mediactivismo" (Pasquinelli) y "medios radicales" (Downing et al., 2001). Vinelli hace una crítica tanto al extremo de la proliferación de estos términos como, a veces, al extremo de su simplificación en las definiciones. Es tan precisa que merece la pena trasladarla íntegra aunque ya la hayamos resumido unas líneas más arriba:

Si bien no es ninguna novedad recordar la ambigüedad que sugieren términos como alternatividad y contrainformación, hacerlo sigue siendo un punto de partida. De esa vaguedad da cuenta la proliferación de expresiones tales como comunicación participativa, popular, militante, emancipatoria, autogestionaria, comunitaria, alterativa, ciudadana, etcétera, que resaltan diferentes aspectos que hacen a una noción (parcial) de la alternatividad y que no escapan a la influencia de los desplazamientos teórico conceptuales operados en el campo de las ciencias sociales desde las décadas del 60 y 70 hasta la actualidad. El problema de la ambigüedad conceptual que sufren estos términos suele aburrir a quienes se animan a escarbar entre los debates y las tensiones que cruzan el campo. Y que, en más de una ocasión, funciona como una especie de cajón de sastre donde se coloca todo aquello que supone

alguna dificultad para leerse dentro de la comunicación o el periodismo dominantes.

Esto lleva a meter en una misma bolsa experiencias disímiles y hasta contradictorias como las que van desde el periodismo del "tercer sector" hasta los periódicos de los movimientos sociales y las organizaciones políticas populares, pasando por las radios impulsadas por las organizaciones revolucionarias latinoamericanas [...] También disputan o comparten esta vaga etiqueta el desarrollo de un periódico barrial comunitario, el vídeo de experimentación artística y el vídeo de intervención política; las televisoras de baja potencia comerciales y las emisiones de televisión comunitarias. (Vinelli, N. en Downing, J., 2011, p. 27).

Hemos de ser conscientes también de que la aparición o dominación de ciertos términos tiene mucho que ver con su desarrollo en la práctica, es decir, el contexto en el que se desarrollan los medios alternativos latinoamericanos, estadounidenses y europeos es diferente, aunque los resultados y la estructura (la apropiación de los medios de comunicación por parte de la ciudadanía) sean muy similares. Dado que esta tesis se va a centrar en los contextos latinoamericanos y europeos (y, dentro de los europeos, el punto central será el Estado español), vamos a limitar la explicación a dichas zonas de influencia. Chiara Sáez (2008) aporta las siguientes diferenciaciones y desarrollo en su tesis doctoral:

América Latina	Europa	Estado español
<ul style="list-style-type: none"> -Condiciones materiales históricamente insatisfechas. -Proliferación y mantenimiento de dictaduras militares. -Tradición radiofónica sobre otros soportes. -Vínculos con sectores eclesiásticos progresistas (Teoría de la Liberación). -Conceptos dominantes de "comunicación popular", "comunitarias" y "comunicación alternativa para el desarrollo democrático". 	<ul style="list-style-type: none"> -Los monopolios públicos de radio y televisión agotan la representatividad pública. -Hay una crisis "existencial" del ideario de la Modernidad (Mayo del 68). -Concepto dominante de "medios libres". 	<ul style="list-style-type: none"> -Democracia joven y culturas políticas autonómicas muy distintas. -Legislación sobre comunicación muy dispersa, compleja y diversa. -Politización de las decisiones técnicas (licencias, equipos de emisión...). -Temas de estudio retomados actualmente por la academia. -Tejido asociativo (necesario para instaurar un medio alternativo) débil y fragmentado.

Tabla 1.2: Diferentes tradiciones de medios alternativos (elaboración propia con datos de Chiara Sáez, 2008).

Hemos podido observar, por tanto, cómo ha habido una superación de las teorías tales como las tradicionales asistenciales de comunicación para el desarrollo, la de la aguja hipodérmica, las teorías de difusión y modernización... pero a la vista de la documentación y los marcos aquí traídos, ¿qué sucede con el esquema tradicional de emisor-receptor de Lasswell? ¿Y qué sucede con la incorporación de los nuevos paradigmas de comunicación alternativa que se

suceden día tras día en la realidad? Alejandro Barranquero y Chiara Sáez (2010) afirman que la comunicación alternativa y/o comunicación para el cambio social democráticos son sujetos invisibles en la enseñanza de las teorías de la comunicación en los estudios de las universidad española. En su análisis, estos investigadores afirman que el profesorado universitario muestra un escaso interés por estas temáticas, lo que se traduce en una invisibilidad en la agenda teórica sobre la comunicación. No sólo eso, sino que entre aquellas personas que sí estudian y difunden desde la academia este tipo de comunicación y periodismo está muy arraigada la identificación de alternativo con precario y, lo que es más preocupante, se pierden de vista los factores de carácter estructural tales como las condiciones legislativas e institucionales que dificultan la labor de estos medios y que explican sus dificultades económicas "más como una consecuencia que como un atributo deseado" (Barranquero, A. y Sáez, Ch., 2010, p. 15).

En este sentido, y más como "un toque de rareza", parafraseando al investigador Juan Ramos (2010, p. 21), tenemos el caso de Eric Kluitenberg que en 2008 concibió el concepto de "medios íntimos" o "medios sin audiencia":

Los medios íntimos son espontáneos. [...] Tienen un alto grado de retroalimentación con el público en contraste con los medios convencionales.

Los medios íntimos más bien son micromedios en los que existe un acercamiento entre el emisor y el receptor, pues idealmente el emisor y la audiencia se conocen. (Kluitenberg, E. citado en Ramos, J., 2010, p. 21).

Esta teoría contrasta con algunos de los datos recogidos por AMARC Europa sobre la audiencia, el alcance y/o presupuesto anual que manejan algunas radios comunitarias en este continente, como muestra un botón (datos internos facilitados por la entidad):

-Radio Popolare (Milán, Italia) tiene 180.000 oyentes al día y un presupuesto anual de 5 millones de euros.

-Near FM (Dublín, Irlanda) tiene 70.000 oyentes al día y un presupuesto anual de 800.000 euros.

-En Francia las radios libres representan el 41% de los empleados asalariados y un presupuesto conjunto de 62 millones de euros (un 9%) del total del sector de radio del país.

Y sin embargo, y a pesar de los datos, este tipo de teorías siguen apareciendo sin aportar datos sobre el terreno en recopilatorios y antologías de la comunicación, otorgándoles así una credibilidad y una difusión un tanto cuestionables. Anteriormente hemos podido observar en la tabla de diferenciaciones básicas entre medios convencionales y medios alternativos que existe un tipo de estructuración del periodismo dominante en la práctica, y dicha dominación se refleja en el espejo de la enseñanza de la comunicación formal, tal y como apuntaban también Vinelli, Barranquero y Sáez. Por lo que en escuelas y en universidades se seguirá enseñando el paradigma de Lasswell.

Finalmente llegamos al muy utilizado concepto del “Tercer Sector”. Este término comienza a generalizarse a partir de una investigación sobre el sector no lucrativo realizada en 1999 por la John Hopkins University (Sáez, Ch. 2010) y titulado *Sociedad Civil Global. Dimensiones del sector no lucrativo*. Su introducción decía así:

En los últimos años hemos presenciado una considerable explosión de intereses a lo largo de todo el mundo en el alcance de las instituciones sociales que operan fuera de los límites del mercado y del Estado. Conocido generalmente como el sector "no lucrativo", "voluntario", de la "sociedad civil", el "independiente" o el "tercer" (sector), este conjunto de instituciones incluye algunas veces una confusa variedad de entidades - hospitales, universidades, clubes sociales, organizaciones profesionales, centros de cuidados diarios, medioambientales, grupos, agencias de

conciliación familiar, clubes de deporte, centros de formación profesional, organizaciones de derechos humanos, y muchas más. A pesar de esta diversidad, sin embargo, estas entidades comparten características comunes. En particular, estas son:

- Organizaciones con una presencia institucional y una estructura.*
- Privadas (separadas del Estado, de lo público).*
- No lucrativas, no producen beneficios económicos individuales.*
- Autogestionadas (sus participantes controlan sus propios asuntos).*
- Voluntarias (atraen a un alto número de contribuciones voluntarias en materia de tiempo o de dinero). (Sáez, Ch., 2010, p. 6).*

El problema que le encuentra la autora chilena es que en el origen del término hay una fuerte carga de connotación subsidiaria-asistencialista (que podría recordar un poco a tiempos pasados, descritos al principio de este capítulo, sobre cómo se entendía el desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial). Sáez cita a las investigadoras catalanas Anna Clua (2006) y a Carme Mayugo (2004 y 2006) como las iniciales desarrolladoras en el Estado español del concepto Tercer Sector de la Comunicación:

Quienes marcarán un distanciamiento del sentido subsidiario-asistencialista presente en el origen del concepto genérico para concebir el TSC como un espacio social de comunicación independiente de los poderes públicos y privados, heredero de las reivindicaciones que antaño efectuaron los medios denominados libres y comunitarios, que concibe como característica sustancial básica de estos medios su rol como crisol donde se expresa la sociedad civil organizada. (Íbid, p. 6).

Independientemente de las diferencias y multiplicidad de conceptos en el marco de la comunicación alternativa, lo cierto es que la realidad y la práctica ya han escogido sus términos en el contexto legislativo y en las declaraciones internacionales, y es el de "medio

comunitario", así como el también utilizado "Tercer Sector". Así aparecen en documentos como la *Declaración de la Sociedad Civil sobre la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información* (2003 y 2005), la *Llei Catalana d'Audiovisual* (2006), el estudio para la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo *El estado de los medios comunitarios en la Unión Europea* (2007), la *Resolución del Parlamento Europeo sobre medios comunitarios* (2008), el documento del Consejo de Europa *Promocionando la cohesión social: el rol de los medios comunitarios* (2008), la *Declaración de Maputo para promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas* de la UNESCO (2008), la *Declaración del Comité de Ministros sobre el rol de los medios comunitarios en la promoción de la cohesión social y el diálogo intercultural* (2009), la *Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual* de Argentina (2009), la *Ley General de la Comunicación Audiovisual* del Estado español (2010), los Informes de los relatores de expresión de la ONU, OSCE, UNESCO, la *Ley Orgánica de Comunicación* de Ecuador (2013), etc.

Siendo, efectivamente, estos dos términos por los cuales se han decantado los legisladores de diferentes países y también en un ámbito internacional, John Downing (2010) dice que a pesar de que investigadores como Ellie Rennie (2006), Per Jauert, Ole Prehn y Nick Jankowski (1992), Kevin Howley (2005 y 2009), Rosemary Day (2008), Vinod Pavarala y Kanchan Malik (2007) se han decantado por el concepto de "comunitario", encuentra que este tiene un "tono de romanticismo empalagoso" (2010). Se refiere sobre todo a la teoría de Ellie Rennie (2006) que defiende este concepto describiéndolo como sigue:

[Estos medios] *logran capturar el proceso cotidiano y ordinario de la ciudadanía colectiva. Están ubicados dentro de la sociedad civil, definida como asociaciones formadas por motivos no lucrativos que se ven como participantes legítimos en el proceso gubernamental. [...] El mercado y los medios de servicio público tanto como los medios comerciales, no funcionan como partes constituyentes de la sociedad civil, aunque por*

supuesto influyen en esta de muchas maneras diversas. (Rennie, E., 2006, p. 41).

Refiriéndose al concepto de "medios del Tercer Sector", Downing (2010) afirma que es un término principalmente utilizado en discusiones europeas y que es un término proveniente de la política, que define a los medios en negativo, es decir, no diciendo lo que son sino marcando lo que no son: "esa parte del espectro de los medios que no es financiado por entidades comerciales, gubernamentales o institucionales" (p. 6). Por ello, este investigador afirma que puede ser útil utilizarlo en contextos de política de la comunicación pero aparte de eso "no nos ofrece nada" (p. 6).

1.3. ESTUDIOS SOBRE LEGISLACIONES.

1.3.1. Tradición legal del sistema de medios en el Estado español.

El Estado español ha experimentado un desarrollo tardío de su sistema de medios de comunicación debido a que el régimen dictatorial franquista (1939-1975) controlaba las comunicaciones, impidiendo así que el mercado de medios madurara de una forma natural (Segovia, A., Luján, L.; 2010). Tras el período de la Transición, el monopolio público se ve roto desde el propio sistema público con la multiplicación de la oferta y la inauguración del edificio Torrespaña en 1982 (Bustamante, E; 2006 y 2013) y la ley de los terceros canales aprobada en diciembre de 1983. Bien es cierto que antes de eso, y como veremos en el Capítulo 2, realmente el primer tercer canal de la televisión fue un medio comunitario, Cardedeu TV (1980-1981). Se puede observar la tardía liberalización del sector audiovisual, sobre todo en el campo de la televisión, porque no fue hasta más de una década después de la instauración de la democracia que se promulgó una ley de televisión privada (1988) y que comenzaran las primeras emisiones estatales de televisiones de gestión indirecta (en 1989,

Antena 3, Telecinco y Canal +).⁸ Finalizando el proceso, en los últimos años hemos asistido a una ingente desregulación del sector audiovisual (Badillo A., 2003; García, T., 2008; Segovia A. y Luján, L., 2010; Zallo, R., 2010; García Castillejo, Á. y Chaparro, M., 2012; Gavara, J.C. y Pérez, J.M., 2012) que encaja, a su vez, con este tipo de tendencias llevadas a cabo por diversas directivas de la Unión Europea que los Estados miembros están obligados a cumplir (*Directiva de Medios Audiovisuales sin Fronteras*, 2006 y *Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual*, 2010).

Algunas de las consecuencias de la desregulación del mercado del audiovisual pasan por que contrariamente a lo que afirman los partidarios de la misma, una mayor pluralidad en la propiedad de los medios no se traduce necesariamente en una mayor diversidad de los contenidos que se ofertan (Petit, M., 2008), ni de que estos estén al servicio del interés público. Además, la propiedad de los medios puede verse afectada por las concentraciones empresariales⁹ y más en un Estado, como el español, que cada vez más está apostando por una legislación *ex post* (es decir, sancionadora una vez que el daño está realizado, antes que preventiva o *ex ante*).¹⁰

Ya en 1992 el investigador Román Gubern alertaba de que el impulso desregulador que se había iniciado en Estados Unidos iba a conllevar "una mercantilización radical de la cultura de masas al estilo norteamericano". En el caso de nuestro país, Ángel G. Castillejo y Manuel Chaparro (2012) afirman que la desregulación del sector es una norma implantada en el Estado español que beneficia a las grandes empresas y perjudica a la democracia existente:

⁸ La gestión indirecta o privada, en este caso del servicio público esencial de la televisión, se refiere a un modelo de contrato por el cual una persona privada acuerda prestar un servicio público con la Administración Pública, que es la titular del servicio y quien elige al contratista más idóneo, normalmente mediante concursos.

⁹ Se puede consultar una infografía actualizada a julio de 2012 sobre quiénes son los dueños de la información en el Estado español <http://esmola.wordpress.com/2012/07/09/los-duenos-de-la-informacion-ii/>

¹⁰ Una cuestión que se agrava especialmente si los poderes judiciales responden con lentitud: una denuncia ante la Comisión Nacional de Competencia puede tardar en resolverse una media de tres años (Castillejo, Á., Chaparro, M., 2012).

Los procesos de concentración en torno a las grandes empresas que dominan la industria audiovisual continúan produciéndose gracias a la flexibilización de las normativas existentes. El fenómeno atenta directamente contra la pluralidad y objetividad de los flujos informativos, al estandarizar modelos cuyos patrones de calidad y contenido atienden exclusivamente a criterios economicistas que resultan contrarios a los ciudadanos. (G. Castillejo, Á. y Chaparro, M., 2012, p. 1).

Ramón Zallo (2010) va más allá en la calificación y afirma que el primer gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero realizó un "giro neoliberal" en sus políticas de regulación del sector audiovisual. Apoya esta tesis en que las políticas planteadas desde los primeros años de este gobierno (2004-2005) no coinciden con las que finalmente se aprobaron en 2010:

El acento ha pasado del servicio público a la concentración; de la descentralización a la centralización; de la extensión del conocimiento a su acumulación y apropiación [...] y un regreso tardío al modelo neoliberal, tras haber distorsionado el mercado mediante decisiones públicas en beneficio de los prestadores de servicios audiovisuales más importantes. (Zallo, R., 2010, p. 14).

En términos parecidos también se expresa Enrique Bustamante (2013). Incluso afirma que se trata de una contrarreforma del Gobierno socialista, entonces en el poder, contra sus propias ideas iniciales. No sólo los autores coinciden en esta neoliberalización del sector, también las prácticas se corresponden con estas teorías. Hoy, cuatro años después de la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, se ha establecido en el mercado de la televisión privada estatal un duopolio en cuanto al negocio de la publicidad formado por el Grupo Mediaset (PúbliEspaña) y por la suma de A3 Advertising y Publiseis. Estos dos grupos mueven el 100% del mercado publicitario. En el caso de la radio privada estatal, PRISA,

COPE y Onda Cero se reparten más del 80% de las frecuencias privadas comerciales (Castillejo, Á., Chaparro, M.; 2012).

Con la llegada del apagón analógico en televisión se preveía un aumento de la pluralidad. Ya en el año 2005, cuando el Consejo de Ministros aprobó en noviembre el reparto de los canales digitales de los operados públicos y privados de ámbito estatal, el entonces ministro de Industria, José Montilla, así como la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmaron que pretendían "aumentar el pluralismo e incrementar la oferta" audiovisual en el Estado español. Sin embargo, resulta bastante contradictorio que un país reparta canales para aumentar la pluralidad de contenidos y de propietarios, y luego permita sencillos procesos de fusiones y reabsorciones que vienen a dejar las cosas peor que estaban (*ibid*).

En este sentido, uno de los mayores exponentes de la filosofía *ex post* que hemos comentado unos párrafos más arriba, es la consolidación de la autorregulación de los medios de comunicación y de las personas que los conforman, perdiendo así un compromiso de prestación de servicio público y esperando simplemente a que las sanciones, al menos, sean inferiores al beneficio obtenido por los operadores. Un ejemplo ilustrativo sencillo: en el año 2011, el conjunto de televisiones privadas de ámbito estatal fue multada por la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) por un total de 2,15 millones de euros. En 2012, esta cifra ascendió a 3,3 millones de euros. El récord de los últimos años está en los 9,5 millones de euros del año 2007. Por otro lado, los ingresos en el año 2012 sólo por publicidad de estas televisiones fueron de 406,43 millones de euros. La mayoría de las sanciones corresponden a la emisión de más publicidad de lo que permite la ley, publicidad encubierta e interrupción de los programas en más ocasiones de las permitidas, así como el incumplimiento de la protección de menores. Es decir, que una legislación *ex post* y una autorregulación sale muy rentable cuando se ingresan más de cuatrocientos millones de euros y se paga en multas poco más de tres millones. Muy rentable y también muy ineficaz en cuanto al cumplimiento de la norma.

Por supuesto no podemos olvidarnos tampoco de la piedra angular: el Estado español es el único país de la Unión Europea que carece de una autoridad audiovisual independiente y único (no integrado en un superregulador sin precedentes como es el caso del Estado español) que vele tanto por las buenas prácticas como la observancia de la ley. Aunque el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) se contempló en la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, este fue eliminado antes de nacer por la *Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)*. Este superregulador, único en Europa, unifica a la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y, por supuesto, el CEMA. Los consejeros de del CNMC, incluidos por supuesto el presidente y el vicepresidente, son elegidos por el Gobierno (no por el Parlamento), produciéndose así por tanto una regubernamentalización de todas estas competencias (volveremos a estas cuestiones más adelante).

Autores como Castillejo y Chaparro afirman que toda esta tendencia a la desregulación no es únicamente propia del Estado español sino que responde a un contexto europeo:

El problema español es un problema internacional, de debilitamiento de las políticas regulatorias como herencia del thatcherismo y el reaganismo. Los medios no son más que la expresión de un negocio globalizado detrás del que se sitúa, además, la presión sobre las agendas políticas por parte de las corporaciones. (Íbid, pp. 2-3)

Es decir, si las agendas mediáticas están marcadas por agendas corporativas y políticas, en lugar de ciudadanas y de servicio público, ¿cómo perciben este análisis las audiencias? En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2013, el periodismo era la segunda profesión peor valorada por los ciudadanos (sólo superada por la de juez), y en el

último barómetro que trató de la credibilidad de los medios (2010), un 46% de los encuestados afirmó que confiaba en el periodismo para controlar el poder y los partidos, frente a un 54% que confiaba en otras instituciones.

1.3.2. Estudios relacionados con la legislación y el Tercer Sector de la Comunicación en Latinoamérica.

Estas dinámicas son susceptibles de ser estudiadas por la comunidad académica, al igual que la comunicación alternativa que nos ocupa. Sin embargo, según Chiara Sáez y Alejandro Barranquero (2010), los temas estudiados están más relacionados con las transformaciones tecnológicas (sobre todo, internet), el marketing político o la investigación publicitaria. Esto reporta, en palabras de los autores, unos beneficios políticos, económicos y académicos más ventajosos que justifican, además parafraseando a Gumucio-Dagron (2004), que la institucionalidad universitaria es "demasiado rígida como para renovar su estructura e incluir nuevas disciplinas, sobre todo aquellas que no son rentables".

Por ello, si hablamos de un tema como legislación en comunicación, que es el que nos ocupa, ya desde el término se presupone una exigencia de interdisciplinaridad entre, al menos, derecho y comunicación. Este tema ha adquirido importancia porque la aparición de las nuevas tecnologías y nuevos usos ha supuesto un auge de la normativa.

Si nos centramos en el estudio de las legislaciones audiovisuales y su relación o articulado con la comunicación comunitaria, podemos hallar numerosas investigaciones teóricas independientes de las fuentes originales del derecho. A nivel internacional hemos de destacar el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). AMARC se fundó en 1983 en Montreal (Canadá). Por el momento este Programa sólo está centrado en la región de América Latina y el Caribe. Cumple una doble función: por un lado, actúa de base de datos legislativa en relación a los

medios comunitarios y a cómo son tratados estos por los gobiernos y, por otro, realizan acciones de *lobby* político para mejorar los derechos tanto nacionales como internacionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones (hay que tener claro que esta organización sólo representa a medios del sector radiofónico comunitario, no televisivo). Además, para proyectos que no cuentan con excesivos recursos económicos actúan de apoyo y asesoría jurídica y técnica para sus asociadas.

El Programa de AMARC tiene una serie de publicaciones y estudios que han servido de base para el derecho a la comunicación comunitaria en los últimos años, y en este sentido se hace obligatorio destacar los *Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria* (2009). Según sus propios autores, con el investigador uruguayo y experto en leyes y políticas públicas sobre medios de comunicación Gustavo Gómez a la cabeza, este documento propone una guía de referencia para la elaboración e implementación de regulaciones de radiodifusión. Ahondando en sus bases volveremos a él más adelante puesto que será uno de los documentos de control con los que compararemos si las leyes audiovisuales de los países elegidos contemplan sus principios, algunos de ellos o ninguno.

Otra de sus obras relevantes son *Las mordazas invisibles. Nuevas y viejas barreras a la diversidad de la radiodifusión* (2009), donde se explican las dinámicas de la administración del espectro radioeléctrico y cómo se conceden y a quién las licencias de televisión y radio en varios países de Latinoamérica. Tiene también como objetivo final influir en las políticas mediante un proceso de formulación de estándares interamericanos específicos sobre radiodifusión y libertad de expresión.

En Latinoamérica el estudio más reciente que podemos encontrar en cuanto a una clasificación legislativa en materia de medios comunitarios está fechado en el pasado mes de septiembre de 2012. Ya lo hemos comentado previamente en la introducción puesto que lo hemos utilizado para determinar el estudio de campo de la tesis. En este caso concreto la investigación la ha llevado a cabo el coordinador de AMARC Brasil, João Malerba, con la

siguiente metodología: toma de referencia todas las recomendaciones realizadas por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH - OEA) y analiza en qué medida están presentes en las legislaciones de los países latinoamericanos. Estas recomendaciones se basan, sobre todo, en términos de pluralidad de medios y contenidos, niveles de democracia y diversidad participativa en los procesos de comunicación.

Según esta investigación comparativa, los países de la región latinoamericana que menos están protegiendo y desarrollando al sector de la comunicación audiovisual comunitaria son Brasil y Chile, y los que más son Uruguay, Argentina y Bolivia, que reservan un tercio del espectro radioeléctrico para la radiodifusión comunitaria tanto para las tecnologías analógicas como para las tecnologías digitales.

Una ampliación de este estudio se ha producido recientemente en agosto de 2013 por el propio autor, Malerba, en colaboración con Nils Brock (Universidad Libre de Berlín), en el que los resultados de Malerba se comparan con cuatro países europeos (Irlanda, España, Alemania y Francia). Los aspectos elegidos en esta investigación se circunscriben sólo a cinco: definición legal de los medios comunitarios en la ley, acceso al espectro, potencia y/o alcance de transmisión, plazo de otorgación y sustentabilidad. La diferencia de esta investigación con la tesis que llevamos a cabo sería, por un lado, que Malerba y Brock tienen como objetivo principal del estudio la comparativa con Brasil (país de nacimiento del primero), circunscriben la misma sólo a cinco cuestiones principales (las más interesantes de cara a la actual tramitación que se está llevando a cabo de la ley brasileña) y, además, muchos de los datos han sido obtenidos y contrastados de fuentes secundarias (no tanto las leyes en sí como entrevistas a especialistas y militantes de la comunicación en los países estudiados).

En términos generales, en este lado del Atlántico se han producido también artículos breves e investigaciones más pequeñas sobre legislaciones y comunicación comunitaria, por lo general coincidiendo con procesos legislativos clave en estos países, como por ejemplo, en Argentina

(Damián Loreti, Gabriel Kaplún, Mónica Cohendoz, Eduardo Shmidt), Uruguay (Gabriel Kaplún, Gustavo Gómez, Jean François Graña, Evan Light, José Acuña), Bolivia (Juan Ramos, Karina Herrera-Miller, José Luis Aguirre, Erick Torrico), Chile (Chiara Sáez) o Brasil (João Malerba, Nils Brock, Adilson Cabral).

1.3.3. Estudios relacionados con la legislación y el Tercer Sector de la Comunicación en Europa.

En este lado del Atlántico, en Europa, en el año 2004 se fundó en Halle (Alemania) el Community Media Forum of Europe (CMFE) con el objetivo, entre otros, de hacer también de *lobby* político frente a la Unión Europea en materia de legislaciones audiovisuales comunitarias. Para ahondar más en este trabajo esta organización internacional creó en el año 2012 su Grupo de Expertos en Legislación y Comunicación que son miembros académicos y activistas del campo reconocidos a nivel europeo y que actúan como consejeros de la Junta Directiva en este tipo de asuntos audiovisuales. Actualmente están muy centrados en los apagones analógicos y en la radio digital y en las diferentes tecnologías susceptibles de implantarse y son miembros del Consorcio de Digital Radio Mondiale (DRM), que es el tipo de implantación que el CMFE defienden a nivel de Estados europeos. Por último, cabe destacar en este sentido que la organización es una observadora permanente del Comité Directivo de Medios de Comunicación y Sociedad de la Información del Consejo de Europa (CDMSI, en sus siglas en inglés).

Aunque los miembros del CMFE difunden también información y escritos con un perfil más académico, lo que destaca de esta organización son sus documentos que aglutinan cuestiones como preguntas y respuestas a organismos reguladores de la Unión Europea, cartas a autoridades nacionales cuando un medio comunitario sufre algún tipo de persecución o impedimentos en su desarrollo y respuestas a las consultas europeas relacionadas con el ámbito audiovisual y la sociedad civil. En cuanto a sus investigaciones más recientes, en el

año 2012 acaban de realizar un mapa de contabilización de medios comunitarios en Europa en la que también puntúan, del 1 al 10, aspectos relacionados con la democracia y la comunicación, la regulación de estos medios en los diferentes países estudiados y el reconocimiento de los gobiernos nacionales hacia el Tercer Sector de la comunicación. Queremos adelantar algunos datos de esta investigación porque la utilizaremos más adelante en nuestra comparativa legislativa.

Los resultados arrojan un conjunto de 2.237 radios comunitarias y de 521 televisiones comunitarias presentes en Europa. Dado que uno de los objetivos del estudio según sus investigadores, con el experto en medios audiovisuales sueco Christer Hederström a la cabeza, es presionar a los gobiernos nacionales, políticos y autoridades audiovisuales para que reconozcan y/o mejoren las condiciones de radio y televisión comunitarias, consideramos de interés para el estudio comparativo que llevaremos en los siguientes capítulos mostrar los criterios y el sistema que han utilizado para desarrollar tanto el mapa como el listado de países, y adelantar qué posición ocupa España en la misma:

Criterio	Variables	Puntos en la escala
1. Extensión de los medios comunitarios.	Número de radios y televisiones comunitarias en relación con el número de habitantes y la posición financiera del país en el contexto europeo. Balance con los sectores público y comercial (audiovisual).	1-10
2. Regulaciones.	Posibilidades. Transparencia. Independencia en la producción de programas.	1-10

3. Apoyo financiero público.	Para la estructura de la organización. Para la producción y/o distribución. General (no especificada), indirecta como ONG.	1-10
4. Estructura técnica provista.	Operador independiente. Aire / TDT y cable / Sólo cable. Nivel de cobertura potencial (alcance nacional). Proceso de digitalización: consideración de intereses (de los medios comunitarios).	1-10
5. Tendencia general de desarrollo.	Positiva (6-10) - acción positiva o perspectiva. <i>Statu quo</i> (5) - realmente no pasa nada. Negativa (0-4) - situación de los medios comunitarios débil o deteriorándose, datos inciertos, no competencias / identificación con autoridades.	1-10

Tabla 1.3. CMFE Rating System Criteria for Community Media - Actualización 01/07/2013 (CMFE).

¿Qué posición ocupa en base a estos datos el Estado español? La posición 13 de un total de 29 países analizados y que además tienen medios comunitarios activos (se analizaron otros 10 países europeos que no tienen medios comunitarios, y de otros 10 no se obtuvo ninguna respuesta que se pudiera analizar). En el ratio del 1 al 10 que hemos comentado antes, la regulación, legislación, voluntad de las autoridades y desarrollo del sector puntúan aquí con un 3,6 en radios comunitarias y con un 4 en televisiones comunitarias. Los primeros países del listado los ocupan Noruega (7,2 y 7, respectivamente) y Dinamarca (6,8 y 7,2, respectivamente), y los últimos son Portugal (2 y 0, respectivamente) y Macedonia (1,6 y 0, respectivamente).

En este estudio, como podemos observar, el campo de las regulaciones es uno más que se puntúa de igual manera con el resto de criterios y sistema de medida considerados para la

investigación. Pero ¿cuál es el panorama general de las regulaciones en materia de medios comunitarios en Europa? El propio Parlamento Europeo en su publicación *El estado de los medios de la Unión Europea* (2007) se expresa en los siguientes términos:

Al igual que la carencia de leyes específicas [en el campo audiovisual], existe una carencia de regulaciones subyacentes relacionadas con medios comunitarios en muchos Estados miembros. La existencia de procesos y de criterios de evaluación transparentes para adjudicar y gestionar el acceso de estos medios al espectro, por ejemplo, varía a lo largo de la UE. Mientras que algunos Estados miembros tienen en cuenta a los medios comunitarios en sus marcos regulatorios (por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania, etc), la mayoría de los reguladores de medios no han implementado procesos y criterios para distinguir el servicio de los medios comunitarios. Como consecuencia, no pueden involucrarse adecuadamente con el sector [de la comunicación]. (Parlamento Europeo, 2007, p. 28).

En este sentido, el Parlamento Europeo destaca que una de las causas por las que los medios comunitarios no están adecuadamente regulados en diversos países miembros puede ser que los legisladores no sienten realmente que estos medios contribuyan lo suficiente al interés público. Otra explicación que da es que estas personas no han tomado la suficiente consciencia de las potenciales contribuciones que hacen a la sociedad. Por ejemplo, solo unos cuantos reguladores emplean a personas con un conocimiento experto en medios comunitarios.

Pero el propio legislador europeo tampoco parece estar por la labor de crear directivas (leyes vinculantes a los Estados miembros), no solo en el caso concreto de los medios comunitarios sino referidas a la comunicación audiovisual en general (Valcke, P., 2012). Las iniciativas de armonización entre países han resultado en intentos fallidos (el más sonado, el de la Comisión

Europea de 1992) y los estudios y controles en lo que se centran es más en el monitoreo que en la regulación, donde aquí se tiene una base jurídica precaria (*ibid*).

Este aspecto es muy importante remarcarlo dentro de este marco teórico porque una de las hipótesis que nos planteamos es precisamente hasta qué punto una adecuada legislación de la materia está relacionada con un alto desarrollo del Tercer Sector de la Comunicación en un país (volveremos a este punto más adelante puesto que es exactamente la pregunta que hemos formulado a las autoridades audiovisuales de los once países estudiados). Esta correlación entre políticas y legislaciones específicas y desarrollo de los medios comunitarios ya ha sido apuntada brevemente en los estudios comparativos de Price – Davies (2001) y Buckley *et al* (2008). En el primer caso, los países que se toman para el estudio son de contextos muy diferentes: Australia, Canadá, Francia, Países Bajos, Irlanda y Sudáfrica. El segundo caso es una visión algo más general (además de la legislación incluye la administración interna de estos medios, desarrollo un contexto más favorable, garantías de la libertad de expresión y acceso a la información, servicio público de comunicación, sector de medios comerciales, legislaciones laborales referidas a periodistas...). Dado que este segundo estudio está patrocinado por el Banco Mundial, el alcance geográfico que tiene también es mayor. Por ejemplo, en la parte más relacionada con la legislación, regulaciones diversas y consejos audiovisuales independientes, se exponen casos de países tan dispares como Francia, Benín, Canadá, Inglaterra, África del Sur, Lituania, Mozambique, Australia, Tailandia, Alemania y Estados Unidos. No hemos encontrado, ni en la introducción ni en el resto de esta investigación, los motivos para elegir las prácticas de unos países sobre otros así que no podemos apuntarlos.

Desde el Estado español las comparativas legislativas respecto de la regulación de los medios comunitarios se han realizado sobre todo desde universidades catalanas, o encabezadas por investigadores catalanes (Reguero, N. y Fernández, A., 2013; Reguero, N. *et al.*, 2012, Aurora, L. *et al.*, 2011; Fleischman, L. *et al.*, 2009 y 2010; Sanmartín, J. y Reguero, N., 2009, Clua A. *et al.*, 2006).

Por último, también deberíamos destacar aquí las investigaciones más centradas en las críticas a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que o bien citan a los medios comunitarios como fuente o bien critican esta regulación por no ampararlos (Calvo, E., 2011; Segovia, A. y Luján, L., 2010; Zallo, R., 2010; Meda, M., 2010, 2011, 2012).

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

*a) A expresar y difundir libremente los pensamientos
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción. [...]*

*d) A comunicar o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión.*

Constitución española de 1978.

CAPÍTULO 2: LA LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA DEL ESTADO ESPAÑOL Y LOS MEDIOS COMUNITARIOS (1977 – 2009).

2.1. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA, TAMBIÉN EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN.

Dentro del contexto europeo, el Estado español se perfila como una democracia joven y con culturas políticas autonómicas muy distintas, incluyendo diferentes lenguas y costumbres. Esta idiosincrasia provoca que la legislación audiovisual que nos ocupa esté muy dispersa y sea muy compleja y diversa, incluso que esta tenga en muchas ocasiones politizadas las decisiones técnicas que se toman al respecto, tal y como ya hemos visto en el capítulo anterior cómo se realizó el apagón analógico de televisión en el año 2010.

Las cuestiones audiovisuales durante el período franquista eran, como es de esperar, propias de una dictadura que controla (o lo intenta, al menos) todas las comunicaciones masivas que se realizan en su territorio nacional a través de los medios de comunicación. Hemos de

remontarnos, como curiosidad, mucho más atrás en el tiempo, concretamente al 24 de enero de 1908, cuando el Gobierno español de entonces decide reservar para el Estado el monopolio de las ondas para el presente y el futuro.¹¹ Durante el franquismo las cuestiones audiovisuales (así como las del resto de la prensa) estaban controladas por el Ministerio de Información y Turismo, creado en el año de 1951. Por aquel entonces hubo algunas legislaciones al respecto de la radio, como el *Plan de Difusión en Onda Media* (1952). Este Decreto actualizaba normas anteriores como la de 1924 (en la dictadura de Primo de Rivera), 1931 y 1932 (en la II República), confiriendo el estatus de propiedad estatal a las radios españolas y dividiéndolas en tres categorías: emisoras nacionales, emisoras comarcales y emisoras locales. Además, ya convivían la radiodifusión española pública y los proyectos privados, siéndole otorgados a estos unas licencias de emisión mediante unos concursos.

Tan sólo unos años más tarde, el Decreto sobre *Transformación de las emisoras locales de onda media en emisoras de frecuencia modulada*, de 8 de agosto de 1958 (publicado el 7 de octubre de 1958 en el Boletín Oficial del Estado) estableció que dichas emisoras locales (no así las comarcales y nacionales) debían pasar de emitir en onda media a emitir en frecuencia modulada. Se estableció un plazo improrrogable de cinco años para llevar a cabo la conversión.

Estamos aludiendo a este período previo a la democracia como muestra del retraso de la desregulación audiovisual que ha sufrido el Estado español y que ya apuntábamos en la introducción de esta tesis. También habíamos enfatizado ya que las concesiones en materia audiovisual se realizaban de forma opaca y decidida sólo por los Gobiernos. Como una muestra más de la *herencia concesionaria* que venimos apuntando desde el comienzo de esta

¹¹ Decreto del 24 de enero de 1908, *Bases para el establecimiento en España del servicio radiotelegráfico* publicado en la *Gaceta de Madrid* el 25 de enero de 1908 y disponible en <http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1908/025/A00333-00335.pdf> Su antecedente y considerada como la primera regulación de las telecomunicaciones (Soria, C. 1974; Peinado, F. 1998) es la *Ley autorizando al Gobierno para que proceda a plantear o desarrollar los servicios de radiotelegrafía, cables y teléfonos*, de 26 de octubre de 1907, publicado en la *Gaceta de Madrid* el 28 de octubre de 1907 y disponible en <http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1907/301/A00359-00359.pdf>

tesis vamos a describir un hecho que se sucedió en los últimos coletazos de la dictadura: en el año 1954 (Boletín Oficial del Estado del 28 de agosto de ese año) se convocó un concurso para la “organización y ejecución de programas en emisoras comarcales de radiodifusión”. Esto suponía una privatización de los contenidos de emisoras comarcales, que eran propiedad del Estado (salvado obviamente las circunstancias o exigencias de censura en dichos contenidos que se tenía en ese momento). Estas concesiones, realizadas como es lógico a cambio del pago de una determinada tasa, se adjudicaron para un período de 12 años. El resultado fue que la Sociedad Española de Radiodifusión (S.E.R.) obtuvo Radio Barcelona, Radio Valencia, Radio Sevilla, Radio Madrid y Radio San Sebastián; Cultural Radio España S.A. obtuvo Radio España de Madrid; Radio España de Barcelona S.A. obtuvo Radio España de Barcelona y la Compañía de Radiodifusión Intercontinental S.A. obtuvo Radio Intercontinental de Madrid.

Un mes antes de que expirase el plazo de concesiones, el 21 de noviembre de 1967 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la posibilidad de solicitar una prórroga a las empresas adjudicatarias “hasta tanto sea establecido a través de un nuevo concurso el régimen futuro de su gestión y explotación”. Las empresas se acogieron a esta posibilidad y obtuvieron permisos hasta 1973, 1974 y 1975 (dependiendo de cada emisora). El 11 de enero de 1974 el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Información y Turismo a prorrogar de nuevo estas concesiones hasta el 30 de junio de 1974. Y así lo hizo, y lo volvió a hacer mediante sendas órdenes el 5 de julio de 1974 y también el 20 de diciembre de ese mismo año (Montes, F.J. 2012).

¿Qué sería lo más interesante de esta cuestión? En el Boletín Oficial del Estado del 4 de septiembre de 1975 aparecieron dos decretos por los que “se acepta la donación al Estado de títulos valores”. En uno de ellos, la Compañía de Radiodifusión Intercontinental S.A., “en concepto de donación pura y simple”, cedía casi 3.000 acciones nominativas al Estado español. En el otro, la Sociedad Española de Radiodifusión S.A., “en concepto de donación pura y simple”, hacía lo suyo con alrededor de 52.000 acciones (de serie A, B y C).

Consultada la prensa de esos días, en el ABC del 6 de septiembre de 1975, Antonio Fontán, exdirector del diario Madrid y accionista de la S.E.R. afirmaba que las empresas habían negociado con el Ministerio de Información y Turismo la cesión del 25% de sus acciones a cambio de una renovación de las concesiones de explotación de emisoras comarcales.¹²

Finalmente, llega la democracia y, con ella, la Constitución de 1978. Dicha carta magna establece los derechos de la ciudadanía a la información y a la comunicación en su artículo 20 que, completo, reza así:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social independientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen

¹² <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1975/09/06/020.html>

y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

En esta redacción de la Carta Magna española lo que vamos a destacar es la parte del artículo correspondiente a la parte 1.d.: no sólo la ciudadanía tiene derecho a *recibir* información (veraz, contrastada, etc.) sino que también tiene derecho a *comunicar* dicha información “por cualquier medio de difusión”. Los medios de comunicación juegan un papel esencial en la construcción de una sociedad democrática y plural. Por tanto, el derecho a la información se inscribe en los contextos políticos, económicos y sociales, y no sólo como una preocupación exclusiva de los periodistas o peor, de las empresas mediáticas, puesto que en la Constitución no se especifica de ningún modo que la emisión de información sea menester único y exclusivo de los profesionales del periodismo y, mucho menos aún, de los grandes conglomerados mediáticos (Meda, M., 2010).

Por este motivo, a la vez que la democracia actual se instauraba y que se ponía en marcha un sistema jurídico más propio de un Estado moderno, sustituyendo en gran medida a la pasada dictadura, la ciudadanía manifestó una “voluntad, podríamos decir que incluso un placer, para el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación” (Moragas, M., 1988; p. 92). Por ello, aparecen una gran número de radios sin permiso para emitir y denominadas en esos primeros momentos como “radios piratas”, reflejándose en movimientos de Francia e Italia (Bassets, 1981) donde las “radios libres” llevaban años operando. Los proyectos eran de todo tipo pero, por lo general, respondían a la necesidad de expresión de distintos sectores y colectivos sociales (García, J., 2013). No sólo en radio, sino que también en televisión un poco después apareció el primer tercer canal del Estado español, Televisió Cardedeu, siendo también la primera televisión en catalán de la historia.

Antes de esta explosión de libertad de información, la dictadura finalizó con un puñado de emisoras, no llegaban a un centenar en todo el país, entre radios públicas y comerciales en FM y, por supuesto, sólo dos canales públicos de televisión (Chiara, S. y García, J., 2011; García, J., 2013).

2.2. LA EXCLUSIÓN SISTEMÁTICA DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS DEL SISTEMA DE LICENCIAS.

Las *emisoras piratas*, como hemos comentado unos párrafos más arriba, nacieron sin permisos legales para emitir. Los proyectos que las gestionaban eran muy diversos: experimentales, comerciales independientes, municipales y diversos sectores “interesados en desarrollar la radio como un espacio de expresión social, cultural o educativo” (García, J., 2013, p. 113). Muchas de las emisoras denominadas libres y sin ánimo de lucro recibieron órdenes de cierre nada más encender sus emisores y antenas (como Ona Lliure de Barcelona o Televisió Cardedeu).

Para comprender la legislación que se va a detallar en los siguientes apartados, es muy importante tener en cuenta que el Estado español está dividido en autonomías con competencias propias, entre ellas la de convocar concursos de licencias y establecer decretos concretos de regulación del audiovisual en su territorio. Es decir, el espectro radioeléctrico (que aunque contenga la palabra “radio” no sólo se refiere a la radiodifusión, sino también a la televisión analógica y a las señales digitales de ambos soportes) es de titularidad estatal y declarado de dominio público, por lo que corresponde a un Gobierno central realizar los planes técnicos generales determinando el número de licencias que pueden ser objeto de concurso en cada territorio. En el caso concreto español, esta tarea la realiza la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI) que pertenece al Ministerio de Industria. Ahora bien, son los gobiernos autonómicos quienes, en base a esos planes técnicos, convocan los concursos de licencias de radio y/o televisión y además

concretan las leyes audiovisuales estatales en regulaciones que, obviamente sin contradecir la ley marco, se adaptan a la idiosincrasia de cada región. Poniendo un ejemplo concreto, un plan técnico elaborado por el Gobierno central puede decir que a la Comunidad Autónoma de Andalucía le corresponden 36 licencias de radio para repartir, pero no le dice al gobierno andaluz a qué radios han de ir destinadas esas frecuencias. Esa es una cuestión que debe resolver el gobierno andaluz.

Estas premisas responden a la normativa aprobada con la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 (LOT, que veremos más detallada más adelante) y que adelantamos aquí como explicación de un concepto que veremos reflejado en todo el estudio: el de “gestión indirecta”. Desde la LOT se hace distinción entre la gestión *directa* del espacio radioeléctrico (es decir, por administraciones públicas o sus entes) y la gestión *indirecta*, por la cual se produce una concesión administrativa (permiso de emisión, licencia) a personas físicas o jurídicas sin distinguir entre ánimo de lucro o no.

En el siguiente cuadro nos podemos hacer una imagen visual de la gestión directa e indirecta:

Tipo de gestión del espectro radioeléctrico	Quién accede a la frecuencia	Tipo de medio	Ejemplo de medios
Directa (administraciones públicas)	Administración general del Estado	Estatal	RNE, TVE
	Comunidades autónomas	Autonómico	Telemadrid, Canal Nou, TV3
Indirecta (personas físicas o jurídicas)	Ayuntamientos	Municipal	Onda Fuenlabrada, Teleganés
	Empresas	Privado	Cadena Ser, COPE, Punto Radio
	Entidades sin ánimo de lucro	Comunitario	Radio Ritmo, Tele K, Onda Color

Tabla 2.1: Gestión directa e indirecta del espectro radioeléctrico (Elaboración propia / García, J. 2009)

Este aspecto, que puede parecer meramente administrativo y propio de un orden legislativo de reparto territorial de competencias como el que impera en el Estado español, es el que ha provocado en el pasado, y está provocando también en la actualidad, un obstáculo muy difícil a los medios comunitarios para la consecución de sus licencias (entre otros factores). Aunque la mayor parte de las Comunidades Autónomas ha reconocido en sus decretos previos a la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 a una especie de Tercer Sector de la Comunicación donde podrían tener cabida los medios libres y comunitarios legalmente, sólo en tres ocasiones previas al 2010 se han concedido licencias a emisoras comunitarias (en el sentido de las definiciones internacionales al respecto, que ya hemos repasado en la introducción), una en 1989 a Radio Klara, en Valencia, otra en el mismo año a la Federación de Radios Libres de Chinchón, en Madrid, y la última en 1998 a Xorroxin Irratia, en Navarra. Si tomamos el dato estimado de 2011, que es del cual disponemos, mientras que tres licencias se repartieron a medios comunitarios (solo radios), las radios públicas tenían entonces 2.564 frecuencias y, las privadas comerciales, 1.904. (Chiara, S. y García, J., 2011).

Los motivos para que suceda esto es una especie de tensión Estado – autonomías para los cuales ninguno parece responsabilizarse de esta situación de irregularidad. Actualmente, en los planes técnicos no existe un reconocimiento explícito del Tercer Sector de la Comunicación. Sí lo hubo en uno de los borradores que se barajó en 1994 y que incluía una mención a las “radios culturales y educativas sin fines de lucro”, que debían cumplir una serie de características como emitir en baja potencia y no podían hacerlo bajo ningún concepto en cadena (así lo adelantó en su momento el subdirector general de Concesiones y de Gestión del Espectro Radioeléctrico, Isaac Moreno, en las *Jornadas de radio pública y radio privada* que tuvieron lugar en 1995).¹³

Sin embargo, la aprobación de este documento se retrasó hasta 1997, y mientras tanto hubo un cambio de Gobierno (de PSOE a PP), con lo que en la redacción final se eliminó el artículo que reconocía a este tipo de emisoras educativas y culturales (Boletín Oficial del Estado del 13 de septiembre de 1997). En este sentido, las comunidades autónomas han argumentado (y siguen argumentando) que no pueden destinar frecuencias a un tipo de emisoras si la planificación estatal no lo reconoce explícitamente.¹⁴

Las respuestas del Gobierno central a estas opiniones han ido cambiando en los últimos años. Antes de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, el Gobierno afirmaba que ninguna normativa impedía a las comunidades autónomas destinar licencias específicas para medios sin ánimo de lucro. Pero a partir de la nueva ley (2010), el Gobierno ha empezado a decir que hasta que no haya un reglamento específico de medios comunitarios (ver capítulo 7 de la

¹³ http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/anteriores/num_040/actuali_noticias5.html y http://elpais.com/diario/1994/05/19/madrid/769346696_850215.html

¹⁴ Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Resolución del recurso de reposición interpuesto por la asociación Red de Medios Comunitarios contra el Acuerdo 66/2013, de 15 de mayo, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, de aprobación de las bases del concurso público para la adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia de titularidad privada en Cataluña y contra el anuncio de licitación del concurso para la adjudicación de 23 licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia. 29 de julio de 2013.

presente tesis) las comunidades autónomas han de esperar para otorgar este tipo de frecuencias. Los últimos ejemplos más relevantes a estos dos aspectos son los siguientes (las negritas son nuestras).

a) El 18 de febrero de 1998 el diputado Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida realizó la siguiente pregunta al Gobierno (entonces PP)¹⁵:

*¿Existe alguna **previsión por parte del Gobierno** para regular la asignación de algunas frecuencias en el plan técnico de radiodifusión sonora de frecuencia modulada para las **emisoras privadas de carácter asociativo, comunitarias o culturales** que, además en algún caso ya existen y son anteriores a las últimas distribuciones de frecuencias que se dieron con una finalidad comercial?*

Si existen, ¿se les daría potencia y condiciones equiparables a estas emisoras privadas de carácter no lucrativo a las de finalidad lucrativa?

Y el Gobierno respondió¹⁶:

*No existe ninguna previsión específica para emisoras privadas de carácter asociativo, comunitarias o culturales. En todo caso, si las **características técnicas** de estas emisoras fuesen equiparables a las denominadas “comerciales” deberían incluirse, desde el punto de vista del Plan radioeléctrico, dentro de la **gestión indirecta**. Y serían las*

¹⁵ Boletín Oficial de las Cortes Generales (1998): Preguntas para respuesta escrita (184/014332). Congreso de los Diputados, VI Legislatura, número 244, serie D, del 18 de febrero de 1998, pp. 59. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L6/CONG/BOCG/D/D_244.PDF [Recuperado el 19 de noviembre de 2013].

¹⁶ Boletín Oficial de las Cortes Generales (1998): Respuestas para pregunta escrita (184/014332). Congreso de los Diputados, VI Legislatura, número 261, serie D, del 2 de abril de 1998, pp. 345. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L6/CONG/BOCG/D/D_261.PDF [Recuperado el 19 de noviembre de 2013].

Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, quienes, en el proceso de concurso, deberían reservar alguna de esas frecuencias para el tipo de emisoras mencionado.

b) El 27 de marzo de 2007 la diputada Isaura Navarro Casillas, del Grupo Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, preguntó lo siguiente al Gobierno (entonces PSOE)¹⁷:

En septiembre del año pasado se aprobó el Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. Dicho plan transfiere a las Comunidades Autónomas 866 frecuencias de gestión indirecta para que éstas las adjudiquen. Pero al comprobar el resultado de anteriores adjudicaciones es fácil observar que la práctica totalidad de las 1.038 frecuencias de radio en FM existentes son emisoras comerciales, existiendo muy contados casos de emisoras que no realizan explotación comercial.

*Esta situación contrasta con la gran demanda existente de muchas entidades sin ánimo de lucro que promueven emisoras comunitarias y asociativas. Estas entidades llevan bastantes años solicitando concesiones de frecuencias y, por lo general, **las Comunidades Autónomas responden que no pueden destinarles concesiones** ya que no están recogidas en la legislación estatal ni en los Planes Técnicos, y que están esperando un paquete de frecuencias específico para estas emisoras. Una situación que contrasta con el resto de Europa donde nos encontramos con que todas las grandes ciudades cuentan con*

¹⁷ Boletín Oficial de las Cortes Generales (2007): Preguntas para respuesta escrita (184/115134). Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, número 531, serie D, del 27 de marzo de 2007, pp. 56. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_531.PDF [Recuperado el 19 de noviembre de 2013].

emisoras comunitarias con su correspondiente título habilitante y con cobertura en toda la ciudad.

La radiodifusión está declarada como un servicio público esencial y llama la atención que esta declaración no haya conllevado la promoción de servicios de radiodifusión gestionados por entidades ciudadanas. El artículo 26.3 de la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones establece que los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia podrán ser explotadas por gestión indirecta mediante concesión administrativa a través de personas físicas o jurídicas. Por tanto, podemos interpretar que esa explotación puede ser tanto lucrativa como no lucrativa y que la concesión puede ser otorgada tanto a una empresa como a una entidad sin ánimo de lucro.

¿Piensa el Gobierno que las Comunidades Autónomas podrían destinar parte de las frecuencias de gestión indirecta que recoge el Plan Técnico a entidades sin fines de lucro y así dar respuesta a la demanda de emisoras comunitarias y asociativas?

Y el Gobierno respondió¹⁸:

*En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala que el artículo 26 de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, se limita a indicar que las concesiones para la **Gestión indirecta del servicio público de radiodifusión sonora**, podrán ser atribuidas a personas físicas o jurídicas, **sin establecer ningún***

¹⁸ Boletín Oficial de las Cortes Generales (2007): Preguntas para respuesta escrita (184/115134). Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, número 553, serie D, del 17 de mayo de 2007, pp. 56. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_553.PDF [Recuperado el 19 de noviembre de 2013].

tipo de restricción en relación con el carácter lucrativo o no de las personas jurídicas.

*Más aún, el apartado 1 de la Disposición adicional sexta de la misma Ley, que establece los requisitos que deben cumplir los titulares de las citadas concesiones, en su letra c) prevé expresamente el caso de que la concesión recaiga sobre entidad sin fines de lucro, al establecer lo siguiente “**Si se trata de entidades sin ánimo de lucro**, los titulares de sus órganos directivos y tutelares, deberán ostentar la nacionalidad española y estar domiciliados en España”.*

*En consecuencia, la normativa básica estatal no sólo no prohíbe que las Comunidades Autónomas otorguen una parte de las concesiones de radiodifusión sonora a entidades sin fines de lucro, sino que, expresamente, **ha previsto este supuesto**.*

*Ahora bien, la normativa básica estatal se limita a permitir, pero no obliga a las Comunidades Autónomas a que hagan uso de esta posibilidad, de forma que **cada una de ellas tiene la competencia** para determinar hasta qué punto quiere impulsar estas formas de radiodifusión de carácter comunitario y asociativas.*

c) El 8 de febrero de 2012, la diputada Ascensión de las Heras Lareda, del Grupo Izquierda Plural, realizó la siguiente pregunta al Gobierno (entonces PP)¹⁹:

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, establece que la Administración General del Estado debe garantizar la disponibilidad del dominio público radioeléctrico

¹⁹ Boletín Oficial de las Cortes Generales (2012). Preguntas para respuesta escrita (184/000475). Congreso de los Diputados, X Legislatura, número 32, serie D, del 8 de febrero de 2012, pp. 90. disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_032.PDF [Recuperado el 20 de noviembre de 2013].

necesario para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ninguna reserva de espectro para estos servicios.

¿Qué comunidades autónomas se han dirigido a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para solicitar la planificación de frecuencias para servicios de comunicación comunitarios?

¿Cuál ha sido la respuesta a las solicitudes realizadas por las comunidades autónomas?

Y el Gobierno respondió²⁰:

*Según consta en los archivos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y al margen de diversos escritos de distintos órganos de Comunidades Autónomas que dan traslado de diferentes peticiones, presentadas por entidades y organizaciones, en las que solicitan la planificación de frecuencias para servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, o en los que se solicita información sobre el estado de tramitación de las normas reglamentarias necesarias para la efectiva puesta en aplicación y prestación de estos servicios, **las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha**, han presentado formalmente escritos en los que solicitan la planificación de frecuencias para servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.*

²⁰ Boletín Oficial de las Cortes Generales (2012). Respuestas para pregunta escrita (184/000475). Congreso de los Diputados, X Legislatura, número 76, serie D, del 17 de abril de 2012, pp. 42. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_076.PDF [Recuperado el 20 de noviembre de 2013].

Una de las novedades de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual tal como menciona expresamente su exposición de motivos, es el reconocimiento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial.

De esta forma, el artículo 32 y la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, establecen el régimen jurídico primordial de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

Lo dispuesto en dichos preceptos requiere el desarrollo reglamentario en el que se establezcan las condiciones básicas para la prestación de estos servicios, el procedimiento para la adjudicación de las licencias y las condiciones técnicas para su prestación.

Una vez que se aprueben los reglamentos correspondientes, las Comunidades Autónomas podrán presentar, en las condiciones reglamentarias que se establezcan, la solicitud de habilitación de frecuencias para servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, cuyas licencias quieran otorgar.

d) El 25 de abril de 2012, el diputado Chesús Yuste Cabello, de la Chunta Aragonesa (Grupo Izquierda Plural), realizó la siguiente pregunta al Gobierno (entonces PP)²¹:

¿Cuántos servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro existentes han optado hasta la fecha a licencias o

²¹ Boletín Oficial de las Cortes Generales (2012). Preguntas para respuesta escrita (184/004557). Congreso de los Diputados, X Legislatura, número 82, serie D, del 25 de abril de 2012, pp. 98. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_082.PDF [Recuperado el 20 de noviembre de 2013].

autorizaciones, en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad, según lo contemplado en la Disposición transitoria decimocuarta de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual?

*¿Por qué los servicios de comunicación audiovisual en su modalidad radiofónica, definidos en el artículo 2, **encuentran dificultades** para acogerse a lo previsto en la Disposición transitoria decimocuarta de la misma Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual?*

*¿Tiene previsto el Gobierno **adoptar alguna medida** para que estos servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro existentes en su modalidad radiofónica puedan acogerse a lo contemplado en la mencionada Disposición transitoria?*

Y el Gobierno respondió²²:

La Disposición transitoria decimocuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, bajo la rúbrica de “Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes” señala que “los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad, señalando en su apartado segundo que “tanto el procedimiento de concesión de la

²² Boletín Oficial de las Cortes Generales (2012). Preguntas para respuesta escrita (184/000475). Congreso de los Diputados, X Legislatura, número 139, serie D, del 7 de agosto de 2012, pp. 355. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-139.PDF [Recuperado el 20 de noviembre de 2013].

licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente”.

*Dado que hasta el momento no se ha llevado a cabo la planificación del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios, ni se han aprobado las mencionadas normas reglamentarias, **ningún prestador de esta modalidad de servicios ha podido acogerse a lo establecido** en la Disposición transitoria decimocuarta.*

Además, la mencionada disposición transitoria decimocuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, reconoce un régimen transitorio para los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento al amparo de la disposición adicional decimoctava de la ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI). Esta disposición de la LISI regula la televisión de proximidad sin ánimo de lucro.

*No obstante, al respecto, cabe recordar **que sigue siendo de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 964/2006**, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, y en la normativa autonómica que regula el otorgamiento de las correspondientes licencias para la prestación de dicho servicio.*

*Aunque dicha normativa no prevé una reserva específica de frecuencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, **en ningún caso impide** que las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro puedan presentarse a las convocatorias autonómicas para la adjudicación de licencias.*

Por último, en relación a las cuestiones planteadas, ha de señalarse que el Gobierno aplicará siempre el régimen jurídico que cada momento esté vigente.

Conviene ilustrar este cambio de opiniones en un cuadro para una mejor situación del lector:

Año	Persona que hace la pregunta	Partido político al que se adscribe	Gobierno que responde	Respuesta
1998	Felipe Alcaraz Massats	Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida	PP	Las comunidades autónomas tienen competencias suficientes para reservar, si lo desean, frecuencias para medios sin ánimo de lucro.
2007	Isaura Navarro Casillas	Grupo Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds	PSOE	Las comunidades autónomas tienen competencias suficientes para reservar, si lo desean, frecuencias para medios sin ánimo de lucro.
2012	Ascensión de las Heras Lareda	Grupo Izquierda Plural	PP	Cuando esté aprobado el reglamento específico sobre medios sin ánimo de lucro, las comunidades autónomas podrán solicitar al Gobierno central la habilitación de frecuencias para las licencias que quieran otorgar a medios sin ánimo de lucro.
2012	Chesús Yuste	Chunta Aragonesa (Grupo Izquierda	PP	Le da la vuelta al argumento y dice que las entidades sin ánimo de lucro

	Cabello	Plural)		no tienen ningún impedimento para presentarse a los diferentes concursos de licencias (en desigualdad de oportunidades como veremos al final de este capítulo).
--	---------	---------	--	---

Tabla 2.2. Licencias: cuestión de Estado vs. autonomías (elaboración propia).

Como podemos observar, hay una permanente tensión entre la administración estatal y regional (aunque no sólo sucede en los aspectos de índole audiovisual) y también existe un desorden legislativo al respecto (como veremos más adelante). Esto provoca que en la realidad, en el campo terrenal, exista una ambigüedad respecto de la existencia de medios comunitarios que utilizan el espacio radioeléctrico para emitir, puesto que no hay un reconocimiento expreso de su idiosincrasia (reglamentos específicos, bien autonómicos, bien estatales) ni reserva de frecuencias legales en los planes técnicos para este tipo de proyectos. Pero tampoco existe una prohibición real de su actividad ni cierres continuados de las emisoras como se produjeron en los años 70 y 80 (aunque alguno sí se produce, pero lo podríamos calificar de hechos aislados). Por otro lado, la mayor parte de las comunidades autónomas recogen en su legislación la existencia de medios sin ánimo de lucro pero nunca se les conceden licencias.

Nos encontramos, por tanto, frente a una negación *de facto* por parte de las autoridades democráticas a que la ciudadanía se embarque en proyectos de comunicación del Tercer Sector de la Comunicación y ejerza su derecho humano a la información como emisores y no sólo como receptores.

2.3. LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE MEDIOS COMUNITARIOS PREVIA A LA LEY DE 2010 (1977-2009).

2.3.1. Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de 1978.

Este Real Decreto 2648/1978, de 27 de octubre, promulgado estando Unión de Centro Democrático (UCD) en el poder, pretendía acomodar técnicamente el servicio de radiodifusión relacionado con las ondas largas y medias, haciendo diferenciación únicamente entre “servicio público de radiodifusión” y “empresas privadas”. Referido a la emisión en FM, se limita a promocionar que ha de asegurarse el mayor aprovechamiento posible de las calidad y posibilidades técnicas de este tipo de emisoras, pero no se extiende mucho más allá de esta cuestión.

Esta normativa está parcialmente derogada por el Real Decreto 765/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el *Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Medias (hectométricas)*.

2.3.2. Plan Técnico Transitorio del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de 1979.

Este Real Decreto 1433/1979, de 8 de junio, promulgado estando UCD en el poder, establecía en su artículo 7.1. que

El Gobierno, a propuesta de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión y previo informe técnico favorable de la Junta Nacional de Telecomunicaciones, podrá otorgar concesiones de emisoras educativas y culturales en favor de las instituciones o entidades públicas o privadas legalmente constituidas que, sin fines lucrativos,

ostenten la nacionalidad española y tengan su domicilio social en España, siempre que por memoria, presupuesto asignado y proyecto técnico que acompañen a la solicitud, en el que deben precisarse el área geográfica que se pretende cubrir, se pongan de manifiesto los altos fines educativos y culturales atribuidos a esta clase de emisoras radiofónicas. Estas emisoras institucionales, de carácter educativo y cultural, sólo podrán tener ámbito local.

A pesar de que los medios comunitarios acababan de nacer en el Estado español y, por lo tanto, podríamos aventurar que la clase política no tenía un estricto conocimiento de su existencia, fines y estructura, sí que esta redacción responde a un espíritu europeo que ya se estaba plasmando en países como Francia (Meda, M. 2010). Esta ley dividía a las radios en comerciales, institucionales y educativas / culturales, y conforme al Boletín Oficial del Estado ha dejado de estar vigente.

2.3.3. Estatuto de la radio y la televisión española de 1980.

Esta ley 4/1980, de 10 de enero, promulgada estando UCD en el poder, estaba destinada únicamente a los medios de comunicación audiovisuales públicos, aquellos cuya titularidad correspondía al Estado. Según el propio preámbulo de esta norma, se decía que:

En la elaboración del presente Estatuto se ha partido de la Constitución, de la experiencia de otros países con sistemas democráticos de la misma orientación y de la propia realidad de cuya regulación se trata.

En principio, sirvió para acomodar el ente público a la nueva Constitución de 1979, democratizándola y auspiciando una implantación territorial de Radio Nacional de España y

Televisión Española “acorde pero insuficiente” con el Estado autonómico (Vidal, A., 2013. p. 396).

Esta norma está derogada por la ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, que supuso la refundación de la televisión estatal, así como por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

2.3.4. Primer reparto de frecuencias de FM en la democracia (1981 – 1982).

Tras el primer reparto del dial en democracia acorde a la legislación que hemos descrito, existían un total de 389 concesiones (Sáez, Ch. y García, J., 2011) y, además, estuvo envuelto en numerosas polémicas en la prensa de la época²³. Tanto es así que hasta que no acudimos al año 1987, al Boletín Oficial del Estado con fecha de 10 de octubre, no podemos encontrar la lista pública con la información completa de las concesiones existentes.

De estas 389 licencias legales, sólo 19 correspondían a entidades que no fueran empresas, pero en este caso no serían las definidas como medios comunitarios en base a las directrices internacionales. Dichas entidades fueron la Asociación Radio ECCA (emisora para la educación de personas adultas, cinco frecuencias concedidas en Antequera, Villacarrilo, Pontevedra, Tenerife y Puerto del Rosario), para asociaciones de prensa (de Pamplona, Santander, Oviedo y Madrid), para ayuntamientos (Amposta, Ubrique, Lebrija, Ripoll, San Feliú de Llobregat, Cervera, Pozoblanco y Rubí) para la Universidad Politécnica de Madrid, para la Fundación Ortega y Gasset (Toledo), y para un club excursionista de Girona²⁴. Como

²³ http://elpais.com/diario/1982/12/08/radiotv/408150002_850215.html

²⁴ Boletín Oficial del Estado, “Resolución de 21 de julio de 1987, de la Dirección General de las Telecomunicaciones, por la que se establece el plan de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia que funcionan en la banda de frecuencias de 87,5 MHz a 108 MHz”, número 243, 10 de octubre de 1987, pp. 30484. Disponible en <http://www.boe.es/boe/dias/1987/10/10/pdfs/A30484-30490.pdf> [Recuperado el 22 de noviembre de 2013]

curiosidad, las asociaciones de prensa de Madrid, Santander y Pamplona cedieron la explotación de sus frecuencias a empresas (Cadena Ser). (Sáez, Ch. y García, J., 2011)

2.3.5. Ley Estatal de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987.

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, promulgada estando el PSOE en el poder, marcaba el inicio de un marco jurídico básico en democracia que regulara la prestación de las diversas modalidades de telecomunicaciones y que definiera las responsabilidades de la administración pública y de los sectores público y privado respecto de este ámbito de la comunicación masiva. El encargado de regular el espectro radioeléctrico entonces era el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones.

Los medios comunitarios en esta fecha ya llevaban una década funcionando en el Estado. Sin embargo, sorprende el carácter utilitarista que se le sigue dando en esta ley a las telecomunicaciones. Afirma que sentar las bases del futuro en este campo hace que sean

Una pieza fundamental del desarrollo tecnológico y económico de nuestro país. Para ello se configura la prestación de los servicios de telecomunicación en un marco abierto a la libre concurrencia y a la incorporación de nuevos servicios. (BOE del 19 de diciembre de 1987, p. 37.409).

¿Dónde queda el carácter social, informador y formador de la comunicación?

Dado que, tal y como hemos mostrado en un cuadro más arriba, el Estado es poseedor y encargado de gestionar el espectro radioeléctrico, se estableció el llamado “título habilitante” que permitía la prestación legal de servicios de comunicación utilizando las ondas. Se regía por las siguientes reglas:

-
- El plazo máximo de duración de la concesión era de treinta años.
 - Intransferibilidad de las concesiones y prohibición de subcontratación de las prestaciones incluidas en las mismas (con las excepciones que reglamentariamente se determinaran llegado el caso).
 - Satisfacción de un canon anual para la Administración como contraprestación a la cesión de un bien público como el espacio radioeléctrico. Se establecía en función del porcentaje de los ingresos brutos de explotación y en ningún caso excedía del 1 por 1.000 de dichos ingresos.

Esta ley es la norma que marcó el inicio de las reivindicaciones más fuertes por parte de los medios libres y comunitarios para acceder a una parte del espacio radioeléctrico y poder obtener títulos habilitantes. Como apuntamos más arriba, se instauraba un marco abierto a la libre concurrencia de entidades que quisieran prestar servicios de comunicación. En su articulado se indicaba que se podría realizar una “gestión indirecta mediante concesión administrativa a través de personas físicas o jurídicas”. Era esta la palabra mágica (“personas jurídicas”) que hacía que, teóricamente, las entidades sin ánimo de lucro no quedasen excluidas de los concursos públicos de licencias que más tarde deberían llevar a cabo las comunidades autónomas. Sin embargo, en esta ley no quedaba reconocida la existencia explícita de emisoras sin ánimo de lucro o la reserva de espectro para las mismas. En un principio, durante la tramitación de esta ley, los grupos de senadores nacionalistas vascos y Coalición Popular promovieron enmiendas eliminando la mención a las emisoras culturales para que sólo se hiciera referencia a la explotación comercial. Finalmente se impuso la enmienda del Grupo Parlamentario PSOE que distinguía entre gestión directa y gestión indirecta sin distinguir el tipo de explotación que se hiciera de la emisora (Sáez, Ch. y García, J., 2011).

A pesar de que la LOT hablaba y era nombrada como de “telecomunicaciones”, lo cierto es que la televisión no estaba incluida en este ordenamiento general, avanzando hacia la fragmentación normativa que ha caracterizado el sector (Saez, Ch. y García, J., 2011; Meda,

M., 2010, Moragas, M. y Fernández, I., 2005). A pesar de todo, supuso el fin del monopolio público de televisión a nivel estatal.

Esta ley fue derogada en muchos de sus aspectos por la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, y finalmente lo fue del todo con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

2.3.6. El Plan Técnico de 1989.

El Real Decreto 169/1987, de 10 de febrero, por el que se aprueba el *Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia*, promulgado estando el PSOE en el poder, muestra 349 frecuencias libres para ser otorgadas a emisoras de gestión indirecta por parte de las autonomías. Según Arboledas (2009), este reparto también fue polémico llegando incluso a detectarse como un posible caso de financiación ilegal del PSOE, dejando de lado a emisoras ya existentes y beneficiando a grupos empresariales afines al partido en el poder.

Tras este Plan Técnico, sólo una comunidad autónoma, la valenciana, reservó tres concesiones a emisoras culturales en las localidades de Ibi (Alicante), Segorbe (Castellón) y Mislata (Valencia).²⁵ Dichas licencias fueron otorgadas²⁶ a la asociación Centro de Estudios y Comunicaciones Alternativas (Mislata), que actualmente sigue gestionando la emisora libre y

²⁵ Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (1989). “Resolución de 14 de marzo de 1989, del Subsecretario del Director del Gabinete de Presidencia de la Generalitat Valenciana por la que se convoca concurso público para la concesión de 28 emisoras en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Valenciana”, número 1029, de 20 de marzo de 1989, pp. 1797. Disponible en http://www.docv.gva.es/datos/1989/03/20/pdf/1989_813441.pdf [Recuperado el 22 de noviembre de 2013].

²⁶ Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (1989). “Acuerdo de 28 de julio de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se adjudican provisionalmente las concesiones para la instalación y funcionamiento de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia”, número 1119, de 2 de agosto de 1989, pp. 5477.

comunitaria Ràdio Klara, a la Fundación Eccla (Ibi) y a la Radiodifusión del Alto Palanca S.L. (Segorbe). Radio ECCA ya hemos comentado en el anterior reparto que es una emisora más bien dedicada a la formación (daban cursos en el pasado a través de cintas de cassette, y ahora utilizan el formato de radio *online*) por lo que no es estrictamente comunitaria y, en el caso de Segorbe, se trata de una empresa de Sociedad Limitada, con lo que parece que el concurso reservado a emisoras culturales no impedía su solicitud por parte de este tipo de pequeñas y medianas empresas.

Sin hacer distinción entre emisoras con o sin ánimo de lucro, la Comunidad de Madrid también otorgó una licencia a la Federación de Radios Libres de la Comunidad de Madrid de Chinchón una licencia de emisión,²⁷ aunque esta entidad le cedió o vendió la licencia a la empresa de Ruiz Mateos, Nueva RUMASA²⁸, que la ostenta en la actualidad al menos hasta el año 2020²⁹. Según testimonios recogidos y realizados a personas que estuvieron vinculadas a la Federación, como no se podían vender las licencias legalmente es probable que la empresa RUMASA se hiciera con el control de esta entidad sin ánimo de lucro, las personas asociadas se dieran de baja y el grupo empresarial se quedase así la licencia, de tal forma que la Federación de Radios Libres de la Comunidad de Madrid de Chinchón sigue existiendo en la actualidad en los papeles administrativos pero no realiza la actividad asociativa sin ánimo de lucro para la que fue creada. De esa crisis, en el año 1995, nació la Unión de Radios Libres

²⁷ Boletín Oficial del Estado (1989). “Resolución de 31 de julio de 1989, de la Subsecretaría por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de julio de 1989 por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de concesiones de servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia”, número 182, de 1 de agosto de 1989, pp. 24774. Disponible en <http://www.boe.es/boe/dias/1989/08/01/pdfs/A24774-24777.pdf> [Recuperado el 22 de noviembre de 2013].

²⁸ La licencia concedida a la Federación ocupa el dial 106.6 FM de Madrid (BOE, 1989). En un artículo de ABC del 8 de agosto de 1995 se anunciaba que Ruiz-Mateos había comprado la emisora Radio Libertad de Chinchón y anunciaba su puesta en marcha en los próximos días. Dicha radio comenzó a emitir en el 106.6 FM de Madrid.

²⁹ Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (2010). “Acuerdo del 18 de marzo de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la renovación de concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia”, número 107, de 6 de mayo de 2010, pp. 118. Disponible en http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/757/5/BOCM-20100506-13.PDF [Recuperado el 25 de noviembre de 2013].

y Comunitarias de Madrid (URCM) que actualmente sí que representa a todas las radios libres y comunitarias de la región federadas en ella, realizando todo tipo de gestiones legales y proyectos comunicativos alternativos, incluyendo un informativo social diario (*Más Voces*, que llega a alcanzar picos de audiencia de 40.000 visitantes únicos al día).

2.3.7. Ley de organización y control de las emisoras municipales de 1991.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de *organización y control de las emisoras municipales de radiodifusión sonora*, promulgado estando el PSOE en el poder, permitía a los ayuntamientos la creación y mantenimiento de una emisora pública en FM para el ámbito municipal mediante una concesión estatal o autonómica. No existía una especificación para facilitar la prestación de un servicio de radiodifusión por parte de emisoras de titularidad municipal, por lo que se estableció el marco jurídico propicio para ello, a fin de que los ayuntamientos fueran los gestores de dicho servicio.

Esta norma fue derogada por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Igual que la legislación referida al Estatuto de Radio y Televisión Pública, esta no trata un asunto general del sistema de telecomunicaciones y/o audiovisual ni específica del sector de comunicación comunitario pero consideramos imprescindible nombrarla en nuestro análisis para ejemplificar que mientras que sí que ha habido una preocupación estatal por regular el sistema de medios públicos y comerciales, no ha existido la voluntad de hacer lo propio con el Tercer Sector de la Comunicación.

2.3.8. Plan Técnico Nacional de radiodifusión sonora en ondas medias de 1993.

El Real Decreto 765/1993, de 21 de mayo, *por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Medias (hectométricas)*, promulgada estando el PSOE en el poder, pretendía revisar y adaptar el servicio público de radiodifusión en ondas medias de acuerdo al Plan Técnico general que se aprobó en 1978 y que contemplaba ondas largas, medias, cortas y de frecuencia modulada.

Este decreto distinguía, como ya se había consolidado en la legislación audiovisual española, entre servicios de gestión directa (realizados por las administraciones pública) y servicios de gestión indirecta (realizados por personas físicas o jurídicas privadas, sin distinción entre entidades con ánimo de lucro o sin él).

2.3.9. Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres de 1995.

La Ley 41/1995, de 22 de diciembre, *de televisión local por ondas terrestres*, promulgada estando el PSOE en el poder, pretendía regular la modalidad de televisión por ondas en el ámbito territorial de las capitales de provincia y autonómicas, municipios de más de 100.000 habitantes y también municipios de menor población.

Esta ley establecía explícitamente en su artículo 13 que

Podrán presentarse al concurso las personas naturales de nacionalidad española o de los demás Estados miembros de la Unión Europea, así como las sociedades españolas y las entidades sin ánimo de lucro de la misma nacionalidad. Las entidades sin ánimo de lucro que concurran para la gestión indirecta del servicio serán valoradas positivamente en la forma que establezcan las comunidades autónomas”.

Como vemos, aquí es donde cobran importancia las autonomías puesto que son ellas y sus gobiernos quienes, en última instancia, reparten las licencias. A pesar de lo propuesto en el marco de la ley general, en las concesiones de licencias del espacio radioeléctrico para televisión (ya sustituidas por la Televisión Digital Terrestre) no figuró nunca ninguna destinada a las televisiones comunitarias. Ni siquiera se tuvo en cuenta en la práctica para legalizar la emisión de las televisiones comunitarias ya existentes las posibilidades que otorgaba la Disposición Transitoria Única de la citada ley, que versaba de la siguiente manera:

Las emisoras de televisión local, que estén emitiendo por ondas terrestres con anterioridad al 1 de enero de 1995, deberán obtener, para continuar con su actividad, la correspondiente concesión con arreglo a esta Ley.

Esta norma quedó derogada por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

2.3.10. Plan Técnico de Radiodifusión en FM de 1997.

El Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre, promulgado estando el PP en el poder, aprobó un incremento de frecuencias para gestión indirecta de emisoras, dentro del *Plan Técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*.

En este punto las comunidades autónomas contaban con competencias para otorgar licencias de FM. Aunque el anteproyecto de este Plan Técnico (1996) recogía la existencia de emisoras culturales, educativas y sin ánimo de lucro (aunque con una cobertura muy limitada a una potencia de 5 y 10 vatios), este artículo desapareció de la redacción final (Sáez, Ch. y García, J., 2011). Como consecuencia, todas las licencias de FM finalmente se destinaron a emisoras

comerciales y no se planificó por parte del Estado ningún paquete de frecuencias que las autonomías pudieran destinar a la categoría de emisoras culturales y otras de carácter no lucrativo, aunque estando las competencias transferidas nada exige que sea el Estado quién tenga que preparar dicho paquete de frecuencias, son las autonomía quienes (repetimos) en última instancia, eligen a los proyectos audiovisuales destinatarios finales de las mismas.

Esta norma fue derogada por el Real Decreto 964/2066, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el *Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*.

2.3.11. Ley General de Telecomunicaciones de 2003.

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, *General de Telecomunicaciones*, promulgada estando el PP en el poder, trata a las telecomunicaciones como “servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia”. Esta normativa pretendía consolidar un marco “armonizado de libre competencia en las telecomunicaciones” acorde con las disposiciones de la Unión Europea que se habían aprobado en los últimos años y que el Estado español debía incorporar obligatoriamente a su regulación del campo. No existen menciones explícitas a medios de comunicación culturales, educativos o sin ánimo de lucro.

2.3.12. Plan Técnico Nacional de Radiodifusión en FM de 2006.

El Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el *Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*, promulgado estando el PSOE en el poder, añadía 866 nuevas frecuencias para su reparto que serían distribuidas, como hemos apuntado en varias ocasiones, a las comunidades autónomas para que estas las destinasen a la gestión indirecta por personas físicas o jurídicas (radios privadas

con o sin ánimo de lucro, en la teoría, pero comerciales en la práctica, es decir, teniendo en cuenta la experiencia de los anteriores repartos de licencias).

En este último reparto, sólo una autonomía (Navarra) ha otorgado tres licencias de emisión a dos radios libres (Xorroxin Irratia y PausuMedia) en su concurso de 2012 (seis años después de la promulgación de este plan técnico)³⁰ y tuvieron que competir en un mismo concurso con emisoras privadas comerciales. Cabría prestar atención a aquellas comunidades autónomas que aún tienen licencias para repartir, aunque el resto, como hemos dicho exceptuando Navarra, no han otorgado licencias a emisoras de proyectos sin ánimo de lucro.

2.3.12. Ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal de 2006.

La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, promulgada estando el PSOE en el poder, pretendía la actualización de la normativa vigente en la radio y la televisión pública, nombrando un nuevo Estatuto y renovando aspectos de los órganos de control. También se intentó confirmar el carácter de servicio público y de “rentabilidad social que debe inspirar su actividad [...] atendiendo a fines sociales, educativos e integradores”. Igualmente establecía una gestión económica basada en una financiación mixta, aunque finalmente en 2010 la cadena dejó de emitir publicidad comercial debido a las presiones de las emisoras privadas, dado que con el nacimiento de la TDT se abrían nuevos canales que debían repartirse exactamente el mismo mercado de la publicidad.

³⁰ Boletín Oficial de Navarra (2013). “Orden Foral 14/2013, de 22 de febrero, del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de 44 licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Foral de Navarra”, número 42, de 1 de marzo de 2013. Disponible en http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/42/Anuncio-6/ [Recuperado el 25 de noviembre de 2013].

2.3.13. Ley de Impulso de la Sociedad de la Información de 2007.

La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de *Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información*, promulgada estando el PSOE en el poder, se enmarca en un conjunto de medidas (llamado el Plan 2006-2010) que pretendía desarrollar la sociedad de la información y alcanzar una convergencia con Europa y las comunidades autónomas. Literalmente,

Prevé entre sus medidas la adopción de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y para garantizar los derechos de los ciudadanos en la nueva sociedad de la información. (BOE de 29 de diciembre de 2007, p. 1).

Esta ley tiene una Disposición Adicional Decimoctava que trata de la *Televisión de proximidad sin ánimo de lucro* la cual ha sido determinante para que las televisiones comunitarias tuvieran alguna posibilidad de seguir existiendo tras el apagón analógico. Explicita que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Planificará frecuencias para la gestión indirecta del servicio de televisión local de proximidad por parte de entidades sin ánimo de lucro [...]. Tienen consideración de servicios de difusión de televisión de proximidad aquellos sin finalidad comercial que, utilizando las frecuencias que en razón de su uso por servicios próximos no estén disponibles para servicios de difusión comercialmente viables, están dirigidos a comunidades en razón de un interés cultural, educativo, étnico y social.

Asimismo, contempla el uso compartido de múltiplex asignado para la prestación del servicio (el canal que usa la Televisión Digital Terrestre), con lo que las televisiones comunitarias

continúan teniendo opciones de supervivencia tras el encendido digital que se produjo el 1 de abril de 2010, al menos en la teoría, porque esta ley tampoco le ha otorgado en la práctica frecuencias legales a las televisiones comunitarias existentes en el Estado.

2.3.14. Tabla-resumen de la legislación estatal previa a la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Ley ³¹	Fecha	Gobierno	Mención a los medios comunitarios
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora (V)	1978	UCD	No habla de las emisoras culturales y comunitarias, sólo hace distinción entre “servicio público de radiodifusión” y “empresas privadas”.
Plan técnico transitorio del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. (NV)	1979	UCD	<i>Art. 7. El Gobierno, a propuesta de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión y previo informe técnico favorable de la Junta Nacional de Telecomunicaciones, podrá otorgar concesiones de emisoras educativas y culturales a favor de las instituciones o entidades públicas o privadas legalmente constituidas que, sin fines lucrativos [...].</i>
Estatuto de Radio y Televisión Española (D)	1980	UCD	No menciona a otro tipo de medios distintos de los de gestión directa o pública.

³¹ D: Derogada. V: Vigente. NV: No vigente.

Primer reparto de frecuencias de FM en la democracia	1981 1982	UCD	389 concesiones, de las cuales 19 correspondieron a entidades sin ánimo de lucro (ninguna a medios comunitarios de acuerdo con las definiciones internacionales al respecto).
L.O.T. (D)	1987	PSOE	Se permite una <i>gestión indirecta mediante concesión administrativa a personas físicas o jurídicas</i> . Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas legalmente constituidas, aunque no se nombre directamente la existencia de medios comunitarios.
Plan Técnico (V)	1989	PSOE	Planifica 349 frecuencias para ser otorgadas a emisoras de gestión indirecta por parte de las autonomías. No hace distinción en cuanto a medios comunitarios y sólo dos autonomías otorgaron licencias a este tipo de proyectos: Madrid (1) y Valencia (1, puesto que como hemos explicado más arriba las otras dos no eran estrictamente emisoras comunitarias).
Ley de organización y control de las emisoras municipales (D)	1991	PSOE	Es una ley referida sólo a las emisoras públicas en FM de los ayuntamientos.
Plan Técnico Nacional de radiodifusión sonora en ondas medias (V)	1993	PSOE	No existe una mención específica para medios comunitarios.
Ley de televisión local por ondas	1995	PSOE	Art. 13. <i>Las entidades sin ánimo de lucro que concurran para la gestión indirecta del servicio</i>

terrestres. (D)			<i>serán valoradas positivamente en la forma que establezcan las comunidades autónomas.</i> En la práctica no figuró nunca una licencia destinada a televisiones comunitarias.
Plan técnico nacional de radiodifusión en FM. (D)	1997	PP	El Plan como tal no recoge nada referido a las emisoras culturales o comunitarias, aunque el anteproyecto de 1996 sí que recogía la existencia de emisoras culturales, educativas y sin ánimo de lucro, aunque con una cobertura muy limitada a una potencia de 5 y 10 vatios.
Ley General de Telecomunicaciones. (V)	2003	PP	No menciona a ningún tipo de medio de comunicación cultural, educativo o sin ánimo de lucro.
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión en FM. (V)	2006	PSOE	Añade 866 nuevas frecuencias para su reparto. No reserva específicamente un paquete para emisoras sin ánimo de lucro pero, en la teoría, no hay nada que impida que no se puedan destinar a este tipo de medios. En la práctica, por el momento sólo dos emisoras libres (Xorroxin Irratia y PausuMedia, Navarra) han conseguido legalizar su situación.
Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal (V)	2006	PSOE	Se regulan, nuevamente, los medios públicos dependientes de la propiedad y gestión del Estado.
Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. (V)	2007	PSOE	Disposición Adicional Decimoctava: <i>Televisión de proximidad sin ánimo de lucro. El Ministerio planificará frecuencias para la gestión</i>

			<i>indirecta del servicio de televisión local de proximidad por parte de entidades sin ánimo de lucro [...].</i> Sin embargo, ninguna televisión comunitaria por el momento ha conseguido una licencia explícita de emisión en TDT.
--	--	--	--

Tabla 2.3. Legislación previa a la Ley General de la Comunicación Audiovisual (elaboración propia).

2.4. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE MEDIOS COMUNITARIOS PREVIA A LA LEY DE 2010 (1977-2009).

Como hemos comentado más arriba, las competencias referidas al ámbito de las telecomunicaciones están transferidas a las autonomías. El Ministerio en cuestión (Industria, actualmente) prepara un número de licencias determinado para cada autonomía, pero son estas quienes convocan los concursos y las reparten a las entidades privadas. Por ello, también existen marcos legales territoriales (decretos) que es necesario tener en cuenta para ver el grado de acceso de los sectores sociales al espectro radioeléctrico. A pesar de que estas leyes han recogido, en gran parte, la distinción entre emisoras comerciales, municipales, culturales y otras de carácter no lucrativo, tan sólo una autonomía ha reservado concesiones específicas para emisoras del Tercer Sector de la Comunicación (como ya hemos visto, la Comunidad Valenciana en 1987) y en resto de casos que se han concedido licencias con estos supuestos (Madrid, 1987 y Navarra, 2012) ha sido teniendo que competir en desigualdad de oportunidades con medios comerciales intrínsecamente diferentes tanto en presupuestos como en cuestiones técnicas a los de los proyectos sociales.

2.4.1. El País Vasco y la iniciativa social en medios.

En 1986 el Gobierno vasco emitió su tercer decreto para regular la concesión de licencias para emitir en frecuencia modulada. Ya había promulgado uno en 1981 y otro en 1983, pero estos fueron impugnados por el Estado y las empresas privadas de comunicación ante el Tribunal Constitucional.³² Así, el órgano encargado de Cultura y Turismo promulgó el *Decreto 240/1986, de 11 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión en ondas métricas con frecuencia modulada*. En varios artículos se trata la cuestión de lo que ellos denominaron “emisoras institucionales”:

Artículo 5. Las emisoras en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia no explotadas directamente por la comunidad autónoma a través de las sociedades públicas de radiodifusión integradas en el Ente Público E.I.T.B.³³ se clasificarán en institucionales y comerciales. Se considerarán emisoras institucionales aquellas de propiedad de una institución sin ánimo de lucro y cuya finalidad sea la promoción de la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Artículo 6. El Gobierno, a propuesta del Departamento de Cultura y Turismo, podrá otorgar concesiones de emisoras institucionales en favor de entidades, legalmente constituidas que, sin fines lucrativos, se hallen domiciliados en el ámbito territorial de Euskadi, siempre que la documentación que presenten acredite sus fines lucrativos y culturales.

Las concesiones serán otorgadas por 3 años y podrán ser renovadas, previa petición del concesionario, por sucesivos períodos anuales.

³² Vitoria, J.M (1986). *El Gobierno vasco aprueba un tercer decreto para la concesión de emisoras en FM*. El País. Disponible en http://elpais.com/diario/1986/11/14/sociedad/532306809_850215.html [Recuperado el 3 de diciembre de 2013].

³³ Euskal Irrati Telebista (EiTB) es el primer grupo de comunicación de Euskadi con cinco cadenas de televisión, cinco emisoras de radio y una website, todas ellas dependientes y gestionadas por el sistema público vasco.

En este punto cabe destacar que las concesiones para las emisoras comerciales se concedían directamente por el Gobierno (sin ser propuestas por otro organismo) para un período de 10 años (no de tres). Por otro lado, el horario de emisión para poder optar a una licencia beneficia a estas *emisoras institucionales*, dado que a ellas se les exigía que fuera al menos de 8 horas diarias, mientras que el de las comerciales debía ser mínimo de 12 horas diarias.

Veinte años después, en 2006 y basándose en la normativa estatal del año 1995, se promulgó el *Decreto 190/2006, de 3 de octubre, por el que se regula el servicio de televisión local por ondas terrestres*. Dedicaba un artículo a la *gestión por entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social y compromiso municipal*, con las siguientes premisas:

En las demarcaciones en las que ninguno de sus ayuntamientos haya optado por la fórmula de gestión directa del servicio, tendrán preferencia para obtener la concesión para la gestión indirecta la entidad o entidades de iniciativas social que reúnan, además, los siguientes requisitos:

- a) Carecer de ánimo de lucro.*
- b) Estar directamente vinculadas al área de prestación del servicio de la televisión local.*
- c) Compromiso de poner a disposición de las corporaciones de los municipios planificados de la demarcación la posibilidad de incorporar gratuitamente contenidos de interés municipal. Estos contenidos se ofertarán en horario de máxima audiencia teniendo una duración de, al menos, una hora diaria.*

2.4.2. La Comunidad Valenciana y la desaparición progresiva de los medios comunitarios en los decretos.

En 1989 la Comunidad Valenciana promulgó el *Decreto 40/1989, de 13 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se regula el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*. En el preámbulo decía:

El acceso a la gestión del servicio público de radiodifusión se encuentra abierto tanto a su explotación comercial por personas o entidades de carácter privado, como a su gestión por personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, con fines educativos o culturales, para aquellos proyectos que, sin comercialización de espacios publicitarios radiofónicos, merezcan disponer de un canal de difusión exclusivo por la importancia social de la labor a la que contribuyen.

En este caso, también establecía que tanto *emisoras culturales* como comerciales debían tener un horario mínimo de emisión de ocho horas al día, y les dedicaba un artículo entero, el séptimo:

El Consell de la Generalitat Valenciana, a propuesta de la Presidencia, podrá otorgar concesiones de emisoras en ondas métricas con modulación de frecuencia, culturales y educativas en favor de personas físicas y jurídicas, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Las emisoras no tendrán finalidad lucrativa y sus programas serán siempre educativos y culturales. Los concesionarios sólo podrán aceptar patrocinios para algunos de estos programas si la firma subvencionadora está establecida en la población de la emisora. En ningún caso podrán emitir publicidad.

La utilización del valenciano en la programación será como mínimo de un 50% a excepción de los territorios de predominio lingüístico del castellano, de conformidad con la clasificación realizada en el artículo 36 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, debiendo garantizarse en todo caso lo establecido en el artículo 26 del mencionado texto legal.

El Gobierno Valenciano velará por el fiel cumplimiento de los objetivos trazados por estas emisoras. En el transcurso del último trimestre de cada año, y antes del 15 de diciembre, se presentará en la Dirección General de Medios de Comunicación Social, para que sean aprobados, los presupuestos y el esquema de programas previstos para el ejercicio siguiente. La falta de éstos o el hecho de no presentarlos producirá la caducidad de la concesión.

Una década más tarde, la legislación radiofónica se actualizó con el *Decreto 38/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de inscripción de las mismas en el Registro de Concesionarios*. Mantiene la diferenciación entre emisoras culturales y emisoras comerciales y, para las primeras, no realiza cambios destacables con respecto del anterior decreto.

En 2006 se incluyó la cuestión de la televisión con la *Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual*. En ella, la única mención que aparece a algún tipo de organización sin ánimo de lucro se refiere al Consorcio Audiovisual de la Comunidad Valenciana:

Para la potenciación institucional de las acciones orientadas al desarrollo del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, las administraciones y

entidades públicas interesadas convendrán la constitución del Consorcio Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

En este consorcio podrán participar entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan los fines de interés público concurrentes con los de las administraciones y entidades públicas consorciadas.

No hace ningún tipo de diferenciación entre emisoras tanto radiofónicas como televisivas en materia de concesiones administrativas.

2.4.3. Galicia y otra de las desapariciones de las menciones a los medios comunitarios.

La Comunidad de Galicia publicó su primer decreto sobre radiodifusión en el año 1989. El documento se denominó *Decreto 156/1989, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*. Esta regulación distinguía entre la gestión directa (administraciones públicas) e indirecta (personas físicas o jurídicas), y en su artículo 3 mencionaba a las emisoras comerciales y a las emisoras *educativas y culturales*.

Se consideran emisoras educativas y culturales las que se otorguen por concesión a personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las citadas emisoras no podrán difundir publicidad, excepto la institucional, pudiendo sin embargo admitir patrocinios para determinados programas por parte de entidades de la localidad.

Luego explicita una serie de requisitos administrativos sobre cuál es la documentación que han de presentar los tres tipos de emisora que están citadas en el presente decreto, por un lado las municipales y por otro las comerciales y las educativas / culturales.

Más tarde, en 1999, Galicia publicó una ley más amplia, audiovisual, que se llamó *Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del audiovisual de Galicia*, y este documento no hacía ya ninguna referencia a proyectos audiovisuales sin ánimo de lucro.

2.4.4. Castilla-La Mancha: de triple diferenciación a personas jurídicas.

En 1998, *Castilla-La Mancha*, promulgó el *Decreto 59/1998, de 9 de junio de 1998, por el que se regula la gestión indirecta del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*. Dividía explícitamente las emisoras en tres tipos: comerciales, municipales y de carácter no lucrativo. El artículo 3 decía:

Se considerarán emisoras de carácter no lucrativo aquellas que tienen por objeto la difusión de programas de carácter educativo y cultural.

Las concesiones de emisoras de carácter no lucrativo podrán ser otorgadas a personas o entidades cuya finalidad sea la promoción, sin ánimo de lucro, de la educación, los valores religiosos, la ciencia y la cultura.

Cabe destacar, por un lado, que no se hace mención a la propiedad del medio, sino a su finalidad y, por otro, que es el único decreto que veremos en esta tesis que alude a los valores religiosos, cuyo proselitismo no está permitido en ninguna de las referencias internacionales sobre medios comunitarios en los que se basa la definición actual de los mismos.

Casi una década después, esta autonomía publicó un nuevo decreto, la *Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha*. En esta nueva regulación no existe mención ni diferenciación de emisoras culturales, asociativas, comunitarias... lo único que refiere, en este sentido, es que a los concursos de licencias se podrán presentar “personas

físicas y jurídicas, así como las entidades sin ánimo de lucro de nacionalidad española”. Se elimina, de esta manera, la triple diferenciación que sí hacía el decreto de 1998.

2.4.5. Extremadura y la consideración de emisoras culturales.

Extremadura publicó en 1994 el *Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la inscripción en el Registro de las Empresas concesionarias*. En esta normativa se explicitaba que el acceso a la gestión indirecta del servicio de radiodifusión estaba abierto a su explotación también por personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro con fines educativos o culturales y sin comercialización de espacios publicitarios, que además debían mantener al mínimo ocho horas diarias de emisión. Además, los artículos 17 y 18 estaban dedicados expresamente a las emisoras culturales:

Tendrán la consideración de Emisoras Culturales, a los efectos regulados en el presente Decreto, aquellas cuya programación prioritariamente se componga de emisiones de carácter divulgativo, cultural o educativo. Estas emisoras no perseguirán fines lucrativos y no podrán emitir publicidad comercial, si bien podrán ser patrocinadas en los términos establecidos en la Directiva Comunitaria de 3 de octubre de 1989 y normas complementarias y de aplicación sobre la materia.

La convocatoria para la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter cultural se llevará a cabo mediante Resolución de la Consejería de Industria y Turismo.

Para la concesión de las emisoras culturales y su posterior inscripción en el Registro de Empresas de Radiodifusión será de aplicación, con carácter general, el procedimiento establecido en la Sección Primera de este

Capítulo excepto en la exigencia de la documentación relativa a los requisitos que, como consecuencia del carácter no lucrativo de dichas emisoras, las entidades concesionarias de las mismas no estuvieran obligadas a cumplir por mandato legal.

2.4.6. La Rioja y su distinción de emisoras no lucrativas.

En 1997 la comunidad autónoma de La Rioja publicó su *Decreto 44/1997, de 29 de agosto, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y el Registro de Empresas de Radiodifusión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja*. En su preámbulo enfatizaba la necesidad de regular las emisoras municipales, así como las educativas, culturales y otras de carácter no lucrativo (además de las comerciales). Dedicó su capítulo IV entero a dichas emisoras no lucrativas:

Con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación expresadas por distintos centros de enseñanza, asociaciones socio-culturales, grupos juveniles, y otros colectivos sin ánimo de lucro, para la consecución de fines educativos, culturales o formativos, se contemplan las emisoras de carácter no lucrativo que podrán ser: educativas o de formación, cuyo ámbito de cobertura queda determinado por el propio recinto docente, o culturales, cuyo ámbito de cobertura estará limitado a la vecindad más próxima del transmisor.

Este tipo de emisoras, en ningún caso podrán emitir en cadena ni conectarse a otras emisoras tanto públicas como privadas. No podrán emitir publicidad comercial, si bien podrán ser patrocinadas, para cubrir sólo sus costes de mantenimiento, en los siguientes términos:

- a) El contenido y la programación, en ningún caso, podrán ser influidos por el patrocinador de tal forma que se atente contra la responsabilidad y la independencia editorial de la entidad que preste el servicio público.*
- b) Podrá identificarse al patrocinador en el transcurso de los programas, siempre que ello se haga de forma esporádica y sin perturbar el desarrollo del programa.*
- c) No deberán contener mensajes publicitarios directos y expresos de compra o contratación de productos o servicios del patrocinador o de un tercero, mediante referencias de promoción concretas a dichos productos o servicios.*

El otorgamiento de la concesión corresponderá a la Consejería de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas y Medio Ambiente, siendo preceptiva la previa determinación del valor de la frecuencia y demás características técnicas por parte de la Dirección General de Telecomunicaciones.

2.4.7. Andalucía: plenitud de normativas pero falta de concesión de licencias a medios comunitarios.

En 1982 Andalucía publicó su *Decreto 86/1982, de 27 de agosto, por el que se regula la concesión de Emisoras de Radiodifusión – Institucionales y Privadas- en Ondas Métricas con Frecuencia Modulada*. En él hace distinción entre emisoras comerciales, institucionales y culturales, y aunque menciona en un artículo la idiosincrasia que han de tener estas últimas en el resto del documento sólo se refiere, continuamente, a emisoras comerciales e institucionales:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, podrá otorgar concesiones de emisoras

educativas y culturales de ámbito local en favor de instituciones o entidades públicas o privadas legalmente constituidas. Estas, que no han de tener ninguna finalidad lucrativa, han de tener nacionalidad española y estar domiciliadas en España, especificarán en la Memoria y Proyecto Técnico con el que han de acompañar la solicitud, sus fines educativos y culturales y el área geográfica que pretendan abarcar.

Pocos años más tarde, en 1989, Andalucía volvió a publicar un decreto, esta vez fue el *75/1989, de 4 de abril, por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia* y en él no aparecen las denominaciones de emisoras culturales y sin ánimo de lucro. En cambio, se vuelve a recuperar la denominación más de diez años después con el *Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte de los concesionarios*. Hacía distinción entre tres tipos de emisoras: comerciales, municipales y culturales, siendo estas últimas:

Aquellas que, por estar su programación compuestas esencialmente de emisiones de carácter divulgativo, cultural, educativo, solidario o similar, no persiguen fines lucrativos. En el caso de las emisoras culturales, tanto la duración de la concesión como su renovación, se determinarán de manera específica.

Esta legislación andaluza de 2002 dedicaba una sección entera a las emisoras culturales de carácter no lucrativo, especificando aspectos que podían y no podían hacer (generalmente más estos últimos, veremos en las conclusiones cómo es una constante que cuando se regula a este tipo de medios lo habitual es que sea para prohibirles acciones más que para desarrollar el sector), destacando:

Su ámbito de cobertura deberá limitarse al propio recinto desde el que se transmite, o a su entorno más próximo. Estas emisoras no podrán emitir publicidad comercial, si bien podrán ser patrocinadas, para cubrir tan solo sus costes de funcionamiento con arreglo a la normativa vigente, en los términos siguientes:

- a) El contenido y la programación en ningún caso podrán ser influenciados por el patrocinador, de tal forma que desvirtúen los objetivos o el proyecto social que con dicha emisora se pretende.*
- b) Podrá identificarse al patrocinador en el transcurso de los programas, siempre que ello se haga de forma esporádica y sin perturbar el desarrollo de la programación.*
- c) No deberán contener mensajes publicitarios directos y expresos de compra o contratación de productos o servicios del patrocinador o de un tercero, mediante referencias de promoción concretas a dichos productos o servicios.*

Por último, cabe destacar que:

Podrán solicitar la concesión de emisoras culturales los centros de enseñanza, las asociaciones socio-culturales, juveniles u otros entes sin ánimo de lucro, que tengan como actividad u objeto social la consecución de cualquiera de los fines a los que se refiere el artículo 21.1 y que cumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto.

Tal y como se aludía a una regulación aparte y específica sobre radios culturales en la materia de concesión de licencias, duración de las mismas y renovación, en 2003, tan sólo un año después, Andalucía publicó la *Orden de 24 de septiembre de 2003, por la que se regula el procedimiento de concesión de emisoras culturales de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía*. La norma

trataba de completar el marco jurídico de esta tipología de emisoras y parte de ella era un copiado y pegado de lo que decía la norma de 2002 (en cuanto a cuestiones de definición, publicidad, patrocinio, contenidos, objetivos...). Lo más novedoso que introducía era la vigencia y la renovación de la concesión, para solicitar esta no era necesario esperar a un plazo determinado en el que se convocara un concurso de licencias (Andalucía no tenía repartidas en ese momento todas las frecuencias que se le habían asignado mediante el último plan técnico), sino que la solicitud podía realizarse en cualquier momento para su valoración por parte del organismo determinado para ello.

Hay que destacar que, a pesar de todas estas normativas, esta comunidad autónoma no ha otorgado ninguna licencia a emisoras culturales mediante este procedimiento, dado que en esta Orden de 2003 la vigencia y renovación de la concesión aludía a *lo que disponga la normativa estatal vigente para este tipo de emisoras* y, como veremos en el Capítulo 7, no existe a día de hoy una regulación específica para este tipo de medios.

Si pasamos a la regulación referida a la televisión, en 2000 se publicó el *Decreto 414/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres*. Diferencia entre televisiones municipales y privadas, y la única mención a cuestiones relacionadas con entidades no lucrativas es que en los criterios de adjudicación de las licencias se valorará “la carencia de ánimo lucrativo en los fines de la entidad solicitante”.

Más tarde, en 2006, se publicó el *Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía*. No cambia nada relativo a las cuestiones sobre las entidades sin ánimo de lucro, sólo alude a la solicitud de licencias por parte de personas físicas o jurídicas.

2.4.8. Castilla y León: radio sí, pero televisión no.

En 1998 la comunidad de Castilla y León publicó su *Decreto 12/1998, por el que se regula el Régimen Jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León*. En él se clasifican las emisoras en tres tipos: comerciales, municipales y culturales, siendo estas últimas descritas de la siguiente manera:

Tendrán la consideración de emisoras culturales, a los efectos regulados en el presente Decreto, aquellas cuya programación se componga prioritariamente de emisiones de carácter cultural o educativo, que no emitan publicidad y no persigan ningún fin comercial.

El procedimiento de concesión de este tipo de emisoras será regulado por Orden de la Consejería de Fomento previa asignación de frecuencias por el Ministerio de Fomento.

Las emisoras culturales no perseguirán fines lucrativos y no podrán emitir publicidad, si bien podrán ser patrocinadas para cubrir sus costes de mantenimiento, en los términos siguientes:

- a) La programación y sus contenidos, en ningún caso podrán ser influidos por el patrocinador, de forma que se atente contra la responsabilidad y la independencia editorial de la entidad que preste el servicio público.*
- b) Podrá identificarse al patrocinador durante el transcurso de la emisión siempre que ello se realice de forma esporádica y sin perturbar el desarrollo de la programación.*
- c) Las referencias a los patrocinadores no podrán contener mensajes publicitarios directos y expresos de compra o contratación de productos o servicios.*

Como ya vemos que viene siendo una constante en la mayoría de las autonomías, diez años después Castilla y León también actualizó esta regulación al *Decreto 71/2008, de 9 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León*. En el se vuelven a reiterar los términos sobre emisoras culturales regulados en 1998 salvo por la excepción de que en este eliminan que la asignación de frecuencias para este tipo de medios deberá ser realizada previamente por el Gobierno central (ministerio competente). No especifican nada sobre esta cuestión.

En el caso de la televisión, en 2005 Castilla y León publicó su *Decreto 64/2005, de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico del servicio público de televisión digital local por ondas terrestres en la comunidad autónoma de Castilla y León*. Sólo hacía distinción entre televisiones públicas y privadas (con o sin ánimo de lucro).

2.4.9. Murcia y su eliminación explícita de los medios comunitarios en el apartado normativo.

Murcia promulgó en 1995 su *Decreto 17/1995, de 7 de abril, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras y de inscripción en el registro de empresas de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*. Había una sección dentro del Capítulo 2 dedicada a la descripción y organización de las emisoras culturales:

Se consideran emisoras culturales las que se otorgan por concesión a personas jurídicas sin ánimo de lucro, siendo sus programas preferentemente educativos o culturales. Las citadas emisoras no podrán difundir publicidad, excepto la institucional, pudiendo, sin embargo, admitir patrocinios para determinados programas por parte de entidades radicadas en la localidad, en los términos establecidos en el artículo 17 de

la Directiva de la Comunidad Europea de 3 de octubre de 1989 y demás normativa aplicable sobre la materia.

Los concursos públicos para la concesión de emisoras privadas de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter cultural se convocarán mediante Orden del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, que se publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Sin embargo, en 2002, se actualizó esta legislación con el *Decreto 47/2002, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y su inscripción en el registro de empresas de radiodifusión* y en él, explícitamente, en la Exposición de Motivos se eliminó toda referencia a las emisoras culturales:

Se ha optado por eliminar la Sección Segunda del Capítulo Segundo, referido a las emisoras culturales, al no existir previsión de disponer de frecuencias para las mismas.

Con esta declaración de intenciones la Comunidad de Murcia está mostrando que, por su parte, si no hay una planificación de frecuencias por parte del Gobierno central para el tipo de emisoras sin ánimo de lucro, esta región por sí misma no las va a otorgar, y no sólo eso, sino que las ha eliminado de su legislación vigente.

2.4.10. Canarias nunca ha reconocido a los medios comunitarios.

En 1989, Canarias publicó su primer decreto referido a la comunicación audiovisual, el *Decreto 37/1989, de 16 de marzo, por el que se regula la concesión de emisoras de*

radiodifusión con modulación de frecuencia. Sólo hacía distinción entre dos tipos de emisoras: las de las *administraciones públicas canarias* y las comerciales.

En 2006 se aprobó el *Decreto 163/2006, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que regula el procedimiento de otorgamiento de las concesiones y el régimen de gestión directa, por corporaciones municipales insulares, de canales digitales de televisión de ámbito local en la Comunidad Autónoma de Canarias*. No alude en ningún momento a ningún tipo de entidad sin ánimo de lucro y, en esta línea, dos décadas después de promulgar el decreto sobre radiodifusión, en 2009, se publicó el *Decreto 89/2009, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la concesión administrativa del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Canarias*. Este decreto marcaba un otorgamiento de 156 licencias en las islas que se adjudicarían, durante 10 años, exclusivamente a emisoras comerciales y quedando excluidas explícitamente las emisoras sin ánimo de lucro. Esta ley alude a un régimen legal futuro para que puedan concederse licencias a los medios comunitarios:

Las concesiones del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia para su explotación con carácter no lucrativo, destinadas a la difusión de programas de contenido educativo, cultural, formativo, o análogo, sin emisión de publicidad y sin la utilización de fórmulas de patrocinio comercial, se ajustarán al régimen que se apruebe por el Gobierno de Canarias.

El problema es que las 156 licencias sacadas a concurso eran las últimas que quedaban para Canarias tras el Plan Técnico de 2006, lo que significa que en un futuro, aunque esta autonomía saque una regulación específica, no existen más concesiones de FM para repartir a no ser que el Gobierno central realizase una nueva planificación.

2.4.11. Madrid llevado a juicio por los medios comunitarios.

En 1997 la Comunidad Autónoma de Madrid publicó su *Decreto 57/1997, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia por parte de la Comunidad de Madrid, la prestación del servicio por parte de los concesionarios y la inscripción en el registro de empresas concesionarias*. El título es un ejemplo de cómo en el ideario político la concesión por gestión indirecta parece que sólo puede ser prestada por “empresas” y no por otro tipo de entidades jurídicas. Aunque este lapsus no impide luego explicitar dicha gestión también por entidades sin ánimo de lucro:

El acceso a la gestión indirecta del servicio de radiodifusión sonora con ondas métricas con modulación de frecuencia se encuentra, por tanto, abierto a su explotación por personas o entidades de carácter privado con fines comerciales, a su explotación por personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro con fines educativos o culturales, sin comercialización de espacios publicitarios, e igualmente, a su explotación por parte de las Corporaciones Locales. En todos los casos la implantación de los servicios públicos de radiodifusión habrá de hacerse de acuerdo con los Planes Técnicos Nacionales que sean aprobados por el Gobierno para todo el territorio del Estado.

Además, dentro del cuerpo de este decreto se dedicaban dos artículos a las emisoras sin ánimo de lucro:

Tendrán la consideración de emisoras culturales, a los efectos regulados en el presente Decreto, aquellas cuya programación prioritariamente se componga de emisiones de carácter divulgativo, cultural o educativo. Estas emisoras no perseguirán fines lucrativos y no podrán emitir

publicidad comercial, si bien podrán ser patrocinadas, para cubrir tan solo sus costes de mantenimiento, en los términos siguientes:

- a) El contenido y la programación, en ningún caso, podrán ser influidos por el patrocinador de tal forma que se atente contra la responsabilidad y la independencia editorial de la entidad que preste el servicio público.*
- b) Podrán identificarse al patrocinador en el transcurso de los programas, siempre que ello se haga de forma esporádica y sin perturbar el desarrollo del programa.*
- c) No deberán contener mensajes publicitarios directos y expresos de compra contratación de productos o servicios del patrocinador o de un tercero, mediante referencias de promoción concretas a dichos productos o servicios.*

Debemos prestar atención a la siguiente redacción:

El mismo tratamiento tendrán aquellas emisoras, cualquiera que sea su denominación, que puedan autorizarse con carácter no lucrativo. Tendrán esta consideración aquellas que, no correspondiéndose sus contenidos con los de las emisoras culturales, no persigan en ningún caso un fin comercial.

Esto supondría un coladero de, por ejemplo, emisoras religiosas y otras que, aún no teniendo ánimo de lucro, no cumplen los objetivos sociales de las emisoras libres y comunitarias, así como no encajan dentro de ninguna de las definiciones internacionales sobre esta materia.

A pesar de este reconocimiento autonómico, cinco años después, en el *Decreto 29/2003, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno, de modificación del Decreto 57/1997, de 30 de abril, relativo al régimen de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*, se incluyó la siguiente involución:

El Decreto 57/1997 estableció una clasificación de emisoras de FM que constaba de tres categorías: emisoras comerciales, emisoras municipales y emisoras "culturales y otras de carácter no lucrativo" (artículo 3). A estas últimas les dedica la sección 2.^a de su Capítulo II, artículos 23 y 24. La inclusión de las "emisoras culturales y otras de carácter no lucrativo" en el Decreto 57/1997 se debió a la existencia de un Proyecto de Real Decreto estatal que preveía la planificación radioeléctrica de este tipo de emisoras. Sin embargo, dicha categoría no se incluyó finalmente en la revisión del Plan Técnico del año 1997 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 220, de 13 de septiembre). La situación actual es por tanto equívoca puesto que el Decreto 57/1997 parece crear una falsa expectativa de que tales emisoras están pendientes tan solo de la Orden de convocatoria a que se refiere su artículo 24, cuando lo cierto es que, de acuerdo con la planificación estatal, la Comunidad de Madrid no puede conceder este tipo de emisoras.

Ante esta situación, y con el fin de despejar cualquier posible equívoco, conviene suprimir sin más todas las referencias del Decreto a las emisoras "culturales y otras de carácter no lucrativo".

Tal y como estamos reiterado a lo largo de este capítulo, no existe ningún impedimento legal o formal que imposibilite a las autonomías destinar licencias a medios sin ánimo de lucro. Además, esta excusa es igual que, como vemos, dio también la Comunidad Autónoma de Murcia. La diferencia entre Madrid y Murcia en este caso fue que la primera contaba con un movimiento social organizado y con personalidad jurídica (Federación) de radios libres y comunitarias, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM), organización que llevó a los tribunales a la Comunidad de Madrid debido a la derogación de los artículos mencionados. A pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2008 (publicada mediante resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Viceconsejería de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno), anuló la derogación y restableció la vigencia del

artículo, el último reparto de 21 licencias realizado en la Comunidad de Madrid en marzo de 2009 (con dos años de retraso) se ha hecho ignorando la sentencia del Supremo y no otorgando ninguna de ellas a un medio libre o comunitario, puesto que la lista de adjudicatarios fue la siguiente:

- Alcalá de Henares (90.0): Diario de Alcalá Radiotelevisión, S.L. (empresa que actualmente gestiona la frecuencia de Punto Radio en la misma localidad).
- Alcorcón (94.8): Radio Popular, S.A. (COPE).
- Algete (89.2): Task Navia, S.L.U. (empresa vinculada a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid).
- Aranjuez (103.2): Tumbo de Privilegios, S.L. (editora de diarionegocio.es y varias cabeceras regionales).
- Arganda del Rey (105.1): Radio Publi, S.L. (Punto Radio).
- Colmenar Viejo (97.5): Radio Publi, S.L. (Punto Radio).
- Fuenlabrada (101.0): Radio Publi, S.L. (Punto Radio).
- Galapagar (94.2): Recoletos Medios Digitales, S.L.U. (diario Marca, vinculada a El Mundo).
- Getafe (105.7): Task Navia, S.L.U. (ídem Algete).
- Guadalix de la Sierra (98.5): Kiss Radio, S.A. (Kiss FM).
- Leganés (104.6): UNIPREX, S.A.U. (Onda Cero).
- Madrid (99.1): Unidad Liberal Radio Madrid, S.L. (Alianza Libertad Digital-El Mundo); Miraflores de la Sierra (103.4): Kiss Radio, S.A. (Kiss FM); Móstoles (93.5): Sauzal 66, S.L. (Radio Intereconomía); Navalcarnero (96.9): Asociación Radio María; Perales de Tajuña (102.2): Kiss Radio, S.A. (Kiss FM); San Sebastián de los Reyes (101.6): Radio Popular, S.A. (COPE); Sevilla La Nueva (104.1): Sauzal 66, S.L. (Radio Intereconomía); Soto del Real (102.4): Sauzal 66, S.L. (Radio Intereconomía); Torrejón de Ardoz (92.0): Radio Popular, S.A. (COPE); Torres de la Alameda (92.9): Sauzal 66, S.L. (Radio Intereconomía).

2.4.12. Cataluña: sin voluntad de independencia del Estado en materia de medios comunitarios.

Desde el año 1980, con el *Decreto 175/1980, de 3 de octubre, que regula la concesión de emisoras de radiodifusión, institucionales y privadas, en ondas métricas con modulación de frecuencias*, Cataluña ha contemplado la existencia en su legislación de las emisoras sin ánimo de lucro. En este documento decía lo siguiente:

El Gobierno de la Generalitat, a propuesta del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, podrá otorgar concesiones de emisoras educativas y culturales de ámbito local en favor de instituciones o entidades públicas o privadas legalmente constituidas. Estas, que no han de tener finalidad lucrativa, tendrán la nacionalidad española y estarán domiciliadas en España, y adjuntarán la memoria y en el proyecto técnico a la solicitud, así como sus fines educativos y culturales y el área geográfica que pretenden alcanzar.

En 1989 se promulgó el *Decreto 80/1989, de 4 de abril, de regulación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*, que mantenía la división de las emisoras en institucionales (públicas), comerciales y educativas y culturales de ámbito local, que describía así:

Las concesiones de este tipo de emisoras podrán ser otorgadas a personas jurídicas, públicas o privadas, legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, y la finalidad de las mismas sea la promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Estas emisoras únicamente podrán ser de ámbito local.

En ningún caso podrán difundir publicidad, salvo la institucional. A fin de cubrir los gastos de estas emisoras, podrá ser admitido el patrocinio de

determinados programas por parte de entidades, comerciales o no, de la localidad. También podrán recibir subvenciones externas claramente especificadas y acreditadas.

Los horarios de emisión no podrán ser inferiores a treinta horas semanales.

Un mínimo del 50% del tiempo de emisión corresponderá a programas de producción propia. Dado el carácter no lucrativo de estas concesiones, las emisoras de este tipo no podrán conectar en cadena con emisoras comerciales.

Las televisiones obtienen en 1996 el *Decreto 320/1996, de 1 de octubre, de regulación del régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres*. Se establece una clasificación entre gestión pública y gestión privada, correspondiendo la primera a los municipios y las segundas a las personas físicas y jurídicas privadas (sin distinción entre ánimo de lucro y carencia del mismo). Más tarde se publicó en 2003 el *Decreto 15/2003, de 8 de enero, por el cual se regula el régimen jurídico transitorio de las televisiones locales por ondas terrestres* y en él no hubo cambios ni introducciones respecto a menciones a proyectos audiovisuales sin ánimo de lucro.

En 1998 Cataluña aprobó un decreto exclusivo para las radios comerciales (el *Decreto 269/1998, de 21 de octubre, del régimen jurídico de las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia para las emisoras comerciales*), y siete años después, en 2005, publicó su *Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña*, que dedicó un capítulo a los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro:

La prestación de servicios de comunicación audiovisual por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro se beneficia de una reserva de espacio público de comunicación, atendiendo a su contribución a la

realización de finalidades de interés general y de forma proporcionada a dicha contribución.

Los servicios de comunicación audiovisual desarrollados por las universidades que se ajusten a los criterios generales establecidos por el presente artículo quedan asimilados a la condición de servicios prestados sin ánimo de lucro.

Es la primera vez que se alude explícitamente a los proyectos audiovisuales universitarios y además se los asimila a este tipo de servicios y condición dado que, como veremos más adelante, han sido los grandes perdedores de la comunicación audiovisual sin ánimo de lucro en la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010.

Forman parte de las actividades sin ánimo de lucro los servicios de comunicación comunitaria que ofrecen contenidos destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y los grupos sociales a que dan cobertura, basándose en criterios abiertos, claros y transparentes de acceso, tanto a la emisión como a la producción y a la gestión, y asegurando la participación y el pluralismo máximos.

El cumplimiento de la obligación de reserva por parte de los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual no puede comportar ninguna clase de coste añadido para los usuarios.

Para el acceso al espacio de reserva deben aplicarse criterios que garanticen la igualdad, libertad y concurrencia de acuerdo con lo determinado por reglamento.

La programación de la actividad audiovisual sin ánimo de lucro puede ser patrocinada pero no puede incluir publicidad, salvo la de actividades de economía social y del tercer sector.

La reserva de espacio público de comunicación corresponde:

A los planes técnicos, si el espacio radioeléctrico lo permite, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento establecidos por reglamento. Esta reserva no puede comportar ninguna contraprestación económica. A los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual. Como obligación de servicio público, estos deben reservar un 5% de su oferta a servicios de comunicación sin ánimo de lucro. Esta reserva no puede comportar ninguna contraprestación económica.

En la planificación del espectro radioeléctrico debe preverse el establecimiento de servicios de radio y televisión de un ámbito más reducido que las demarcaciones locales, difundidos desde estaciones de baja potencia, para entidades sin ánimo de lucro.

Nuevamente las autonomías, en este caso Cataluña, alude al Gobierno central del Estado para que sea este quien planifique en una primera instancia de sus planes técnicos la reserva de espectro radioeléctrico para este tipo de medios de comunicación.

Por último, la ley habla de medidas de fomento:

Los poderes públicos competentes en materia audiovisual deben:

Fomentar las iniciativas orientadas al desarrollo de la actividad audiovisual sin ánimo de lucro, especialmente las que contribuyan a la obtención de finalidades de interés general, como por ejemplo la formación y la cultura, mediante el establecimiento de ayudas dirigidas específicamente a este sector, que pueden ser financiadas por tasas sobre el beneficio de la explotación comercial del espacio radioeléctrico.

Impulsar las iniciativas orientadas a la constitución de asociaciones de las entidades que desarrollen una actividad audiovisual sin ánimo de lucro y que, en su alcance territorial, sea autonómico o local, pretendan reforzar

este sector con el establecimiento de mecanismos de colaboración y de intercambio de experiencias.

Estos términos se aprobaron en el año 2005. En el 2006 se realizó un Plan Técnico que no previó ninguna reserva de espacio para emisoras sin ánimo de lucro, contraviniendo las previsiones de la Ley 22/2005. Desde la sociedad civil organizada, la Assemblea per la Comunicació Social (ACS), promotora de la televisión comunitaria online La Tele, presentó alegaciones al concurso de adjudicación de FM realizado en Cataluña. El Consejo Audiovisual Catalán (CAC) desestimó las alegaciones, afirmando que la culpa era del Gobierno estatal al no prever licencias de baja frecuencia que pudieran destinarse a las emisoras sin ánimo de lucro.³⁴

Otro ejemplo: en el concurso de Televisión Digital Terrestre (TDT) de 2005 no se hizo tampoco ninguna reserva de espacio para televisiones sin ánimo de lucro, con lo que debían competir con las comerciales (aunque se otorgaban puntos por tener un carácter sin ánimo de lucro). Solamente se presentó una entidad de estas características, TV Mataró, que consiguió una licencia (esta es otra muestra más de que verdaderamente y legalmente nada impide a las autonomías dar licencias a medios comunitarios, aunque no haya un paquete específico de estas características emanado del Gobierno central). Sin embargo, en 2009 se anunció que TV Mataró sería absorbida por la televisión municipal, ya que no podía sostener los gastos que implica el encarecimiento de los costes de transmisión en TDT, desapareciendo de esta manera su gestión ciudadana y su denominación de emisora comunitaria.

Por último en esta autonomía, cabe destacar que la Generalitat y el Consejo Audiovisual Catalán presentaron el 10 de diciembre de 2009 (Día Internacional de los Derechos Humanos), un borrador de decreto para la adjudicación de licencias del Tercer Sector de la

³⁴ Clúa, A. (2008). “El servicio público de comunicación”, *Diario El País*. Disponible en http://elpais.com/diario/2008/03/06/catalunya/1204769240_850215.html [Recuperado el 9 de diciembre de 2013).

Comunicación, que ha quedado paralizado por el momento. Desde los medios comunitarios, con especial coordinación de los medios catalanes, se hizo llegar una respuesta al borrador reclamando mejoras. Y desde la Asociación de Radio de Catalunya (radios comerciales) se mostró una oposición frontal al decreto.³⁵

2.4.13. Aragón y su legislación para proyectos "con ánimo de lucro".

Aragón publicó en 1997 su *Decreto 15/1997, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen concesional del Servicio Público de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia y el Registro de Empresas radiodifusoras en Aragón* y en él dividía los tipos de emisoras en comerciales y municipales señalando explícitamente que esta normativa se destinaba a la explotación del servicio público de radiodifusión por parte de “personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro o por los ayuntamientos”

2.4.14. Asturias nunca ha apostado por los medios comunitarios.

En 1997, Asturias publicó su *Decreto 31/1997, de 15 de mayo, por el que se regula el régimen concesional del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y se crea el Registro de Empresas Radiodifusoras del Principado de Asturias*. En él solo se alude a la gestión indirecta del servicio por parte de personas físicas o jurídicas, y dentro de estas últimas no hace ninguna mención a las entidades sin ánimo de lucro.

³⁵ La Tele (2010). *Decreto de la Generalitat de Cataluña de regulación de los medios sin ánimo de lucro*. Disponible en <http://latele.cat/es/b-decreto-de-la-generalitat-de-catalu-de-regulaci-n-de-los-medios-sin-nimo-de-lucro> [Recuperado el 7 de enero de 2014).

2.4.15. Baleares y las "emisoras de carácter no lucrativo".

En 1995, se publicó en las Islas Baleares el *Decreto 86/1995, de 7 de septiembre, por el que se regula el régimen y procedimiento de adjudicación de concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en el ámbito de las Islas Baleares*, el cual diferenciaba entre emisoras comerciales, municipales y culturales. Dos años después, en 1997, se cambió la denominación de estas últimas en el *Decreto 62/1997*, que modificaba al anterior, y comenzó a denominar a este tipo de proyectos de comunicación como *sin ánimo de lucro*:

Las denominadas “emisoras culturales” de la sección segunda pasan a denominarse “emisoras de carácter no lucrativo”.

El artículo 19.1 queda redactado en los siguientes términos:

“La concesión y los criterios para la adjudicación de emisoras de carácter no lucrativo y para su inscripción en el registro de Empresas de Radiodifusión será el previsto en la sección primera de este capítulo, excepto por lo que hace referencia al procedimiento, que se desarrollará en dos fases:

- a) Fase de solicitudes. En ella las personas naturales o jurídicas interesadas en la gestión de este servicio habrán de presentar las correspondientes solicitudes en el plazo que se establezca.*
- b) Fase de adjudicaciones. Esta fase tendrá el carácter de concurso público para las personas naturales y jurídico-privadas que hayan participado en la fase anterior.*

Diez años después, en 2008, Baleares publicó el *Decreto 36/2008, de 4 de abril, por el que se regula el régimen jurídico aplicable al otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por ondas terrestres y a la inscripción de los mismos en el Registro de Títulos habilitantes para la Radiodifusión Sonora en el ámbito de la*

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. En él se especifica que el servicio de radiodifusión se prestará a través de las emisoras públicas que, a su vez, se subdividen en emisoras locales y emisoras autonómicas, emisoras comerciales y emisoras educativas, culturales y otras sin ánimo de lucro. Estas últimas estaban definidas como:

Se consideran emisoras educativas, culturales y otras sin ánimo de lucro, aquellas cuya titularidad corresponde a personas físicas o jurídicas de carácter privado sin ánimo de lucro, y que tienen como finalidad esencial la difusión de programas de contenido cultural, formativo, educativo o análogo, sin emisión de publicidad.

Este tipo de proyectos obtenía su licencia

Mediante la participación de éstas en el concurso público correspondiente convocado a tal efecto por la Administración de la Comunidad Autónoma. Para el caso de emisoras educativas, culturales y otras sin ánimo de lucro, el Consejero de Economía, Hacienda e Innovación podrá abrir un trámite previo de solicitudes, en el que las personas interesadas en la gestión de alguna emisora de este tipo puedan presentar las correspondientes solicitudes previas en el plazo que se establezca, a fin de que el Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, a la vista de aquéllas, pueda instar del órgano competente de la Administración del Estado, si procede, la correspondiente reserva de frecuencias.

Debían tener una emisión mínima de 30 horas semanales, y especifica, que no todos los decretos lo hacen, las características y documentación que han de presentar las emisoras sin ánimo de lucro, además de constar en el registro de prestadores de radiodifusión con una categoría propia.

2.4.16. Cantabria y la competición desigual por las licencias de emisión.

En 1997 se promulgó el *Decreto 112/1997, de 14 de octubre, por el que se establece el régimen jurídico de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de inscripción en el Registro de empresas de radiodifusión*. En él estaban diferenciadas las emisoras municipales, comerciales y culturales. Sin embargo, la modificación de esta norma en 2004, con el *Decreto 127/2004, de 18 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de inscripción en el registro de empresas de radiodifusión* expuso en su introducción que:

Se ha eliminado la regulación de las emisoras culturales recogida en el texto anterior al no existir previsión de frecuencias para las mismas, de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de Frecuencias. Al citado argumento técnico se une el hecho de que caracterizándose las citadas emisoras porque se otorgan a personas jurídicas sin ánimo de lucro, pudiendo admitir patrocinios pero no publicidad, y teniendo en cuenta, por un lado, que las emisoras comerciales pueden otorgarse también a estas personas, admitiendo además de patrocinio, publicidad y que, por otro, en los criterios de valoración de éstas se prima el porcentaje de programas culturales, se estima razonable la no regulación de las emisoras culturales, las cuales, se reitera, no pueden ser concedidas en la actualidad de acuerdo con la planificación estatal.

Efectivamente, si analizamos el cuerpo de esta norma vemos que los capítulos II y III realizan la regulación explícita sólo de las emisoras comerciales y municipales aunque, sin embargo, en su artículo 3, “Requisitos de los concesionarios”, se contempla que las entidades sin ánimo de lucro podrán presentarse a los concursos de las licencias comerciales siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Esto obliga a una competición de desigualdad de

oportunidades entre grandes cadenas radiofónicas y pequeños proyectos sin ánimo de lucro, en los que estos últimos tienen la batalla perdida frente a los grandes dinosaurios.

2.4.17. Navarra y las emisoras privadas de gestión indirecta.

En materia de televisión, en 1996 se publicó el *Decreto Foral 313/1996, de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de la gestión, mediante concesión administrativa, del servicio de televisión local por ondas terrestres en la Comunidad Foral de Navarra*. En esta normativa se hacía distinción entre dos tipos de emisoras, municipales y privadas, siendo estas últimas definidas como “*aquellas cuya gestión se encomienda a personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, que tienen por finalidad la difusión de cualquier tipo de programas*”.

Un año después, en 1997 se publicó en Navarra el *Decreto Foral 336/1997, de 10 de noviembre, por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Foral de Navarra* en el cual la única distinción para el acceso a las emisoras que se hacía era la de la gestión por personas físicas o jurídicas.

2.4.18. Tabla-resumen de la legislación autonómica previa a la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Comunidad Autónoma	Normativa	Gobierno que aprobó la normativa y autoridad audiovisual	Diferenciación o no del Tercer Sector de la Comunicación	Concurso específico para medios comunitarios
Andalucía	Decreto 86/1982 (Radio)	PSOE, Consejería de Presidencia.	“Emisoras culturales”	No
	Decreto 75/1989 (Radio)		---	
	Decreto 174/2002 (Radio)		“Emisoras culturales y sin ánimo de lucro”	
	Orden 24 de septiembre de 2003 (sólo para emisoras culturales)		Bases del marco jurídico completo de las “emisoras culturales y sin ánimo de lucro”	
	Decreto 414/2000 (TV)		---	
	Decreto 1/2006 (TV)		---	
Aragón	Decreto 15/1997 (Radio)	PP, Departamento de Obras Públicas.	Excluye a las entidades sin ánimo de lucro	No
Asturias	Decreto 31/1997 (Radio)	PP / Unión Renovadora Asturiana,	---	No

		Consejería de Economía.		
Balears	Decreto 86/1995 (Radio)	PP, Consejería de Innovación e Interior.	“Emisoras culturales”	No
	Decreto 62/1997 (Radio)		“Emisoras de carácter no lucrativo”	
	Decreto 36/2008 (Radio)	PSOE, Consejería de Innovación e Interior.	“Emisoras educativas, culturales y otras sin ánimo de lucro”	
Canarias	Decreto 37/1989 (Radio)	Centro Democrático y Social, Consejería de Presidencia.	---	No
	Decreto 89/2009 (Radio)	Coalición Canaria, Consejería de Presidencia.	Excluye explícitamente a las emisoras sin ánimo de lucro	
	Decreto 163/2006 (TV)	Coalición Canaria, Consejería de Presidencia.	---	
Cantabria	Decreto 112/1997	PP, Consejería de Industria.	“Emisoras culturales”	No
	Decreto	Partido	Se elimina la	

	127/2004	Regionalista de Cantabria, Consejería de Industria.	denominación anterior	
Castilla-La Mancha	Decreto 59/1998 (Radio)	PSOE, Consejería de Industria.	“Emisoras de carácter no lucrativo”	No
	Ley 10/2007 (Audiovisual)		Sin definición. Se pueden presentar a los concursos “entidades sin ánimo de lucro”	
Castilla y León	Decreto 12/1998 (Radio)	PP, Consejería de Fomento.	“Emisoras culturales”	No
	Decreto 71/2008 (Radio)		“Emisoras culturales”	
	Decreto 64/2005 (TV)		“Televisiones privadas sin ánimo de lucro”	
Cataluña	Decreto 175/1980 (Radio)	CiU, Departamento de la Presidencia	“Emisoras educativas y culturales”	No
	Decreto 80/1989 (Radio)		“Emisoras educativas y culturales”	
	Decreto 320/1996		---	
	Decreto 15/2003		---	

	Ley 22/2005	PSC, Departamento de la Presidencia	No categoriza pero alude a la prestación de servicios por “entidades privadas sin ánimo de lucro”	
Extremadura	Decreto 131/1994 (Radio)	PSOE, Consejería de Infraestructuras.	“Emisoras culturales”	No
Galicia	Decreto 156/1989 (Radio)	PP, Consejería de Presidencia.	“Emisoras educativas y culturales”	No
	Ley 6/1999 (Audiovisual)		---	
La Rioja	Decreto 44/1997 (Radio)	PP, Consejería de Administraciones Públicas y Política Local.	Dos tipos: “educativas o de formación” y “culturales”	No
Madrid	Decreto 57/1997	PP, Consejería de Presidencia.	“Emisoras culturales y otras de carácter no lucrativo”	No
	Decreto 29/2003		Eliminación de la categoría anterior.	
Murcia	Decreto 17/1995 (Radio)	PSOE, Consejería de Economía y Hacienda.	“Emisoras culturales”	No

	Decreto 47/2002 (Radio)	PP, Consejería de Economía y Hacienda.	Eliminación de la categoría anterior	
Navarra	Decreto foral 313/1996 (TV)	Convergencia de Demócratas de Navarra, Consejería de Presidencia.	---	No
	Decreto foral 336/1997	Unión del Pueblo Navarro / PP, Consejería de Presidencia.	---	
País Vasco	Decreto 240/1986 (Radio)	PNV, Consejería de Cultura.	“Emisoras institucionales” (propiedad de una institución sin ánimo de lucro)	No
	Decreto 190/2006 (TV)		“Entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social y compromiso municipal”	
Valencia	Decreto 40/1989 (Radio)	PSOE, Consejería de Presidencia.	Emisoras culturales y educativas	Sí
	Decreto 38/1998 (Radio)	PP-Unión Valenciana, Consejería de	Emisoras culturales y educativas	

		Presidencia.		
	Ley 1/2006 (Audiovisual)	PP, Consejería de Presidencia.	Entidades privadas sin ánimo de lucro	

Tabla 2. 4. Legislación autonómica previa a la Ley General de la Comunicación Audiovisual
(elaboración propia y García, J. / Sáez, Ch., 2011).

Todas las personas tienen derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales, como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Además, todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una diversidad de fuentes y de contenidos y a la existencia de diferentes ámbitos de cobertura, acordes con la organización territorial del Estado.

Artículo 4, Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010).

CAPÍTULO 3: LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: CÓMO, POR QUÉ, PARA QUÉ Y PARA QUIÉN

3.1. INTRODUCCIÓN.

El Estado español nunca antes había tenido una ley estatal que regulase la materia de comunicación en un solo documento amplio y riguroso. Lo que había hasta este momento era una especie de “sopa castellana” en la que las leyes audiovisuales se mezclaban unas con otras sin tener una base común en la que se pudieran apoyar (planes técnicos, Real Decreto de la Televisión Digital Terrestre de pago, Ley de Financiación de RTVE, Ley de medidas urgentes en materia de Telecomunicaciones, los nunca puestos en marcha Consejo de Medios Audiovisuales y Agencia Estatal de Radiocomunicaciones...).

La Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada finalmente el 31 de marzo de 2010 y publicada en el BOE el 1 de abril, llevaba siendo promesa del actual Gobierno (en su primera legislatura) junto con el Estatuto del Periodista (que aún sigue en el fondo del cajón de las regulaciones). El primer borrador del que se dispuso fue en el año 2005, y a lo largo de todo este tiempo ha sufrido diversos cambios (según algunos especialistas, para peor):

La primera legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) generó iniciativas importantes para algunos cambios progresistas en el sistema comunicativo, iniciativas que se han ido disolviendo en la segunda legislatura hasta dibujar un modelo de corte des-regulado y privatista en perjuicio del servicio público. Cabe distinguir, incluso temporalmente, tres fases: una primera de reformas interesantes; seguida de reformas con contradicciones y, en la segunda legislatura, una acumulación de contrarreformas, que orientan al sistema a un modelo de sistema comunicativo completamente distinto al ideado en la primera legislatura. (Zallo, R., 2010; p. 14).

A pesar de esta realidad, bien es cierto que es la primera vez que en una ley de ámbito estatal se reconoce, de manera tan explícita, la existencia del Tercer Sector de la Comunicación y se hace un pequeño intento de regularlo. Sin embargo, la redacción de la ley parece que pone más énfasis en establecer restricciones e impedimentos al desarrollo de los medios de comunicación ciudadanos y sin ánimo de lucro que en facilitar el ejercicio del derecho humano a la emisión (y no sólo recepción) de información.

En este capítulo haremos una descripción del proceso de aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual con su calendario y los actores implicados, explicaremos términos claves que aparecen en su redacción referidas al tratamiento y regulación del Tercer Sector de la Comunicación, observaremos cómo ha evolucionado el articulado en esta materia desde el Anteproyecto de 2005 a su promulgación definitiva en 2010 y analizaremos los cambios

propuestos desde la sociedad civil en los períodos legales de consulta y si los legisladores los tuvieron o no finalmente en cuenta para la redacción de la ley.

3.2. PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: CALENDARIO Y LEGISLADORES.

Tanto retraso en la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual desde sus inicios en 2005 hasta su finalización en 2010 ha provocado que varios puntos legales necesarios sobre la comunicación audiovisual no hayan quedado unificados en una misma ley, sino que han sido tratados y normalizados aparte por cuestiones de urgencia, tales como la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española de 2009 (la cual impide la contratación de publicidad en el ente público) y el Real Decreto Ley para la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago de 2011 (que permite a cada concesionario de una licencia de ámbito estatal ofrecer el acceso condicional a través de uno de sus canales de TDT).

La siguiente tabla muestra el calendario de actuaciones políticas referidas a la redacción y aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual:

Fecha	Organismo	Hecho
2005	Gobierno	Redacción del primer anteproyecto (no está indicada la fecha exacta porque la Red de Medios Comunitarios tuvo acceso al documento gracias a diversos contactos, no porque este anteproyecto se hiciera explícitamente público a la ciudadanía, con lo que dicha ReMC desconoce la fecha del primer borrador).

26 de junio de 2009	Consejo de Ministros	Publicación del <i>Informe del Anteproyecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual</i> (1).
17 de septiembre de 2009	Consejo de Estado	Publicación del informe y las recomendaciones del máximo órgano consultivo del Gobierno (2).
23 de octubre de 2009	Gobierno	Publicación del <i>Proyecto de Ley de la Ley General de la Comunicación Audiovisual</i> (3).
3 de diciembre de 2009	Parlamento	Se cierra el plazo de enmiendas para el <i>Proyecto de Ley</i> publicado el 23 de octubre de 2009 (4).
4 de diciembre de 2009	Parlamento	Se reciben las enmiendas (desacuerdos y modificaciones) a la ley por parte de los grupos parlamentarios (o de la sociedad civil a través de éstos). Se presentaron un total de 633 enmiendas en 700 folios (4).
22 de diciembre de 2009	Parlamento	Día previsto para la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Debido a que los grupos parlamentarios no habían tenido tiempo de estudiar y analizar todas las enmiendas, se negaron a discutirla y aprobarla en la Comisión Constitucional del Congreso (todos los grupos excepto PSOE, CiU y Coalición Canaria) (5).
7 de enero de 2010	Parlamento	Se aprueba la Ley General de la Comunicación Audiovisual en la Comisión Constitucional del Congreso (falta el paso por el Senado debido al sistema bicameral español) (6).
25 de enero de 2010	Parlamento	Se publica la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual por el Parlamento (7).

10 de marzo de 2010	Senado	El Senado aprueba la Ley General de la Comunicación Audiovisual con la inclusión de 11 enmiendas. El texto vuelve al Congreso (8)
18 de marzo de 2010	Parlamento	El Congreso aprueba el texto ratificando la mayoría de las enmiendas introducidas por el Senado. Votos a favor: PSOE, CiU y CC. Votos en contra: PP, IU y ERC. Abstenciones: PNV (9)
31 de marzo de 2010	Parlamento	Promulgación de la LGCA. Aparece en el BOE al día siguiente (10)

(1) Referencia del Consejo de Ministros del 26 de junio de 2009. Disponible en http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/_2009/refc20090626.htm [Recuperado el 8 de enero de 2014].

(2) Dictamen del Consejo de Estado nº 1387/2009 de 17 de septiembre de 2009. Disponible en <http://vlex.com/vid/-314833574> [Recuperado el 8 de enero de 2014].

(3) Congreso de los Diputados. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_045-01.PDF [Recuperado el 8 de enero de 2014].

(4) Documento accedido a través de la Red de Medios Comunitarios.

(5) “Los grupos fuerzan al PSOE a aplazar la Ley General de la Comunicación Audiovisual”. Disponible en http://elpais.com/diario/2009/12/23/sociedad/1261522811_850215.html [Recuperado el 8 de enero de 2014].

(6) Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 7 de enero de 2010. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/CO/CO_457.PDF [Recuperado el 8 de enero de 2014].

(7) Boletín Oficial de las Cortes Generales del 25 de enero de 2010. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_045-09.PDF [Recuperado el 8 de enero de 2014].

(8) Diario de sesiones del Senado del 10 de marzo de 2010. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/SEN/DS/PL/PS0071.PDF [Recuperado el 9 de enero de 2014].

(9) Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 18 de marzo de 2010. Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_149.PDF [Recuperado el 9 de enero de 2014].

(10) Boletín Oficial del Estado de 1 de abril de 2010. Disponible en http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5292 [Recuperado el 9 de enero de 2014].

Tabla 3.1. Proceso de tramitación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual
(elaboración propia).

El proceso de redacción de la Ley General de la Comunicación Audiovisual ha sido, según la vicepresidenta del Gobierno M^a Teresa Fernández de la Vega, consensuado con todas las partes interesadas. En su comparecencia en el Senado el 17 de junio de 2008 señalaba que:

En esta nueva etapa nos proponemos culminar la ordenación del sector con la Ley General Audiovisual, en la cual venimos trabajando para buscar el consenso de todos los actores con todos ellos: actores sociales, operadores, fuerzas políticas, institucionales. Así debe ser, ya que ésta será la norma que sentará, finalmente, unas bases firmes para un escenario audiovisual moderno, adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, en la memoria del *Anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual* elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia con fecha 27 de julio de 2009, que se incluye en el expediente 1387/2009, se indica que:

En el procedimiento de elaboración del anteproyecto han intervenido las siguientes entidades [...]: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Comisión Nacional de la Competencia y Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)”.

Además, en diversos medios de comunicación se indica que desde la Vicepresidencia del Gobierno se estaban manteniendo contactos y reuniones con la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) respecto de la reforma de la normativa audiovisual³⁶. Sin embargo, esta entidad no se cita como una a las que se le he concedido audiencia.

³⁶ “Fernández de la Vega dice que no se ha pactado “por detrás” con la Unión de televisiones”. 20 de mayo de 2009. Prensa online “Soitu”, en http://www.soitu.es/soitu/2009/05/20/info/1242819622_972277.html [Recuperado el 3 de junio de 2010.]

La Red de Medios Comunitarios entiende que no todos los actores implicados en el sector han sido tenidos en cuenta a la hora de redactar y tramitar la Ley General de la Comunicación Audiovisual ni que se haya producido consenso entre ellos, y tal y como parece afirmar la Vicepresidencia del Gobierno socialista. Dicha entidad afirma en sus alegaciones que, en la práctica, no solo no se le ha concedido audiencia sino que incluso se ha tenido un trato preferente hacia una organización (UTECA) que, conociendo el contenido del anteproyecto, ha podido influir sobre él mientras que el resto de partes interesadas ha tenido que esperar a la aprobación del documento por el Consejo de Ministros.

Amparándose en el artículo 105 de la Constitución Española (que regula la audiencia de los/as ciudadanos/as), la Red de Medios Comunitarios solicitó en tres ocasiones (diciembre de 2008 y marzo y junio de 2009) audiencia con el Gobierno, sin recibir ninguna respuesta, con lo que sus integrantes entienden que se ha dado un tratamiento desigual a unas entidades frente a otras. Apenas han sido consultadas entidades del sector (no solo los medios comunitarios, sino que también han quedado fuera los sectores de la publicidad, el cine, la animación, las series...), ni ha existido debate público sobre esta ley. Probablemente la acción más llamativa a este respecto fue la negativa de la inmensa mayoría de los partidos parlamentarios a votar la ley el día en el que estaba prevista dicha votación, un plante “del que nadie recordaba precedentes en la Cámara” bajo la acusación de que “ha habido falta de transparencia en la elaboración de la norma”³⁷, es decir, que se estaba forzando la tramitación por vía de urgencia. Por lo tanto, el discurso y la práctica del Gobierno respecto de la tramitación de este proyecto de normativa han sido contradictorios.

“De la Vega no tiene prisa: aparca la Ley Audiovisual para la primavera de 2010”. 4 de mayo de 2009.

Periódico online “El Confidencial”, en

http://www.elconfidencial.com/cache/2009/04/30/comunicacion_37_gobierno_tiene_prisa_aparca_audiovisual_primavera.html [Recuperado el 3 de junio de 2010.]

³⁷ Garea, F. “Los grupos fuerzan al PSOE a aplazar la ley audiovisual” (2009). *El País*, 23 de diciembre de 2009. Disponible en http://elpais.com/diario/2009/12/23/sociedad/1261522811_850215.html [Recuperado el 9 de enero de 2014].

3.3. LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA PRONUNCIA SUS DUDAS FRENTE A LA NUEVA LEY.

Nada más conocerse el texto del *Informe del Consejo de Ministros* sobre la ley audiovisual en junio de 2009, diversos colectivos de la sociedad civil comenzaron a analizarla y a pronunciar sus dudas acerca del carácter de servicio público de la ley: el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), el Foro para la Investigación y el Desarrollo de la Cultura Audiovisual (FIDECA), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la Red de Medios Comunitarios. Además, la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC) apoyó las reivindicaciones y estuvo presente en actos relacionados con las protestas.

Aunque vayamos a dedicar el centro de nuestra atención a las enmiendas de los medios comunitarios, no queremos dejar pasar la oportunidad de recoger un resumen de las reivindicaciones de los otros colectivos.

3.3.1. Los sindicatos de periodistas.

CCOO, UGT y las organizaciones que componen el FOP (Agrupación de Periodistas de CCOO, Agrupación General de Periodistas UGT, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Federación de Sindicatos de Periodistas, Sindicat de la Imatge, Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV), presentaron documentos de enmiendas relacionados, sobre todo, con la pérdida patente del carácter de servicio público del audiovisual y con los derechos laborales de los trabajadores.

Entendían que la ley respondía más a criterios puramente económicos o mercantilistas que a reforzar los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española.

Además, alertaban de la privatización, en la práctica, de las emisoras autonómicas y de la posible eliminación de 10.000 puestos de trabajo al promover y alentar la subcontratación de contenidos por parte de las emisoras.

Estas organizaciones y la Red de Medios Comunitarios mantuvieron una serie de reuniones en las que se apoyaron y entendieron entre sí, un paso importante en el entendimiento de los/as informadores/as de los medios convencionales y los/as de los medios comunitarios, en una profesión donde el recelo profesional debido al intrusismo ingente está a la orden del día.

3.3.2. La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA).

Estas organizaciones hicieron mucho hincapié en todo lo relativo a la protección de los menores y a los minutos de contenidos publicitarios. Se aceptaron varias observaciones, que quedaron incorporadas al texto de la ley.

Sin embargo, ello no colmó sus demandas. Seguían preocupadas debido a la impunidad de la que, según ellas, gozan las televisiones en muchos aspectos, como la emisión de comunicaciones comerciales ilícitas, los incumplimientos en la programación o las obligaciones poco tasadas para la prestación del servicio.

La AUC fue la única asociación sin ánimo de lucro a cuyo informe prestó atención el Consejo de Estado para su dictamen no vinculante sobre la ley, de fecha 16 de septiembre de 2009. También participaron en la presentación de enmiendas dirigidas a los grupos parlamentarios

para que las tomaran en consideración y mantuvieron reuniones con la práctica totalidad de dichos grupos.

3.3.3. El Foro para la Investigación y el Desarrollo de la Cultura Audiovisual (FIDECA).

FIDECA está formado por asociaciones y profesionales relacionados con la comunicación y el audiovisual. Realizó un documento de enmiendas muy amplio que abarcaba prácticamente todos los aspectos referidos a la consideración del audiovisual como servicio público, la conveniencia de adaptar bien la norma a las directrices europeas, a los prestadores de servicios, las características de las licencias audiovisuales, y referencias al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (de próxima creación, al parecer), entre otros aspectos.

3.3.4. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Esta organización presentó un documento de enmiendas relacionadas con la accesibilidad a los medios y los derechos de las personas con discapacidad, la subtitulación, la lengua de signos o la imagen mostrada de este colectivo en los contenidos audiovisuales.

3.3.5. Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

La sección europea de esta asociación mostró su preocupación en diversas notas de prensa acerca de cómo se había elaborado la LGCA, sin la participación de los agentes del sector y eludiendo el debate. Considera, además, que la ley se realiza desde una visión empresarial de la comunicación en vez de plantearse como el desarrollo de derechos fundamentales.

En el ámbito de los medios comunitarios, las notas destacaban que el reconocimiento de estos colectivos era muy marginal y que no recogía ninguna medida que garantizase la existencia de estos medios, y sí en cambio, establecían restricciones y exigencias que no afectaban a los servicios de comunicación comerciales.

3.4. TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Hasta ahora, y tal y como hemos visto en el Capítulo 2 de esta tesis, la normativa audiovisual diferencia sólo entre gestión directa y gestión indirecta, sin distinguir necesariamente si las personas físicas o jurídicas, destinatarias de las concesiones, tienen ánimo de lucro o no. De esta manera, para las entidades sin ánimo de lucro se ha dado una situación de competencia en *igualdad de condiciones entre desiguales*. El resultado ha sido la exclusión sistemática de las emisoras comunitarias españolas de los repartos de concesiones.

Es cierto que la Ley General de la Comunicación Audiovisual recoge en su artículo 32 los denominados “*Servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro*”. Sin embargo, la Red de Medios Comunitarios cree que es un reconocimiento muy limitado, sin garantías de existencia y que no da respuesta a las recomendaciones de los organismos internacionales (lo detallaremos más adelante) que han manifestado un reconocimiento expreso y diferenciado de los medios comunitarios, tales como el Parlamento Europeo (resolución de 25 de septiembre de 2008), Consejo de Europa (declaración de 11 de febrero de 2009), UNESCO (declaración de Maputo), Relatores sobre la Libertad de Expresión (ONU, OSCE), Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV Comunitaria).

Tal y como aparece en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, sólo se diferencian dos categorías de prestadores de servicio: privado o público, incluyendo los servicios de comunicación comunitarios dentro de la categoría de prestadores privados, pero de forma muy marginal, como una “posibilidad”, no como un sector en sí mismo.

Ciertamente, las entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, etc.) son personas jurídicas de carácter privado (al igual que las empresas), por lo que cabría considerarles en una categoría genérica destinada a prestadores privados. Pero los medios comunitarios realizan funciones que, en muchos casos, podrían considerarse de servicio público. Algunos países como Países Bajos incluyen a estos medios dentro de los prestadores públicos (*lokale publieke mediadiensten*).

Otro aspecto para destacar de la ley que nos ocupa es la continua aparición de la denominación “mercado audiovisual”. Este término se usa de forma reiterada en el texto normativo. No parece que haya sido utilizado, hasta el momento, en ninguna normativa de radiodifusión sonora o televisiva, tanto estatal como autonómica. Resulta ambiguo que, sin embargo, no se defina qué se entiende por “mercado audiovisual” en ningún apartado del texto.

El sector audiovisual es un importante sector económico y empresarial. También otros sectores, como el de la enseñanza o la sanidad, conllevan actividades económicas considerables. Pero resultaría, cuanto menos, insólito que leyes reguladoras de estos servicios y derechos ciudadanos contemplaran al sector oficial y explícitamente como “mercado de la educación”, “mercado de la sanidad pública” o, por poner otro ejemplo, existiera una ley sobre el “mercado de los derechos humanos”. Una normativa básica como esta debería dejar claro que, pese a las actividades económicas que se dan en torno a ella, la comunicación es un derecho fundamental.

Y, hablando de derechos fundamentales, en la parte declarativa de la ley se omite un aspecto primordial del precepto constitucional: el papel activo de la ciudadanía en la comunicación, que va más allá del de mera receptora.

Recordemos el artículo 20 de la Constitución Española:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

- a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*
- b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.*
- c. A la libertad de cátedra.*
- d. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.*

Este derecho, como derecho fundamental, no se predica para un segmento de población concreto, sino para toda la ciudadanía. Así lo afirma también el Tribunal Constitucional en su sentencia 6/1981³⁸:

La libertad de expresión (artículo 20.1.a de la C.E) y el derecho a comunicar y recibir información veraz (artículo 20.1.d) son derechos que gozan por igual todos los españoles, sea cual fuere su profesión.

Sin embargo, el anteproyecto omite una mención a este derecho intrínseco de todas y cada una de las personas. En cambio, sí se explicitan otros con una curiosa subdivisión:

³⁸ Rubio Llorente, F (1981). “Sentencia nº 6/1981 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, de 16 de marzo de 1981”. Disponible en <http://vlex.com/vid/43-lotc-20-4-d-an-5-6-9-15034944> [Recuperado 9 de enero de 2014].

- Se consideran *derechos del público*, es decir, de las personas en cuanto receptoras de la prestación del servicio de comunicación audiovisual, los siguientes: el derecho a recibir una comunicación audiovisual plural, a la diversidad cultural y lingüística, a una comunicación audiovisual transparente, los derechos del menor, los derechos de las personas con discapacidad y el derecho a la participación en el control de los contenidos audiovisuales.
- Por otra parte, se consideran los *derechos de las entidades prestadoras*, y se enumera el siguiente catálogo genérico: la libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual, el derecho de acceso a los servicios de comunicación electrónica y el derecho a la autorregulación del prestador del servicio de comunicación audiovisual.
- A continuación se reconoce de modo expreso el derecho a realizar comunicaciones comerciales, dedicándosele a su desarrollo una sección entera, que contiene: el derecho a crear canales de comunicación comercial y programas o anuncios de autopromoción, el derecho a emitir mensajes publicitarios, el derecho a emitir mensajes de venta por televisión, el derecho al patrocinio y el derecho al emplazamiento de productos.

Nada se dice del derecho a la comunicación privada no comercial. La omisión de esta mención expresa abre la puerta a prácticas inaceptables en una democracia, como considerar los medios privados no comerciales y al Tercer Sector de la Comunicación como algo contingente. La pregunta es: ¿Cómo se puede, en un sistema democrático, considerar contingente el ejercicio de un derecho fundamental por parte de la ciudadanía, o la de la sociedad civil organizada?

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado también a este respecto cuando afirma en la sentencia arriba citada, hablando de los profesionales de la información, que:

Estos profesionales podrán invocar también el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional (artículo 20.1.d) “in fine”, pero no pueden pretender que se transforme en favor un derecho de libertad en un derecho de prestación.

Por otra parte, el artículo 9.2 de la Constitución Española establece que:

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

La participación de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida social no puede excluir la participación en el espacio público radioeléctrico, con canales que garanticen el derecho a la comunicación, a través de todos los medios existentes, a los ciudadanos, directamente y a través de diferentes formas de agrupación colectiva.

La mención de los medios comunitarios en el texto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual es claramente insuficiente y discriminatoria respecto de otras clases de prestación de servicios de comunicación audiovisual, como la prestación pública o la prestación por empresas con ánimo de lucro (que aparece como la opción “por defecto”, en la medida en que se establece la libertad de empresa y se elimina la consideración de la comunidad radiotelevisiva como servicio público).

Como solución a esta parca y escueta atención que la normativa brinda a los medios comunitarios, la Red de Medios Comunitarios ha propuesto en sus alegaciones el deslinde de los tres sectores de la comunicación, tal y como recomiendan diversas resoluciones

internacionales de relatores sobre libertad de expresión y derechos humanos (citados anteriormente), y que dicen así:

Los diferentes tipos de medios de comunicación –comerciales, de servicio público y comunitarios- deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Las medidas específicas para promover la diversidad pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos de medios.

[...] En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. (Declaración conjunta sobre diversidad en radiodifusión, 2007).

Y añade:

La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos, tecnológicos o de otra índole, severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad. (Íbid).

Para que esto se refleje en el anteproyecto se debería incorporar un nuevo Título o, al menos, destinar un Capítulo o una Sección dentro del Título III de la ley destinado exclusivamente a los “*Servicios de comunicación comunitaria sin finalidad ánimo de lucro*”. De esta manera se establecería más claramente como grupo definido este tipo de servicios, sus derechos y obligaciones, y las garantías correspondientes a estos.

3.5. EVOLUCIÓN DEL ARTICULADO DE LA LEY.

Como hemos comentado anteriormente y recordamos aquí, el primer borrador de la Ley General de la Comunicación Audiovisual al que tuvieron acceso los medios comunitarios data del año 2005. En él aparecía un artículo, el 23, que trataba sobre los “*Servicios de difusión comunitarios*”. Después de este documento, el Tercer Sector de la Comunicación no volvió a tener conocimiento de los cambios que se fueron realizando en el borrador, hasta que en junio de 2009 se publicó el informe del Consejo de Ministros (ver *Tabla 4.1. proceso de tramitación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual*).

Las reivindicaciones y cambios realizados en la ley a lo largo de todo este tiempo por parte de los medios comunitarios no se han referido sólo al artículo que explícitamente los reconoce y regula, sino también a otros artículos más generales que hablan del derecho a la libertad de expresión y recepción de información, aunque finalmente solo se aceptaron dos enmiendas fuera de dicho artículo referidas a “*Los derechos del público*” y a una “*Disposición Transitoria Decimocuarta*”.

3.5.1. Cambios propuestos en el articulado general de la Ley.

Exponemos a continuación los cambios en los que podemos apreciar la evolución de los artículos de la ley que nombran o se refieren de alguna manera al Tercer Sector de la Comunicación (exceptuando el artículo 32, denominado “*Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro*”, al que dedicaremos un subapartado propio). En las tablas se incluyen los siguientes pasos: Anteproyecto de 2005, Anteproyecto de 2009 (emanado del Consejo de Ministros), enmiendas propuestas por la Red de Medios Comunitarios y texto aprobado definitivo. Las enmiendas que se aceptaron en el Parlamento fue en la cámara del Congreso, ya que en el Senado no se realizó ningún cambio relacionado con el Tercer Sector de la Comunicación.

1. Reserva de frecuencias	
Anteproyecto de 2005	<p><u>Exposición de motivos. III.</u></p> <p>“Como novedad en ese ámbito local, se permite a las Comunidades Autónomas reservar parte de las frecuencias para servicios de radio y televisión comunitaria, que habrán de ser gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, y se contempla la creación de servicios de radio y televisión de proximidad, igualmente sin ánimo de lucro, utilizando emisiones de baja potencia en frecuencias no útiles para servicios comerciales”.</p> <p><u>Título II: Edición y difusión de radio y televisión.</u></p> <p>“Capítulo 3: Licencia para prestar el servicio de difusión de radio o televisión por ondas hertzianas terrestres.</p> <p>3. Procedimiento general de los concursos para la atribución de licencias.</p> <p>[...] En particular, las Comunidades Autónomas podrán reservar en los concursos convocados para otorgar licencias para la prestación del servicio de difusión de ámbito local, una licencia para la difusión de un canal radiofónico o de televisión de carácter comunitario para su adjudicación a entidades sin fines de lucro, en los términos previstos en el artículo 18.”</p>
Anteproyecto de 2009	<p>Este anteproyecto no incluye exposición de motivos.</p> <p><u>NO APARECE</u> ninguna mención sobre la reserva de frecuencias por iniciativa propia de las comunidades autónomas.</p>
Enmiendas ReMC	<p><u>APARECE</u> en el artículo destinado exclusivamente a los medios comunitarios, aunque en otros términos:</p> <p>“Artículo 32.1.: Tendrán la consideración de servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro los servicios de</p>

	comunicación que queden reservados a asociaciones sin ánimo de lucro [...]”
Texto definitivo 2010	Este texto no incluye exposición de motivos. <u>NO APARECE</u> ninguna mención sobre la reserva de frecuencias por iniciativa propia de las comunidades autónomas.

Tabla 3.2. Cambios sobre la reserva de frecuencias (elaboración propia).

2. Medios comunitarios como agentes de la pluralidad de los medios	
Anteproyecto de 2005	<u>NO APARECEN</u> los medios comunitarios como agentes de pluralidad de medios.
Anteproyecto de 2009	“Art. 4: El derecho a recibir una comunicación audiovisual plural. 1. Todos tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios con diferentes ámbitos de cobertura.”
Enmiendas ReMC	“Art. 4.1: Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios tanto públicos, comerciales como comunitarios, a la existencia de una diversidad de fuentes y de contenidos y la existencia de diferentes ámbitos de cobertura. Esta prestación plural debe asegurar una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a través de prestadores de titularidad pública y de servicios de comunicación sin ánimo de lucro.”
Texto definitivo 2010	“Art. 4.1: Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad.”

Tabla 3.3. Cambios sobre medios comunitarios y pluralidad (elaboración propia).

3. Diferenciación del Tercer Sector de la Comunicación	
Anteproyecto de 2005	<u>NO CONTEMPLA</u> la diferenciación del Tercer Sector de la Comunicación.
Anteproyecto de 2009	<u>NO CONTEMPLA</u> la diferenciación del Tercer Sector de la Comunicación.
Enmiendas ReMC	<p><u>PROPUESTA</u> de nuevo Capítulo o Sección en el <i>Título III: Normas básicas para la regulación del mercado de la comunicación audiovisual</i> dentro del cual se incluiría el artículo 32 referido a los medios de comunicación comunitarios, y que se llamaría “Servicios del Tercer Sector de la Comunicación Audiovisual”.</p> <p>Esta propuesta está justificada con las recomendaciones internacionales (las veremos más adelante) que afirman que la radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación.</p>
Texto definitivo 2010	<u>NO CONTEMPLA</u> la diferenciación del Tercer Sector de la Comunicación.

Tabla 3.4. Diferenciación del TSC (elaboración propia).

4. Ayudas a la financiación y reducciones / exenciones de tasas	
Anteproyecto de 2005	<u>NO APARECEN</u> ayudas a la financiación ni reducciones o exenciones del pago de tasas.
Anteproyecto de 2009	<u>NO APARECEN</u> ayudas a la financiación ni reducciones o exenciones del pago de tasas.
Enmiendas ReMC	<p><u>PROPUESTA DE ADICIÓN</u> de Disposición Adicional:</p> <p>“Fomento de la participación ciudadana en los servicios de comunicación.</p> <p>1. Con el objeto de fomentar la presencia de la ciudadanía y de las</p>

	entidades privadas sin ánimo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la sociedad de la información se establecerán medios de apoyo y líneas de financiación para el desarrollo de servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro. 2. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro podrán beneficiarse (o se beneficiarán) de reducciones y exenciones en el pago de tasas.”
Texto definitivo 2010	<u>NO APARECEN</u> ayudas a la financiación ni reducciones o exenciones del pago de tasas.

Tabla 3.5. Financiación y tasas (elaboración propia).

5. Licencias para regular prestadores ilegales ya existentes	
Anteproyecto de 2005	<u>NO APARECE</u> el otorgamiento de licencias por el hecho de venir prestando servicio anteriormente.
Anteproyecto de 2009	<u>NO APARECE</u> el otorgamiento de licencias por el hecho de venir prestando servicio anteriormente.
Enmiendas ReMC	<u>PROPUESTA DE ADICIÓN</u> de Disposición Transitoria: “Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes. 1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009 podrán optar a licencias en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad. 2. La solicitud para el otorgamiento de la licencia se dirigirá a la Comunidad Autónoma correspondiente, que trasladará dichas solicitudes al Gobierno para que se elabore un Plan Técnico

	<p>destinado a este tipo de servicios, teniendo en cuenta las solicitudes presentadas y la disponibilidad del espectro.</p> <p>3. La autoridad audiovisual competente en cada Comunidad Autónoma realizará el procedimiento de otorgación de licencias en función de las frecuencias planificadas."</p>
Texto definitivo 2010	<p>DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOCUARTA:</p> <p>“Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes.</p> <p>1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la Disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.</p> <p>2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley.”</p>

Tabla 3.6. Regulación de medios existentes (elaboración propia).

Como se puede observar en los cuadros, el anteproyecto de 2005 parecía proteger más a los medios comunitarios incluso haciendo alusiones a la reserva del espacio radioeléctrico y licencias para este tipo de iniciativas ciudadanas. Es muy destacable el hecho de que finalmente en uno de los primeros artículos de la ley (el 4º) se equipare el derecho de la ciudadanía a recibir información tanto del Tercer Sector de la Comunicación (medios

comunitarios) como de los dos sectores convencionales del audiovisual (el público y el privado).

En cuanto a la Disposición Transitoria Decimocuarta, según la cual se otorgarían licencias a aquellos medios comunitarios que ya vinieran prestando servicio antes de 2009, hay que tener en cuenta varios aspectos:

1. La intención de la Red de Medios Comunitarios era incluir en esta disposición tanto a radios como a televisiones. Sin embargo, en la redacción final del artículo, al mentar explícitamente a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (podemos recordarla en el capítulo anterior), parece ser que acotan a las televisiones (porque son las únicas que entran en dicha norma).

2. Existen varias interpretaciones posibles que deberán aclararse en un futuro más inmediato:

- Podría ser que la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI) entienda que solo se aplica a televisiones anteriores a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) (y dicha norma se refiere a las televisiones de proximidad anteriores a 1995).
- Que haga una interpretación más amplia y extensible que ampare a todas las emisoras (tanto televisiones anteriores a 1995 como radios y televisiones anteriores a 2009). (La Red de Medios Comunitarios entiende que esta sería la opción ideal).
- Podría entenderse que la Disposición de la LISI sobre televisiones anteriores a 1995 queda derogada y no reconozca la televisión de proximidad, aunque entonces quedarían amparadas todas las emisoras anteriores a 2009 (tanto radios como televisiones).

- En el peor de los casos, la SETSI podría también entender que si se da por derogada la disposición de la LISI (aunque la Ley General de la Comunicación Audiovisual no la deroga explícitamente) sobre la televisión también, obviamente, quedaría sin vigor la Disposición Transitoria Decimocuarta que nos ocupa. Resultaría bastante contradictorio pero es necesario tener presentes todas las opciones que pudieran suceder en la interpretación de la ley.

En cualquier caso, esta Disposición Transitoria es una muestra de que aunque la Ley General de la Comunicación Audiovisual lleva ya cuatro años en vigor hay aspectos, sobre todo los relacionados con el Tercer Sector de la Comunicación, que aún no han sido aclarados en la práctica.

3.5.2. Cambios propuestos en el artículo concreto sobre medios comunitarios (Artículo 32).

En el Anteproyecto del año 2005, el artículo 18 estaba dedicado a los *Servicios de difusión comunitarios*. En la ley final, los *Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro* ocuparon finalmente el lugar del artículo 32.

Continuaremos con la dinámica comparativa para ver cómo se han ido produciendo los cambios tal y como hemos hecho en el apartado 4.5.1.

6. Nombre para denominar al Tercer Sector de la Comunicación	
Anteproyecto de 2005	“Artículo 18: Servicios de difusión comunitarios”.
Anteproyecto de 2009	“Artículo 32: Servicios de comunicación sin finalidad comercial”.

Enmiendas ReMC	“Artículo 32: Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro”.
Texto definitivo 2010	“Artículo 32: Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro”.

Tabla 3.7. Denominación para el TSC (elaboración propia).

7. Definición de los medios del Tercer Sector de la Comunicación	
Anteproyecto de 2005	“18.1. Tienen la consideración de comunitarios los servicios de difusión de radio o de televisión de ámbito local sin ánimo de lucro que, utilizando el dominio público planificado para los servicios de interés general, queden reservados para entidades privadas sin fines de lucro, con objeto de que éstas puedan ofrecer contenidos de carácter no comercial dirigidos a atender a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales en ese ámbito local.”
Anteproyecto de 2009	“32.1. Las entidades privadas sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual que ofrezcan contenidos dirigidos a atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo y el desarrollo local y comunitario. En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial.”
Enmiendas ReMC	“32.1. Tendrán la consideración de servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro los servicios de comunicación que queden reservados a asociaciones sin ánimo de lucro con el objeto de atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación

	específicas de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto. “
Texto definitivo 2010	<p>“32.1. Las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.</p> <p>En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial.”</p>

Tabla 3.8. Definición para el TSC (elaboración propia).

8. Participación democrática de otras entidades y personas en los medios	
Anteproyecto de 2005	<p>“31.3. Constituye la función de servicio público:</p> <p>d) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso.”</p> <p>“38.2. El servicio público de radio y televisión asegurará de manera global la participación y presencia de los grupos sociales y políticos significativos en su programación.”</p> <p>“18.4.c) La Comunidad Autónoma establecerá un procedimiento que asegure la creación de ventanas de emisión a través de las cuales otras entidades sin ánimo de lucro puedan acceder a ese canal identificando los tiempos y franjas horarias reservados y que no podrán exceder de la cuarta parte del tiempo de emisión diario. Dicho procedimiento fijará además los mecanismos para determinar</p>

	<p>la compensación a que tendrá derecho el titular de la licencia por los gastos de difusión o edición en que pueda incurrir para dar cumplimiento a esa obligación.</p> <p>En estos supuestos, la responsabilidad editorial por los contenidos emitidos dentro de estas ventanas recaerá directamente sobre las entidades a las que se les hayan atribuido las mismas, siendo el titular del servicio comunitario solamente responsable si continuara difundiendo una ventana a pesar de haber sido apercibido de la ilicitud de sus contenidos.</p> <p>La autoridad competente de cada Comunidad Autónoma resolverá los conflictos que se puedan plantear en relación con esta materia, y establecerá los mecanismos de coordinación apropiados con el titular de la licencia para determinar la entidad o entidades sin ánimo de lucro que accederán a los tiempos de emisión reservados al efecto, debiendo la selección de esas entidades atender a criterios basados en la adecuada representación del pluralismo social."</p>
Anteproyecto de 2009	<u>NO CONTEMPLA</u> estos aspectos.
Enmiendas ReMC	<p>“32.2. Estos servicios estarán abiertos a la participación de los miembros de la comunidad tanto en su gestión como en la creación de contenidos. Dentro de los contenidos se habilitarán espacios de acceso y de participación directa a otras personas físicas o jurídicas para que estas ejerzan el derecho a la libre expresión.</p> <p>“32.3. Dentro de estos servicios se habilitarán espacios para la expresión de opiniones y de contenidos socioculturales que tengan poca presencia o dificultad de acceso a otros servicios de comunicación, como los contenidos destinados a minorías insuficientemente representadas, población desfavorecida o grupos</p>

	sociales con necesidades específicas.”
Texto definitivo 2010	<u>NO CONTEMPLA</u> estos aspectos. Sólo exige a la Corporación RTVE que regulará un derecho de acceso para los grupos sociales de interés.

Tabla 3.9. Participación de la ciudadanía en los medios (elaboración propia).

9. Reserva de espacio radioeléctrico	
Anteproyecto de 2005	<u>CONTEMPLA</u> la reserva de espacio radioeléctrico, pero en otros apartados (tal y como hemos observado en la Tabla 4.1., en la Exposición de motivos III y en el Título II).
Anteproyecto de 2009	<u>NO CONTEMPLA</u> estos aspectos.
Enmiendas ReMC	“34.4. Por su contribución a la pluralidad de los servicios de comunicación comunitarios no comerciales deberán contar con presencia en todas las demarcaciones y zonas de cobertura donde también existan otros servicios de comunicación.”
Texto definitivo 2010	“32.2. La Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios.”

Tabla 3.10. Reserva de espectro radioeléctrico (elaboración propia).

10. Otorgamiento de licencias	
Anteproyecto de 2005	“18. 2. La resolución del concurso para el otorgamiento de licencia para la prestación del servicio de difusión comunitario, se ajustará a los siguientes criterios: a) Las garantías para el pluralismo que se desprendan de la oferta

	<p>presentada, en particular, el número, representatividad y arraigo local de las entidades sin fines de lucro asociadas para la gestión del servicio y la transparencia de su organización.</p> <p>b) Las garantías para la expresión libre y pluralista de ideas y de corrientes de opinión en el canal difundido a través del servicio comunitario y, en particular, los procedimientos previstos para garantizar el acceso de otras entidades sin ánimo de lucro a determinadas franjas horarias de su programación en los términos establecidos por la normativa aplicable.</p> <p>c) La viabilidad técnica y económica del proyecto y la transparencia de sus fuentes de financiación.</p> <p>d) El respaldo técnico de los candidatos para poner en marcha y mantener el proyecto y sus previsiones de cooperación con los restantes titulares del derecho de uso compartido de la capacidad de transmisión, si la licencia es para la explotación de uno o varios programas digitales dentro de un canal múltiple.</p> <p>e) La prestación de facilidades adicionales a las legalmente exigibles para asegurar el acceso al servicio de personas discapacitadas o con especiales necesidades.</p> <p>f) Los criterios que, además, puedan fijar las Comunidades Autónomas.</p>
Anteproyecto de 2009	<p>“32. 2. La prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa. En dicho título se establecerán las condiciones que aseguren su naturaleza sin finalidad comercial, pudiendo establecerse un uso compartido de un mismo canal así como las condiciones de dicho uso. La adjudicación de la licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico disponible para la prestación del servicio.”</p>

Enmiendas ReMC	<u>CONTEMPLA</u> las cuestiones del pluralismo y acceso de ciertos grupos sociales en otros apartados (los hemos visto arriba en el 32.2 y el 33.3, pero <u>NO CONTEMPLA</u> la cuestión del modo de otorgación de la licencia.
Texto definitivo 2010	<p>“32.3. La prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa. En dicho título se establecerán las condiciones que aseguren su naturaleza sin ánimo de lucro, pudiendo establecerse el uso compartido de un mismo canal así como las condiciones de dicho uso.</p> <p>“32.4. La adjudicación de la licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico disponible para la prestación del servicio.</p> <p>La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios.”</p>

Tabla 3.11. Otorgamiento de licencias (elaboración propia).

11. Carácter original de la licencia otorgada	
Anteproyecto de 2005	<p>“18.3. Las licencias para la prestación de servicios de difusión comunitarios se otorgarán por plazo de cinco años y podrán ser renovadas en las condiciones establecidas en el artículo 16.³⁹</p> <p>Su transmisión a otra entidad sin fines de lucro debe ser previamente autorizada por la autoridad que otorgó la licencia, sin que en ningún caso puedan perder su carácter original de servicio comunitario.”</p>
Anteproyecto de 2009	<u>NO CONTEMPLA</u> aspectos concretos de las licencias ni habla sobre la posibilidad de transmitirlos.

³⁹ Se refiere al régimen de duración, transmisión y renovación de las licencias.

Enmiendas ReMC	“32.5. La licencia en ningún caso puede perder su carácter original de servicio comunitario y no podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento”.
Texto definitivo 2010	“32.5. La licencia en ningún caso podrá perder su carácter original de servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro y no podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento.”

Tabla 3.12. Negocios con las licencias de medios comunitarios (elaboración propia).

12. Emisión de publicidad y canal en abierto	
Anteproyecto de 2005	<p>“18. 4. Sin perjuicio de lo que dispongan las normas que en uso de sus competencias establezcan las Comunidades Autónomas, serán de aplicación a los titulares de una licencia para la prestación del servicio de difusión comunitaria las obligaciones impuestas a los titulares de una licencia con las singularidades siguientes:</p> <p>a) El canal radiofónico o de televisión difundido lo será siempre en abierto y el 50% de su tiempo de emisión entre las 8 y las 24 horas, excluidas las ventanas a que se refiere la letra c. de este apartado, deberá corresponder a programas originales de producción propia relacionadas con su carácter comunitario.</p> <p>b) Dicho canal no podrá emitir publicidad comercial ni espacios de televenta, si bien se admitirá el patrocinio de sus programas.”</p>
Anteproyecto de 2009	<p><u>CONTEMPLA</u> que no permite ningún tipo de comunicación comercial, ni siquiera el patrocinio.</p> <p>“32.1. [...] En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial”.</p>

Enmiendas ReMC	<u>ELIMINA</u> las cuestiones relacionadas con la imposibilidad de emitir comunicaciones comerciales, especialmente el patrocinio.
Texto definitivo 2010	<u>CONTEMPLA</u> que sus emisiones serán en abierto y que no se permite ningún tipo de comunicación comercial (ni siquiera el patrocinio): “32.1. [...] En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial”.

Tabla 3.13. Emisión de publicidad y canal en abierto (elaboración propia).

13. Limitación y fiscalización de las cuentas	
Anteproyecto de 2005	<u>NO CONTEMPLA</u> aspectos de limitación y fiscalización de sus cuentas.
Anteproyecto de 2009	“32.3. Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de sus gastos e ingresos, si los hubiere. La autoridad audiovisual establecerá un sistema de gestión financiera y un registro específico para el depósito de su memoria económica. Salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros.”
Enmiendas ReMC	<u>PROPONEN</u> directamente la eliminación de este apartado.
Texto definitivo 2010	“32.6. Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos, si los hubiere. La autoridad audiovisual establecerá un sistema de evaluación de gestión financiera y un registro específico para el depósito de su memoria económica. Salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los

	servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica.”
--	--

Tabla 3.14. Limitación y fiscalización de las cuentas (elaboración propia).

14. Pago de cánones y tasas	
Anteproyecto de 2005	<u>NO CONTEMPLA</u> aspectos de pago de cánones y tasas.
Anteproyecto de 2009	“32.4. Las entidades titulares de los servicios de comunicación audiovisual sin finalidad comercial deberán acreditar el pago de cuantos derechos, cánones o tasas, se deriven de su actividad.”
Enmiendas ReMC	<u>PROPONEN</u> directamente la eliminación de este apartado.
Texto definitivo 2010	“7. Las entidades titulares de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro deberán acreditar el pago de cuantos derechos, cánones o tasas, se deriven de su actividad.”

Tabla 3.15. Pago de cánones y tasas (elaboración propia).

Como último aporte, hemos de destacar que en el Anteproyecto de ley audiovisual de 2005 había un artículo dedicado a los llamados *servicios de difusión de proximidad*. Esta definición encaja con aquellos medios que tampoco tienen fines comerciales pero que están dirigidos a pequeñas comunidades en razón de un interés cultural, escolar, étnico o social común, por ejemplo, los medios de centros escolares y universitarios, con un radio de acción muy concreto y reducido. Sin embargo, en la redacción final no aparece ninguna referencia a *servicios de proximidad*, con lo que entendemos que quedan integrados dentro de las consideraciones, derechos y obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

3.5.3. Otros cambios propuestos por la Red de Medios Comunitarios para el campo audiovisual en general.

La Red de Medios Comunitarios también presentó enmiendas a otros artículos o aspectos de la ley, que aunque no estuvieran directamente relacionadas con su sector entendían que eran necesarios para defender el derecho a la comunicación de la ciudadanía.

15. Sobre el término “mercado audiovisual”	
Anteproyecto de 2005	Utiliza expresiones como “sector radiotelevisivo”, “servicios de radio y televisión” o “servicios públicos de radio y televisión”. Una vez aparece el término de “mercado de la radio y la televisión” y otro “mercados de las comunicaciones electrónicas” (también aparece “mercado publicitario” pero consideramos que la publicidad sí que lleva implícita en su definición un afán lucrativo).
Anteproyecto de 2009	Aparece el término “mercado audiovisual” 15 veces en todo el texto legal.
Enmiendas ReMC	<u>PROPONEN</u> la sustitución del término “mercado audiovisual” por “espacio público de comunicación audiovisual” o por el de “servicios de comunicación audiovisual” en todas las referencias contenidas en el texto de la ley.
Texto definitivo 2010	Se mantuvo el término “mercado audiovisual” (aparece 12 veces en todo el texto legal).

Tabla 3.16. Sobre el término “mercado audiovisual” (elaboración propia).

16. El derecho a la diversidad cultural y lingüística	
Anteproyecto de 2005	No existe un artículo como tal en este sentido, pero hay varios que hablan sobre diversidad lingüística y cultural: “Art. 59. Promoción del pluralismo lingüístico.

	<p>1. Los titulares de canales difundidos con tecnología digital, con ámbito de cobertura, nacional o autonómico que incluya total o parcialmente comunidades autónomas con lenguas oficiales, en cuya programación se incluyan obras audiovisuales dobladas o subtituladas previamente en alguna de esas lenguas, estarán obligados, como mínimo en ese ámbito, a ofrecer dichas opciones lingüísticas.”</p> <p>“Art. 31.3. Constituye la función de servicio público:</p> <p>e) Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España.”</p>
Anteproyecto de 2009	“5.1. Todos tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la sociedad”.
Enmiendas ReMC	“5.1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía. Los prestadores del servicio de comunicación facilitarán la participación en los medios de comunicación de los grupos de población y las minorías insuficientemente representados o marginados”.
Texto definitivo 2010	“5.1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía”.

Tabla 3.17. Diversidad cultural y lingüística (elaboración propia).

17. Libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual	
Anteproyecto de 2005	No hay un artículo exacto en términos de “libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual.”

Anteproyecto de 2009	“10.3. La libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual se ejercerá en colaboración con las Administraciones públicas. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual facilitarán el acceso a la documentación, instalaciones y equipos a las autoridades competentes para el cumplimiento de la normativa vigente.”
Enmiendas ReMC	“10.3. La libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual se ejercerá de acuerdo a las obligaciones del servicio público que corresponden a la comunicación audiovisual y en colaboración con las administraciones públicas. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual facilitarán el acceso a la documentación, instalaciones y equipos a las autoridades competentes para el cumplimiento de la normativa vigente.”
Texto definitivo 2010	“10.3. La libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual se ejercerá de acuerdo a las obligaciones que como servicio de interés general son inherentes a la comunicación audiovisual y a lo previsto en la normativa en materia audiovisual”.

Tabla 3.18. Libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual (elaboración propia).

18. Régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual de interés general	
Anteproyecto de 2005	No explicita en estos términos las cuestiones de los derechos enumerados en este cuadro en las siguientes redacciones del proyecto y ley definitiva.
Anteproyecto de 2009	“22.1. Los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, televisivos y conexos e interactivos son servicios de interés general que se prestan en el ejercicio del derecho a la libertad de empresa,

	en régimen de libre competencia y dentro de un mercado transparente y plural.”
Enmiendas ReMC	“22.1. Los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, televisivos o conexos e interactivos son servicios de interés general que se prestan en ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y, en su caso, del derecho a la libertad de empresa en régimen de libre competencia y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos.”
Texto definitivo 2010	“22.1. Los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, televisivos y conexos e interactivos son servicios de interés general que se prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos”.

Tabla 3.19. Régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual de interés general
(elaboración propia).

19. Programación en cadena	
Anteproyecto de 2005	<p>“Art. 46. Cooperación.</p> <p>Las entidades que tengan atribuida la gestión directa del servicio público de radio y televisión podrán celebrar convenios de colaboración para alcanzar una gestión más eficiente de los recursos públicos, mediante la emisión en cadena ocasional de los diferentes servicios de difusión, la recepción de los servicios internacionales de noticias y transmisiones, la adquisición conjunta de derechos de</p>

	emisión o retransmisión, la coproducción de contenidos, así como para el intercambio de programas y servicios o para la cesión temporal de medios y equipos.” No comenta nada sobre la emisión en cadena de radios y/o televisiones de gestión indirecta.
Anteproyecto de 2009	“22.3. El otorgamiento de una licencia de televisión de ámbito local no faculta para la emisión en cadena con otras entidades autorizadas, durante más del 25% del tiempo total semanal, aunque sea en horario diferente. En ningún caso este porcentaje puede concentrarse en el horario de 21 a 24 horas”.
Enmiendas ReMC	“22.3. Los prestadores del servicio de comunicación no podrán emitir su programación en cadena más del 50 por 100 del tiempo total semanal, cuando un mismo prestador haya obtenido licencias en diversos ámbitos territoriales o haya alcanzado acuerdos con otros titulares de licencias en una o varias comunidades autónomas.”
Texto definitivo 2010	“22.3. El otorgamiento de una licencia de televisión de ámbito local no faculta para la emisión en cadena con otras entidades autorizadas, durante más del 25% del tiempo total semanal, aunque sea en horario diferente. En ningún caso este porcentaje puede concentrarse en el horario de 21 a 24 horas”.

Tabla 3.20. Programación en cadena (elaboración propia).

20. Sobre criterios de adjudicación de licencias	
Anteproyecto de 2005	“Art. 14.1. La adjudicación de las licencias atenderá a los siguientes criterios: a) La ampliación o, en su defecto, el mantenimiento del pluralismo

	<p>en la oferta de radio y televisión y en el conjunto de las fuentes de información, en el ámbito de cobertura del servicio.</p> <p>b) Las garantías para la expresión libre y pluralista de ideas y opiniones en los canales cuya edición vaya a ser asumida por el adjudicatario.</p> <p>c) La viabilidad técnica y económica del proyecto.</p> <p>d) Si la licencia conlleva el derecho de uso exclusivo de un canal radioeléctrico, las mejoras sobre los calendarios previstos para la implantación y desarrollo de la cobertura del servicio.</p> <p>e) Si la licencia es para la explotación de uno o varios programas digitales dentro de un canal múltiple, los compromisos y previsiones de cooperación con los restantes titulares del derecho de uso compartido de la capacidad de transmisión.</p> <p>f) La satisfacción de los intereses y necesidades de los potenciales usuarios, radioyentes y telespectadores, teniendo en cuenta el ámbito de cobertura del servicio, las características del canal o los canales que se difundirían y, si parte del servicio se va a prestar mediante acceso condicional, la relación más beneficiosa para el abonado entre el precio y las prestaciones ofrecidas, en tanto no ponga en peligro la viabilidad del servicio.</p> <p>g) El impulso, en su caso, al desarrollo de la Sociedad de la Información que aportará el servicio mediante la inclusión de servicios conexos, servicios adicionales interactivos y otras prestaciones asociadas.</p> <p>h) La prestación de facilidades adicionales a las legalmente exigibles para asegurar el acceso al servicio de personas discapacitada o con especiales necesidades.</p> <p>i) La aportación al desarrollo de la industria de contenidos</p>
--	--

	<p>audiovisuales europea y en una lengua española.</p> <p>j) Los criterios que, además, puedan fijar el Estado y las comunidades autónomas en los pliegos de condiciones.”</p>
Anteproyecto de 2009	<p>“Art. 27. Concursos para la concesión de licencias de prestación de servicios audiovisuales.</p> <p>1. Los concursos de otorgamiento de licencias para la prestación de servicios audiovisuales se regirán por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en lo no dispuesto por la presente ley.</p> <p>2. Todas las licencias disponibles de la misma naturaleza e idéntico ámbito de cobertura deberán ofrecerse de forma simultánea, y previa confirmación de existencia de espacio radioeléctrico suficiente. No obstante, en el marco de lo dispuesto, en su caso, por el Plan Técnico Nacional de oferta de licencias, a desarrollar reglamentariamente, cuando haya quedado liberada una única licencia, la Administración competente deberá proceder a convocar el concurso para su adjudicación en un plazo máximo de tres meses sin esperar a que queden liberados más títulos habilitantes.</p> <p>3. En la convocatoria del concurso se especificará, para cada licencia, las condiciones de prestación de servicio.</p> <p>4. Transcurridos como máximo seis meses desde que se haya planificado una reserva de dominio público radioeléctrico sin que la Administración competente haya solicitado su afectación al servicio público de difusión de radio y televisión o convocado el correspondiente concurso, cualquier interesado estará legitimado para instar dicha convocatoria. La normativa de aplicación establecerá el plazo máximo en que debe convocarse el concurso desde la presentación de la solicitud.</p>

	<p>5. El órgano competente deberá convocar, en un plazo máximo de seis meses después del vencimiento de la licencia, el correspondiente concurso para la adjudicación de las licencias de idéntica naturaleza que, en su caso, hayan quedado vacantes. Transcurrido dicho plazo, cualquier interesado estará legitimado para instar la convocatoria, que deberá producirse antes del plazo que establezca la normativa de aplicación desde la presentación de la solicitud.”</p>
Enmiendas ReMC	<p><u>PROPONEN</u> añadir un nuevo apartado, el 27.6.</p> <p>“6.- La adjudicación de las licencias, sin menoscabo de lo que establezcan las Comunidades Autónomas en las licencias de su competencia, tendrá en cuenta los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aportación a la pluralidad incluyendo factores como la diversidad de tipos de medios de comunicación, la diversidad de las fuentes de información y la diversidad de contenidos. b) Acceso de nuevas personas físicas o jurídicas a prestación de servicios de comunicación audiovisual. b) Las garantías para la expresión libre y pluralista de ideas y opiniones en los canales cuya edición vaya a ser asumida por el adjudicatario. c) La viabilidad técnica y económica del proyecto. f) La satisfacción de los intereses y necesidades de los potenciales usuarios, radioyentes y telespectadores, teniendo en cuenta el ámbito de cobertura del servicio, las características del canal o los canales que se difundirían y, si parte del servicio se va prestar mediante acceso condicional, la relación más beneficiosa para el abonado entre el precio y las prestaciones ofrecidas, en tanto no

	<p>ponga en peligro la viabilidad del servicio.</p> <p>g) El impulso, en su caso, al desarrollo de la Sociedad de la Información que aportará el servicio mediante la inclusión de servicios conexos, servicios adicionales interactivos y otras prestaciones asociadas.</p> <p>h) La prestación de facilidades adicionales a las legalmente exigibles para asegurar el acceso al servicio de personas discapacitadas o con especiales necesidades.</p> <p>i) La aportación al desarrollo de la industria de contenidos audiovisuales europea y en una lengua española.</p> <p>j) La inclusión de alguna o algunas de las obligaciones de servicio público</p> <p>k) La transmisión de determinados contenidos de interés público como debates de carácter político o espacios permanentes de debate, de reflexión o de participación de grupos sociales representativos.”</p>
Texto definitivo 2010	Sólo aparecen los apartados del 1 al 5.

Tabla 3.21. Criterios de adjudicación de licencias (elaboración propia).

21. Período de otorgamiento de licencias	
Anteproyecto de 2005	“16.1. Las licencias para la prestación del servicio de difusión por ondas terrestres hertzianas se otorgarán por un plazo de diez años, renovables en dos ocasiones por períodos de otros diez, previa solicitud del interesado, que deberá presentarse al menos doce meses antes del vencimiento del plazo”.
Anteproyecto de 2009	“28.1. Las licencias audiovisuales serán otorgadas por un período de 15 años.”
Enmiendas ReMC	“28.1. Las licencias audiovisuales serán otorgadas por un período de

	10 años.”
Texto definitivo 2010	“28.1. Las licencias audiovisuales serán otorgadas por un período de 15 años.”

Tabla 3.22. Período de otorgamiento de licencias (elaboración propia).

22. Renovación de las licencias	
Anteproyecto de 2005	<p>“16.2. La licencia se renovará automáticamente, siempre que, en el momento de solicitar su renovación:</p> <p>a) La Administración de las telecomunicaciones haya emitido informe favorable señalando la ausencia de obstáculos técnicos en relación con la planificación del espectro para la renovación, en general, de las licencias afectadas.</p> <p>b) El titular del servicio se encuentre al corriente en el pago de las tasas a que viniere obligado.</p> <p>c) Dicho titular no haya sido objeto, durante la duración de la licencia, de tres o más sanciones firmes por incumplimiento en sus obligaciones esenciales ni tampoco haya sido condenado en tres sentencias firmes por vulnerar algún derecho fundamental en el ejercicio de su actividad de comunicación.</p> <p>d) Cuando, en un plazo no inferior a nueve meses anterior al vencimiento de la licencia, el órgano competente no hubiese denegado, previa audiencia pública de todos los interesados, la renovación automática de la licencia.</p> <p>La resolución denegatoria siempre será motivada, y en ella se analizará la gestión de la licencia realizada por el candidato a la renovación y su capacidad financiera para mantener el servicio. Asimismo se examinará la evolución del sector y se determinará si</p>

	<p>la renovación de la licencia puede perjudicar la diversidad de medios y su pluralidad.</p> <p>3. En los supuestos de que no se produzca la renovación automática o se haya agotado la posibilidad de renovación, seis meses antes del vencimiento de la licencia, el órgano competente deberá haber convocado el correspondiente concurso para la adjudicación de todas las licencias que vayan a quedar libres en el mismo ámbito de cobertura. Transcurrido dicho plazo, cualquier interesado estará legitimado para instar la convocatoria que deberá producirse antes de tres meses desde la presentación de la solicitud.”</p>
Anteproyecto de 2009	<p>“28.2. Las sucesivas renovaciones de las licencias serán automáticas, y por el mismo plazo estipulado inicialmente para su disfrute, siempre que:</p> <p>a) Se satisfagan las mismas condiciones exigidas que para ser titular de ella y se hayan cumplido las establecidas para la prestación del servicio.</p> <p>b) No existan obstáculos técnicos sobrevenidos e insalvables en relación con el espectro de las licencias afectadas.</p> <p>c) El titular del servicio se encuentre al corriente en el pago de las tasas por la reserva del dominio público radioeléctrico, y de las previstas en esta Ley.</p> <p>3. Las licencias audiovisuales no se renovarán de forma automática si, en los seis meses previos a su vencimiento, otro operador solicita una de ellas y el espectro radioeléctrico necesario para este nuevo otorgamiento está agotado.”</p>
Enmiendas ReMC	<p><u>PROPONEN</u> la adición del apartado 28.2.d)</p> <p>““Las sucesivas renovaciones de las licencias serán automáticas, y por el mismo plazo estipulado para su disfrute, siempre que:</p>

	d) Se cumpla la oferta mediante la cual se obtuvo la adjudicación de la licencia.”
Texto definitivo 2010	Sólo aparecen los apartados de la a) a la c)

Tabla 3.23. Renovación de las licencias (elaboración propia).

23. Negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual	
Anteproyecto de 2005	“Art. 16.4. La transmisión de una licencia requerirá autorización previa. Esta autorización solo será otorgada cuando el solicitante acredite el cumplimiento de todos los requisitos legalmente establecidos y se subroge en las obligaciones del anterior titular.”
Anteproyecto de 2009	<p>“29.2. La transmisión y arrendamiento estarán sujetos, además, a las siguientes condiciones:</p> <p>a) Para la celebración de ambos negocios jurídicos deberán haber transcurrido al menos cinco años desde la adjudicación inicial de la licencia.</p> <p>b) Cuando se lleven a cabo con personas físicas o jurídicas nacionales de países que no sean miembros del Espacio Económico Europeo estarán sometidos al principio de reciprocidad y devengarán el pago de la tasa establecida legalmente. En atención a lo dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales de los que España sea parte, y previo informe de la autoridad audiovisual competente, el Consejo de Ministros o el correspondiente órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrán autorizar motivadamente una operación cuando dicho principio no sea satisfecho.</p> <p>c) Cuando la licencia comporte la adjudicación de un múltiplex completo de dos o más canales, no se podrá arrendar más del 50 por</p>

	100 de la capacidad de la licencia. d) En todo caso, está prohibido el subarriendo.”
Enmiendas ReMC	<u>PROPONEN</u> la adición del apartado 29.2.x) “La transmisión y arrendamiento estarán sujetos, además a las siguientes condiciones: x) Al cumplimiento de la oferta mediante la cual se obtuvo la adjudicación de la licencia.”
Texto definitivo 2010	“29.2.d) Al cumplimiento de la oferta mediante la cual se obtuvo la adjudicación de la licencia”. (Eliminan el apartado 29.2.d. del Anteproyecto de 2009 que prohibía explícitamente el subarriendo).

Tabla 3.24. Negocios jurídicos sobre las licencias de comunicación audiovisual (elaboración propia).

24. Mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural (1)	
Anteproyecto de 2005	<u>NO APARECEN</u> cuestiones sobre medidas para promover la diversidad.
Anteproyecto de 2009	<u>NO APARECEN</u> cuestiones sobre medidas para promover la diversidad.
Enmiendas ReMC	<u>PROPONEN</u> añadir un nuevo artículo: “Artículo X. Medidas para promover la diversidad 1.- Reglamentariamente el Gobierno podrá imponer a los servicios de difusión cuya oferta esté constituida por más de 20 canales, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, la obligación de incluir dentro de la misma los canales generalistas en abierto del Servicio Público Estatal de Radio y Televisión Servicio de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro .

	<p>2.- Reglamentariamente las Comunidades Autónomas podrán imponer a los servicios de difusión bajo su competencia, cuya oferta esté constituida por más de 20 canales, la obligación de incluir dentro de la misma los canales generalistas en abierto del Servicio Público Autonómico de Radio y Televisión o del Servicio de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro.</p> <p>4.- Reglamentariamente podrá imponerse a los servicios de difusión cuya oferta comprenda más de 40 canales radiofónicos o de televisión la obligación de incluir en la misma ciertos canales generalistas en abierto cuando por razones técnicas u orográficas no sea posible su recepción en condiciones de calidad aceptables por otros medios.</p> <p>5.- Las normas que impongan las obligaciones previstas en los apartados anteriores deberán ser motivadas y se limitarán a adoptar las medidas necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y la obligación que se imponga deberá ser proporcionada, transparente y periódicamente revisable.”</p>
Texto definitivo 2010	<u>NO APARECEN</u> cuestiones sobre medidas para promover la diversidad.

Tabla 3.25. Sobre un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural (1) (elaboración propia).

25. Mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural (2)	
Anteproyecto de 2005	“24.1. El contenido de sus canales radiofónicos y de televisión deberá respetar los principios y valores constitucionales, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en las relativas a publicidad, protección de consumidores y usuarios, derecho al honor y a la

	<p>intimidad y derecho de rectificación, la normativa comunitaria y los Convenios internacionales suscritos por España en estas materias y, en el caso de canales de televisión, con lo dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.</p> <p>2. Con carácter general, la programación de estos canales radiofónicos o de televisión deberá inspirarse en los siguientes principios:</p> <p>a) La objetividad y veracidad de las informaciones.</p> <p>b) La separación entre informaciones y opiniones así como la identificación de quienes sustenten estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4 del artículo 20 de la Constitución.</p> <p>c) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, sin que en ningún caso puedan promover o inducir al odio por motivos de raza, sexo ideología o religión, ni a la discriminación por cualquiera de los anteriores motivos.</p> <p>d) El respeto al derecho al honor, la fama y la intimidad personal y familiar, el derecho a la rectificación y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución.</p> <p>e) La protección de la juventud y de la infancia.</p> <p>f) El respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución.</p> <p>g) El respeto a los derechos de los telespectadores y radioyentes mediante la separación entre programación y publicidad, de forma</p>
--	---

	<p>que los contenidos de la primera no se vean influidos por intereses publicitarios.</p> <p>h) La promoción de la cultura y de las lenguas de España y, en su caso, de los intereses autonómicos y locales, con objeto de fomentar, promover y defender la identidad y la cultura propias, favoreciendo la convivencia entre todos.</p> <p>i) No incluir mensajes cifrados o de carácter subliminal en su programación.</p> <p>j) No incluir dentro de sus contenidos señales de identificación falsas o engañosas.</p> <p>3.- Los titulares de canales de televisión vendrán además obligados a suministrar a los responsables de los servicios de Guía Electrónica de Programas lo siguiente:</p> <p>a) Información sobre la programación prevista con la anticipación necesaria para que pueda incluirse en su caso en la Guía Electrónica de Programas.</p> <p>b) Una calificación orientativa de los programas incluidos en el canal, relativa a su mayor o menor idoneidad para los menores de edad. Esta información debe suministrarse con la anticipación necesaria para que la misma se incluya en la Guía Electrónica de Programas o los servicios de teletexto.</p> <p>c) Las facilidades que reglamentariamente se determinen para permitir el bloqueo de los receptores a iniciativa de los usuarios.</p>
Anteproyecto de 2009	<u>NO APARECEN</u> estas cuestiones sobre obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual.
Enmiendas ReMC	<p><u>PROPONEN</u> la adición de un nuevo artículo:</p> <p>“Artículo X. Obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual</p>

	<p>1.- Los servicios de comunicación audiovisual deberán respetar los principios y valores constitucionales, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en las relativas a publicidad, protección de consumidores y usuarios, derecho al honor y a la intimidad y derecho de rectificación, la normativa comunitaria y los Convenios internacionales suscritos por España en estas materias además de lo que establezca la normativa europea.</p> <p>2.- Con carácter general, la programación de estos canales radiofónicos o de televisión deberá inspirarse en los siguientes principios:</p> <p>a) La objetividad y veracidad de las informaciones.</p> <p>b) La separación entre informaciones y opiniones así como la identificación de quienes sustenten estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4 del artículo 20 de la Constitución.</p> <p>c) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, sin que en ningún caso puedan promover o inducir al odio por motivos de raza, sexo ideología o religión, ni a la discriminación por cualquiera de los anteriores motivos.</p> <p>d) El respeto al derecho al honor, la fama y la intimidad personal y familiar, el derecho a la rectificación y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución.</p> <p>e) La protección de la juventud y de la infancia.</p> <p>f) El respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución.</p> <p>g) El respeto a los derechos de los telespectadores y radioyentes mediante la separación entre programación y publicidad, de forma que los contenidos de la primera no se vean influidos por intereses</p>
--	--

	<p>publicitarios.</p> <p>h) La promoción de la cultura y de las lenguas de España y, en su caso, de los intereses autonómicos y locales, con objeto de fomentar, promover y defender la identidad y la cultura propias, favoreciendo la convivencia entre todos.</p> <p>i) No incluir mensajes cifrados o de carácter subliminal en su programación.</p> <p>j) No incluir dentro de sus contenidos señales de identificación falsas o engañosas.”</p>
Texto definitivo 2010	<u>NO APARECEN</u> estas cuestiones sobre obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual.

Tabla 3.26. Sobre un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural (2) (elaboración propia).

26. Función de servicio público	
Anteproyecto de 2005	<p>“Art. 31. Función de servicio público.</p> <p>1. El servicio público de radio y televisión tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; promover la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos.</p> <p>2. Esta función de servicio público comprende la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y</p>

	<p>temáticos, en abierto o codificados, así como la oferta de servicios conexos o interactivos, orientados a los fines mencionados en el párrafo anterior.</p> <p>1.3. Constituye la función de servicio público:</p> <p>a) Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos.</p> <p>b) Garantizar, la información objetiva, veraz y plural.</p> <p>c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.</p> <p>d) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso</p> <p>e) Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España.</p> <p>f) Impulsar el intercambio de la información y el conocimiento mutuo entre los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea como espacio común de convivencia.</p> <p>g) Editar y difundir canales radiofónicos y de televisión de ámbito de cobertura internacional que coadyuven a la proyección hacia el exterior de las lenguas y culturas españolas y a la adecuada atención a los ciudadanos españoles residentes o desplazados en el extranjero.</p> <p>h) Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público.</p> <p>i) Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales españolas, particularmente las audiovisuales.</p> <p>j) Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas.</p>
--	---

	<p>l) Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura.</p> <p>m) Difundir el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios.</p> <p>n) Fomentar la producción de contenidos audiovisuales europeos y en lenguas originarias españolas y promover la creación digital y multimedia, como contribución al desarrollo de las industrias culturales españolas y europeas.</p> <p>ñ) Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales.</p> <p>o) Aquellas que, mediante Ley, introduzcan las Comunidades Autónomas en orden a promover la cultura, lengua e identidad propias.</p> <p>4. Los servicios de difusión por ondas terrestres hertzianas adscritos a la función de servicio público tendrán como objetivo alcanzar la mayor cobertura posible dentro de su respectivo ámbito territorial. Asimismo deberán ofrecer de manera prioritaria las máximas facilidades posibles para el acceso a sus servicios de las personas con discapacidad.</p> <p>5. Forma parte de la función de servicio público de radio y televisión contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información. Para ello, las entidades que tengan atribuida la prestación de dicha función, participarán en el progreso tecnológico, utilizando las diferentes tecnologías y vías de difusión, y desarrollarán nuevos servicios conexos o interactivos, susceptibles de enriquecer o completar su oferta de programación, y de acercar las diferentes Administraciones Públicas a los ciudadanos.</p> <p>6. El conjunto de las producciones y emisiones de radio y televisión</p>
--	---

	efectuadas por las entidades prestadoras del servicio público deberán cumplir con las obligaciones integradas en la función de servicio público definida en la presente Ley.”
Anteproyecto de 2009	<u>NO APARECEN</u> estas cuestiones concretas sobre la función del servicio público.
Enmiendas ReMC	<p><u>PROPONEN</u> añadir un artículo nuevo:</p> <p>“Artículo X. Función de servicio público</p> <p>1. El servicio público de radio y televisión tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; promover la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos.</p> <p>2.- Esta función de servicio público comprende la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados, así como la oferta de servicios conexos o interactivos, orientados a los fines mencionados en el párrafo anterior.</p> <p>3.- Constituye la función de servicio público:</p> <p>a) Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos.</p> <p>b) Garantizar, la información objetiva, veraz y plural.</p> <p>c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.</p> <p>d) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso</p>

	<p>e) Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España.</p> <p>f) Impulsar el intercambio de la información y el conocimiento mutuo entre los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea como espacio común de convivencia.</p> <p>g) Editar y difundir canales radiofónicos y de televisión de ámbito de cobertura internacional que coadyuven a la proyección hacia el exterior de las lenguas y culturas españolas y a la adecuada atención a los ciudadanos españoles residentes o desplazados en el extranjero.</p> <p>h) Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público.</p> <p>i) Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales españolas, particularmente las audiovisuales.</p> <p>j) Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas.</p> <p>l) Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura.</p> <p>m) Difundir el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios.</p> <p>n) Fomentar la producción de contenidos audiovisuales europeos y en lenguas originarias españolas y promover la creación digital y multimedia, como contribución al desarrollo de las industrias culturales españolas y europeas.</p> <p>ñ) Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales.</p>
--	--

	<p>o) Aquellas que, mediante Ley, introduzcan las Comunidades Autónomas en orden a promover la cultura, lengua e identidad propias.</p> <p>4.- Los servicios de difusión por ondas terrestres hertzianas adscritos a la función de servicio público tendrán como objetivo alcanzar la mayor cobertura posible dentro de su respectivo ámbito territorial. Asimismo deberán ofrecer de manera prioritaria las máximas facilidades posibles para el acceso a sus servicios de las personas con discapacidad.</p> <p>5.- Forma parte de la función de servicio público de radio y televisión contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información. Para ello, las entidades que tengan atribuida la prestación de dicha función, participarán en el progreso tecnológico, utilizando las diferentes tecnologías y vías de difusión, y desarrollarán nuevos servicios conexos o interactivos, susceptibles de enriquecer o completar su oferta de programación, y de acercar las diferentes Administraciones Públicas a los ciudadanos.</p> <p>6.- El conjunto de las producciones y emisiones de radio y televisión efectuadas por las entidades prestadoras del servicio público deberán cumplir con las obligaciones integradas en la función de servicio público definida en la presente Ley.</p> <p>7.- La programación del servicio público de Radio y Televisión y en especial sus servicios informativos deberá reflejar el pluralismo político, social, ideológico, religioso y cultural de la sociedad española.</p> <p>8.- En las leyes que regulen la prestación del servicio público de Radio y Televisión se instrumentarán las medidas necesarias para garantizar la independencia profesional de sus servicios</p>
--	---

	informativos. 9- Las entidades prestadoras del servicio público de radio y televisión deberán reservar dentro de su programación espacios específicos que permitan el acceso directo de los grupos sociales y políticos significativos.
Texto definitivo 2010	<u>NO APARECEN</u> estas cuestiones concretas sobre la función del servicio público.

Tabla 3.27. Función de servicio público (elaboración propia).

Las alegaciones presentadas por la Red de Medios Comunitarios, con apoyo de sindicatos y otros movimientos sociales (se explica detalladamente en los siguientes capítulos) han servido para realizar algunos cambios en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, si bien no todos aquellos que presentaron los/as miembros de este colectivo, y teniendo en cuenta que el anteproyecto de 2005 era más favorable a los medios comunitarios y con un carácter general menos neoliberal. El resumen de cambios aceptados deriva en el siguiente cuadro:

Cambios propuestos	Aparición por primera vez de la cuestión más positiva para los medios comunitarios y/o la ciudadanía	El cambio fue aceptado
1. Reserva de frecuencias por parte de las comunidades autónomas.	Anteproyecto 2005.	No.
2. Los medios comunitarios como agentes de la pluralidad de medios.	Enmiendas ReMC.	Parcialmente.
3. Diferenciación del Tercer Sector de la Comunicación.	Enmiendas ReMC.	No.

4. Ayudas a la financiación y reducciones / exenciones de tasas.	Enmiendas ReMC.	No.
5. Licencias para regular prestadores ilegales ya existentes.	Enmiendas ReMC.	Parcialmente.
6. Nombre para denominar al Tercer Sector de la Comunicación.	Enmiendas ReMC.	Sí.
7. Definición de los medios del Tercer Sector de la Comunicación.	Anteproyecto de 2005.	Parcialmente.
8. Participación democrática de otras entidades y personas en los medios.	Anteproyecto de 2005.	No.
9. Reserva de espacio radioeléctrico.	Anteproyecto de 2005.	Parcialmente.
10. Otorgamiento de licencias.	Anteproyecto de 2005.	Parcialmente.
11. Carácter original de la licencia otorgada.	Anteproyecto de 2005.	Sí.
12. Emisión de publicidad y canal en abierto.	Anteproyecto de 2005.	No.
13. Limitación y fiscalización de las cuentas.	Anteproyecto de 2005.	No.
14. Pago de cánones o tasas.	Anteproyecto de 2005.	No.
15. Sobre el término “mercado audiovisual”	Anteproyecto de 2005.	No
16. El derecho a la diversidad cultural y lingüística.	Anteproyecto de 2005.	No.
17. Libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual.	Enmiendas ReMC.	Parcialmente.
18. Régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual de interés general.	Enmiendas ReMC.	Parcialmente.
19. Programación en cadena.	Enmiendas ReMC.	No.
20. Sobre criterios de adjudicación de licencias.	Anteproyecto 2005.	No.
21. Período de otorgamiento de licencias.	Anteproyecto de 2005.	No.
22. Renovación de las licencias.	Anteproyecto de 2005.	No.

23. Negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.	Anteproyecto de 2005.	Sí.
24. Mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural (1).	Enmiendas ReMC.	No.
25. Mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural (2).	Anteproyecto de 2005.	No.
26. Función de servicio público.	Anteproyecto de 2005.	No
Total enmiendas presentadas:	26	
Enmiendas aprobadas	3	
Enmiendas aprobadas parcialmente	7	
Enmiendas denegadas	16	

Tabla 3.28. Cuadro de enmiendas aprobadas y denegadas (elaboración propia).

Aunque en el artículo 32 se destaca que el Estado debe garantizar disponibilidad del espacio radioeléctrico para este tipo de iniciativas, eso no implica una reserva de un porcentaje del espacio radioeléctrico tal y como sí existe en otras legislaciones internacionales y recomendaciones que analizaremos más adelante. No se garantiza la supervivencia de los medios comunitarios, sino que se considera como una mera “posibilidad” (“*podrán* prestar servicios de comunicación audiovisual”, ni siquiera dice “prestarán”, que no es lo mismo). Con la praxis de las administraciones autonómicas vistas en el capítulo 3, que no conceden licencias a medios comunitarios, la “posibilidad” de prestar servicios de comunicación audiovisual puede tender alarmantemente a 0 en un futuro próximo, y no digamos ya en el momento en que se regule y haya un apagón analógico en radio. La Carta de los Derechos Humanos y la Constitución Española exigen mucho más que una “posibilidad” de que sus ciudadanos ejerzan derechos fundamentales, como la emisión de información.

Así, el capítulo 32 referido a los medios comunitarios quedó finalmente de la siguiente manera en la norma de 2010:

Artículo 32. Servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

1. Las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial.

2. La Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios.

3. La prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa. En dicho título se establecerán las condiciones que aseguren su naturaleza sin ánimo de lucro, pudiendo establecerse el uso compartido de un mismo canal así como las condiciones de dicho uso.

4. La adjudicación de la licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico disponible para la prestación del servicio. La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios.

5. La licencia en ningún caso podrá perder su carácter original de servicio de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro y no podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento.

6. Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos, si

los hubiere. La autoridad audiovisual establecerá un sistema de evaluación de gestión financiera y un registro específico para el depósito de su memoria económica. Salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica.

7. Las entidades titulares de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro deberán acreditar el pago de cuantos derechos, cánones o tasas, se deriven de su actividad.

Como podemos observar, la Ley General de la Comunicación Audiovisual discrimina arbitraria y negativamente a los medios comunitarios, imponiéndoles limitaciones cuantitativas (100.000 euros de gastos de explotación anuales en el caso de las televisiones y 50.000 euros en el caso de las radios) y cualitativas (prohíbe todo tipo de publicidad o patrocinio en su financiación).

Por otro lado, pese a establecer obligaciones especiales como la fiscalización de cuentas, no exigidas a los medios comerciales, no establece métodos de adjudicación de licencias o de financiación separados de estos últimos, violando el principio de igualdad: no puede tratarse a iguales de forma distinta, ni de forma igual a los desiguales.

Por último, destacaremos que resulta, cuanto menos, asombroso, que la acreditación del pago de cuantos derechos, cánones o tasas se deriven de la actividad audiovisual aparece en el artículo 32 dedicado al Tercer Sector de la Comunicación y no en aspectos generales de la ley. No sólo eso, sino que al contrario que en las recomendaciones internacionales y en la regulación de otros países, ni siquiera gozan de reducciones o exenciones de tasas.

*Respetando los ámbitos competenciales existentes,
tanto el procedimiento de concesión de la licencia
como la concreción del marco de actuación de los
servicios de comunicación audiovisual comunitarios
sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente
en un plazo máximo de doce meses desde la
entrada en vigor de la presente Ley.*

Disposición Transitoria Decimocuarta.

Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual

España

CAPÍTULO 4: LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y LA NORMATIVA AUDIOVISUAL HOY. CAMBIOS PRÁCTICOS.

Mientras escribimos estas líneas han pasado ya cuatro años desde que se puso en marcha la ley estatal que reconoce explícitamente a los medios comunitarios. ¿Cuál es la posición legal ahora de este tipo de medios? ¿Qué ha cambiado en la práctica? ¿Han sido esos cambios positivos o negativos?

Iremos desglosando poco a poco los aspectos que hemos considerado más relevantes y que hemos dividido en los siguientes apartados:

1. Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).
2. Desarrollo de los reglamentos reguladores del marco de actuación de los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro.
3. Autonomías que han modificado su normativa para adaptarla a la ley marco.
4. Concursos de licencias realizados.
5. Del "No" a los ataques al derecho a la comunicación ciudadana.

4.1. CREACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES (CEMA).

Puede que el CEMA, desde nuestro punto de vista y argumentado ampliamente con hechos en este epígrafe, sea el *súmmum* que ejemplifica la voluntad real política que existe en el Estado español por democratizar la comunicación y por garantizar una información hacia la ciudadanía que cumpla todos los requisitos y estándares profesionales exigidos en numerosos países –y desde luego, en la Unión Europea- relacionados con las garantías de independencia, la veracidad, la pluralidad, el derecho de acceso, la responsabilidad mediática... en definitiva, todos los aspectos relacionados con la observancia y el cumplimiento de los derechos y las libertades de expresión y comunicación reconocidos en la Constitución, así como la normativa vigente en materia de audiovisual y publicidad en los diferentes ámbitos.

El Estado español es el único país de la Unión Europea sin una autoridad audiovisual que se encargue únicamente de ser autoridad audiovisual (es decir, no incluida dentro de un llamado *superregulador*, como veremos a continuación), bien de carácter consultivo o ejecutivo. Esta laguna histórica en el campo de la comunicación parecía haberse comenzado a cambiar precisamente con la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, que contenía todo un Título (el V) dedicado a regular a un organismo de estas características y al cual llamaba Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). En esta primera norma se impelía a crear el organismo público que hiciera las veces de autoridad independiente supervisora y reguladora de los medios de comunicación audiovisuales. Tendría que garantizar el libre ejercicio de la comunicación audiovisual en materia de radio, televisión y servicios conexos; la plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos legalmente; la transparencia y el pluralismo del sector; y la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio y televisión. Además, asesoraría a las Cortes Generales, al Gobierno, a los organismos reguladores y, si se lo pidieran, a las autoridades audiovisuales independientes autonómicas. Se regulaba, por tanto, ampliamente su naturaleza, fines y régimen jurídico, funciones, potestades, facultades, órganos directivos, estatuto del personal, comité consultivo, garantía patrimonial y financiera, y control parlamentario del Consejo.

De forma particular en el caso que nos ocupa, para esta "autoridad audiovisual competente" que sería el CEMA, el artículo 32 referido a los medios comunitarios le encarga, como hemos visto anteriormente, que controle la procedencia de los fondos, ingresos y gastos de este tipo de medios, así como que evalúe su gestión financiera y disponga de un registro específico para el archivo de sus memorias económicas. Además, la autoridad audiovisual será la única que pueda permitir un aumento de los costes de explotación superiores a los que establece la ley general de la comunicación audiovisual (50.000 euros anuales en el caso de la radio comunitaria y 100.000 en el caso de la televisión).

Sin embargo, finalmente todo el Título V al que estamos aludiendo fue derogado en 2013 por la letra g) de la disposición derogatoria de la ley de 4 de junio, mediante la cual se creó la denominada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este superregulador independiente tiene que supervisar y controlar las cuestiones relativas competencia, telecomunicaciones, sector eléctrico, sector de hidrocarburos, mercado y servicio postal, seguridad aérea, sector ferroviario, arbitraje y, ahora sí, el sector audiovisual. Este ha sido el resultado final de un largo peregrinaje indeciso acerca de cómo se iba a crear el CEMA. Han sido numerosas las noticias aparecidas al respecto: desde la integración de las funciones previstas en este organismo nonato en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)⁴⁰, pasando por su creación de manera independiente⁴¹, hasta acabar en su eliminación por parte del actual Ejecutivo del Gobierno, tal y como acabamos de apuntar.

⁴⁰ Montalvo, J. *El Gobierno plantea confiar a la CMT la regulación audiovisual* (2010). Madrid: Expansión. com. Disponible en <http://www.expansion.com/2010/12/27/empresas/tmt/1293410716.html?a=b476516a8b1367d568831900aaff9c6&t=1342259324> [Recuperado el 14 de julio de 2012].

⁴¹ EFE. *Jáuregui anuncia la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales antes del verano* (2011). Madrid: El Mundo. Disponible en <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/17/comunicacion/1295261669.html> [Recuperado el 14 de julio de 2012].

La pregunta aquí, aunque no es motivo de esta tesis sino que podría dar para una investigación propia y una disertación entera, es ¿puede un organismo de estas características considerarse suficiente y verdaderamente independiente para prestar la atención necesaria a las cuestiones audiovisuales y de telecomunicaciones al estilo de otros países que sí que tienen un organismo propio y único (no mezclado con sectores con los que no tienen nada o casi nada en común)? Y más teniendo en cuenta que algunos expertos en la materia han calificado a este superregulador como un “experimento sin precedentes”, además de que han puesto en cuestión la supuesta independencia de sus expertos (Llobet, G., 2013). Por tanto, a día de hoy, lo que cabe destacar es que el audiovisual español sigue sin tener al estilo del resto de países europeos, un consejo audiovisual independiente que vele por el cumplimiento de las legislaciones establecidas en la materia. Sí que existen dos consejos audiovisuales de ámbito autonómico actualmente a pleno rendimiento: el de Andalucía (creado en el año 2005) y el de Cataluña (creado en 1996). No así ha sucedido con el de Navarra (del cual se anunció su supresión en 2011) o el de las Islas Baleares (creado en 2010 pero sin funcionamiento).

4.2. DESARROLLO DE LOS REGLAMENTOS REGULADORES DEL MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS.

La ley general aprobada hace cuatro años, en su Disposición Transitoria Decimocuarta, exhorta a los legisladores a concretar el marco de actuación de los medios comunitarios mediante reglamentos concretos que tenían que haber sido desarrollados en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, que tenían que haberse presentado en abril del año 2011.

Aunque nunca han llegado a aprobarse, al menos por el momento, sí que existen dos borradores de reglamento, es decir, dos proyectos de reales decretos elaborados por la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información (SETSI), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Uno de ellos está orientado a la

prestación del servicio (cuestiones de licencias de emisión, gestión del servicio, limitaciones presupuestarias, explotación, infracciones, etc.) y el otro se centra en las características técnicas que debían tener las emisiones. Este último resulta curioso porque establece la única restricción que, hasta el momento, la Ley General de la Comunicación Audiovisual no le había impuesto al Tercer Sector de la Comunicación: el ámbito de cobertura.

En este sentido tendríamos, por un lado, un 100% de recomendaciones y tendencias internacionales, vistos en apartados anteriores, que afirman que el servicio de comunicación comunitario ha de ser prestado sin limitaciones de cobertura. Por otro, la ley española no sólo no habla de potencia de emisión sino que además en su artículo 4 dice que *todos* los ciudadanos tienen derecho a recibir información por parte de los tres sectores. Y, sin embargo, tenemos un proyecto de Real Decreto que, aunque abandonado en un cajón (el PSOE no llegó a aprobarlo en 2011 y el PP no lo considera actualmente una prioridad según informaciones internas de la Red de Medios Comunitarios), sostiene preocupantemente que:

1. En el caso de las televisiones comunitarias, la zona del servicio no podrá ser superior en ningún caso al término municipal donde se halle el medio y en el caso de localidades de más de 100.000 habitantes, esta zona no podrá alcanzar una cobertura superior al 30% de la población del municipio. Además, sus estaciones no podrán superar una potencia radiada aparente máxima de 8W o 25W dependiendo el número de habitantes (8W para poblaciones con menos de 100.000 habitantes y 25W para poblaciones que superen ese número).
2. En el caso de las radios comunitarias, se establece la misma restricción en cuanto al término municipal y el 30% máximo de cobertura para poblaciones de más de 100.000 habitantes. También sus estaciones tendrán una limitación de potencia radiada aparente, no pudiendo superar los 25W (como idea comparativa, y salvando las distancias del uso de diferentes bandas, actualmente existen en el mercado *walkie-talkies* profesionales con esa potencia, incluso más si se se utiliza algún tipo de aparato amplificador).

Además, en este reglamento técnico se vuelve a hablar de la obligatoriedad de pagar las tasas correspondientes por reserva del dominio público radioeléctrico, así como “otras tasas o tributos que sean exigibles por las normas aplicables por las distintas Administraciones Públicas” y, sin embargo, en ningún momento se contemplan reducciones o exenciones tal y como recomiendan los organismos internacionales analizados en el capítulo anterior.

Finalmente, se impide en este reglamento que pueda haber, al menos en FM, más de una emisora comunitaria operando en la misma zona. Por tanto, ¿cómo puede justificarse la discriminación arbitraria, al hilo de la ley marco, que haya ciudadanos que no puedan estar informados por medio de los tres sectores, incumpléndose por tanto con un reglamento el artículo 4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual? ¿Y cómo puede haber una limitación en el número de medios comunitarios por zona, cuando no existe tal restricción para los medios del primer sector (públicos) o del segundo sector (comerciales)?

4.3. AUTONOMÍAS QUE HAN MODIFICADO SU NORMATIVA PARA ADAPTARLA A LA LEY MARCO.

Una vez aprobada la Ley General de la Comunicación Audiovisual, las comunidades autónomas debían adaptar sus normativas referidas a la materia audiovisual a la nueva ley marco. Por el momento, las regiones que han realizado esta acción son Canarias, País Vasco, Navarra, Galicia, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Baleares y Catalunya. Hay otras regiones que cuentan con algún tipo de proyecto de ley pero no han sido aprobados ni elevados a definitivos y, por tanto, no serán contemplados en este análisis (como Aragón).

Canarias ha sido la primera en adaptar su norma a la ley marco, con el *Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual*. En su Capítulo I, Sección 3ª regula brevemente a los medios comunitarios copiando directrices básicas también aparecidas en la ley general y destacando que las licencias se otorgarán mediante concurso público tramitado

de conformidad con las disponibilidades del dominio público radioeléctrico establecidas por la Administración General del Estado. El punto de la concesión de licencias es importante, y volveremos sobre él detenidamente más adelante, porque dependiendo de la comunidad autónoma donde nos encontremos estas afirmarán o no que es el Estado al que le corresponde una reserva de espacio disponible para los medios comunitarios, y actuarán legalmente en base a esa opinión. De hecho, el Reglamento Técnico comentado en párrafos anteriores clarificaba esta cuestión, pero como no ha llegado a aprobarse no podemos tenerlo en cuenta, aunque es importante recordar que decía, en su Artículo 8,

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas solicitarán a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones la reserva de frecuencias para un servicio concreto de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro y para un ámbito territorial de cobertura determinado.

Cabe destacar, como hecho que antecedió a la ley general estatal, que Canarias publicó en 2009 su *Decreto 89/2009, de Reglamento de concesión administrativa del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*, que marcaba un otorgamiento de 156 licencias en las islas que se adjudicarían, durante 10 años, exclusivamente a emisoras comerciales y excluyendo explícitamente a los medios comunitarios en su Disposición Adicional Segunda, en la que aludía a una posible futura regulación canaria que contemplara a este sector. Las radios comunitarias canarias, así como la Red de Medios Comunitarios, recurrieron esta normativa. El concurso se adjudicó tres años después, en abril de 2012 y numerosas empresas y colectivos utilizaron diversos procedimientos para impugnar dicho concurso (desde recursos administrativos de reposición hasta recursos judiciales directos) (Rodríguez, J. 2012), en una situación que aún a día de hoy no se ha acabado de resolver.

El País Vasco, por su parte, ha publicado el *Decreto 231/2011, de 8 de noviembre, sobre la Comunicación Audiovisual*. Dedicó su capítulo III al Tercer Sector de la Comunicación, del

que destacaremos que la prestación del servicio requiere licencia previa otorgada por el Consejo de Gobierno, mediante un concurso público conforme a las disponibilidades del dominio público radioeléctrico establecidas por la Administración General del Estado. En los dos artículos de este capítulo básicamente se dedica a copiar lo que dice la ley marco de 2010.

El País Vasco ya en su decreto de 1986 (como hemos podido observar en el Capítulo 3) dividía las emisoras en "institucionales" y "comerciales", siendo las primeras aquellas de propiedad de una institución sin ánimo de lucro y cuya finalidad fuera la promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Les podía otorgar una concesión durante tres años renovables en períodos trianuales.

En el caso de Navarra, se ha publicado el *Decreto Foral 5/2012, de 25 de enero, sobre Servicios de Comunicación Audiovisual*. En este caso sí introduce varios artículos referidos a los medios comunitarios, los cuales no recogía en la anterior legislación que queda derogada (el *Decreto Foral 336/1997, de 10 de noviembre, por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia*). El capítulo III recoge cuestiones respecto de la licencia y de la gestión financiera que son mera copia de lo ya aprobado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Aquí es importante destacar que la prestación de servicios de comunicación audiovisuales por parte de las entidades sin ánimo de lucro "estará condicionada a la previa habilitación de dominio público radioeléctrico por parte de la Administración General del Estado". Como hemos observado a lo largo de toda la tesis, y es un capítulo que además legalmente queda sin resolver a la finalización de la misma, el juego de pelota entre competencia del Estado y las autonomías, es decir, quién debe dar el primer paso, y de qué forma, para otorgar licencias a los medios de comunicación comunitarios, seguirá siendo una constante.

Galicia ha adaptado su norma audiovisual mediante el *Decreto 102/2012, de 29 de marzo, por el que se desarrolla el servicio de comunicación audiovisual radiofónica*. En el Capítulo II, Sección 3ª trata los medios comunitarios de manera bastante amplia e introduciendo aspectos

nuevos que no tienen otros decretos. Entre ellos, podemos destacar que estos medios han de difundir gratuitamente, citando su procedencia, los comunicados, notas o avisos de interés público que sean remitidos por los órganos de gobierno de las administraciones públicas y cumplir un horario de emisión que no sea inferior a cinco horas diarias.

En el caso de las licencias, la autoridad audiovisual competente de la autonomía podrá abrir un trámite de consulta para recoger solicitudes previas de licencias con las cuales dicha autoridad podrá instar a la Administración del Estado a reservar frecuencias para estos proyectos. Sin embargo, dos años después de la publicación de esta regulación autonómica aún no se ha abierto ninguna consulta al respecto.

Cantabria publicó el año pasado su *Decreto 46/2013, de 11 de julio, sobre Servicios de Comunicación Audiovisual* y en materia medios comunitarios es una copia tanto de las cuestiones básicas que marca la ley española así como el decreto vasco. Por tanto, hace una vaga descripción de la naturaleza de un medio comunitario y pone énfasis en la cuestión de licencias y la evaluación de su gestión financiera, así como las limitaciones presupuestarias que ya se preveían en la ley marco.

Extremadura reformó su legislación audiovisual a la par que Cantabria. En su caso, ese mismo mes de julio se publicó el *Decreto 134/2013, de 30 de julio, de comunicación audiovisual* que introduce un capítulo algo más extenso y un poco más trabajado que el resto de comunidades autónomas que ya hemos visto. La primera curiosidad que encontramos con respecto del resto de normativas analizadas, es que en su primer artículo afirma que este tipo de medios podrán ser patrocinados “en los términos establecidos en la legislación que sea de aplicación”. No debemos olvidar que la ley general prohíbe cualquier tipo de comunicación comercial (incluido el patrocinio), pero parece que Extremadura hace un intento de dedicar unas líneas por sí, en un momento dado, pudiese haber algún tipo de patrocinio que no contraviniera a la ley superior. Además, explicita que las licencias otorgadas lo serán por un plazo de quince años renovables (igual que para las emisoras comerciales, lo novedoso es que lo repite y

enfatisa para todas, también para las comunitarias). Por último para destacar, menciona la obligatoriedad de los medios comunitarios de inscribirse en el mismo registro que el resto de sectores (Registro Extremeño de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual), concretando así la cuestión (que la mayoría de las autonomías, ni el propio Estado, aún lo ha resuelto) de en qué lugar deben los medios comunitarios depositar las memorias económicas y los informes de auditoría externa exigidos por la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

La Rioja adaptó su normativa autonómica con el *Decreto 64/2012, de 9 de noviembre, por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual y el registro de prestadores*, donde contempla a los llamados “prestadores de servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro”. No hay aspectos novedosos al respecto, más allá de que este legislador autónomo también se limita a copiar lo establecido en la ley española, aunque como en el caso de Extremadura contempla que sea la Consejería con competencias en materia de telecomunicaciones la que fiscalice y evalúe la gestión financiera, así como los hipotéticos permisos para superar los gastos de explotación especificados en la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

La única autonomía que ha aprobado su normativa con rango de ley (y no de decreto autonómico) ha sido Baleares, con su *Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de las Illes Balears*. Sin embargo, sólo contiene un breve artículo (el 23) referido a los medios comunitarios sin apenas nada que destacar, salvo la obligatoriedad de la inscripción de estos medios junto con el resto de sectores en el registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual de las Illes Balears.

La otra región que tenía ya desde 2005 una normativa audiovisual también con rango de ley es Cataluña (de la que ya hemos hablado en el capítulo dedicado a la legislación antes de la ley general de 2010, por lo que aquí no ahondaremos más en ello). Han modificado aspectos de esta ley con posterioridad a ese año, la última en febrero de 2012, pero en lo referente a

todo aquello relacionado con el Tercer Sector de la Comunicación no han realizado ningún cambio.

Para cerrar este subapartado nos parece interesante destacar la labor en materia de aprobación de su ley audiovisual que está realizando la autonomía de Andalucía. Aquí los poderes legislativos se encuentran en fase de discusión y redacción de un proyecto de ley que está siendo participado por la ciudadanía a través de diversos foros, siendo el más destacado el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Los colectivos ciudadanos han realizado hasta la fecha numerosos foros presenciales, seminarios, debates, encuentros provinciales, campañas en internet, vídeos, materiales educativos... donde han podido (y todavía pueden, puesto que el proceso actualmente está en marcha) compartir impresiones y opiniones acerca de qué tipo de ley audiovisual quieren para su comunidad. Las principales demandas que realizan a la misma son las siguientes (Prieto Sánchez, C. 2013):

a) Regulación: existencia de unas normas claras y válidas para todos los sectores de la comunicación que “permitan la construcción de un sistema de medios equilibrado y justo entre los diferentes operadores” (*ibid*).

b) Medios comunitarios y Tercer Sector: exigencia de que un tercio del espacio radioeléctrico esté destinado a la sociedad civil, además de que las frecuencias radioeléctricas no puedan ser objeto de operaciones comerciales (venta, subasta, arrendamiento o traspaso) puesto que dichas frecuencias deben considerarse como una propiedad de la sociedad civil y no del operador concesionado.

c) Educación: la alfabetización mediática y las enseñanzas sobre los procesos en los medios de comunicación debe estar presente en todo momento para poder generar una opinión pública informada, crítica y participativa.

d) Derecho de acceso: los medios del primer sector, el sector público, deben estar obligados a “ofrecer gratuitamente espacios de participación directa a la sociedad civil para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a difundir ideas, informaciones y opiniones” (*ibid.*)

e) Diversidad funcional: por un lado, aquellas personas que padezcan una discapacidad visual o auditiva deberán poder disfrutar igualmente de la comunicación audiovisual gracias a las posibilidades tecnológicas que actualmente existen. Por otro, los poderes públicos y los prestadores de servicios audiovisuales deberán fomentar las buenas prácticas para que dichas personas no se vean reflejadas en las comunicaciones de forma que sean discriminadas o mostradas de forma que pueda repercutir negativamente en la imagen de estos colectivos.

4.4. CONCURSOS DE LICENCIAS REALIZADOS.

Tras la aprobación en 2010 de la LGCA y habiendo cambiado o no sus legislaciones autonómicas, son varias las autoridades audiovisuales de diferentes regiones que han convocado concursos de licencias. La pregunta es: dado que ahora mismo el Estado español cuenta con una legislación audiovisual que reconoce desde hace dos años y medio a los medios provenientes del Tercer Sector de la Comunicación, ¿cuántos proyectos sin ánimo de lucro han obtenido una licencia para operar en el espectro disponible?

El caso más paradigmático de aprobación de convocatorias de concurso público para prestar servicio de radiodifusión probablemente sea el balear. Tan sólo seis meses después de la aparición de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, el 24 de septiembre de 2010, el Govern sacó a concurso un total de 72 licencias para operar en radio DIGITAL (13 de las cuales eran de titularidad pública). La tecnología sobre la que tenían que operar las emisiones era el DAB (Digital Audio Broadcasting) y la novedad en medios comunitarios era que parte de las licencias (1 o 2 por demarcación) quedaban destinadas y reservadas a emisoras educativas, culturales y sin ánimo de lucro. En este caso, el concurso se resolvió sin otorgar

ninguna licencia de servicio comunitario porque las entidades sin ánimo de lucro que se presentaron no alcanzaron la puntuación mínima de 60 puntos en la *Propuesta Tecnológica* del concurso.

En este sentido, hay organismos internacionales (como el Community Media Forum of Europe) que ya han advertido de que la tecnología DAB es más inalcanzable a nivel económico y técnico para pequeños proyectos de comunicación audiovisual como aquellos locales o comunitarios.⁴² Y la no obtención de licencias en esta tecnología aún estando, por una vez, reservadas al Tercer Sector de la Comunicación es una muestra de ello.

El 4 de abril de 2011 se convocó en Castilla y León el concurso para adjudicar un total de 138 licencias de radio en FM. Dos años después, en junio de 2013, esta comunidad suspendía su propio concurso a raíz de un recurso interpuesto por un empresario de la comunicación (Antonio Ángel Durán Moreno) en el que solicitaba la declaración de nulidad de pleno derecho (es decir, porque se consideraba que había algún tipo de irregularidad en el procedimiento).

En febrero de 2012 Navarra anunció su concurso de 44 licencias en FM para radios comerciales. No realizaba ningún tipo de distinción o reserva para medios comunitarios, no obstante, de entre los 142 proyectos radiofónicos presentados por 26 entidades diferentes, dos de estas entidades fueron sin ánimo de lucro. Finalmente se concedieron, en marzo de 2013, 42 de esas 44 licencias (dos de ellas quedaron desiertas por falta de ofertas), otorgándose a un total de 17 organizaciones en 15 localidades diferentes, y obteniendo tres licencias dos entidades sin ánimo de lucro (la Asociación Cultural Xorroxin Elkartea –dos licencias- y la Asociación ONG Pausu Media).

⁴² Sennit, A. *Community Radio on Europe want to keep FM, prefer DRM+ not DAB+* (2011). Netherlands: Media Network. Disponible en <http://blogs.rnw.nl/medianetwork/community-radio-in-europe-want-to-keep-fm-prefer-drm-not-dab> [Recuperado el 15 de julio de 2012].

El 14 de noviembre de 2011, la Comunidad Valenciana publicó la convocatoria del concurso para 31 licencias de radio FM después de que la edición de 2007 se declarase desierta (lo veremos con más detenimiento en los siguientes párrafos). Al concurso se presentaron 121 entidades de las cuales ocho no fueron admitidas por defectos de forma o algún incumplimiento de los requisitos aparecidos en las bases. A la escritura de este análisis aún no se había resuelto este concurso de licencias.

En Canarias, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios convocó su concurso público de licencias radiofónicas el 28 de julio de 2010 y se resolvió el 4 de abril de 2012, casi dos años después. En él se repartían un total de 156 licencias, y se presentaron 90 personas físicas y jurídicas, y sólo una asociación sin ánimo de lucro propiamente dicha estaba intentando acceder a una de las licencias que finalmente no le concedieron.

Los medios comunitarios, en general, y la Red de Medios Comunitarios, en particular, siempre han denunciado que, en muchas ocasiones, la adjudicación de licencias se hace de manera un tanto arbitraria o favoreciendo a ciertos solicitantes (generalmente a las grandes empresas o conglomerados mediáticos) sobre otros (Meda, M: 2009). Este último concurso canario es un buen ejemplo de esta práctica, puesto que dos meses después de la resolución del concurso la Fiscalía presentó ante los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife una denuncia por un posible tráfico de influencias sobre los cinco integrantes de la mesa de valoración que asesoró al Gobierno canario en el reparto de las licencias⁴³. La denuncia contenía dos aspectos muy significativos: por un lado dicha mesa aprobó unos criterios diferentes a los de las bases publicadas para puntuar las ofertas presentadas y, yendo aún más lejos, algunas de las empresas que obtuvieron su licencia no enviaron las propuestas en las fechas exigidas, de tal manera que en la resolución aparecen empresas adjudicatarias en el Anexo III que no aparecen en la relación de solicitantes del Anexo II.

⁴³ EFE. *La fiscalía denuncia el tráfico de influencias en el concurso de FM de Canarias* (2012). Las Palmas de Gran Canaria: elcorreo.com. Disponible en http://www.elcorreo.com/agencias/20120621/fiscalia-denuncia-traffic-influencias-concurso_201206211615.html [Recuperado a 30 de agosto de 2012].

A la escritura de este análisis, aún continuaba abierto el proceso penal abierto contra los miembros de la Mesa de Valoración que puntuaron los proyectos de radio FM, mientras que el concurso aún no se ha anulado.

Finalmente, Galicia también convocó un concurso de 84 licencias en 2012 inmediatamente después (tan solo dos meses) de declarar desierto el anterior (cuyas razones veremos más adelante). Sin embargo, en el caso de los medios comunitarios, este concurso está impugnado desde una emisora comunitaria gallega (Cuac FM) porque en sus bases dejaba fuera a las radios comunitarias sin ánimo de lucro, agotando con dichas 86 licencias el espectro radioeléctrico de la región y teniendo que esperar, en algún caso, a que el Estado realice una nueva planificación del espectro radiofónico (que no parece que vaya a ocurrir en breve). Con estas especificaciones de concurso, es obvio que se resolvió sin ninguna licencia para las radios comunitarias gallegas, aunque el resultado de la impugnación del concurso aún no ha salido a la escritura de este análisis.

Hay que tener en cuenta también que en estos cuatro años desde la publicación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual o bien se han anulado concursos que ya estaban convocados, o bien se han declarado desiertos bajo diferentes pretextos. Nos encontramos con los casos de Valencia, Galicia, Murcia y Euskadi, y también con el muy reciente caso de la ciudad autónoma de Melilla

El caso de Valencia ha estado empañado por la falsificación de firmas. Al igual que el concurso de Murcia, fue publicado en 2007 y se ponían a disposición de los solicitantes un total de 31 licencias. No se supo nada más hasta septiembre de 2011 cuando el Consell declaró desierto el concurso alegando razones legales (resumiendo mucho, su resolución tardía podría haber viciado la selección de los aspirantes), con la intención de realizar un nuevo concurso acorde con la nueva normativa estatal (el que ya hemos comentado que se

realizó en 2011).⁴⁴ Antes de que el Consell tomara esta decisión, no obstante, se inició una investigación por parte del juzgado de Instrucción número diez de Valencia con la denuncia de delitos de falsedad documental en cincuenta proyectos presentados por ocho empresas, en los cuales se afirmaba que las firmas de dos ingenieros que avalaban los proyectos técnicos habían sido falsificadas. Finalmente el caso se archivó en 2012 tras entender que los hechos denunciados no estaban acreditados y no se podían atribuir a ninguna persona.

Un mes después del anuncio del concurso de Navarra, que como hemos visto se resolvió exitosamente para algunos medios comunitarios, el 12 de marzo de 2012, el País Vasco publicó las bases para el concurso de 34 licencias de radio FM en Euskadi. Igual que en Navarra, estas bases se dirigían exclusivamente al ámbito comercial y no se reservaban frecuencias para medios comunitarios. En este caso, se presentaron 55 entidades de las cuales quedaron excluidas cuatro por diversas razones. Las organizaciones sin ánimo de lucro que optaron a una licencia fueron un total de 14, un número muy elevado en comparación con otros concursos y mostrando la tendencia irremediable del desarrollo y empuje que tienen los medios comunitarios. Sin embargo, nos hemos quedado con la duda de cómo se hubiera resuelto puesto que en diciembre de 2012 el Gobierno vasco anuló el concurso debido a, según sus argumentos, que encontrándose próximo a un cambio de gobierno “la resolución de un concurso tan importante y sensible habría tenido que producirse en uno de los últimos consejos de este gobierno, dando lugar a interpretaciones” (Idoia Mendia, portavoz del Gobierno vasco de entonces, en declaraciones a la prensa).

El concurso de licencias de Galicia, convocado en pleno verano, el día 30 de julio de 2012, puso a disposición de los solicitantes un total de 84 licencias comerciales y en cuyas bases se excluyó explícitamente a los "servicios comunitarios de comunicación audiovisual sin ánimo

⁴⁴ Arabí Valencia, F. *El Consell anula el concurso de FM tras una investigación judicial a un aspirante* (2011). Valencia: levante-emv.com Disponible en <http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/09/13/consell-anula-concurso-fm-investigacion-judicial-aspirante/839144.html> [Recuperado el 31 de agosto de 2012].

de lucro". Esta declaración por parte de las autoridades gallegas incumplió totalmente el artículo 4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en el cual se especifica que todo ciudadano ha de tener el derecho de recibir información por parte de medios tanto públicos, como comerciales, como comunitarios.

Galicia anuló su concurso en marcha el pasado 18 de mayo de 2012, aludiendo que era incompatible con su propio decreto publicado en marzo de 2012, de tal manera que lo resolvió declarando desierto el procedimiento.⁴⁵

El mismo día que la Xunta anulaba su concurso, hacía lo propio la Comunidad de Murcia. Aunque en este caso no se ha llegado a modificar la normativa autonómica, las 51 licencias que se ofrecían se han declarado también desiertas con el objetivo, según el Gobierno regional, de volver a convocarlo ya adaptando su marco normativo a la norma estatal es decir, al nuevo contexto legal y también económico. Y efectivamente, esta nueva convocatoria se realizó en febrero de 2013, y aún no se ha efectuado su resolución.

La última región, en este caso ciudad autónoma, que ha convocado concursos de licencias para FM ha sido Melilla. En noviembre de 2013 se publicó el primero, ante el cual la Red de Medios Comunitarios (ReMC) interpuso un recurso al considerar que el concurso convocado era contrario a la normativa estatal y al principio de legalidad, generando una situación de inseguridad jurídica a los posibles postulantes del concurso y especialmente a los adjudicatarios que podrían perder la licencia adjudicada en caso de recurso judicial. La entidad consideraba que al referirse tanto el anuncio como las cláusulas explícitamente a “emisoras comerciales” (el anuncio se denominó *Concesión de licencia de servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter comercial*

⁴⁵ D.D. *La Xunta anula el concurso para conceder 84 licencias de radio por incompatible con una norma estatal* (2012). Santiago: El Faro de Vigo. Disponible en <http://www.farodevigo.es/galicia/2012/05/19/xunta-anula-concurso-conceder-84-licencias-radio-incompatible-norma-estatal/649890.html> [Recuperado el 31 de agosto de 2012].

– *emisoras comerciales*) se impedía que las licencias a concurso pudieran ser destinadas a servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, a pesar de estar reconocida esta categoría de emisoras en la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

En este contexto, Melilla anuló las bases del concurso a primeros de marzo de 2014 y justo un mes después publicó un nuevo anuncio, esta vez con la denominación *Concesión de licencias de servicios de comunicación audiovisuales, en su modalidad de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la ciudad autónoma de Melilla*. A la escritura de este análisis aún no se ha resuelto el concurso.

Autonomía	Decreto adaptado a la LGCA	Concurso de licencias resuelto tras la LGCA	Resultado del concurso	Licencias otorgadas a entidades sin ánimo de lucro
Galicia	Decreto 102/2012	Sí (abril 2011)	Anulado	---
		Sí (julio de 2012)	Resuelto con adjudicaciones (impugnado desde una radio comunitaria)	0
Asturias	No	No	---	---
Cantabria	Decreto 46/2013	No	---	---
Euskadi	Decreto 231/2011	Sí (marzo de 2012)	Anulado	---
Navarra	Decreto Foral 5/2012	Sí (febrero de 2012)	Resuelto con adjudicaciones	3
La Rioja	Decreto 64/2012	No	---	---
Castilla y León	No	Sí (abril de 2011)	Suspendido por recurso interpuesto	---
Aragón	No	No	---	---
Catalunya	Modificación de la Ley 22/2005 en febrero de 2012	No	---	---
Extremadura	Decreto 134/2013	No	---	---

Madrid	No	No	---	---
Castilla-La Mancha	No	No	---	---
Comunidad Valenciana	No	Sí (publicado en 2007 pero resuelto en septiembre de 2011)	Se declaró desierto. Denuncia de falsificación de firmas con caso archivado	---
		Sí (noviembre de 2011)	No resuelto aún	---
Baleares	Ley 5/2013	Sí (radio digital, septiembre de 2010)	Resuelto con adjudicaciones	Reserva de espectro para medios comunitarios, ninguno se presentó al concurso
Murcia	No	Sí (publicado en 2007 pero anulado en mayo de 2012)	Anulado	---
		Sí (febrero de 2013)	No resuelto aún	---
Andalucía	No	No	---	---
Canarias	Decreto 80/2010	Sí (julio de 2010)	Resuelto con adjudicaciones	0
Ceuta	No	No	---	---
Melilla	No	Sí (noviembre de 2013)	Anulado. Recurso interpuesto por la ReMC	---
		Sí (abril de 2014)	No resuelto aún	---

Tabla 4.1. Decretos y concursos de licencias FM tras la LGCA (Elaboración propia)

4.5. DE LA NEGATIVA LEGAL A LA PERSECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN CIUDADANA.

Han sido numerosos los medios comunitarios del Estado existentes que han optado por tomar la iniciativa y solicitar por escrito una licencia de emisión al amparo de la Disposición Transitoria Decimocuarta de la Ley. En ella se dice que:

Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.

Con estos argumentos, el Tercer Sector ha acudido a las administraciones competentes a solicitar las autorizaciones de emisión, siendo en todos los casos las respuestas negativas, en la mayoría de los casos alegando que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información únicamente ampara a las televisiones comunitarias, pero no a las radios; y también afirmando las autonomías que hasta que el Estado no planifique licencias única y exclusivamente de carácter comunitario este tipo de proyectos no pueden optar a licencias de carácter comercial cuando, en realidad, no existe actualmente ninguna ley vigente que impida a una administración autonómica otorgar una licencia dentro de un concurso habitual a una radio comunitaria.

Además de las negativas constantes ante estas peticiones, la administración pública ha pasado directamente a realizar amenazas de cierre y de multa a diversos proyectos de comunicación sin ánimo de lucro, destacando los casos asturiano y catalán.

En Asturias el proceso ha sido un tanto peculiar. En los últimos años, las radios libres que operan en esa autonomía (Radio Sele, Radio QK y Radio Kras) han recibido cartas provenientes de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones en las que se las amenazaba con multas de 500.000 euros si no dejaban de ejercer su actividad. Aunque dicho así, no es del todo exacto. En realidad, las comunidades de vecinos de los edificios que albergan las antenas y los equipos de las radios libres han recibido cartas en las que se les especificaba que la emisión realizada desde dichas antenas era ilegal y que, por tanto, debían identificar ante la Jefatura a los propietarios del equipamiento (las radios libres) bajo multa de hasta 500.000 euros si incumplían este requerimiento. Es decir, parece clara la intención de provocar el miedo entre los vecinos que ayudan a estas radios sin ánimo de lucro a emitir, probablemente con el objetivo de provocar conflictos entre los propios ciudadanos o que éstos obliguen a las radios a quitar de allí sus antenas.⁴⁶

Las radios asturianas hicieron público el acoso que estaban sufriendo nada más recibir las cartas y recibieron un apoyo numeroso tanto de las radios ciudadanas del Estado español como de federaciones nacionales (la Red de Medios Comunitarios, ReMC) e internacionales (el Community Media Forum of Europe, CMFE y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC). Por el momento no hay novedades en este caso. Sin embargo, en abril de 2014 Radio Nava recibió un expediente sancionador desde el Estado central (Secretaría del Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) por el cual se les amenazaba con multas de hasta 500.000 euros por la utilización de frecuencias radioeléctricas sin autorización y la instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización. En el mismo período, no consta que este tipo de expedientes se hayan abierto en la región asturiana a radios comerciales ilegales con ánimo de lucro.

⁴⁶ Coordinadora de Radios Libres. *Manifiesto de apoyo a las radios asturianas* (2012). Asturias: Radio QK. Disponible en <https://docs.google.com/document/d/1SE2c86J4DNBtrBUtSPUh8ScDnvEdDXIES4wI8HpPHK0/edit> [Recuperado el 31 de agosto de 2012).

En Cataluña podemos dividir los problemas actuales en dos tipos: la exigencia de cierre de Radio Contrabanda y de LaTele y las interferencias provocadas por emisoras ilegales comerciales y con ánimo de lucro a Radio Bronka y a Radio Pica.⁴⁷

Radio Contrabanda se enfrenta a la posible pérdida de su dial tras recibir en los últimos años una ordenanza de la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de Cataluña, organismo dependiente de la Consellería de Cultura de la Generalitat, en la que se exigía el cierre del centro emisor bajo amenaza de multa de entre 100.000 y 200.000 euros si no lo realizaba en el plazo de veinte días tras la recepción de la notificación. Por el momento, las amenazas no se han visto cumplidas.

En el caso de LaTele, durante el año 2013 ya sufrió el precintado dos veces de sus equipos, y dos veces volvieron a emitir y a estar en el aire. Ahora, en 2014, continúan las amenazas por parte de la Generalitat de diversas multas y nuevo precintado de equipos, la última que consta es de julio y su cuantía asciende a 500.001 euros de infracción.

Por otro lado, la desprotección que sufren las radios comunitarias y libres es causa directa de la indefensión que sufren en el dial y que causa en muchos casos interferencias en su dial de otras emisoras piratas que emiten con más potencia. En Barcelona, este es el caso de Radio Pica, de Radio Bronka y de Radio Línea IV. Dentro de esta contingencia la emisora autogestionada que se encuentra en peor situación es Radio Pica, puesto que para librarse de las interferencias de la comercial Amb2 decidieron desplazarse en el dial causando una interferencia a Cadena Ser en una de sus emisiones legales, de tal manera que tuvo que enfrentarse a una multa inicial en 2010 de 60.000 euros interpuesta por el Ministerio de Industria.

⁴⁷ Sáez, I., Vargas, J. *Ofensiva contra las radios de Barcelona* (2012). Madrid: Periódico Diagonal. Disponible en <http://www.diagonalperiodico.net/Ofensiva-contra-radios-de.html> [Recuperado el 31 de agosto de 2012]

Existen historias de radios comunitarias sencillas y complejas, grandes y pequeñas, historias de radios comunitarias que han generado encuentros y que, en el más sencillo de los casos, sirven y han servido para entretener y mantener la cultura.

[...] Una radio comunitaria, por el simple hecho de existir, está generando una transformación en tanto que surge como reacción o resistencia a lo establecido.

Ana Tamarit (2012). *Las radios comunitarias: entre el compromiso y el espejismo de lo alternativo.*

CAPÍTULO 5: PRESENCIA DE LA CIUDADANÍA POR EL DERECHO A EMITIR. EXPERIENCIAS DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS

5.1. ANTECEDENTES INMEDIATOS.

Tanto en el panorama mundial como en el Estado español existe un Tercer Sector de la Comunicación conformado por los medios comunitarios sin ánimo de lucro y gestionados de manera horizontal por los colectivos sociales y la ciudadanía. Dichos medios se han convertido en plataformas de acceso a la comunicación para quienes no tienen voz y en espacios para la expresión y la participación ciudadana. También amplían el derecho a la comunicación, incluyendo el derecho a ser escuchado y no sólo a ser informado, en un

contexto en el que los medios de comunicación juegan un papel esencial en la construcción de una sociedad democrática y plural (García García, 2008: p. 169).

Si nos remontamos a los orígenes de estos proyectos en Latinoamérica, hemos de destacar la Radio Sutatenza (Colombia), una radio comunitaria que surge en 1947 desde la iniciativa del sacerdote José Joaquín Salcedo. Nace con los objetivos de alfabetizar y formar a los campesinos de la zona, utilizando la excusa de la radiodifusión como una herramienta de educación no formal. Tan solo un año después de su fundación, en 1948 consiguió su licencia de emisión.

También, en esta misma década, surgen en Bolivia las primeras radios del pueblo con la forma de radios mineras. Los trabajadores de las minas y los habitantes de los lugares donde estas se ubicaban y sus alrededores compraban equipos con su exiguuo salario para ejercer la libre expresión en su idioma original (quechua y posteriormente también aymara). Las radios mineras sirvieron de canal de difusión para las protestas y las luchas sindicales de este sector, teniendo su punto álgido en 1965 con los mineros de Milluni (La Paz). El gobierno de aquel entonces, el régimen dictatorial de René Barrientos Ortuño, entró con el ejército en la zona para aplacar los actos sindicales que estaban llevando a cabo los trabajadores. La emisora Huayna Potosí, propiedad de dichos trabajadores, estaba transmitiendo los acontecimientos en cadena nacional, por lo que uno de los objetivos de la ofensiva era acallar sus ondas (Montoya, V., 2014). Para evitar que la emisora fuera bombardeada por parte de la Fuerza Aérea Boliviana, los mineros retuvieron a cuatro soldados y los ataron a las antenas de radio (*ibíd*). Sin embargo, esta estrategia no funcionó y el ejército bombardeó igualmente toda la zona.

En el caso de Europa, la primera emisora de este continente (y que aún sigue en funcionamiento) fue Radio Student, fundada en Ljubljana (Eslovenia) en el año 1969. Pocos años después se haría lo propio en el Estado español, aunque existen diferentes puntos de vista sobre qué proyecto pudo ser el primero en emitir. Si atendemos a investigadores como José Emilio Pérez Martínez

La radio libre española nace a finales de la década de 1970 y se desarrolla durante la primera mitad de la década siguiente, de ahí que se hayan situado los límites cronológicos en los años de 1975 y 1986, para permitir analizar los años de mayor efervescencia en la historia del movimiento, su nacimiento, expansión y estabilización. (Pérez, J.E., 2011: p. 2).

Además, el caso español puede que fuera más paradigmático en el sentido de que en estos años de inicio las radios que conformó la ciudadanía podrían no ser estrictamente comunitarias en el sentido que le otorgamos actualmente (y que describimos ampliamente en esta tesis), sino que eran

Emisoras sociales, las de partido (o políticas) y las independientes (o epicúreas). La primera de las categorías incluiría a la gran mayoría de emisoras activas en España en aquellos años. Serían las emisoras con conciencia social, conscientes de pertenecer a un movimiento por la libertad de emisión, provenientes muchas de ellas de movimientos como el vecinal o ecologista y en relación, por lo tanto, con muchos de los movimientos sociales del momento.

El segundo tipo, el de radios políticas o de partido, sería aquel en el que se enmarcarían las emisoras promovidas, subvencionadas o mantenidas por partidos políticos. En España este tipo de emisoras no fue demasiado común, al contrario que en Italia. [...]

El último tipo de emisora lo conformarían las emisoras independientes o epicúreas, aquellas que conformadas normalmente por grupos de amigos se constituían únicamente por el placer de emitir (ibíd: pp. 7-8).

Respecto de los diferentes puntos de vista del inicio de emisiones, Miguel Aguilera (1985) afirma que Radio La Voz del Pobre (Madrid) comenzó sus emisiones en 1976, mientras que

José Emilio Pérez Martínez (2011) afirma que el primer dato en este sentido de fuente primaria (entrevista a uno de los fundadores del proyecto, "Pepe") muestra que las emisiones de esta radio comenzaron en la Nochebuena de 1977 y no en 1976. La confrontación es interesante porque lo que sí está documentado es que Radio Maduixa (Granollers, Barcelona) comenzó sus emisiones en el año 1977, con lo que no sería lo mismo si Radio La Voz del Pobre comenzó a emitir en 1976 o a finales del 1977.

En cuanto a las televisiones comunitarias, la primera en emitir en el Estado español fue RTV Cardedeu (Cardedeu, Barcelona) con emisiones irregulares desde el 7 de junio de 1980 y regulares rompiendo el monopolio de la televisión pública española en marzo de 1982 (a pesar de los intentos de cierre de la emisora por parte de las autoridades).

Dos décadas más tarde, diferentes proyectos de comunicación comunitaria sintieron la necesidad de establecer vínculos y redes de intercambio de contenidos, trabajo y experiencias a nivel estatal, marcados también por una necesidad imperante del contexto de aquellos años: la posible regulación audiovisual de este tipo de medios (y también de los otros sectores de la comunicación) a través de una legislación general que en democracia nunca antes se había dado en este campo. Ciertamente es que ya existía este tipo de iniciativas de una forma más o menos formal a nivel autonómico, como la Federación Aragonesa de Radios Libres (FARL, 1991) o la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM, 1997), pero la articulación de los medios del Tercer Sector de la Comunicación en el Estado español tuvo su punto álgido a finales de la década del 2000, y su germen estuvo constituido en este primer momento por radios comunitarias y algún proyecto audiovisual, aunque más adelante se unieron medios alternativos con otras plataformas.

5.2. LA LLEGADA DEL NUEVO MILENIO.

A principios del nuevo milenio comenzó a reactivarse el movimiento de los medios comunitarios tras una disgregación producida en la década de 1990. El primer encuentro de calado tuvo lugar el 13 y 14 de diciembre de 2003 en Leganés, Madrid, bajo el título *Porque otra comunicación es posible. Encuentro en el Tercer Sector: la comunicación alternativa*. En este primer núcleo de la reactivación del movimiento los medios fueron puramente radiofónicos. Este hecho sería una constante durante todo el proceso de participación y creación de la organización estatal: fueron las radios libres y comunitarias quienes vertebraron el movimiento desde el principio hasta el final, aunque después cobraran cada vez más importancia también las televisiones y otro tipo de soportes.

Después de otros encuentros similares, como el de Gijón en 2004, en los que principalmente se trataban temas de intercambio de producciones, formación en comunicación, renovación tecnológica y trabajo de género en los medios, y se tenían los primeros debates sobre las cuestiones legales que afectaban a este tipo de medios, el año paradigmático en la organización a nivel estatal de este movimiento fue el 2005. El 30 de septiembre y los días 1 y 2 de octubre se realizaron las *Primeras Jornadas Internacionales de Redes Comunitarias* en Madrid, organizadas por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM), y a las que acudieron proyectos con otros soportes, como la televisión e internet. En dichas jornadas, varios participantes decidieron poner en marcha una plataforma común estatal y organizada que bautizaron como la Red Estatal de Medios Comunitarios o REMC (García García y Báez, 2011). Es en este encuentro, además, cuando comenzaron a gestarse grupos de trabajo con la intención de ir descentralizando funciones entre sus integrantes para fortalecer a la red.

Tras este primer encuentro, el segundo tuvo lugar en Salamanca los días 21, 22 y 23 de abril de 2006 y fue organizado por Radio Oasis. Los participantes ya habían asentado todo el abanico de soportes por lo que se reunieron radios y televisiones comunitarias, prensa

independiente, proyectos diversos de información alternativa e incluso organizaciones sociales.

El tercer encuentro de medios comunitarios tuvo lugar tan sólo poco más de medio año después, el 10, 11 y 12 de noviembre de 2006, en Toledo, y fue organizado por Onda Polígono. Una de las características que se puede destacar en este caso es que se realizó un trabajo previo los meses anteriores, mediante las listas de correo electrónico a las cuales los organizadores pidieron que se enviaran propuestas para poder trabajar en los grupos de trabajo y en las asambleas. Además, y de forma muy importante, se sentaron las primeras bases sobre la definición y el funcionamiento de la REMC, aunque en este preciso momento aún no se sabía si la red se iba a constituir o no legalmente como entidad con personalidad jurídica. Se estableció que sus integrantes tenían que ser colectivos de base, entidades sin ánimo de lucro que promovieran medios o proyectos relacionados con la comunicación. También se fraguó la figura de los colaboradores, definidos como organizaciones y movimientos sociales en general, además de estudiantes, profesorado universitario y personas interesadas en medios alternativos, ciudadanía y comunicación.

El cuarto encuentro tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2007 en Bilbao, y fue organizado por Tas-Tas Irratia. El trabajo previo que se realizó durante todo el año que medió entre las jornadas de Toledo y las de Bilbao fue ingente debido al contexto audiovisual y a las leyes que se discutían entonces en el Estado español, y se hizo evidente la necesidad de determinar el carácter jurídico y organizativo que iba a poseer la REMC. El Grupo de Legislación y Derecho a la Comunicación, existente desde los primeros encuentros, había mantenido intensos debates sobre aspectos legales audiovisuales y posibles tomas de posición que siempre chocaban con la limitación de no contar con una estructura clara para el grupo que venía trabajando informalmente desde el año 2005.

Los organizadores y participantes del cuarto encuentro, por ello, realizaron dos documentos que se consideraron fundamentales para el debate y la toma de decisiones en este aspecto: una

encuesta online previa, sobre si la REMC debía o no organizarse con personalidad jurídica y estatutos, y una ponencia sobre las ventajas e inconvenientes que tendrían las diversas formas de organización que podía tomar el colectivo. Resumiendo mucho, la encuesta arrojó unos resultados en los que más de la mitad de los participantes de años anteriores preferían que la REMC se constituyera legalmente y que, sobre todo, este paso sirviera para actuar como interlocutor ante las administraciones en las cuestiones legislativas que estaban a punto de decidirse.

Tras intensos debates, los participantes se decantaron por la opción de adquirir una personalidad jurídica y, en este proceso, se eliminó la sigla de “Estatat”, quedando como nombre definitivo de la red la denominación Red de Medios Comunitarios, más conocida por sus siglas ReMC. El trabajo de la ReMC, que está reflejado en internet, se puede encontrar, básicamente, en las siguientes páginas: <http://www.medioscomunitarios.net> (información de tipo general), <http://legislacion.medioscomunitarios.net> (información especializada en la legislación audiovisual que afecta al Tercer Sector) y <http://tecnologia.medioscomunitarios.net> (información específica sobre cuestiones técnicas audiovisuales).

Los dos años que siguieron al encuentro de Bilbao fueron intensos en trabajo de redacción de los estatutos y conversaciones a través de las listas de correo del Tercer Sector. Dicha redacción se realizó de manera muy colectiva gracias a las herramientas tecnológicas y a la reunión que tuvo lugar el 23 de mayo de 2009 en Madrid. Fue un día después, el 24 de mayo, cuando la ReMC nació con la personalidad jurídica de Federación de Asociaciones, se decidió que su sede social fuera la ciudad de A Coruña y se aprobaron sus estatutos, quedando como órganos decisorios y de actuación la Asamblea General, la Comisión de Coordinación y las Comisiones o Grupos de Trabajo (Organización, Legislación y Derecho a la Comunicación, Área de las Mujeres, Finanzas, Comunicación y Formación). Las asociaciones fundadoras de la federación fueron 18 , número que creció hasta 38 al momento de la escritura de este estudio de caso (26 entidades asociadas y 12 entidades colaboradoras).

Entidad	Tipo	Frecuencia	Región
Aire Comunicación	Educomunicación	Internet	Madrid
Artegalia	Radio y TV	Internet	Alicante
Cuac FM	Radio	103.4 FM	A Coruña
ECO Leganés	Radio	Internet	Madrid
Komunikatuz	Productora	Internet	Bilbao
Onda Color	Radio	107.3 FM	Málaga
Onda Merlín Comunitaria	Radio	Internet	Madrid
Onda Polígono	Radio	107.3 FM	Toledo
Radiópolis	Radio	88.0 FM	Sevilla
Radio Almenara	Radio	106.7 FM	Madrid
Radio Enlace	Radio	107.5 FM	Madrid
Radio Filispim	Radio	93.9 FM	Ferrol
Radio Hispanidad	Radio	87.5 FM	Huelva
Radio Iris 7	Radio	100.0 FM	Burgos
Ràdio Klara	Radio	104.4 FM	Valencia
Radio Kras	Radio	105.0 FM	Asturias
Radio Oasis	Radio	106.4 FM	Salamanca
Radio Pimienta	Radio	104.9 FM	Canarias
Radio Ritmo	Radio	99.9 FM	Madrid
Radio San Borondón	Radio	Diversos diales	Canarias
Radio Vallekas	Radio	107.5 FM	Madrid
RTV Cardedeu	Radio y TV	Internet y TDT	Barcelona
URCM	Radio	Federación	Madrid
Radio Écija	Radio	93.4 FM	Sevilla
Nosotras en el Mundo	Radio	Internet	Madrid

Radio Siberia	Radio	91.8 FM	Vitoria-Gasteiz
Radio Roncudo	Radio	106.1 FM	Corme
La Tele	TV	Internet y TDT	Barcelona
Radio Geneto	Radio	107.5 FM	Canarias
Radio Popular Canaria	Radio	Internet	Canarias
Tele K	TV	Internet y TDT	Madrid
Radio Malva	Radio	104.9 FM	Valencia
Radio Guiniguada	Radio	105.9 FM	Canarias
Radio Valdivielso	Radio	106.0 FM	Burgos
Onda Quinto Pino	Radio	Internet	Madrid
Radioactividad	Radio	106.9 FM	Granada
Ágora Sol	Radio	Internet	Madrid
VM Radio	Radio	Internet	Alicante

Tabla 5.1. Proyectos integrados en la ReMC (ReMC y elaboración propia).

De entre los fines de la ReMC podríamos destacar los siguientes:

- La promoción y defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con especial referencia a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación como derechos fundamentales claves para el ejercicio y desarrollo de otros derechos.
- El fomento de la paridad, la igualdad de género y la promoción de una comunicación no sexista.
- La defensa del derecho a crear medios de comunicación y difusión comunitarios (prensa, radio, TV, Internet, etc.) para el fomento del pluralismo y de la opinión pública libre.
- El desarrollo del papel de la comunicación y de los medios de difusión como espacios

abiertos para la participación ciudadana en la vida pública.

- La promoción y desarrollo de medios, servicios y redes de difusión libres, independientes, plurales y sin ánimo de lucro, destinados al acceso directo y la expresión popular en la sociedad de la información y la comunicación.
- La promoción del Tercer Sector de la Comunicación como un servicio público de interés general, y la reivindicación del espacio público de comunicación para garantizar su existencia y desarrollo.

En cuanto a la composición, existen dos tipos de medios asociados en la ReMC: las entidades asociadas y las entidades o personas colaboradoras. La categoría de entidades asociadas alude a asociaciones legalmente constituidas, que conformen medios de comunicación del Tercer Sector (definidos en el artículo 2 de los estatutos de la entidad) o que dediquen su actividad, en parte o en su totalidad, al ejercicio del derecho fundamental de la comunicación, así como a todas las federaciones territoriales compuestas por estas asociaciones cuyo ámbito geográfico de actuación se centre en una nación o región del Estado español. La categoría de entidades o personas colaboradoras se refiere a aquellas personas físicas o jurídicas que lo soliciten y sean admitidas por la Asamblea, teniendo derecho a voz pero no a voto en dicho órgano.

La ReMC, como entidad legalmente constituida, ha organizado hasta 2014 un total de siete asambleas, siendo siempre obligatoria la celebración de una asamblea ordinaria dentro de los cuatro primeros meses del año. Las Comisiones o Grupos de Trabajo son autónomos, tanto en actuaciones como en financiación (hasta el momento la ReMC se autofinancia a través de las cuotas de sus asociadas, fijadas en 100 euros anuales, y también ha participado en Proyectos Europeos como el Leonardo), pueden reunirse cuando así lo estimen conveniente, y sus integrantes aprovechan las oportunidades de las nuevas tecnologías para estar en permanente comunicación y coordinar las actuaciones que se llevan a cabo.

Además de las asambleas propias de la ReMC, los medios comunitarios del Estado español han organizado otros tres encuentros más después del de Bilbao de 2007: uno en Barcelona, organizado por la Assemblée per la Comunicació Social-La Tele, durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2009, otro en Alicante, organizado por Artegalia Radio durante los días 22, 23 y 24 de octubre de 2010 y otro en Coruña, organizado por CUAC FM durante los días 11, 12 y 13 de abril de 2014.

5.3. EXPERIENCIAS EMBLEMÁTICAS DE MEDIOS COMUNITARIOS LOCALES.

Para tener un mapa completo de qué son y qué han sido los medios comunitarios en el Estado español, resulta indispensable destacar una serie de casos concretos tanto de televisión como de radio que permitan acercarse aún más a esta realidad. Cada uno de estos casos tiene una característica particular o un "punto fuerte" que las lleva a ser referente estatal en su trabajo diario. Además, se ha tenido en cuenta para su selección:

- a) Que estuvieran representados tanto televisiones como radios.
- b) Que en el caso de las televisiones hubieran superado el tránsito de la tecnología analógica y a la digital.
- c) Que estuvieran ubicados en diferentes territorios.
- d) Que fueran miembros de la Red de Medios Comunitarios.
- e) Que hubieran participado activamente en algún cambio legislativo actual que les afectase.

5.3.1. RTV Cardedeu: una información local estrella.

Tal y como hemos apuntado un poco más arriba, fue realmente la televisión comunitaria de Cardedeu (Barcelona) la que rompió el monopolio de la televisión pública entre los años 1980 y 1982, siendo la primera televisión local del Estado. Los inicios fueron humildes:

Empezó con una emisora, dos cámaras en blanco y negro, una mesa de mezclas, un magnetoscopio U-Matic y un magnetoscopio editor. El equipo en total costó un millón y medio de pesetas, que se financiaron por suscripción popular con 400 participaciones de 5.000 pesetas cada una. Solo se podía comprar una participación por persona para evitar que la acumulación en pocas manos obligase a cambiar su filosofía. (El País, 11 de junio de 1990).

Como una constante en la historia de los medios comunitarios, estos inicios (1980) no estuvieron exentos de los precintos realizados por la Guardia Civil y de emisiones irregulares, hasta que por fin en 1982 comenzó la difusión de manera regular. Los objetivos de las personas fundadoras eran claras:

"No somos una televisión privada, somos la televisión verité", afirma Jaume Rodri, director de RTV Cardedeu. Y por verité entiende el ser una televisión hecha por y para Cardedeu, sin ninguna vinculación con el Ayuntamiento ni otras instituciones. "Nos debemos solo al pueblo", sentencia. (El País, 3 de abril de 1983).

Lo que ha destacado de esta experiencia en todos estos años fue su cuidado informativo semanal, denominado *Cardedeu Informatiu*. Estuvo emitiéndose durante 32 años, siendo el más veterano de la televisión después del de TVE, hasta que el 14 de enero de 2013 no pudo continuar por problemas económicos. También son puntas de lanza de la información la retransmisión en directo de los Plenos municipales o los programas *Batallitas* y *Borregos y carquinyolis*.

5.3.2. Tele K: entre la lucha política y la formación audiovisual.

La televisión comunitaria de Madrid, por su parte, comenzó a emitir una década después de que los catalanes rompieran el monopolio de la televisión pública del sistema de medios español. De una forma parecida a la de RTV Cardedeu, en sus inicios lanzaron el sistema de suscripción popular mediante bonos de ayuda, en la que participaron asociaciones locales, vecinos y comerciantes de Vallecas.

Dentro de este amplio proyecto audiovisual, destaca la Escuela de Vallecas Televisión, donde antes de la crisis económica podían formarse anualmente más de 300 personas desempleadas en materias de internet, diseño gráfico y televisión. Esta formación ocupacional estaba financiada por la administración regional y por el Fondo Social Europeo, pero por falta de fondos cerró el 21 de diciembre de 2012.

Con el apagón analógico y el paso necesario al formato digital, los gastos de Tele K y el calvario legislativo se dispararon y el 18 de octubre de 2011 se fue a negro, recuperando una mermada emisión el 16 de enero de 2012 en el canal 30 de la TDT de Madrid.

5.3.3. Cuac FM: el gobierno autonómico en los tribunales.

Esta emisora comunitaria comenzó a emitir en 1996 en la ciudad de A Coruña y actualmente puede escucharse en esa ciudad en la 103.4 FM. Entre su programación destacan los programas dedicados a la música local (con su ya referente anual concurso de maquetas de nuevos talentos), su utilización tanto del gallego como del castellano para la emisión y también el informativo con el juego de palabras *Ar de Coruña*.

Una de las cuestiones más recientes que interesan mucho de este proyecto es la lucha legal que han llevado a cabo con motivo del último reparto de licencias por parte de la Xunta de

Galicia, la cual excluía explícitamente a las emisoras comunitarias de presentarse al concurso:

Quedan fuera del ámbito de este concurso los servicios de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sin ánimo de lucro de acuerdo a lo previsto en la sección 3ª del capítulo segundo del Decreto 102/2012, de 29 de marzo en concordancia con el artículo 32 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. (Bases que regulan el concurso público, 2012: p. 2).

Ante esta situación, la emisora presentó recursos contra la oferta realizada por la Xunta y realizó una campaña de mecenazgo ciudadano para realizar una doble acción: por un lado, impugnar el concurso primero por la vía administrativa y después por la judicial, y segundo, presentarse igualmente al concurso por si seguía su curso (ya que la justicia en el Estado español es lenta). Efectivamente, el concurso continúa impugnado y admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y las tres licencias que correspondían a la zona donde se presentaba la emisora CUAC FM fueron otorgadas a Radio Marca, Cope e Intereconomía.

5.3.4. Onda Color: dentro de un proceso de regulación autonómico.

Esta emisora comunitaria malagueña comenzó en el barrio de Puerto de la Torre en el año 1993 con el nombre Radio Atalaya, más tarde se denominó Onda Puerto Radio y finalmente fue trasladada en 2008 a Palma-Palmilla, una de las zonas más deprimidas de la ciudad. Aglutina a más de 20 entidades sociales que hacen su programa semanal.

Onda Color integra, junto con otros colectivos y también otras emisoras comunitarias, como Radiópolis (Sevilla), el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Durante meses la emisora ha colaborado y llevado un peso importante de la elaboración de propuestas para la futura Ley Audiovisual de Andalucía y el futuro Plan de Impulso del Sector

Audiovisual Andaluz que la Junta de Andalucía prevé aprobar en este año 2014.

Las demandas de los involucrados en la comunicación comunitaria y libre, además, no solo se centran en el Tercer Sector de la Comunicación sino que entienden que el sector público no cuida adecuadamente el derecho de acceso de la ciudadanía a sus medios:

Algunas organizaciones piden ese derecho y ello da pie a que se les entreviste un día. Se debe crear un bloque de programación propia que dé entrada a las organizaciones sociales y que puedan participar en la elaboración de guiones y en la elección de los temas. (Alejandro Perales, entrevista en eldiario.es, 26/05/2013).

Estos son solo algunos pequeños ejemplos de cómo el trabajo de las emisoras comunitarias va más allá que la mera ejecución del derecho a comunicar, sino que mediante diversas acciones y grupos de trabajo también realizan proyectos políticos, formativos o de exigencia del cumplimiento de las leyes.

5.4. NUEVOS RETOS Y CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS.

La actual crisis económica, institucional y periodística ha contribuido a una revitalización sin precedentes de medios y experiencias comunicacionales gestionadas por movimientos sociales, ciberactivistas y organizaciones no lucrativas. Si la llegada de la democracia supuso un importante impulso para este tipo de proyectos, la *indignación* política de los últimos años ha contribuido a revitalizar un tercer sector de la comunicación en abierto desafío a unas estructuras políticas, económicas y culturales a las que se considera en exceso alejadas de los intereses de las mayorías. Este nuevo repunte de los medios comunitarios adquiere plena visibilidad a partir del estallido del 15M en mayo de 2011, un movimiento en el que la

comunicación alternativa, al amparo de los avances tecnológicos, ha ocupado un lugar central tanto en la definición de una agenda política propia, como a modo de repertorio de lucha a fin de activar nuevas alianzas entre individuos y colectivos de la sociedad civil.

En este contexto, junto con el investigador Alejandro Barranquero, presentamos en el reciente IV Congreso AE-IC "Espacios de comunicación", celebrado del 21 al 24 de enero de 2014 en Bilbao, un trabajo que proponía una primera aproximación al papel que las radios comunitarias están jugando en la cobertura de las movilizaciones ciudadanas que arrancan a partir del estallido del 15M, para lo cual examinamos dimensiones como el papel de las tecnologías en la redefinición del *newsmaking*, las diferencias de enfoque entre medios alternativos y convencionales, o cuestiones relativas a la repercusión social de estas acciones. Para ello, la observación y la búsqueda documental se combinaron con la ejecución de un conjunto de entrevistas estructuradas a los responsables de estas coberturas.

¿Por qué son tan importantes estas coberturas? Son las primeras coordinadas y a gran escala entre diversas emisoras comunitarias a raíz del ciclo de movilizaciones que irrumpe en mayo de 2011 con el movimiento de los *indignados* y que en los tres últimos años parece haberse diversificado en distintos frentes: las acciones por el derecho a la vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o las *Mareas* organizadas por campos profesionales o intereses sectoriales. Son estrategias apoyadas en buena medida en el poder de los nuevos soportes digitales e interesa analizar de qué manera los medios ciudadanos del Estado español han aunado voluntades y esfuerzos para retratar, mediante la articulación de programas y coberturas conjuntas, la magnitud de las protestas.

En el estudio realizado junto al colega Barranquero partíamos de la hipótesis de que desde finales de la década de 2000, y a partir del aprovechamiento de nuevos soportes informativos *online*, se han estrechado las estrategias colaborativas entre los medios libres y alternativos tradicionales, agrupados muchos de ellos dentro de la Red de Medios Comunitarios, pero también existiendo nuevas plataformas que emergen a raíz de estos movimientos. El 15M, al

igual que otros estallidos producidos desde 2011, pueden ser interpretados como “movimientos comunicacionales” puesto que la comunicación ha jugado en ellos un rol central en el conjunto de aspectos que a continuación se enumeran:

- Definición de una agenda política en la que destacan objetivos comunicacionales como la transparencia informativa, la democracia deliberativa, el derecho a la comunicación, la cultura libre y el *copyleft*, el cuestionamiento de los medios masivos tradicionales, etc.
- Uso intensivo de redes tecnológicas comerciales (*Facebook*, *Twitter*) y libres, federadas y autogestionadas (*Lorea*, *N-I*).
- Búsqueda de visibilización en los grandes medios públicos y privados-comerciales.
- Mecanismos de toma de decisiones de carácter horizontal por medio del diálogo en las asambleas.
- Creación de medios independientes propios (*Ágora Sol*, *TomalaTele*, etc.).
- Fuerte apoyo de los medios comunitarios y alternativos ya existentes.
- Amplia participación de ciudadanos anónimos en la cobertura y difusión de las movilizaciones.
- Apoyo intenso de periodistas independientes, colectivos de ciberactivistas y hacktivistas, y laboratorios de experimentación digital (*MediaLab Prado*).

Hasta la fecha señalada, el Tercer Sector de la Comunicación tan solo había actuado en red para el intercambio de experiencias y programación (por ejemplo, con el informativo diario *Más Voces*), o para la constitución de asociaciones regionales o estatales de medios comunitarios, como la propia ReMC. Sin embargo, en los últimos años se observa una transformación profunda que atañe a la creación de nuevas alianzas y políticas informativas en red, un hecho ligado al empleo intensivo de nuevas herramientas tecnológicas que facilitan el intercambio horizontal, como el *streaming*, la telefonía móvil o el apoyo de los medios sociales (*social media*). De ahí que coincidamos con Javier García (2013: pp. 124-125)

cuando señala que Internet se ha constituido como el principal motor para el desarrollo de “proyectos informativos para distribución en red de las radios libres y comunitarias del estado, contribuyendo al desarrollo de una nueva fase de coordinación”.

Las acciones coordinadas en red son la mejor manera de eliminar uno de los principales lastres que los medios del Tercer Sector llevan arrastrando desde su nacimiento. Nos referimos el imaginario social que atribuye erróneamente que todos ellos cumplen la norma de las 3 “p”; es decir, son pocos, pequeños y pobres. A este respecto consideramos que “muchos medios pequeños” en coordinación se convierten en “uno grande”, a partir del momento en que son capaces de sumar sus audiencias, ampliar su difusión en las redes sociales e incrementar la participación ciudadana en el proceso de producción de contenidos.

Aunque raramente valorados como actor central de las insurrecciones ciudadanas (Downing, 2008: p. 41), los medios comunitarios están jugando en los últimos años un papel vital no sólo como recurso informativo, sino, y sobre todo, como movimientos sociales en sí mismos, puesto que cuentan con una agenda política al margen de los valores y conductas dominantes, nacen con vocación de permanencia, y activan repertorios de lucha autónomos, además de establecer relaciones de complicidad, pertenencia o confianza con otros colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Es más, esta misma dimensión de estar alerta, dar voz y trabajar coaligados a otros colectivos es la que confiere sentido e identidad a buena parte de los medios alternativos y ciudadanos del Estado español.

5.5. EL RETROCESO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ESPAÑA Y LOS NUEVOS MEDIOS E INICIATIVAS CIUDADANAS.

Actualmente el Estado español está sufriendo una serie de retrocesos relacionados con la libertad de información y expresión, llamando incluso la atención de organismos internacionales, como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE),

que el pasado 1 de abril de 2014 emitió un comunicado condenando las agresiones de policías a periodistas en las últimas manifestaciones. La desprotección de la profesión periodística en general y del derecho a la comunicación en particular, sin un marco jurídico adecuado que proteja los derechos de los profesionales de la comunicación y la información, sumado a un escaso conocimiento y sensibilización de la importancia que juega el periodismo en la democracia por parte de autoridades y profesionales, están provocando violaciones de derechos y la imposibilidad del ejercicio de la comunicación de la ciudadanía en condiciones de igualdad y equidad.

Las nuevas tecnologías, y con ellas la inmediatez de la llegada de información a los hogares sin necesidad de pasar por ningún filtro, están mostrando las contradicciones de los discursos oficiales tanto de la política convencional como de los medios tradicionales. Son un buen ejemplo de esto los vídeos en *streaming* de medios alternativos o ciudadanos en tiempo real mostrando unos hechos que las autoridades niegan al día siguiente en la portada de los diarios más vendidos o de los matinales más escuchados.

El Tercer Sector de la Comunicación no es más que una respuesta de la sociedad civil organizada a los desmanes de la desregulación. La desregulación de lo audiovisual en nuestro país no se ha traducido en una inmensa amalgama de pluralidad, diversidad y competencia, sino más bien, en todo lo contrario. La creación de oligopolios y la connivencia entre el poder político y el mediático ha borrado de un plumazo el carácter de servicio público del espectro radioeléctrico, mercadeando con el derecho a la comunicación de la ciudadanía, impidiendo su acceso a los medios y constriñendo la participación y la democracia. La legislación audiovisual que ha existido y/o que existe está muy dispersa y es muy compleja y diversa, incluso tiene en muchas ocasiones politizadas las decisiones técnicas que se toman al respecto. Por ejemplo, el apagón analógico televisivo en este Estado se realizó el 3 de abril de 2010. Mientras la mayoría de los partidos políticos se quejaban de la prisa con la que se estaba tramitando la Ley General de la Comunicación Audiovisual, los medios de comunicación recogían en diciembre de 2009 la siguiente declaración del diputado socialista Óscar López:

“El sector audiovisual *necesita* que la ley esté en vigor antes del encendido digital” (la cursiva es nuestra).⁴⁸ ¿La razón? El mismo día 3 de abril caducaban las primeras licencias de televisión privada, otorgadas a Sogecable, Telecinco y Antena 3. Con la nueva ley, las renovaciones se realizaban automáticamente, hecho que no hubiera permitido la anterior normativa audiovisual. Finalmente la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de abril y las licencias quedaron renovadas sin más trámite y sin dar opción a otros posibles operadores en esta primera fase.

Pero las prisas no son buenas, y a veces el poder judicial responde a los excesos. En este caso concreto, el pasado 6 de mayo de 2014 el Tribunal Supremo obligó al cierre de 9 canales (por el momento) al considerar que el Gobierno de Zapatero repartió las licencias en 2010 de forma irregular y sin realizar un concurso público.

Este es solo uno de los últimos ejemplos de *herencia concesionaria*, la cual viene determinada por el período previo a la democracia, que provocó un retraso importante en la regulación audiovisual de todo el Estado. Como hemos comentado ya, el hecho de que las concesiones en materia audiovisual se realicen de forma opaca y decidida solo por los gobiernos de turno ya ha sido descrito ampliamente por autores como Enrique Bustamante (2006), que las califica como realizadas “en función de las coyunturas y los amigos políticos” (p. 136).

Después de la publicación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, es difícil decir que la situación ha mejorado: el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales ha sido *absorbido* por un superregulador único en su especie denominado Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no existe ningún reglamento regulador del marco de actuación de los medios comunitarios, no todas las autonomías han modificado su normativa para adaptarla

⁴⁸ PSOE (2009). *El PSOE señala que la ley ha de entrar en vigor antes del encendido digital y destaca el esfuerzo de consenso*. Disponible en <http://www.psoe.es/ambito/cordoba/news/index.do?action=Print&id=423730> (Recuperado el 17 de septiembre de 2014).

a la ley marco (sí lo han hecho Canarias, Euskadi, Navarra, Galicia, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Baleares y Catalunya), y sólo un concurso de licencias (Navarra) ha otorgado permisos de emisión a entidades sin ánimo de lucro (Xorroxin Irratia y Asociación ONG Pausu Media). Y, nuevamente, ningún gobierno autonómico ni estatal ha regularizado emisiones de televisiones comunitarias.

En el caso andaluz, la ventana abierta a una regulación ha despertado viejos anhelos y nuevas esperanzas. Al no tratarse como una reforma legal cualquiera, la propuesta de abrir a las organizaciones sociales el debate sobre la futura Ley de Comunicación Audiovisual en Andalucía a través de ciertos mecanismos de participación ha servido de acicate para que muchas lanzaran propuestas transformadoras, dando traslado a las demandas de la ciudadanía. Desde que a finales de 2013 la Junta de Andalucía constituyera la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía (MOISA), muchas organizaciones, entre ellas el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, han venido trabajando una serie de propuestas muy concretas para debatir en torno a esta Mesa. Entre ellas, y lejos de peticiones particulares (en el Foro están representados más de 40 agentes entre medios comerciales, locales, comunitarios, ONG de cooperación internacional, sindicato de periodistas, investigadores, universidades, colectivos sociales...), se ha propuesto un Consejo Audiovisual Andaluz integrado por organizaciones sociales, que tengan poder efectivo de control y sanción en caso de incumplimiento de normas deontológicas, así como una independencia real del poder político. Esta propuesta es importante, ya que lejos de medidas técnicas de reparto o impulso económico, buscan asegurar la participación de la ciudadanía en la gestión de la comunicación desde lo público, requisito, afirman, sin el cual no será eficaz ninguna otra reforma.

Además, el Foro ha propuesto a la Junta de Andalucía que sea este renovado Consejo Audiovisual Andaluz de carácter ciudadano el responsable de elegir el reparto de las licencias, no como en la actualidad -que se realiza desde el propio Ejecutivo andaluz- en función a un nuevo requisito: redistribuir las licencias otorgadas por la Administración Central, de manera

que se busque un mapa comunicativo equitativo en atención a los tres tercios. Uno para las privadas comerciales, otro para las públicas y otro para las comunitarias. De la misma forma, la educación en medios de comunicación (desde su consumo a su apropiación, aprendizaje técnico y gestión) pasa a ser una piedra angular sobre la que pivotan los esfuerzos para democratizar los medios en Andalucía. ¿De qué serviría tener acceso a los medios si no podemos transformar la realidad desde ellos, si repetimos los mismos discursos y nos convertimos en altavoces que solo legitiman lo que queremos cambiar? Para ello es necesario educar en la comunicación.

La puesta en marcha de la MOISA ha revolucionado a las organizaciones sociales, que han emprendido un proceso de apropiación y concreción de demandas sobre el derecho a la comunicación que debe ser atendido por el gobierno andaluz. Pese a los límites que impone la Ley General de la Comunicación Audiovisual, no hay que olvidar que el nivel de competencias de las Comunidades Autónomas es alto y su política audiovisual tiene capacidad para transformar un mapa comunicativo más propio del pasado que de los derechos que demanda la ciudadanía del siglo XXI. Y, a pesar de este nivel alto de decisión autonómico, las propuestas descritas no se ven suficientemente reflejadas en las “Bases del Texto del Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía” remitido recientemente por la Junta de Andalucía y que podrían suponer una oportunidad perdida en la creación de un referente legal a nivel estatal en un momento crítico donde la ciudadanía demanda participación con mayúsculas.

Muy probablemente el/la lector/a recuerda la reciente propuesta del partido político Podemos acerca de consensuar mecanismos de control público de los medios de comunicación para garantizar “la libertad de prensa, sin condicionantes de las empresas privadas o la voluntad de partidos políticos”.⁴⁹ Estas declaraciones han levantado numerosas polémicas en los medios

49. Europa Press (2014). *Pablo Iglesias propone regular los medios de comunicación a través de mecanismos de control público*. Disponible en http://www.eldiario.es/politica/Pablo-Iglesias-comunicacion-mecanismos-publico_0_277523127.html (Recuperado el 7 de julio de 2014).

convencionales y en las tertulias tanto televisivas como radiofónicas. Lo que a lo mejor el/la lector/a no recuerda es que estas propuestas no son nada nuevas y que la profesión periodística a través de diversas asociaciones y sindicatos llevan años (al menos una década) reclamando cuestiones como la separación de los grupos financieros de los comunicativos, medios públicos al servicio de los ciudadanos e independientes de los gobiernos de turno, limitar la concentración de medios, instaurar organismos independientes (consejos audiovisuales) que regulen, vigilen y sancionen las informaciones y comunicaciones o el aumento de la protección laboral y de la libertad de los periodistas en el ejercicio de su trabajo. Recordemos, en este sentido, el Estatuto del Periodista Profesional de 2004 y la Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC) de 2010, ambos textos propuestos por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) para su discusión por los grupos parlamentarios, debate que obviamente no se ha visto realizado ni en la política gubernamental ni en la legislativa.

Esta falta de regulación y apuesta por una autorregulación que no parece funcionar en demasía, provoca una precariedad endémica en la profesión periodística que afecta a toda la sociedad, como sintetizó muy bien el lema de los periodistas de hace ya unos años que decía “Mi precariedad es tu desinformación”. Al hilo de esta absoluta inestabilidad laboral nos encontramos con 11.151 empleos perdidos y 284 medios cerrados desde 2008 según los datos de la Asociación de la Prensa de Madrid de 2013, por no hablar de sondeos recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas y/o Metroscopia que sitúan al periodista entre las profesiones peor valoradas por la ciudadanía. Ambos factores han provocado el nacimiento de numerosos proyectos colectivos: en un ámbito más profesionalizado y generalmente integrado por periodistas despedidos podemos destacar los medios *La Marea*, *eldiario.es*, *Tmex.es*, *9exili.com*, *Revista Mongolia*, *Infolibre*, *Alternativas Económicas*, *Jot Down* o *FronteraD*. Y en un contexto más alternativo y/o comunitario cabe citar proyectos como *Ágora Sol Radio*, *Madrid15m.org*, *Tomalatele*, *Ión Radio*, *Mitjans en Lluita* o *Fotogracció*n. No tendríamos páginas suficientes para citar a todas las personas que están haciendo un esfuerzo para sacar

adelante una comunicación ciudadana, contrastada y veraz, así que no tenemos más remedio que limitar nuestra cita solo a algunos.

Son precisamente estos periodistas desposeídos y expulsados del sistema tradicional de medios los que, ante la urgencia del momento y con la facilidad que otorgan las nuevas herramientas, emprenden el camino para recuperar un periodismo riguroso y con vocación de servicio público.

Si bien ya hemos señalado la relación existente entre participación, democracia y medios de comunicación, la reciente sentencia (apuntada en el Resumen preliminar) sobre el bloqueo al Parlament de Catalunya sirve de ejemplo -que podríamos calificar de histórico- y sienta las bases legales sobre lo apuntado con anterioridad. Esta sentencia (de julio de 2014) absuelve a casi una veintena de ciudadanos acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado y otro de atentado a la autoridad por cercar el Parlament catalán con una manifestación y realizar una confrontación directa en la calle con los diputados para protestar contra la sesión parlamentaria de ese día que estuvo dedicada a los recortes económico-sociales. La sentencia supone un alegato de la libertad de expresión y derecho de reunión, y dice así:

Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de las personas y grupos para que

*los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar.*⁵⁰

Así de contundente se muestra la relación entre la participación en democracia y el bloqueo en el acceso al derecho a la comunicación en la exposición de motivos de esta resolución firmada por los magistrados Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel.

Tras esta decisión judicial podemos constatar que la imposibilidad de la ciudadanía de participar en el audiovisual a través de medios propios y de visibilizar sus voces y demandas exige también de realizarlas a un nivel de igualdad con los medios comerciales, de equidad en su poder de difusión.

Esta sentencia, además, pone de relieve el fracaso del sistema audiovisual actual y de la función social de los medios de comunicación así como de la autorregulación. El histórico expolio del espacio público de emisión y comunicación orquestado desde las esferas de poder político y económico en nuestro país ha dado como resultado una privatización absoluta del mismo y una desregulación en la que en ausencia de normas, el más poderoso siempre impone sus reglas.

En la temática concreta que nos ocupa y que estamos trabajando -las normativas audiovisuales-, formaciones políticas como Izquierda Unida, PSOE o Podemos han llevado en sus propuestas electorales iniciativas que buscaban un cambio del orden audiovisual establecido en mayor o menor medida, y con mayor o menor acierto. Sin embargo, son las plataformas ciudadanas las que están impulsando iniciativas legislativas y demandas propias del siglo XXI. Desde el control en la propiedad de los medios, pasando por una distribución del espacio radioeléctrico en tres tercios, a las vías de financiación o la independencia de los órganos de control y la participación de la ciudadanía en su gestión, iniciativas como el Foro

⁵⁰ España. Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 31/2014 de 7 de julio.

Andaluz, del que hemos hablado ampliamente en este artículo, abren no solo un debate público sobre el derecho a la comunicación de la ciudadanía, sino que intentan poner en la agenda pública este debate, sacándolo de las barricadas de las universidades y medios comunitarios. Este es el logro de estas plataformas y su éxito dependerá, como ha ocurrido en Argentina, de que la ciudadanía sea constante en sus reivindicaciones, en su apropiación.

La diversidad y pluralismo en la radiodifusión es el principal objetivo de cualquier marco regulatorio de radiodifusión democrático. Esto implica la existencia de medidas efectivas para impedir la concentración en la propiedad de los medios, garantizar la expresión de una diversidad de contenidos y perspectivas en los medios y reconocer una diversidad de formas jurídicas en la propiedad de los medios, finalidad y lógica de funcionamiento, con tres sectores o modalidades de radiodifusión diferenciadas: público-estatal, privado-comercial y social-sin fines de lucro.

AMARC (2009). “Principios regulatorios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria.

CAPÍTULO 6: TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN LAS LEGISLACIONES EUROPEAS Y LATINOAMERICANAS

En este capítulo, y después de haber analizado con minuciosidad los inicios, desarrollo y decisión de redacción final de los artículos referidos a los medios comunitarios explícitamente en la Ley General de la Comunicación Audiovisual española, vamos a proceder a comparar el tratamiento del Tercer Sector de la Comunicación en las legislaciones europeas y latinoamericanas. Como ya hemos comentado en la introducción de esta tesis, consideramos objeto de estudio para esta comparación aquellas legislaciones que cumplan con las siguientes premisas:

-Que en el texto de su ley general nacional recojan o nombren explícitamente en algún artículo o sección a los medios de comunicación comunitarios.

-Que, cumpliendo con esta primera característica, en el caso europeo fueran los cinco primeros países que estuvieran presentes en la primera clasificación de países de Europa y medios comunitarios que ha realizado el Community Media Forum of Europe (CMFE) en 2012; y en el caso Latinoamericano se encuentren en los cinco primeros puestos de la clasificación, también de 2012, del investigador João Malerba.

Puesto en el ranking del CMFE o de Malerba	País	¿Consta en su legislación menciones específicas a los medios comunitarios?
1	Noruega	Sí
2	Dinamarca	Sí
3	Países Bajos	No
4	Austria	No
5	Suecia	Sí
6	Alemania	Sí
7	Irlanda	Sí
8	Reino Unido	Sí
9	Finlandia	No
10	Suiza	Sí
10 (empatados en puntos ambos países)	Francia	Sí
1	Argentina	Sí
2	Uruguay	Sí

3	Bolivia	Sí
4	Ecuador	Sí
5	Venezuela	Sí
6	Paraguay	Sí
7	Colombia	Sí
8	Perú	Sí
9	Brasil	Sí
10	Chile	Sí

Tabla 6.1: Muestra de países europeos y latinoamericanos de la comparativa legislativa
(elaboración propia a partir de datos del CMFE y Malerba, J., 2012).

Por tanto, si atendemos a las premisas que nos hemos marcado, los países que las cumplen en el caso europeo serían Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania e Irlanda. A pesar de esta elección, será necesario al final de este capítulo dedicar unos breves apuntes y reflexiones a aquellos países que están posicionados muy altos en la tabla sin tener una legislación específica en medios comunitarios (como Países Bajos y Austria), así como otros que están en posiciones más bajas porque a pesar de tener un desarrollo en radio comunitaria muy alto no sucede lo mismo con el sector televisivo, con lo que descienden la puntuación en la media (como Francia). Estos detalles los veremos al final del capítulo como unas consideraciones finales, sobre todo con el interés de dejar espacios e ideas abiertas para otras posibles investigaciones en este sentido.

También debemos destacar que si bien la investigación de Malerba fue publicada en septiembre de 2012, el 14 de junio de 2013 la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó su nueva *Ley Orgánica de Comunicación*. Dado que los análisis realizados por parte de los expertos en medios comunitarios y sus organizaciones son positivas en esta materia (Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Agencia Latinoamericana de Información, Asociación para el Progreso de la Comunicaciones...), y que además Ecuador ha copiado de la legislación

boliviana la división de espectro radioeléctrico en tres tercios (33% para el sector público, 33% para el sector comercial y 34% para el sector comunitario), entendemos que aunque este nuevo cambio legislativo pudiera hacer moverse los primeros puestos de la tabla, en realidad los cinco primeros países de la misma seguirían siendo los mismos (Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela) y no afectarían a la muestra escogida para la comparativa latinoamericana con el caso legislativo español.

Una vez recopilados todos los artículos de todas las legislaciones, hemos realizado una división de los mismos en un total de dieciséis aspectos a los cuales se refieren las mismas, para poder ordenarlos de la misma forma y comparar mejor. Esto no significa que todas las referencias aparezcan en todas las legislaciones (aunque la mayoría los comparte), pero sí nos puede ayudar a visualizar y luego a concluir en el Capítulo 8 cómo hay una descompensación entre la breve (y restrictiva) mención a los medios comunitarios en la legislación del Estado español y cómo los países elegidos suelen prodigarse más en descripciones y regulación del Tercer Sector Audiovisual. Los dieciséis aspectos son los siguientes:

1. Definiciones: cuál es el término que se le da a los medios comunitarios en la legislación vigente.
2. Otorgante de las licencias: cuál es el organismo que se encarga de valorar las peticiones y/o concursos de permisos de emisión de los medios comunitarios.
3. Posibilidad de emisión de los medios comunitarios: dificultades o facilidades para que los medios comunitarios puedan actuar.
4. Requerimientos para la responsabilidad de contenidos / medios: exigencia de registro de una persona o personas concretas que se encarguen del debido cumplimiento legal de la organización, unas veces a nivel de contenidos y otro al del desarrollo del propio medio comunitario.
5. Área de emisión: restricción (o no) de hasta dónde pueden emitir los medios comunitarios.

6. Receptores de las licencias: descripción del tipo de organizaciones que pueden recibir licencias calificadas como de medios comunitarios.
7. Incompatibilidades de las licencias: situaciones sobre los permisos de emisión que no pueden darse (negocios jurídicos o personales, principalmente).
8. Duración de la licencia: tiempo limitado por el cual se extiende el permiso de emisión para medios comunitarios (antes de volver a salir a concurso o con obligación de ser renovado).
10. Anulación de la licencia: motivos por los cuales los medios comunitarios se exponen a la retirada de su permiso de emisión por incumplimiento de la legalidad vigente.
11. Tiempos de emisión: especifica franjas horarias y/o número de horas determinadas que deben dedicar a ciertos contenidos, producción propia u horas mínimas diarias de emisión para poder obtener una licencia.
12. Emisión de publicidad o patrocinios: posibilidades o restricciones a la emisión de publicidad y a la obtención de patrocinios.
13. Tasas: pago o exención de tasas y cánones establecidos.
14. Subvenciones: ayudas públicas específicas para medios comunitarios.
15. Radios universitarias: tratamiento de las radios universitarias como elemento separado de los medios comunitarios.
16. Servicios audiovisuales comunitarios por suscripción (de pago).

6.1. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN NORUEGA: PREEMINENCIA DE LAS RADIOS FRENTE A LAS TELEVISIONES.

En Noruega operan actualmente un total de 82 radios comunitarias y una televisión comunitaria (*Frikanalen*), de acuerdo con el mapeo realizado por el CMFE en 2012. Dicha televisión se creó como una asociación propiedad de diversos colectivos sociales en el año 2008, mientras que las primeras radios vecinales comenzaron a funcionar con permisos legales de difusión en diciembre de 1981, siendo los grupos cristianos los primeros en “en

mostrar interés e iniciativa” para crear este tipo de proyectos (Ananthakrishnan, S., 1987). Según la Norwegian Media Authority, las ayudas públicas destinadas a todo el sector de medios locales (donde se incluyen los medios comunitarios legalmente y en cuanto a definición principal, como veremos) es de 1.787.000 euros anuales.

Noruega tiene dos textos principales audiovisuales: el *Act of Broadcasting* (1994) y el *Provisions of Broadcasting* (1997). El primero tiene rango de ley y contiene conceptos más generales, y el segundo es un reglamento específico más concreto que ya incluye más particularidades de la comunicación audiovisual. Los medios comunitarios están integrados dentro de su concepto de “difusión local” (*lokalkringkasting*), tal y como otros países europeos como por ejemplo, Países Bajos (al que dedicaremos un par de líneas más adelante), pero con la diferencia de que tienen su propia definición (y por eso la incluimos en la muestra). Aquí analizaremos el *Provisions of Broadcasting* dado que la ley general no es nada específica al respecto de los medios de comunicación comunitarios. Como veremos, está dirigida en la parte de medios comunitarios a las radios, puesto que como vemos por el momento en sector televisión no está tan desarrollado, contando solo con un canal.

1. Definiciones:

Capítulo 7, artículo 2:

Se pueden asignar tres tipos de licencias:

- 1. Radio local ordinaria (alminnelig lokalradio).*
- 2. Radioenlace de radio local (døgnkontinuerlig lokalradio).*
- 3. Radio de nicho (nisjeradio).*

Las radios comunitarias están integradas en esta última tercera opción (son difíciles las traducciones exactas hacia el español desde el noruego).

2. Otorgante de las licencias:

Capítulo 7, artículo 1:

La Autoridad Audiovisual será quien emita las licencias para el funcionamiento de la radiodifusión local.

La concesión para la emisión de radiodifusión local no podrá ser transferida sin la aprobación de la Autoridad Audiovisual. Lo mismo se aplicará a la adquisición de acciones o de otros valores que den el control sobre las empresas, asociaciones u otros organismos autorizados para realizar la radiodifusión local.

También es la Autoridad Audiovisual quien emite las licencias para la televisión local digital (Capítulo 7, artículo 3).

3. Emisión de publicidad y patrocinios:

Capítulo 7, artículo 2:

Las emisoras de radio pueden tener hasta 135 NOK 000 [unos 16.000 euros] de ingresos al año por publicidad y patrocinios, o un máximo del 40% de los ingresos totales de la organización si la cantidad es inferior. Las emisoras de radio no pueden pagar dividendos a sus propietarios.

En casos especiales, se podrá solicitar esta exención en el límite de ingresos durante el período de concesión de la licencia. Sólo se aplicaría en el supuesto de no tener una licencia general y después de examinar sus intereses. En el caso de que se permita la exención en el límite de ingresos por publicidad y patrocinio surgirán para la organización las obligaciones de contenidos marcadas en el Capítulo 7, artículo 7.

4. Requerimientos para responsabilidad de contenidos:

Capítulo 7, artículo 7:

La radio local con licencia del tipo 1 y 2 (Capítulo 7, artículo 2) cada día, en el período comprendido entre las seis de la mañana y las siete de la tarde, deberá emitir al menos 30 minutos de noticias y temas de actualidad relacionados con el tipo de concesión de emisión. Los concesionarios están obligados a llevar un registro de las áreas de programas que cumplen con este requisito.

Aunque esta obligación no está de por sí para las *nisjeradio* (puesto que como hemos visto era del tipo 3), sí se convierte para ellas en una obligación en el supuesto de tener, con un permiso previo, unos ingresos por publicidad y patrocinio superiores a los indicados en el anterior párrafo sobre la publicidad (que son más de 16.000 euros anuales o más del 40% de sus ingresos totales).

Capítulo 7, artículo 8: editor responsable de las retransmisiones.

Las organizaciones deberán facilitar el nombre de un editor responsable a la Autoridad Audiovisual, de acuerdo al Código Penal. El titular de la licencia deberá, al comienzo y al final de las transmisiones, o por lo menos dos veces al día, proporcionar la información sobre quién es el responsable y editor de la emisión.

5. Tiempos de emisión:

Capítulo 7, artículo 9:

*En las zonas donde la transmisión se haya autorizado de conformidad a las *nisjeradio* se determinarán los concesionarios en la distribución del tiempo de transmisión. Estas y sus modificaciones se comunicarán a la*

Autoridad Audiovisual un mes después de la concesión. Si los titulares de las licencias no alcanzan un acuerdo sobre la distribución del tiempo de uso, cualquiera de las partes podrá solicitar a la Autoridad Audiovisual que tome una decisión al respecto de la asignación.

6. Duración de la licencia:

Capítulo 7, artículo 2:

La concesión para la explotación de la radio local se realizará por un período de siete años. El Ministerio (de Cultura) podrá, en circunstancias especiales, extender el plazo de la concesión.

Artículo 3: La licencia para operar una televisión local digital será concedida, previa solicitud a la Autoridad Audiovisual, para un período de diez años. [...] En casos especiales se podrán otorgar licencias de corta duración para la televisión digital con el objetivo de retransmitir una cobertura local de eventos locales circunstanciales. En este caso la duración de la concesión está determinada por la duración del evento.

7. Anulación de la licencia:

Capítulo 1, artículo 4.

La licencia quedará sin efecto si no se utiliza después de seis meses de su adjudicación o si ha estado sin utilizar al menos durante el período de un año. La Autoridad Audiovisual podrá conceder una excepción a lo dispuesto.

6.2. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN DINAMARCA: EL CASO SINGULAR DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE COMUNITARIA.

Dinamarca es uno de los países de la Unión Europea donde la televisión comunitaria está más desarrollada y protegida (Parlamento Europeo, 2007). Es uno de los pocos lugares, sino el único, donde hay más televisiones comunitarias que radios (365 frente a 179 según el Danish Radio and Television Board). Son destacables las obligaciones que hacen que las televisiones comerciales deban emitir programas de medios comunitarios desde las 9 a las 12 de la mañana, así como ser la primera autoridad audiovisual que ha pavimentado el camino para estaciones de televisión comunitaria en el digital mediante una norma exclusiva para que las “televisiones no comerciales” emitan en múltiplex. Las ayudas directas a todo el sector comunitario (radio más televisión) ronda cada año los 46 millones de coronas danesas (algo más de 6 millones de euros, de los cuales el 60% está dedicado a la televisión comunitaria digital).

Las emisiones en televisión comunitaria empezaron en 1984 “basadas en el ideal de acceso público y del desarrollo obtenido en su vecina Suecia” (Hedérstrom, Ch., 2012). Un año antes habían comenzado las emisiones de radio sin ánimo de lucro gracias a un período de tres años experimentales que inició el gobierno danés para crear una alternativa a las únicas estaciones que había en ese momento: el sector público (Sjöber, M., 1994, en Hedérstrom, ibid.)

La legislación que contiene referencias hacia medios comunitarios se reparte entre el *Reglamento de radiodifusión local* (2009), el *Reglamento de televisión no comercial en múltiplex digital* (2011) y el *Decreto para el apoyo a la formación para las actividades de radio y televisión locales no comerciales* (2013). También existe, como no podía ser de otra manera, una *Ley de Radiodifusión y Televisión* (2011, con enmiendas de 2013), pero en esta última no se hace menciones directas a los medios comunitarios aunque en las cuestiones generales están afectados por la norma en su actividad de producción y emisión audiovisual.

1. Definiciones	
Reglamento de radiodifusión local (2009)	Las radios comunitarias se definen como “radios locales no comerciales” (<i>ikke-kommercielle lokale radiostationer</i>) y se engloban dentro de la radio local (<i>lokalradio</i>).
Reglamento de TV no comercial en múltiplex digital (2011)	Las televisiones comunitarias se definen como “televisiones no comerciales” (<i>ikke-kommercielt tv</i>) y tienen una ley propia para emitir en digital y garantizar su paso desde el analógico a la nueva tecnología.

Tabla 6.2. Dinamarca: definiciones (elaboración propia).

2. Otorgante de las licencias (según el Reglamento de TV no comercial en múltiplex digital de 2011):

Capítulo 2:

3. La Junta de Radio y Televisión, de conformidad con la Ley de Radiodifusión y Televisión, ofrecerá licencias para operar programas en múltiplex digital a organizaciones sin fines de lucro.

3.2. Estos permisos serán distribuidos mediante concursos de licencias.”

3. Área de emisión (Reglamento de TV no comercial en múltiplex digital, 2011):

Capítulo 2:

4. La Junta de Radio y Televisión concederá licencias a ocho áreas regionales correspondientes a dos múltiplex de televisión.

4. Duración de la licencia (Reglamento de TV no comercial en múltiplex digital, 2011):

Capítulo 2:

5. La licencia de emisión será concedida por un período de 5 años. La Junta de Radio y Televisión podrá otorgar permisos con una duración inferior a 5 años a fin de lograr una fecha de caducidad común para las diversas licencias.

5. Emisión de publicidad (Reglamento de TV no comercial en múltiplex digital, 2011):

Capítulo 3: Condiciones.

8. La Junta de Radio y Televisión podrá establecer que los servicios del programa deban ejercerse de conformidad con la solicitud:

8.2. No incluir publicidad en los servicios del programa.

8.3. Los cambios de los servicios del programa deberán ser aprobados previamente por la Junta de Radio y Televisión.

6. Subvenciones	
Reglamento de radiodifusión local (2009)	<p><i>Capítulo 5. Subvenciones para las estaciones de radio locales no comerciales.</i></p> <p><i>16. La Junta de Radio y Televisión podrá conceder subvenciones a titulares de licencias u organizaciones registradas definidas en el artículo 1.1. y que no tengan ingresos publicitarios. Las donaciones, patrocinios y similares no se consideran publicidad. Sólo podrán concederse a aquellas estaciones que tengan un contacto amplio con la comunidad local.</i></p>

	<p><i>17. Si hay violaciones de la Ley de Responsabilidad de los Medios de Comunicación, normas sobre subvenciones distintas para la radio y la Ley de Radiodifusión y Televisión o del el Código Penal, etc. y cuando el delito es grave o frecuente, la Junta de Radio y Televisión podrá decidir rechazar la solicitud de subvención.</i></p> <p><i>18. La concesión de subvenciones estará relacionada con la operatividad y calculada sobre la base de la programación propia de la estación. El máximo otorgado será para producir 15 horas de programas a la semana. Las redifusiones no están incluidas en el cálculo, pero sí las coproducciones con otras estaciones de radio locales.</i></p> <p><i>21. La Junta de Radio y Televisión llevará a cabo una ronda anual de solicitudes para la concesión de subvenciones.</i></p> <p><i>25.2. La subvención para el funcionamiento está diseñada para ayudar a financiar los gastos fijos de la estación de radio, incluyendo los costes indirectos generales de la emisora.</i></p> <p><i>25.3. Los costes salariales financiados por la subvención no podrán superar el nivel de las convenciones estatales por el mismo trabajo.</i></p> <p>En cualquier caso, en este Capítulo se contempla que si existe algún tipo de incumplimiento por parte de la emisora respecto de los acuerdos, tiempos y proyectos que dan lugar a la subvención, esta deberá ser reembolsada en parte o en su totalidad.</p>
Reglamento de TV no comercial en múltiplex digital (2011)	<p><i>Capítulo 7: Subvenciones para los servicios del programa.</i></p> <p><i>25. La Junta de Radio y Televisión podrá conceder subvenciones a los titulares de las licencias de organizaciones sin ánimo de lucro. Para estas estaciones es un requisito previo para la obtención de subvenciones tener un amplio contacto con la comunidad local.</i></p>

	<p>26.2. Si hay violaciones de la Ley de Responsabilidad de los Medios de Comunicación, normas sobre subvenciones distintas para la radio y la Ley de Radiodifusión y Televisión o del el Código Penal, etc. y cuando el delito es grave o frecuente, la Junta de Radio y Televisión podrá decidir rechazar la solicitud de subvención.</p> <p>27.3. La subvención máxima será otorgada para la producción de 3 horas de programación a la semana.</p> <p>27.8. Las coproducciones con otras televisiones estarán incluidas en el cálculo de las horas elegibles proporcionales a la participación de la emisora que solicita la subvención.</p> <p>29. La Junta de Radio y Televisión llevará a cabo una ronda anual de solicitudes para la concesión de subvenciones.</p> <p>32.2. La subvención de funcionamiento está diseñada para ayudar a financiar los gastos de funcionamiento de la emisora, incluyendo los costes de envío y producción de programas.</p> <p>Como en el caso de la radio, en este Capítulo se contempla que si existe algún tipo de incumplimiento por parte de la emisora respecto de los acuerdos, tiempos y proyectos que dan lugar a la subvención, esta deberá ser reembolsada en parte o en su totalidad.</p>
Decreto para el apoyo a la formación para las actividades de radio y TV locales no comerciales (2013).	<p><i>Capítulo 1: Subvenciones.</i></p> <p>1. La Junta de Radio y Televisión proporcionará bajo pedido subvenciones para actividades educativas relacionadas con las actividades de radio y televisión locales no comerciales.</p> <p>1.2. La formación deberá tratar sobre uno o más de los siguientes propósitos:</p> <p>-Aumentar las habilidades para programar la producción de radio y televisiones locales.</p>

	<p><i>-Dar cabida en los medios de comunicación a las minorías y grupos vulnerables que necesiten tener acceso a los medios de la radio y la televisión local.</i></p> <p><i>-Apoyar a los medios de comunicación de radio y televisión locales como una fuerza impulsora detrás de la experimentación y la innovación pragmática, y como una plataforma educativa para la industria de los medios.</i></p> <p><i>1.3. No se concederán subvenciones para la asistencia a reuniones, conferencias, viajes de estudios y similares.</i></p>
--	--

Tabla 6.3. Dinamarca: subvenciones (elaboración propia).

6.3: SUECIA: ALTA ACTIVIDAD Y NÚMERO DE MEDIOS COMUNITARIOS.

En Suecia las radios comunitarias comienzan sus emisiones en 1978 mientras que las televisiones comunitarias hicieron lo propio en el año 1985. Según el estudio del Parlamento Europeo (2007), Suecia “*tiene una actividad en cuanto a medios comunitarios particularmente alta*”. Cuenta con aproximadamente 700 organizaciones locales activas que emiten programas de radio en 165 estaciones comunitarias de baja potencia, a lo que se suman las 30 televisiones comunitarias que emiten por cable. Además, hay aproximadamente diez proyectos nativos digitales basados en iniciativas de medios comunitarios diversos.

El sector en este país europeo está principalmente sostenido por un modelo de abajo-arriba: grupos de intereses locales y ONG velan por el mantenimiento de los equipos y la producción de programación a través de cuotas de socio y de donaciones directas. Este sistema provoca que haya una fuerte conexión del Tercer Sector de la Comunicación sueco con la sociedad civil organizada que quieren usar los medios para promocionar sus causas. Todas las radios y televisiones locales pueden, en principio, obtener financiación desde la

publicidad y el patrocinio. Sin embargo, en la práctica, dado que la mayoría de estaciones comunitarias son de baja potencia es usual que los anunciantes no estén interesados en comprar espacios publicitarios en este tipo de emisoras. No existe un sistema nacional (público) para financiar a los medios comunitarios. Las encuestas que realizó el Parlamento Europeo a expertos para su informe de 2007 sobre el sector manifestaron que la principal preocupación de las personas y organizaciones que lideran estas iniciativas de comunicación están relacionadas con el peligro de que emisoras con ánimo de lucro intenten obtener de alguna manera una licencia de medio comunitario.

Suecia cuenta con una ley estatal de radio y televisión promulgada el 17 de junio de 2010 (*Radio and Television Act*) y que entró en vigor el 1 de agosto de ese mismo año. Es una legislación mucho más centrada en radios comunitarias que en televisiones:

1. Definiciones: realiza distinción en sus primeras definiciones entre prestadores comerciales, prestadores públicos y prestadores comunitarios.

Capítulo 3: Definiciones. Sección 1:

8. Radio comunitaria: radio local que emite para asociaciones y comunidades religiosas registradas.

9. Asociación de radio comunitaria: asociación de diversos titulares de licencias en un área de transmisión para compartir objetivos de radio comunitaria.

2. Otorgante de las licencias:

Capítulo 12, sección 1:

La Autoridad Audiovisual será el organismo que otorgue las licencias para el servicio de difusión de radio comunitaria.

3. Posibilidad de emisión de la radio comunitaria:

Capítulo 12, sección 2:

Si una asociación aplica para recibir una licencia acuerdo con la Sección 4 y sus requisitos, y es técnicamente viable, se deberá dar la oportunidad de emitir programas de radio comunitaria en un municipio.

Si hay razones especiales, más de un proyecto de radio comunitaria puede emitir simultáneamente en el mismo municipio.

4. Área de emisión:

Capítulo 12, sección 3:

El área de alcance de transmisión de una radio comunitaria estará restringida a no más de un municipio. Fuera de las áreas metropolitanas debe hacerse un esfuerzo para asegurar que las transmisiones puedan ser recibidas más allá del municipio.

En casos excepcionales, la Autoridad Audiovisual puede aprobar un área de transmisión mayor que el del municipio.

5. Receptores de las licencias:

Capítulo 12, sección 4:

Las licencias de radios comunitarias sólo pueden ser otorgadas a las siguientes entidades legales:

1. Asociaciones sin ánimo de lucro que tengan lazos con el área de transmisión.

2. Organizaciones religiosas registradas y componentes organizativos registrados de organizaciones religiosas registradas que tengan lazos con el área de transmisión.

3. Asociaciones de radio comunitaria.

Para asegurar que estas entidades no lucrativas tienen lazos con el área de transmisión, tendrán especial consideración los siguientes aspectos:

1. La localización del estudio de emisión y otros centros de operaciones.

2. La residencia de la persona legalmente responsable de las emisiones y la de los miembros de la Junta Directiva.

3. La localización de la celebración de las asambleas generales y de las asambleas de la Junta Directiva de la asociación.

6. Requerimientos para responsabilidad de contenidos:

Capítulo 12, sección 5:

“La licencia de radio comunitaria sólo podrá ser otorgada después de que la asociación designe a una persona física que sea responsable del contenido emitido de acuerdo con la Ley Fundamental de Libertad de Expresión.”

7. Incompatibilidades de las licencias:

Capítulo 12, sección 6:

Una licencia de emisión de radio comunitaria no podrá ser otorgada a un propietario que ya tenga licencia de radio comercial.

La licencia de emisión de radio comunitaria no será válida si el propietario de dicha licencia obtiene una licencia de radio comercial. La licencia de radio comunitaria dejará de ser válida desde la fecha en la que las emisiones comiencen de acuerdo a la licencia de radio comercial.

8. Tiempos de emisión:

Capítulo 12, sección 7:

Si los propietarios de las licencias otorgadas no están de acuerdo con la designación de los tiempos de emisión, la Autoridad Audiovisual determinará dichos tiempos. Lo mismo puede aplicarse si el propietario de una licencia solicita que la Autoridad asuma un horario de emisión completo.

El propietario de la licencia que pueda ser considerado como el mayor interesado en las emisiones otorgadas tendrá prioridad.

La decisión de la Autoridad Audiovisual referida a los tiempos de emisión continuará en pugna hasta que dicha Autoridad alcance una nueva decisión, o hasta que un propietario de una licencia de radio comunitaria notifique a la Autoridad que los propietarios de las licencias han alcanzado un acuerdo sobre otras asignaciones de emisión.

Sección 8:

La Autoridad Audiovisual podrá decidir que un tiempo de emisión no podrá ser usado por nadie durante un período de al menos tres meses si el propietario de una licencia de radio comunitaria, que ha recibido una orden de multa de acuerdo con las obligaciones de esta ley, renuncia a su tiempo de emisión o devuelve su licencia. El ente responsable de la radio comunitaria no podrá ser utilizado por los otros emisores si la licencia es obligatoria de acuerdo a esta ley.”

9. Duración de la licencia:

Capítulo 12, sección 9:

Una licencia para emitir radio comunitaria es válida durante un período establecido.

10. Anulación de la licencia:

Capítulo 18, sección 3: Anulación de la licencia de emisión de radio comunitaria:

La licencia de emisión de radio comunitaria podrá ser anulada si el propietario de dicha licencia:

- 1. Deja de cumplir los requisitos del Capítulo 12, sección 4. (Vistos en el cuadro número 6).*
- 2. No ejerce sus derechos de emisión de radio comunitaria durante tres meses consecutivos.*

La licencia de emisión de radio comunitaria también podrá ser anulada si un juzgado determina que su programación constituye un delito contra la libertad de expresión. El juzgado que toma la decisión relacionada con la violación de la libertad de expresión es también quien decide si procede la anulación de la licencia en cada caso.

Sección 4: La decisión de anular una licencia de emisión de radio comunitaria puede incluir una resolución que dicte que el propietario no podrá acceder a una nueva licencia durante un período máximo de un año.

En los casos referidos a la sección 3.2, el juzgado podrá decidir si el propietario de la licencia no puede acceder a una nueva durante un período máximo de un año o, si hay circunstancias excepcionales, hasta cinco años. Esto también se aplicará si, mientras fue cometido el delito contra la libertad de expresión, el propietario de la licencia no tenía permiso para emitir radio comunitaria en el tiempo del juicio.

El juzgado puede ordenar que la decisión sea válida hasta que el juicio alcance validez legal.

11. Radios universitarias:

Disposiciones transitorias:

8. Las asociaciones de estudiantes, facultades y universidades que hayan recibido previamente licencias para emitir radios comunitarias de acuerdo con las anteriores legislaciones deberán ser consideradas desde ahora para obtener sus licencias de acuerdo a las especificaciones del Capítulo 12, sección 4, párrafo 1, pedidas previamente. En cualquier caso la licencia antigua no se aplicará por el período dado.

6.4: ALEMANIA: ESTADO FEDERAL CON DIFERENTES SISTEMAS DE MEDIOS.

En Alemania existen actualmente un total de 123 radios comunitarias y 50 televisiones comunitarias (*open channels*). Aunque existe una ley marco audiovisual para todo el país, denominada *Tratado de Estado de Difusión y Telemedia (Acuerdo Interestatal de Radiodifusión)* de 2011, no debemos olvidar que Alemania está dividida en 16 Estados federales (*länder*) por lo que también cada Estado tiene su propia normativa al respecto (aunque no todos, en algunos la legislación al respecto es inexistente), así como su propia autoridad audiovisual (con la excepción de Berlín y Brandenburgo, así como Hamburgo y Schleswig-Holstein, que cooperan en cuestión de medios de comunicación). Las primeras emisiones de radios comunitarias fueron fundadas en Freiburg en 1977 como radios piratas, y comenzaron a tener licencias a partir de 1988. Tras la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania comenzaron muchas iniciativas de radio libre en la parte este del país. La primera de estas experiencias fue Radio Frei en Erfurt, empezando con emisiones piratas en 1990 y obteniendo un permiso legal de emisión nueve años después.

En el caso de la televisión los primeros medios no comerciales fueron *open channels* en 1984. Un *open channel* (también llamado *public-access television* o PEG) es una forma

tradicional de medio masivo no comercial donde cualquier persona cumpliendo una serie de requisitos puede crear contenidos de televisión en un canal perteneciente al Estado, siendo este quien lo coordina, organiza y lo pone a disposición de la ciudadanía. Sería una especie de “derecho de acceso” como el que teóricamente tiene RTVE, pero llevado a su máxima expresión. Este sistema nació en EEUU a finales de los sesenta. Hay que tener en cuenta las diferencias principales entre los *open channels* y los medios comunitarios, dado que aunque ambos son emisoras sin ánimo de lucro, los primeros están en manos de las autoridades (su propiedad pertenece al Estado) y todas las producciones responden a los criterios que ellas impongan y a su gestión. Por este motivo, por criterios de posesión y de gestión, no vamos a incluir la legislación alemana existente respecto de los *open channels* al no considerarlos realmente comunitarios en cuanto a las definiciones que hemos manejado hasta el momento. Sin embargo, este fenómeno por sí solo es lo suficientemente interesante para ser investigado de manera individual y para armar cualquier otra tesis doctoral o investigación al respecto.

Pasando ya al tema más legislativo, como efectivamente puede resultar un poco confusa su distribución de leyes, creemos conveniente mostrar en un cuadro cuáles *länder* tienen una regulación referida a medios comunitarios, o que los menciona, y cuáles no, para poder así después pasar a un análisis más pormenorizado de la situación alemana. La ley marco general, la de todo el país citada anteriormente, no posee ningún tipo de referencia al funcionamiento o regulación de medios comunitarios.

Land	¿Tiene una legislación que se refiera o mencione a los medios comunitarios?
Schleswig-Holstein	Sí (<i>Ley de Medios en Hamburgo y Scheleswig-Holstein</i> , 2007).
Hamburgo	Sí (<i>Ley de Medios en Hamburgo y Scheleswig-Holstein</i> , 2007).
Mecklemburgo-Pomerania Occidental	No.

Bremen	Sí (<i>Ley Estatal de Medios de Bremen, 2012</i>)
Baja Sajonia	Sí (<i>Ley de Medios de Baja Sajonia, 2010; Directiva de la NLM sobre la concesión de ayudas para promover la radiodifusión ciudadana, 2001</i>)
Brandeburgo	No.
Berlín	No.
Renania del Norte-Westfalia	Sí (<i>Ley de Medios de Renania del Norte-Westfalia, 2009</i>).
Sajonia-Anhalt	Sí (<i>Ley de Medios de Sajonia-Anhalt, 2004; Directiva del Instituto de Medios de Sajonia – Anhalt sobre la concesión de ayudas para la promoción de los canales abiertos, las emisoras locales de radio no comerciales y los proyectos de educación en medios, 2011</i>).
Sajonia	No.
Turingia	Sí (<i>Ley de Medios de Comunicación del Estado de Turingia, 2014</i>).
Hesse	Sí (<i>Ley de Radiodifusión Privada de Hesse, 2012; Estatuto del Instituto Estatal de Hesse para la Radiodifusión Privada y Nuevos Medios sobre la recaudación de tasas y los costes, 2012</i>).
Renania-Palatinado	No.
Sarre	No.
Baviera	No.
Baden-Wurtemberg	No.

Tabla 6.4. Alemania: *länder* con legislación en medios comunitarios (elaboración propia).

Desglosando los aspectos y menciones que aparecen en las diferentes leyes de los *länder* mostrados en la tabla anterior, las leyes alemanas tratan las siguientes características sobre medios comunitarios:

1. Definición	
Schleswig-Holstein y Hamburgo (2007)	“Medios ciudadanos” (<i>bürgermedien</i>).
Bremen (2012)	“Radiodifusión ciudadana” (<i>bürgerfunk</i>).
Baja Sajonia (2010)	“Radiodifusión ciudadana” (<i>bürgerfunk</i>) o “medio local no comercial” (<i>lokal nichtkommerziellem</i>).
Renania del Norte – Westfalia (2009)	“Medios ciudadanos” (<i>bürgermedien</i>).
Sajonia-Anhalt (2004)	“Medios ciudadanos” (<i>bürgermedien</i>).
Turingia (2014)	“Servicios de radiodifusión no comerciales” (<i>nichtkommerzielle Rundfunkangebote</i>).
Hesse (2012)	“Radio local no comercial” (<i>nichtkommerzielle Lokalradio</i>).

Tabla 6.5. Alemania: definiciones (elaboración propia).

2. Posibilidad de emisión de la radiodifusión comunitaria	
Baja Sajonia (2010)	<p>“Sección 1:</p> <p>3. La asignación de la capacidad del transporte por ondas terrestres tiene que garantizar a través de la asignación para el uso de frecuencia de radio FM la oferta nacional de:</p> <p>a) Emisiones de la emisora pública del norte de Alemania (NDR).</p> <p>b) Dos frecuencias completas para una emisora nacional y una nivel nacional para las emisoras privadas de todo el país.</p> <p>c) Radiodifusión ciudadana.</p> <p>d) Una frecuencia para la cobertura de información de toda Alemania.”</p>
Hesse (2012)	“Sección sexta:

	<p>40.1. La Autoridad Audiovisual podrá, en interés de la diversidad de opiniones, determinar áreas de distribución de radio no comercial”.</p> <p>“Sección octava:</p> <p>El Instituto Estatal de Hesse para la Radiodifusión Privada y nuevos medios es el responsable de:</p> <p>51.1.6. El establecimiento y la promoción de la difusión de la radio local no comercial.</p>
--	--

Tabla 6.6. Alemania: posibilidad de emisión de los medios comunitarios (elaboración propia).

3. Área de emisión	
Bremen (2012)	<p>“Sección sexta:</p> <p>43. La Autoridad de Medios de Comunicación del Estado podrá pedir a los titulares de cada sistema de cable analógico que emitan programas de radiodifusión ciudadana por su sistema de cable. [...] La obligación se cumplirá de forma gratuita por los operadores de cable y plataformas con una capacidad de más de 15 canales y más de 5.000 hogares conectados. La capacidad técnica ofrecida deberá ser equivalente en relación con otras capacidades.”</p>
Baja Sajonia (2010)	<p>“Sección cuarta:</p> <p>26.1. La Autoridad de Medios de Comunicación del Estado establecerá los ámbitos de comunicación en los que la radiodifusión ciudadana puede emitirse, y en cualquier caso teniendo en cuenta que sea técnicamente posible la emisión de una comunicación continua y el ofrecimiento de un espacio cultural a través de las frecuencias terrestres o por medio de un sistema de cable.”</p>

	“34.7. Los operadores de sistemas de cable están obligados a proporcionar a la radiodifusión ciudadana, cuando lo solicite, acceso a un canal de televisión y a un canal de radio de forma gratuita.”
--	---

Tabla 6.7. Alemania: área de emisión (elaboración propia).

4. Receptores de las licencias	
Schleswig-Holstein y Hamburgo (2007)	“Sección sexta: Se podrá tener en la radio terrestre en las zonas de la costa oeste, Lübeck y Kiel, y en la televisión por cable en las áreas de Flensburg y Keil un canal abierto para la radio comunitaria regional y para promover la alfabetización mediática. Al canal abierto accederán los grupos y los individuos o usuarios de estas emisoras y se les dará la oportunidad de realizar contribuciones tanto por radio como por televisión.”
Bremen (2012)	“Sección 2: Aprobación de los programas de radio. 4.1. La autorización sólo podrá concederse a: 4.1.3. Una asociación de personas de derecho privado que esté destinada a ser permanente.”
Baja Sajonia (2010)	“Sección cuarta: 27.1. El permiso de emisión de radiodifusión ciudadana sólo podrá expedirse si: -No se pretende ningún beneficio económico. -El funcionamiento a largo plazo de la radiodifusión ciudadana está asegurada tanto organizativamente como financieramente. -Se puede esperar una diversidad de opiniones de diferentes fuerzas sociales reflejadas en el área de distribución de la emisión.

	-Los programas se difunden desde las contribuciones de los solicitantes a los que se les permite la oportunidad de expresar sus propias ideas.”
Sajonia – Anhalt (2004)	“Sección 3: 22.2. La autorización deberá ser una persona jurídica o una asociación de derecho privado durante un período de tres años cuyos objetivos sean sin ánimo de lucro. El permiso podrá ser renovado por dos años.”
Hesse (2012)	“Sección sexta: 40.2. La autorización sólo podrá concederse a una persona jurídica o una asociación, que no tengas fines de lucro y que proporcione la seguridad de acceso a diferentes grupos sociales y fuerzas económicas en el diseño de lo programas, especialmente en aquellas contribuciones que configuren la programación propia.”

Tabla 6.8. Alemania: receptores de las licencias (elaboración propia).

5. Tiempos de emisión (solo Renania del Norte-Westfalia, 2009):

Sección sexta:

40.a.4: La emisión de radio comunitaria local deberá dedicar cada día al menos 60 minutos a noticias, información meteorológica e informes del tráfico.

6. Duración de la licencia	
Renania del Norte – Westfalia (2009)	“Sección sexta: 40.c.3: La autorización para la televisión ciudadana se establece,

	por lo general, para un período de cuatro años. Es posible optar a la renovación.”
Sajonia – Anhalt (2004)	“Sección 3: 22.2. La autorización deberá ser una persona jurídica o una asociación de derecho privado durante un período de tres años cuyos objetivos sean sin ánimo de lucro. El permiso podrá ser renovado por dos años.”

Tabla 6.9. Alemania: duración de la licencia (elaboración propia).

7. Emisión de publicidad	
Schleswig-Holstein y Hamburgo (2007)	“Sección sexta: 33.1. No se permite la publicidad. Los programas producidos por los usuarios podrán ser patrocinados de acuerdo a las normas del Tratado de Radiodifusión. No se permiten patrocinios de organismos públicos y partidos políticos en el período de elecciones.”
Bremen (2012)	“Sección sexta: 39.3. La publicidad, el patrocinio, la televenta y los concursos en la radiodifusión ciudadana están prohibidos.”
Baja Sajonia (2010)	“Sección cuarta: 30.3. La publicidad, el patrocinio y la televenta en este tipo de radiodifusión son inadmisibles.”
Renania del Norte – Westfalia (2009)	“Sección sexta: 40.3. Los medios ciudadanos no dirigirán operaciones con ánimo de lucro. Las contribuciones no podrán contener publicidad, televenta o patrocinios.”
Sajonia – Anhalt	“Sección 3:

(2004)	22.3. No se permite la publicidad, la televenta y el patrocinio.”
Turingia (2014)	“Sección 4: 27.2. Los servicios de radiodifusión no comerciales, de conformidad con esta Ley, se financiarán únicamente con los fondos a los que se refiere el apartado 1. 3 a 5” (<i>donaciones, propios recursos y otros ingresos</i>) (<i>No se permite la publicidad y televenta que constan en el punto 1</i>).
Hesse (2012)	“Sección sexta: 39.2. No se permite la publicidad ni el patrocinio.

Tabla 6.10. Alemania: emisión de publicidad (elaboración propia).

8. Subvenciones	
Baja Sajonia (2010)	<p>“Sección cuarta:</p> <p>30.1. La creación y el funcionamiento de la radiodifusión ciudadana, incluido el equipo adecuado para su objetivo, se financian con los aportes de los organizadores, donaciones ingresos adecuados al tamaño del área de emisión, así como por subvenciones de la Autoridad de Medios de Comunicación del Estado.</p> <p>30.2. Las subvenciones se concederán de acuerdo con la financiación de la autoridad de medios del Estado, teniendo en cuenta sus otros proyectos que se lleven a cabo, a los cuales también se les puede proporcionar financiación.”</p> <p>Además de la ley general, tienen una regulación propia solo para concesiones de ayuda a la radiodifusión ciudadana (<i>Directiva de la NLM sobre la concesión de ayudas para promover la radiodifusión</i></p>

	<p>ciudadana, 2001). En ella se establecen una serie de posibilidades para financiar con dinero público las cuestiones y proyectos de radiodifusión ciudadana que versan sobre: gastos corrientes del funcionamiento, equipo técnico, producción de programas, material de oficina y la construcción de instalaciones radiofónicas y/o televisivas.</p>
<p>Renania del Norte – Westfalia (2009)</p>	<p>“Sección sexta:</p> <p>40.6. La Autoridad Audiovisual podrá otorgar subvenciones presupuestarias para los medios ciudadanos que promuevan actividades y proyectos para la radio comunitaria y para una prioridad de la alfabetización mediática, así como para fortalecer proyectos de jóvenes en cooperación con la comunidad en la que se integra.</p>
<p>Sajonia – Anhalt (2004)</p>	<p>“Sección 3:</p> <p>22.5. La Autoridad Audiovisual de Sajonia-Anhalt está autorizada por ley para efectuar medidas de apoyo financiero para la radiodifusión de radio local no comercial. Para cada período de aprobación se establecerá un límite de ayuda financiera por parte del dicha Autoridad, incluyendo costes de difusión, programación así como la autofinanciación adecuada por parte del propio medio.”</p> <p>Además de la ley general, tienen una regulación propia solo para concesiones de ayuda a la radiodifusión ciudadana (<i>Directiva del Instituto de Medios de Sajonia – Anhalt sobre la concesión de ayudas para la promoción de los canales abiertos, las emisoras locales de radio no comerciales y los proyectos de educación en medios</i>, 2011. En ella se establecen una serie de posibilidades para financiar con dinero público el equipamiento y las operaciones de</p>

	transmisión y los proyectos para promover la alfabetización mediática.
--	--

Tabla 6.11. Alemania: subvenciones (elaboración propia).

Podemos tener una visión general de los aspectos que contemplan los *länder* que sí tienen una legislación concreta en materia de medios comunitarios en la siguiente tabla:

	Definición	Posibilidad de emisión del TSC	Área concreta de emisión	TSC como receptor de licencias	Tiempos definidos de emisión	Duración de la licencia	Publicidad	Subvenciones
Schleswig-Holstein	Medios ciudadanos	Sí	No	Sí	No	No	Sí	No
Hamburgo	Medios ciudadanos	Sí	No	Sí	No	No	Si	No
Bremen	Radiodifusión ciudadana	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No
Baja Sajonia	Medios ciudadanos	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Renania del Norte – Westfalia	Medios ciudadanos	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Sajonia - Anhalt	Medios ciudadanos	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Turingia	Servicios de radiodifusión no comerciales	No	No	No	No	No	Sí	No
Hesse	Radio local no comercial	Sí	No	Sí	No	No	Sí	No

Tabla 6.12. Alemania: resumen de *länder* (elaboración propia).

6.5: IRLANDA: HOMOLOGACIÓN FORMATIVA EN RADIO COMUNITARIA SIN PRECEDENTES.

En Irlanda existen actualmente 23 radios comunitarias y 3 televisiones comunitarias según los datos facilitados por la Broadcasting Authority of Ireland (BAI). La primera emisora de estas características fue una experiencia pirata denominada Radio Liberties en 1975, mientras que las primeras difusiones de televisión sin ánimo de lucro se realizaron en 2006 por P5tv. El apoyo gubernamental no sólo se limita a la petición y obtención de licencias por parte de estos proyectos sino que también cuentan con diversos fondos públicos a los que pueden optar para optimizar la contratación de sus empleados, realizar proyectos de comunicación, mejorar los equipamientos y realizar cursos de formación, principalmente.

Una de las cuestiones irlandesas a destacar en materia de medios comunitarios es que su Consejo de Educación Superior y Formación (The Further Education and Training Awards Council, FETAC) tiene homologado un curso de nivel 4 de *Radio Comunitaria* (en una escala que va desde el 1 al 6, donde uno sería un nivel *Basic* y 6 un nivel *High Certificate*). Este reconocimiento es un hecho sin precedentes en Europa y permite tanto a voluntarios como trabajadores de una radio comunitaria apoyar su experiencia y su práctica en una certificación teórica nacional.

El apoyo normativo a este tipo de proyectos de comunicación también queda reflejado en su Ley Audiovisual de 2009:

1. Definición: "Radiodifusión comunitaria".

2. Autoridad Audiovisual:

Artículo 9.1: Una persona no podrá ser sugerida por el Gobierno para ser miembro de la Autoridad Audiovisual o de su Comité Estatutario a no

ser que dicha persona tenga experiencia o demuestre capacidad en una o más de las siguientes áreas:

b) Radiodifusión pública, comercial o comunitaria.

Artículo 25.2: La Autoridad Audiovisual y los Comités Estatutarios deberán:

a) Estimular la producción de programas de una alta calidad, plurales e innovadores realizados por radiodifusores comerciales, comunitarios, y públicos, además de por productores independientes.

c) Promover la diversidad en el control de los radiodifusores comerciales y comunitarios más influyentes.

3. Posibilidad de emisión de los medios comunitarios:

Artículo 26.3: De acuerdo a las funciones indicadas en la subsección 1.a., la Autoridad Audiovisual debe considerar las necesidades de los medios comunitarios respecto de la radiodifusión digital.

4. Receptores de las licencias:

Artículo 64: La Autoridad, con la recomendación del Comité de Contratos de Concesiones, puede emitir una clase de concesión de radiodifusión sonora (“contrato de radiodifusión sonora comunitaria”) con dos o más miembros de una comunidad local o de una comunidad de intereses siempre y cuando:

a) Dichos miembros sean representativos de, y rindan cuentas ante, dicha comunidad, y

b) La programación en cumplimiento de la concesión sea efectiva con el único objetivo de:

- Concordar específicamente con los intereses de la comunidad en la que se integra, así como de perseguir su beneficio social, y
- Conseguir una retribución monetaria no superior a las cantidades razonables necesarias para sufragar los gastos y costes del proyecto.”

Artículo 65:

1. En orden de asegurar un correcto desarrollo de los servicios de radiodifusión y de permitir el establecimiento de una pluralidad de servicios en un área de abastecimiento para una amplia gama de intereses, incluidos los de las minorías, la Autoridad Audiovisual puede consultar con el Regulador de Comunicaciones para preparar conjuntamente un plan de frecuencias dedicadas a este tipo de radiodifusión.

Artículo 68.2. La Autoridad Audiovisual, con la recomendación del Comité de Contratos de Concesiones puede presentar un contrato de radiodifusión sonora con un solicitante para una previsión de un servicio de radiodifusión de baja potencia que intente servir únicamente a una sola institución educativa, hospital o una organización similar.

5. Duración de las licencias:

Artículo 68: La Autoridad Audiovisual, con la recomendación del Comité de Contratos de Concesiones puede, en cualquier período de 12 meses, presentar un contrato de radiodifusión sonora con un solicitante de concesión para la previsión de un área de emisión por un período de:

- 1. b) Si el solicitante es un proyecto comunitario, no más de 100 días (consecutivos o no) en dicho período de 12 meses.*

6. Subvenciones:

Artículo 153.3: Una estrategia o plan (gubernamental) de financiación puede ser prevista:

c) Para clases particulares de televisión o de programas de radiodifusión sonora referidas a la subsección 1, incluyendo pero no limitando a programas de naturaleza o cuestiones específicas, o difundidas por un medio concreto (incluyendo aquellos locales o regionales como una televisión o radio comunitaria.

Artículo 153.5: La Autoridad Audiovisual, cuando prepare un plan gubernamental de financiación, deberá tener en cuenta las necesidades de desarrollo de los radiodifusores comunitarios.

Artículo 155.1. Los objetivos de un plan gubernamental de financiación relacionados con los programas referidos en la sección 154.1 están destinados a:

f) Desarrollar la radiodifusión local y comunitaria.

7. Tasas:

Artículo 33.3: La Autoridad Audiovisual puede contemplar diferentes gravámenes para el servicio de radiodifusión público, comercial y comunitario y clases particulares de contratos de radiodifusión.

6.6. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN ARGENTINA: CINCO AÑOS DE INCERTIDUMBRE.

La *Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual* promulgada en Argentina un año antes de que lo hiciera España (es decir, en 2009) fue el punto y final de un largo proceso participado de cinco años en el que toda la sociedad de ese país tuvo la oportunidad de dar su opinión y su voz acerca de cómo quería que se regulasen los medios de comunicación audiovisuales. En el año 2004 y por iniciativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) se creó la llamada *Coalición por una Radiodifusión Democrática* que consiguió aglutinar a más de tres centenares de organizaciones sociales, asociaciones sin ánimo de lucro, medios comunitarios, ONG, entidades de defensa de los derechos humanos, sindicatos, universidades, organizaciones de periodistas e incluso pequeñas empresas. Sus encuentros y debates dieron lugar a una lista de 21 puntos básicos que consideraban que debían estar presentes en la nueva ley nacional y dichos puntos los presentaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más tarde, cuando se lanzó el proyecto de ley, se distribuyeron por todo el país un total de 24 Foros Participativos de Consulta Pública que durante el año previo a la promulgación de la ley siguieron discutiendo el texto.

Finalmente, el 10 de octubre de 2009 se aprobó la *Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual*. Los militantes de radiodifusión comunitarias de varios países pusieron sus ojos y sus esperanzas en esta ley, a la cual el Relator de la ONU para la Libertad de Expresión, el guatemalteco Frank La Rue definió como “lo más avanzado que he visto en el continente [latinoamericano]” y sobre la que afirmó que “sigue los principios clásicos de la libertad de expresión y de las relatorías”.⁵¹

⁵¹ Declaraciones realizadas en una entrevista al diario online argentino *Página 12* el 15 de julio de 2009 y disponible en <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-128260-2009-07-15.html> [17 de febrero de 2014].

Sin embargo, y a pesar de la alegría inicial, apenas dos semanas después el grupo mediático Clarín (el más importante de Argentina y con mayor concentración de medios en todos los soportes disponibles) denunció judicialmente la inconstitucionalidad de los artículos 41 (referido a las licencias de emisión que son intransferibles, salvo casos excepcionales autorizados), 45 (referido a las limitaciones a la concentración de licencias), 48 (referido a prácticas de concentración indebida y la imposibilidad de alegar sobre derechos ya adquiridos en esta materia) y 161 (referida a la adecuación de la ley por parte de todas las partes afectadas en un plazo no superior a un año). Mientras duró este proceso judicial, la aplicación en la realidad de la ley apenas se dejó notar porque parecía haber una “disposición política de no avanzar con el resto de la normativa hasta que la Corte Suprema de Justicia no resuelva estos cuatro artículos para el caso del Grupo Clarín” (entrevista a Martín Becerra; 2013), aunque en realidad el resto de la ley sí que podría haberse puesto en práctica.

Esta situación en sí (no así sus causas) es similar a la padecida por España y su Ley General de la Comunicación Audiovisual, dado que cinco años después de su promulgación vemos que los cambios operados en materia de medios comunitarios en la práctica ha sido prácticamente nulos (lo analizaremos en el siguiente capítulo). Ahora bien, en el caso argentino hablamos de un proceso judicial el cual tuvo su fallo ya el pasado mes de octubre de 2013, el cual ha sido declarar la *Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual* como plenamente constitucional y, por tanto, es de esperar que a partir de ahora se empiece a aplicar en su totalidad.

Dicha aplicación en cuanto al articulado referido a los medios comunitarios beneficiaría a un sector que tiene 200 radios comunitarias con reconocimiento legal (según los datos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA). En el caso de la televisión, los proyectos comunitarios de baja potencia comienzan a aparecer a finales de los ochenta, pero aún es difícil para ellos alcanzar las licencias puesto que aunque la ley que

vamos a analizar crea una figura propia, los pliegos del concurso para licencias de TV digital abierta son complicados de alcanzar para estas emisoras.⁵²

Los aspectos que estamos analizando quedarían en la legislación argentina de la siguiente manera:

1. Definiciones:

Artículo 4:

Emisoras comunitarias: son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida.

En este artículo además el poder legislador especifica mediante una nota al pie de página que esta definición está basada en las descripciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Red Nacional de Medios Alternativos, la Asociación de Frecuencia Modulada, Entre Ríos, Noticiero Popular y Radio UTN (la radio de la Universidad Tecnológica Nacional).

⁵² Cretaz, J. (2011). *La TV comunitaria busca su futuro*. La nación, 19 de septiembre de 2011. Disponible en <http://www.lanacion.com.ar/1407292-la-tv-comunitaria-busca-su-futuro> [Recuperado el 24 de septiembre de 2014].

2. Posibilidad de emisión de la radiodifusión comunitaria:

Artículo 33. Aprobación de pliegos.

Los pliegos de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de los servicios previstos en esta ley deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación.

Los pliegos serán elaborados teniendo en cuenta características diferenciadas según se trate de pliegos para la adjudicación de licencias a personas jurídicas según sean estas con o sin fines de lucro.

Artículo 89. Reservas en la administración del espectro radioeléctrico.

f) El treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro.

En este artículo 89 se explicita en un pie de página que el espíritu de esta división está tomado de las recomendaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

3. Receptores de las licencias:

Artículo 21. Prestadores.

Los servicios previstos por esta ley serán operados por tres (3) tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. Son titulares de este derecho:

a) Personas de derecho público estatal y no estatal.

b) Personas de existencia visible (personas físicas) o de existencia ideal (personas jurídicas), de derecho privado, con o sin fines de lucro.

Artículo 23. Licencias.

Las licencias se adjudicarán a las personas incluidas en el artículo 21 inciso b) y a las personas de derecho público no estatales en cuanto no se encuentre previsto en esta ley que corresponde otorgárseles una autorización [es decir, al Episcopado y a los Pueblos Originarios].

4. Requerimientos para la responsabilidad de medios:

Artículo 103. Sanciones.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, sus reglamentaciones o las condiciones de adjudicación, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones mínimas y máximas:

1) Para los prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro, para los prestadores autorizados de carácter no estatal y para los titulares de los registros regulados en la presente ley:

a) Llamado de atención;

b) Apercibimiento;

c) Multa del cero coma uno por ciento (0,1%) al diez por ciento (10%) de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho pasible de sanción. El instrumento mediante el cual se determine la multa tendrá el carácter de título ejecutivo;

d) Suspensión de publicidad;

e) Caducidad de la licencia o registro.

A los efectos del presente inciso –cuando se trate de personas jurídicas– los integrantes de los órganos directivos son pasibles de ser responsabilizados y sancionados.

5. Incompatibilidades de las licencias:

Artículo 25. Condiciones de admisibilidad – Personas de existencia ideal.

Las personas de existencia ideal como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual y como socias de personas de existencia ideal titulares de servicios de comunicación audiovisual deberán reunir al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia, las siguientes condiciones:

b) En el caso de las personas de existencia ideal sin fines de lucro, sus directivos y consejeros no deberán tener vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado comercial. Para el cumplimiento de este requisito deberá acreditarse que el origen de los fondos de las personas de existencia ideal sin fines de lucro no se encuentra vinculado directa o indirectamente a empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado comercial.

Artículo 41. Transferencia de las licencias.

Las licencias concedidas a prestadores de gestión privada sin fines de lucro son intransferibles.

6. Duración de la licencia:

Artículo 39. Duración de la licencia.

Las licencias se otorgarán por un período de diez (10) años a contar desde la fecha de la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de

Comunicación Audiovisual que autoriza el inicio de las emisiones regulares.

Artículo 40. Prórroga.

Las licencias serán susceptibles de prórroga por una única vez, por un plazo de diez (10) años, previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales del derecho público en dicha materia.

[...] Al vencimiento de la prórroga los licenciatarios podrán presentarse nuevamente a concurso o procedimiento de adjudicación.

Las autorizaciones (es decir, las personas de derecho público como universidades nacionales, pueblos originarios e iglesia católica) se otorgarán por tiempo indeterminado.

7. Radios universitarias:

Artículo 37. Asignación a personas de existencia ideal de derecho público estatal, Universidades Nacionales, Pueblos Originarios e Iglesia Católica.

El otorgamiento de autorizaciones para personas de existencia ideal de derecho público estatal, para universidades nacionales, institutos universitarios nacionales, Pueblos Originarios y para la Iglesia Católica se realiza a demanda y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad del espectro, cuando fuera pertinente.

8. Subvenciones:

Artículo 97. Destino de los fondos recaudados (por los gravámenes a la actividad audiovisual).

f) El diez por ciento (10%) para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.

9. Consejo Audiovisual:

Artículo 16. Integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual serán designados por el poder Ejecutivo nacional, a propuesta de los sectores y jurisdicciones en el número que a continuación se detallan:

c) Tres (3) representantes por las entidades que agrupen a los prestadores sin fines de lucro.

10. Servicios audiovisuales comunitarios por suscripción (de pago):

Artículo 30. En todos los casos, los licenciatarios de servicios públicos sin fines de lucro que obtengan licencias de servicios de comunicación audiovisual en los términos y condiciones fijadas en este artículo deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Conformar una unidad de negocio a los efectos de la prestación del servicios de comunicación audiovisual y llevarla en forma separada de la unidad de negocio del servicio público del que se trate;

b) Llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al servicio licenciado;

c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las prácticas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes el servicio público hacia el servicio licenciado;

d) Facilitar –cuando sea solicitado- a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado. En los casos en que no existiera acuerdo entre las partes, se deberá pedir intervención a la autoridad de aplicación;

e) No incurrir en prácticas anticompetitivas en materia de derechos de exhibición de los contenidos a difundir por sus redes y facilitar un porcentaje creciente a determinar por la autoridad de aplicación a la distribución de contenidos de terceros independientes.

Órganos de Administración y Fiscalización.

Será compatible para los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas de existencia ideal sin fines de lucro prestadoras de servicios públicos contempladas en este artículo desempeñarse en tal función.

6.7. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN URUGUAY: OTRA LEY “MODELO” Y FALTA DE AUTORIDAD AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE.

El pasado mes de diciembre de 2013 Uruguay aprobó su Ley de Comunicación Audiovisual en el Congreso, y también fue aprobada por la Comisión del Senado. Falta el trámite del paso por el Pleno, que a la escritura de estas líneas aún no se ha realizado debido a las próximas elecciones presidenciales. En este caso, existe una posibilidad de que la ley finalmente no fuera actualizada si gana un partido diferente o si el nuevo candidato del Frente Amplio no lo considerase una prioridad. Diversas organizaciones recalcaron, tal y como hicieron con la ley argentina, la importancia y las garantías que ofrecía esta nueva

normativa para todo tipo de proyectos. Sin ir más lejos, Reporteros sin Fronteras afirmaba en su propio sitio web que⁵³

La LSCA [Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual] ofrece garantías importantes en lo que se refiere a la desconcentración del espacio de difusión y a una distribución más equitativa de las frecuencias, sin que se pretenda controlar los contenidos o ejercer presiones en la línea editorial de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios.

Aunque el debate de la ley uruguaya no fue tan extenso por todo el país como con el caso argentino, sí que los legisladores tuvieron en cuenta también ciertas proposiciones realizadas por la ciudadanía a través de diversas entidades, tales como la propia Reporteros Sin Fronteras pero también aquellas provenientes del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch.

Al igual que sucede en España, actualmente Uruguay no dispone de una autoridad audiovisual independiente (llamada Consejo de Comunicación Audiovisual en la ley), pero por otros motivos diferentes: sus elecciones nacionales presidenciales y legislativas están a la vuelta de la esquina (26 de octubre de 2014) y la Constitución uruguaya prohíbe crear nuevos cargos públicos un año antes de dichas elecciones nacionales. Ergo, el sistema audiovisual uruguayo deberá esperar a los resultados de los comicios antes de crear la autoridad audiovisual independiente prevista en la ley.

En el último documento oficial por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería, datado en marzo de 2011, se realizó un Censo Nacional de Radios Comunitarias donde se

⁵³ Reporteros Sin Fronteras (2013). *Ajustes y un nuevo reto para la Ley de Comunicación Audiovisual aprobada por los diputados*. Disponible en <http://es.rsfo.org/uruguay-ajustes-y-un-nuevo-reto-para-la-12-12-2013,45602.html> [Recuperado el 22 de septiembre de 2014].

inscribieron voluntariamente un total de 412 radios comunitarias. En el caso de la televisión, en el último reparto de licencias del digital (octubre de 2013) un canal fue destinado a un proyecto comunitario de la central sindical PIT CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores), siendo la primera licencia del digital concedida a este tipo de proyectos en el país.

La última legislación uruguaya nacional que nos ocupa contiene un Título (el IX) que está dedicado a los *Servicios de Comunicación Audiovisual Comunitarios*. Sin embargo, dicho Título sólo contiene dos artículos que básicamente se limitan a redirigir la atención hacia otra ley, la Número 18.232 de *Servicio de Radiodifusión Comunitaria* (2007) y que constituye un reglamento específico para este tipo de proyectos audiovisuales. Si pasamos a analizar estas dos leyes encontramos las siguientes características:

1. Definiciones.	
Uruguay (2007)	Servicio de radiodifusión comunitaria.
Uruguay (2013)	Servicios de comunicación audiovisual comunitarios.

Tabla 6.13: Uruguay: definiciones (elaboración propia).

2. Otorgante de las licencias (Uruguay, 2007):

Artículo 7. Adjudicación del Poder Ejecutivo.

La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión preceptiva del Consejo Honorario de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no

hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables a la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

[...] El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

3. Posibilidad de emisión de la radiodifusión comunitaria	
Uruguay (2007)	<p>"Artículo 5. Reserva del espacio radioeléctrico.</p> <p>El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.</p> <p>La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público."</p>
Uruguay (2013)	<p>"Artículo 10. Diversidad y pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisuales.</p> <p>El Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo</p>

	en el sistema de servicios de comunicación audiovisuales, en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios, así como reconociendo y promoviendo la existencia de servicios de comunicación audiovisual comerciales, públicos y comunitarios."
--	--

Tabla 6.14: Uruguay: posibilidad de emisión de los medios comunitarios (elaboración propia).

4. Área de emisión (Uruguay, 2007):

Artículo 4. Servicio de radiodifusión comunitaria.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida. Dicha área estará definida por su finalidad pública y social y dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

5. Receptores de las licencias	
Uruguay (2007)	<p>"Artículo 6. Titulares.</p> <p>Podrán ser titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.</p> <p>Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro, en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso, una o más personas físicas, que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en</p>

	la misma, deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura [...]."
Uruguay (2013)	"Artículo 22. Derecho a fundar servicios de comunicación audiovisual. El derecho a la libertad de expresión comprende el derecho de todas las personas a fundar, instalar y operar cualquier clase de servicio de comunicación audiovisual, dando cumplimiento a los requisitos y procedimientos resultantes de las normas respectivas."

Tabla 6.15: Uruguay: receptores de licencias (elaboración propia).

6. Incompatibilidades de las licencias (Uruguay, 2007):

Artículo 11. Intransferibilidad.

Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación. Será absolutamente nulo lo actuado en contra de la presente disposición.

7. Duración de la licencia (Uruguay, 2007):

Artículo 9. Plazo.

Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionando al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros

interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

8. Radios universitarias (Uruguay, 2013):

Artículo 141. Carácter y titularidad.

Los medios de comunicación audiovisual públicos son servicios públicos cuya gestión y titularidad reside en entidades públicas estatales o no estatales, nacionales, departamentales, educativas, universitarias u otras.

9. Emisión de publicidad (Uruguay, 2007):

Artículo 10. Sustentabilidad económica.

Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad, de acuerdo a las normas vigentes.

10. Consejo Audiovisual	
Uruguay (2007)	<p>"Artículo 15. Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.</p> <p>Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los</p>

	<p>pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras."</p> <p>"Artículo 16. Integración.</p> <p>El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un miembro no legislador designado por la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la república, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión."</p>
Uruguay (2013)	<p>"Artículo 70. Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA). Integración.</p> <p>La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual estará integrada por catorce miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), quien la presidirá; un representante del Ministerio de Educación y Cultura (MEC); un representante de la Universidad de la República; un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el MEC que posean las carreras de Comunicación; dos representantes de los titulares de servicios de comunicación audiovisuales comerciales; dos representantes de servicios de comunicación audiovisuales comunitarios; dos</p>

	<p>representantes de los trabajadores de los servicios de comunicación audiovisuales; dos representantes de la industria de producción de contenidos audiovisuales; un representante de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión; y un miembro no legislador designado por la Asamblea General, todos ellos con sus respectivos suplentes."</p> <p>La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) es un organismo de la órbita administrativa del Consejo de Comunicación Audiovisual que actúa de forma independiente como parte consultada por este último en los preceptos relacionados con la comunicación audiovisual.</p>
--	---

Tabla 6.16: Uruguay: Consejo Audiovisual (elaboración propia).

6.8. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN BOLIVIA: PARADOJAS EN LAS RADIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS.

El caso de Bolivia no deja de ser paradigmático y digno de ser estudiado en un futuro, cuando pase algo más de tiempo desde la aprobación de su última ley referida al audiovisual y telecomunicaciones (2011). Por un lado, existen conceptos y avances significativos en materia de medios comunitarios, tales como la división de los tres tercios que hacen del espacio radioeléctrico y que ya hemos visto también en la legislación argentina y uruguaya. Pero, por otro lado, hay una posibilidad de control fuerte tanto de licencias como de contenidos por parte del Gobierno boliviano. Existe una serie de radios calificadas propiamente como comunitarias (es decir, que cumplen las definiciones y estándares internacionales), ya que este país es de larga tradición de medios de comunicación

ciudadanos y alternativos, empezando por las radios mineras que fueron muy contestatarias en el pasado siglo. Y, sin embargo, también existe una red propia de radios

Que en un principio quisieron denominarse “comunitarias” pero que, ante la presión y la falta de cumplimiento con los propios requisitos establecidos, se incluyeron en la denominación “originarias”, un concepto basculante entre la radiodifusión pública – oficial y la exclusión cultural del artículo 41 de la Ley 1.632 (Ramos, J. 2011).

Si nos adentramos en la definición del artículo que cita el investigador Ramos (cuya ley actualmente está derogada, por lo que no la analizaremos), descubrimos que dice

Se excluye de la aplicación de la presente ley, a excepción de los aspectos técnicos relacionados con el uso del espectro electromagnético, las telecomunicaciones vinculadas a la seguridad y la defensa nacional establecidas por el Poder Ejecutivo, así como las de carácter social relacionadas con la educación y la salud. Estos servicios están exentos del pago de tasas y derechos por utilización de frecuencia, siempre que utilicen frecuencias electromagnéticas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico.

Decimos que las denominadas “radios de los pueblos originarios” no son estrictamente comunitarias por varias razones: la propiedad de los equipos del medio no corresponde estrictamente con una organización social, sino que los organizadores de la radio firman un contrato con el poder ejecutivo para que este les entregue los equipos necesarios para emitir durante un período determinado de tiempo. Además, en la cuestión de contenidos las emisoras que se acogen a esta forma deben realizar obligatoriamente interconexiones diarias con el informativo nacional de la Red Patria Nueva y su actividad está supervisada por la Dirección Nacional de Comunicación (DINACOM).

¿Cómo se traduce todo esto en la práctica, y en números? A pesar de la división en tres tercios del espacio radioeléctrico, hoy en día existen solamente 69 emisoras bajo la definición de “comunitarias” (26 en AM, 37 en FM y 6 en televisión) del total de 1459 licencias en curso. En cuanto a las comentadas “radios de los pueblos originarios” se han acordado y cedido equipos para alrededor de 60 radios, sin embargo solo 20 de ellas operan actualmente con licencia, estando en manos de comunidades indígenas y sindicatos.

Esto serían los datos que se dan en las bases oficiales. No obstante, si buscamos por redes, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en Bolivia aglutina a 122 miembros, englobando además las tres grandes redes de medios indígenas no estatales. Y si nos vamos a otros casos de comunicación popular o con tintes de servicio público (como la Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL) cuentan con 114 emisoras asociadas. Como vemos, los datos difieren bastante de unas fuentes a otras.

La legislación que nos va a ocupar en este caso es el *Decreto Supremo N° 29174, Reglamento de provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales del territorio nacional* del año 2007 (que derogó al *Decreto Supremo 28526, Reglamento para el funcionamiento de la radiodifusión comunitaria*, de 2005) y la *Ley N° 164, General de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación* de 2011 (que derogó la *Ley N° 1632, de Telecomunicaciones*, de 1995).

1. Definiciones	
Bolivia (2007)	Radiodifusión comunitaria.
Bolivia (2011)	Radiodifusión comunitaria y radios de los pueblos indígena originarios campesinos.

Tabla 6.17. Bolivia: definiciones (elaboración propia).

2. Otorgante de las licencias	
Bolivia (2007)	"Artículo 31. Licencias. III) En aplicación del Artículo 5 del presente Reglamento, la licencia para el servicio de radiodifusión comunitaria será otorgada de forma directa por la Superintendencia de Telecomunicaciones, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento e informe favorable del Viceministerio de Telecomunicaciones. [...]"
Bolivia (2011)	"Artículo 10. Distribución de frecuencias para radiodifusión. La asignación de frecuencias se realizará de la siguiente forma: 3. Las frecuencias destinadas al sector social comunitario y los pueblos indígena originario campesinos, y comunidades interculturales y afrobolivianas, serán asignadas mediante concurso de proyectos y su calificación se realizará mediante indicadores objetivos."

Tabla 6.18. Bolivia: otorgante de las licencias (elaboración propia).

3. Posibilidad de emisión de la radio comunitaria (Bolivia, 2011):

Artículo 10. Distribución de frecuencias para radiodifusión.

La distribución del total de canales de la banda de frecuencias para el servicio de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión analógica a nivel nacional donde exista disponibilidad, se sujetará a lo siguiente:

- 1. Estado, hasta el treinta y tres por ciento.*
- 2. Comercial, hasta el treinta y tres por ciento.*
- 3. Social comunitario, hasta el diecisiete por ciento.*
- 4. Pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas hasta el diecisiete por ciento.*

4. Área de emisión (Bolivia, 2007):

Artículo 35. Condiciones para la radiodifusión comunitaria.

I) La zona de cobertura para la radiodifusión comunitaria no podrá ser menor que el área geográfica de la localidad rural en la que se preste el servicio, ni podrá ser mayor que el área geográfica de la sección municipal respectiva.

Excepcionalmente, la Superintendencia de Telecomunicaciones podrá determinar zonas de cobertura mayor, previo informe favorable del Viceministerio de Telecomunicaciones, cuando exista viabilidad técnica y cuando las condiciones de asentamiento humano en estas zonas, permitan razonablemente identificarlas como una comunidad.

5. Incompatibilidades de las licencias (Bolivia, 2007):

Artículo 31. Licencias.

Una misma organización comunitaria sólo podrá obtener una (1) licencia para el servicio de radiodifusión comunitaria de radio y/o televisión, la cual no podrá contener más de una frecuencia para radio comunitaria ni más de una frecuencia para televisión comunitaria.

Artículo 35. Condiciones para la radiodifusión comunitaria.

III) Las licencias de radiodifusión comunitaria no podrán ser objeto de transferencia, cesión, arrendamiento, enajenación o cualquier acto de disposición que implique la pérdida total o parcial de su control, bajo pena de revocatoria inmediata de la licencia.

IV) No podrán otorgarse licencia de radiodifusión comunitaria a las siguientes personas:

- a) A dignatarios o autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, militares en servicio activo y funcionarios públicos que ostenten cargos jerárquicos.*
- b) A personas individuales o colectivas, cuyos miembros, representantes legales o apoderados tengan relación de parentesco de consanguinidad o de afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con el Superintendente General del SIRESE [Sistema de Regulación Sectorial] o el Superintendente de Telecomunicaciones.*
- c) A dirigentes o representantes a cualquier nivel de partidos políticos o grupos de electores, de gremios o cámaras.*
- d) A concesionarios de servicios de radiodifusión o personas que ejerzan su control, dirección o administración.*
- e) A personas vinculadas a concesionarios de servicios de radiodifusión o emparentadas con estos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por ser cónyuges.*
- f) A personas que ejerzan control, dirección o administración de otras radiodifusoras comunitarias.*
- g) A sacerdotes, ministros ordenados o cualquier representante de iglesias de cualquier credo, culto o secta.*
- h) A personas jurídicas públicas nacionales, departamentales o municipales, directamente o a través de terceras personas.*

6. Tiempos de emisión (Bolivia, 2007):

Artículo 36. Programación.

- g) Transmitir como mínimo cinco (5) horas al día.*

7. Duración de la licencia (Bolivia, 2007):

Artículo 31. Licencias.

IV) Las licencias otorgadas para la provisión del servicio de radiodifusión comunitaria tendrán un plazo de diez (10) años, renovables por igual período siempre que antes del vencimiento del plazo se solicite la renovación y existan informes favorables de la Superintendencia de Telecomunicaciones y del Viceministerio de Telecomunicaciones.

8. Tasas	
Bolivia (2007)	<p>"Artículo 34. Exención de pagos.</p> <p>En aplicación al Artículo 5 del presente Reglamento, la radiodifusión comunitaria queda exenta del pago de derechos por la asignación y el uso de frecuencias del espectro electromagnético, así como del pago de tasas de regulación."</p>
Bolivia (2011)	<p>"Artículo 64. Exención.</p> <p>I) Están exentos del pago de tasas y derechos por utilización de frecuencia, siempre que utilicen frecuencias establecidas en el plan nacional de frecuencias y cumplan con los aspectos técnicos relacionados con su uso:</p> <p>1. Las telecomunicaciones vinculadas a la seguridad, soberanía y defensa del Estado establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, así como las de carácter social, relacionadas con la educación, la salud y emergencias. [...]</p> <p>II) Los servicios de radiodifusión provistos por los pueblos y naciones indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, están exentos del pago del uso de frecuencias y del derecho de asignación siempre que utilicen</p>

	<p>frecuencias establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias y cumplan con los aspectos técnicos relacionados con su uso.</p> <p>III) Los servicios de radiodifusión provistos por los sectores social comunitario en el área urbana pagarán la tasa de regulación y el derecho de asignación, exceptuando el derecho de uso de frecuencia."</p>
--	--

Tabla 6.19. Bolivia: tasas (elaboración propia).

6.9. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN ECUADOR: NUEVAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO GRACIAS A LA LEY.

La ley ecuatoriana de comunicación, al igual que la uruguaya, es una de las más recientes que vamos a analizar en esta tesis. Fue aprobada en junio de 2013 y concretada en ciertos aspectos mediante un reglamento en enero de 2014 (sobre todo en cuestiones sobre publicidad, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, producción nacional, etc.). En esta ley también se ha aplicado la tendencia que ya hemos visto en Latinoamérica de dividir el espacio radioeléctrico en tres tercios (uno para el público, otro para el privado-comercial, y otro para el comunitario), lo que equilibraría un poco el 90% de frecuencias que estaban en manos del sector privado según el informe de la Comisión para la Auditoria de la Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión de 2012.

La radio comunitaria en Ecuador tiene más de tres décadas pero antes de la nueva ley de comunicación audiovisual estuvo con muy pocas posibilidades de sostenibilidad y permanencia en el tiempo (Carrión, H. 2007). Los datos ofrecidos, al igual que en Bolivia, son diversos: mientras que la Coordinadora de Radios Populares y Educativas de Ecuador (CORAPE) tiene actualmente 34 afiliadas, una iniciativa gubernamental denominada Creación de Redes de Medios Comunitarios, Públicos y Privados Locales tiene como

objetivo instalar de aquí a 2015 otras 20 radios comunitarias priorizando a los pueblos afroecuatorianos, montubios y organizaciones sociales. Este proyecto se establece, al igual que en Bolivia, bajo la figura del comodato, es decir, un convenio entre las radios comunitarias y el Gobierno por el cual este cede los equipos y a veces incluso el terreno para que la emisora pueda llevar a cabo su actividad, con lo que cabría preguntarse hasta qué punto es un fomento del desarrollo de esta comunicación ciudadana sin entrar en cuestiones de cierta dependencia o connivencia política con el medio de comunicación.

1. Definiciones: "Medios comunitarios".

2. Posibilidad de emisión de la radio comunitaria:

Artículo 70. Tipos de medios de comunicación.

Los medios de comunicación social son de tres tipos:

- 1. Públicos;*
- 2. Privados; y*
- 3. Comunitarios.*

Artículo 86. Acción afirmativa.

El Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos, exenciones de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estadios de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios.

Artículo 106. Distribución equitativa de frecuencias.

Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios.

Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente mediante:

- 1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles;*
- 2. La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior redistribución;*
- 3. La reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, jurídicas para su funcionamiento o fines para los que les fueron concesionadas, y su posterior redistribución;*
- 4. La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto por la ley; y,*
- 5. La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión.*

En todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo.

3. Área de emisión:

Artículo 114. Concesiones para repetidoras de medios privados y comunitarios.

Para fomentar la formación y permanencia de sistemas nacionales o regionales de radio y televisión privados y comunitarios, las personas naturales o jurídicas a quienes se ha adjudicado una concesión para el

funcionamiento de una estación matriz de radio o de televisión pueden participar en los concursos públicos organizados por la autoridad de telecomunicaciones y obtener frecuencias destinadas a funcionar exclusivamente como repetidoras de su estación matriz en otras provincias.

4. Receptores de las licencias:

Artículo 118. Concesiones al sector comunitario.

Dado que las concesiones de frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión comunitarias se otorgan a organizaciones con personería jurídica y sin finalidad de lucro, cuyos directorios cambian periódicamente, se establece que dicho cambio no afecta el derecho de concesión que la organización ha adquirido al ganar el correspondiente concurso público, ni puede interpretarse como una transferencia de la concesión de unas a otras personas.

Disposición transitoria séptima. Los medios de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales que adoptaron la figura jurídica de empresas o corporaciones de derecho privado para obtener frecuencias de radio y televisión podrán convertirse en medios comunitarios en el plazo de 180 días, luego de expedida la correspondiente reglamentación por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

Disposición transitoria décimo séptima. Las concesiones entregadas a organizaciones religiosas y que constan como públicas o privadas, podrán transformarse en concesiones comunitarias, sin fines de lucro.

5. Incompatibilidades de las licencias:

Artículo 111. Se prohíbe la participación en concursos públicos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones privadas y comunitarias de radio y televisión de señal abierta a las personas naturales o jurídicas postulantes que se hallen incurso en las siguientes circunstancias:

- 1. Quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y con la autoridad de telecomunicaciones.*
- 2. Quienes estén asociados o tengan acciones o participaciones superiores al 6% del capital social en una empresa en la que también son socios cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación o la autoridad de Telecomunicaciones;*
- 3. Quienes personalmente se encuentren en mora o estén impedidos de contratar con instituciones, organismos y entidades del sector público;*
- 4. Quienes personalmente o como accionistas de una empresa hayan sido concesionarios de una frecuencia de radio o televisión y haya revertido al Estado por las infracciones determinadas por la ley; y*
- 5. Las demás que establezca la ley.*

6. Emisión de publicidad:

Artículo 87. Financiamiento.

Los fondos para el funcionamiento de los medios comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta de

publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos.

7. Subvenciones:

Artículo 87. Financiamiento.

Las entidades públicas podrán generar fondos concursables para la difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios.

6.10. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA EN VENEZUELA: DE LOS MEDIOS IMPRESOS A LOS MEDIOS DE RADIODIFUSIÓN.

Venezuela es un caso curioso de nacimiento de medios comunitarios, puesto que su comunicación comunitaria nace entre las décadas 70 y 80, pero con mayor preeminencia y esfuerzo de los medios impresos que de los de radiodifusión (Villalobos, O., 2011) y con una orientación de inspiración de izquierda obrera católica (*ibíd*). En 1979, Telebonocó aparece en la escena siendo considerada la primera televisión comunitaria del país (Estado de Trujillo), mientras que las radios comunitarias se desarrollaron, sobre todo, a partir de la década de los 90 (Mora, C., 2005). Según los últimos datos de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), el total de medios comunitarios con licencia actualmente son 244 radios y 36 televisiones.

Los medios comunitarios han de atenerse a una serie de legislaciones, por un lado, general (*Ley Orgánica de Telecomunicaciones* del 2000 y actualizada en 2010) y, por otro, específica (*Decreto N° 1.521/2002, Reglamento de Radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público sin fines de lucro* y el *Decreto N° 1.522/2002, mediante el cual se exonera del pago de todos los tributos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones a los operadores debidamente habilitados para la prestación de*

servicios de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria, en los términos que en él se establecen).

1. Definiciones (Venezuela, Reglamento de 2002): "Radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro".

2. Otorgante de las licencias (Venezuela, Reglamento de 2002):

Artículo 3.

El Ministro de Infraestructura habilitará a las fundaciones comunitarias que hubieren cumplido las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sus reglamentos, las Condiciones Generales respectivas y demás normas aplicables, para el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora comunitaria y televisión abierta comunitaria, a cuyos efectos otorgará las habilitaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, sus atributos y las concesiones de radiodifusión correspondientes.

3. Posibilidad de emisión de los medios comunitarios (Venezuela, Reglamento de 2002):

Disposiciones Transitorias. Primera.

Las personas que se encontraren prestando servicios de radiocomunicaciones que permitan la difusión de programación de audio o audiovisual dirigida al público en general de corte comunitario deberán adecuarse a lo previsto en el presente Reglamento, debiendo presentar sus solicitudes ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de este Reglamento, a los fines de otorgamiento de la habilitación administrativa o concesión correspondiente, si fuere procedente.

Disposiciones transitorias. Tercera.

Dentro del primer año contado a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ofrecerá apoyo técnico a las Fundaciones Comunitarias con el objeto de promoverlas.

4. Área de emisión (Venezuela, Reglamento de 2002):

Artículo 6.

Los atributos de las habilitaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, tendrán como zona de cobertura la localidad en la que se prestará el servicio.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones determinará las localidades en las cuales se prestarán los servicios de radiodifusión sonora comunitaria y televisión abierta comunitaria. Tales localidades no podrán ser menores que el área geográfica de la parroquia en que se preste el servicio y no podrán abarcar fracciones del área total de una parroquia. Tampoco podrán las localidades tener un área mayor a la del municipio en el que se preste el servicio.

Excepcionalmente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá determinar localidades que abarquen dos o más parroquias de municipios o estados distintos, cuando las condiciones de asentamiento humano de estas permitan razonablemente identificarlas como una comunidad. También, excepcionalmente, podrá determinar localidades menores al área de una parroquia, cuando por sus características geográficas se haga necesaria la coexistencia de más de un servicio de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria dentro de la misma.

5. Receptores de las licencias (Venezuela, Reglamento de 2002):

Artículo 10. Solicitantes.

Las solicitudes a que hace referencia el artículo precedente podrán ser presentadas tanto por las fundaciones comunitarias como por algún miembro de la comunidad específica que actúe en calidad de promotor de una fundación comunitaria. (En este caso, si la solicitud se resuelve favorablemente dicho promotor está obligado a constituirse como una organización colectiva para terminar el proceso, es decir, como una fundación comunitaria, según el artículo 12 del presente reglamento).*

**Fundación comunitaria (artículo 2 – definiciones): Fundación de corte democrático, participativo y plural, constituida de conformidad con las previsiones establecidas en el Código Civil, cuyo objeto específico, exclusivo y excluyente consiste en asegurar la comunicación libre y plural de los miembros de una comunidad en una localidad determinada y que cumple con los requisitos exigidos por el presente reglamento para ostentar tal carácter.*

Artículo 16. Calidad de fundaciones comunitarias.

Las fundaciones constituidas de conformidad con las formaciones previstas en el Código Civil y las especificaciones determinadas en el presente Capítulo, tendrán carácter de comunitarias y, por ende, podrán ser titulares de la concesión de radiodifusión y de las habilitaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro. Si tales fundaciones perdieran el carácter de comunitarias de forma sobrevenida, se entenderán decaídos los títulos correspondientes.

6. Incompatibilidades de las licencias (Venezuela, Reglamento de 2002):

Artículo 4.

Una misma persona solo podrá obtener una (1) habilitación de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, la cual no podrá contener más de un atributo de radiodifusión sonora comunitaria ni más de un atributo de televisión abierta comunitaria.

Artículo 7.

Las habilitaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, y las concesiones de radiodifusión son títulos personalísimos, no susceptibles de ser cedidos, gravados o enajenados por ningún título, ni de realización de actos que impliquen el desprendimiento total o parcial de su control.

Artículo 22. Incompatibilidades.

No podrán ser autoridades u órganos de dirección, administración y control de las fundaciones comunitarias, así como tampoco intervenir en las mismas en forma directa o indirecta, las siguientes personas:

- 1. Funcionarios públicos que ostenten cargos de alto nivel.*
- 2. Militares activos.*
- 3. Dirigentes en cualquier nivel de partidos políticos o grupos de electores.*
- 4. Dirigentes o representantes de gremios o cámaras.*
- 5. Operadores de servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta.*
- 6. Personas que ejerzan el control, la dirección o administración de los operadores referidos en el numeral precedente o de otros operadores de radiodifusión comunitaria y televisión abierta comunitaria.*

7. Personas vinculadas a operadores de servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta o emparentadas con estos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad por ser cónyuges.

8. Los sacerdotes, ministros ordenados o cualquier representante de iglesias de cualquier credo, culto o secta, cuando otro sacerdote, ministro ordenado o representante de la organización a que pertenece sea autoridad u órgano de dirección, administración o control.

Artículo 24. Exclusión de las personas jurídicas públicas.

Las personas jurídicas públicas nacionales, estatales o municipales o sus entes descentralizados funcionalmente no podrán prestar servicios de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria directamente o a través de fundaciones comunitarias, así como tampoco podrán dirigir, administrar o controlar tales fundaciones.

7. Tiempos de emisión (Venezuela, Reglamento de 2002):

Artículo 28. Medio y mensaje.

[...] Los operadores comunitarios deberán destinar como mínimo el setenta por ciento (70%) de su período de transmisión diario a la transmisión de producción comunitaria.

Artículo 29. Pluralidad en la programación.

En ningún caso un mismo productor, comunitario o independiente, podrá ocupar más del veinte por ciento (20%) del período de transmisión diario de un servicio de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria.

La producción comunitaria generada por el operador comunitario no podrá ocupar, en ningún caso, más del quince por ciento (15%) del período de transmisión diario de la estación.

Artículo 32. Retransmisiones simultáneas.

Los operadores comunitarios podrán retransmitir en forma simultánea:

1. Programación de servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, siempre que no exceda del dos por ciento (2%) del período de transmisión diaria.

2. Programación de otros servicios de radiodifusión sonora comunitaria y televisión abierta comunitaria, siempre que no exceda del diez por ciento (10%) del período de transmisión diaria.

Artículo 37. Período de transmisión.

El servicio de radiodifusión sonora comunitaria podrá prestarse durante las veinticuatro (24) horas del día, pero deberá tener como mínimo un período de transmisión de seis (6) horas al día.

Durante los primeros seis (6) meses de transmisión, los operadores comunitarios que presten el servicio de radiodifusión sonora comunitaria deberán transmitir programación, comunitaria o no, mínimo durante una (1) hora al día.

Artículo 41. Período de transmisión.

El servicio de televisión abierta comunitaria podrá prestarse durante las veinticuatro (24) horas del día, pero deberá tener un período de transmisión mínimo de seis (6) horas al día.

Durante los primeros seis (6) meses de transmisión, los operadores comunitarios que presten el servicio de televisión abierta comunitaria deberán transmitir programación, comunitaria o no, como mínimo

durante una (1) hora al día. Asimismo, desde el sexto hasta el noveno mes de operación, el tiempo de transmisión será como mínimo de dos (2) horas diarias.

8. Emisión de publicidad (Venezuela, Reglamento de 2002):

Artículo 30. Publicidad.

Los operadores comunitarios podrán transmitir publicidad comercial de pequeñas y medianas industrias domiciliadas en la localidad donde se presta el servicio. Igualmente, podrán transmitir publicidad de bienes y servicios que ofrezcan las personas naturales miembros de la comunidad donde se presta el servicio, así como la publicidad de grandes industrias y personas naturales de otras comunidades siempre y cuando estas no excedan del cincuenta por ciento (50%) del tiempo de transmisión establecido para tal fin.

Artículo 31. Patrocinio.

La programación podrá ser patrocinada por personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no dentro de la localidad de que se trate. A tales fines, la programación solo podrá incluir mensajes auditivos o visuales del nombre o logo de tales empresas o entes públicos, sin que pueda en ningún caso difundir información de ningún tipo de los bienes y servicios que ofrecen.

9. Tasas	
Venezuela (2000, reforma de 2010)	"Artículo 157. [...] El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá exonerar total o parcialmente a las emisoras de frontera, de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público sin fines de lucro que tengan la condición de tales, según la respectiva normativa, del pago de los tributos establecidos en esta Ley."
Venezuela (2002)	"Artículo 1. Se exonera del pago de todos los tributos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones a los operadores debidamente habilitados para la prestación de servicios de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria, en los términos establecidos en el presente decreto."

Tabla 6.19. Venezuela: tasas (elaboración propia).

6.11. EL *BIS* DE FRANCIA Y PAÍSES BAJOS.

Como hemos adelantado en algunos comentarios, los países de Francia y Países Bajos no están incluidos en la muestra analizada con la pormenorización de los otros diez, pero nos resulta fundamental hacerles al menos una mención a sus sistemas de comunicación relacionados con los medios comunitarios.

En el caso de los Países Bajos, no han entrado en la muestra porque en su legislación no se mencionan bajo ninguna definición similar a la de "medios comunitarios", sino que entran dentro de la categoría de "medios públicos". Ocupan un puesto muy alto en la clasificación

del Community Media Forum of Europe que hemos tomado como referencia, en el tercer lugar.

Dentro de los medios públicos, entienden que las entidades no lucrativas con persona jurídica acorde al Derecho holandés tienen la capacidad para emitir ofertas de programación y solicitar licencias para sus proyectos siempre y cuando cumplan con una misión de servicio público de interés general (Ley de Medios aprobada en diciembre de 2008). Estas entidades deben tener unos estatutos acordes a su definición y objetivos y se permite que tengan un carácter social, cultural, religiosa o espiritual. Aparte de este concepto, también se incluye otro en el que entidades educativas y de formación pueden emitir contenidos en estas áreas de desarrollo, siempre y cuando en sus estatutos sociales se especifique que son organizaciones representativas del ámbito de la educación, la formación o filosóficas.

En el caso de Francia, ocupa un puesto medio en la clasificación del CMFE (la décima, junto con Suiza) a pesar de tener el sector de radio comunitaria bastante desarrollado. El problema aquí ha sido que el estudio tomaba como análisis tanto el campo de la radio como el de la televisión, y el caso de la televisión es lo que le ha bajado la media al sector de medios comunitarios francés: 7,2 puntos sobre 10 en radio y 2,2 puntos sobre 10 en televisión, lo que hace que su media sea, por tanto, 4,7 puntos sobre 10. Para hacernos una idea más concreta, los datos del CMFE muestran que existen alrededor de 600 radios comunitarias con licencia en Francia, pero tan solo cuatro televisiones.

Sin embargo, merece la pena que nombremos un poco el sector radio, regulado por las leyes de 2004 y 2006 (relativas a la libertad de comunicación) y la de 2012 (relativa a los baremos de subvención). Es el Consejo Superior Audiovisual a quien se le asignan los recursos suficientes para examinar la petición de frecuencias explotadas por entidades sin ánimo de lucro con la finalidad de realizar una misión de comunicación de proximidad, para promover los intercambios entre los grupos sociales y culturales, la visibilización de los mismos, el apoyo del desarrollo local, la protección del medio ambiente y la lucha contra la exclusión.

Ahora bien, lo más interesante del caso francés es su llamado *Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER)*, es decir, el Fondo de Apoyo a la Radiodifusión de Ámbito Local. Son ayudas públicas que pueden ser pedidas por aquellas radios legales asociativas que cumplen una misión social de comunicación de proximidad y cuyos ingresos comerciales (por ejemplo, por patrocinios) son inferiores al 20% de su presupuesto total. Tienen que emitir por ondas, no valen las radios que emitan únicamente por internet. Estas ayudas van desde la adquisición y montaje del material necesario para emitir como para el trabajo diario de programación y mantenimiento del proyecto. El fondo público es obtenido mediante un impuesto sobre la publicidad emitida por la radio y la televisión convencional, pagada por los anunciantes en base a unos baremos establecidos por el código tributario francés.

El Parlamento Europeo:

Pide a los Estados miembros que pongan a disposición el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) no se ha de evaluar en términos de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa.

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre los medios del tercer sector de la comunicación (TSC).

CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LEGISLAR A LOS MEDIOS COMUNITARIOS

Diversos organismos internacionales han publicado en los últimos años una serie de documentos y resoluciones en los que se reflejan las recomendaciones sobre cómo deberían los Estados realizar el tratamiento legal y normativo de los medios sin ánimo de lucro gestionados por la ciudadanía, y qué aspectos han de tenerse en cuenta a la hora de redactar las legislaciones nacionales que les afecten.

En este sentido, caben destacar las posturas de la ONU y de la Unión Europea, así como la de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo listado de documentos sería el siguiente:

1. *Declaración conjunta sobre la diversidad de la radiodifusión* (2007), firmada por el Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, el Representante sobre Libertad de los medios de Comunicación de la OSCE, el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la CADHP.
2. *Resolución de 25 de septiembre de 2008 sobre medios comunitarios* realizada por el Parlamento Europeo.
3. *Declaración de Maputo sobre promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas* (2008) producida por la UNESCO.
4. *El rol de los medios comunitarios para promover la cohesión social y el diálogo intercultural* (2009) publicado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
5. *Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria* (2009) promovidos por AMARC.

En el caso de los cuatro primeros textos se corresponden a organismos internacionales a los cuales el Estado español pertenece como miembro de los mismos, ergo, en principio, debería cumplir no solo las normas vinculantes que le obligan a adaptar su legislación para no entrar en conflicto con la del marco superior, sino que también debería tener en cuenta aquellos estudios y conclusiones que realizan estos organismos. En el caso del último texto, el de AMARC, aunque no sea una organización internacional política al estilo de las anteriores, sí que es la mayor representación mundial (sino única) que actualmente existe para las radios comunitarias (no así para las televisiones, que no encuentran su paralelismo en otra entidad similar actualmente).

Hemos decidido ilustrar este capítulo sobre recomendaciones y resoluciones internacionales realizando un cuadro comparativo entre estos cinco textos de referencia a nivel mundial y la ley aprobada por el Gobierno español en 2010, para intentar analizar hasta qué punto dicho Gobierno ha seguido o no estas directrices y si en algún momento podría llegar incluso a contradecirlas. En el caso del capítulo anterior, cuando se analizaban las leyes nacionales de los diez países escogidos como muestra, muchas de esas normativas estaban aprobadas antes de los documentos que estamos citando, pero en el caso del Estado español todas las recomendaciones internacionales son anteriores a 2010 por lo que podría haberlas consultado para adaptarlas a nuestra idiosincrasia nacional.

La tabla que se muestra a continuación es una elaboración propia que utiliza datos recopilados por Alejandro Blanco Vallejo, Presidente de la emisora comunitaria Onda Color de Málaga y ex-coordinador de Finanzas de la ReMC.

7.1. COMPARACIÓN ENTRE EL *DEBE* Y EL *ES* EN EL TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓN ESPAÑOL.

DIRECTRIZ INTERNACIONAL	TÉRMINOS EN LOS QUE SE REFIERE AL TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓN	EN LA LGCA APARECE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS
<p>Los medios comunitarios deben tener acceso a una reserva de frecuencias.</p> <p>(ONU/OSCE/AMARC).</p>	<p>ONU / OSCE: <i>Los diferentes tipos de medios de comunicación de masas por ondas –comerciales, públicos y comunitarios– deben ser capaces de funcionar y tener un acceso equitativo a todas las plataformas de distribución disponibles. Las medidas específicas para promocionar la diversidad deben incluir la reserva de frecuencias suficientes para los diferentes tipos de medios, debe servirse de leyes, una condición que ambas tecnologías de la distribución y la recepción son complementarias y/o integradoras, incluyendo las que atraviesan fronteras, y sin que haya un acceso discriminatorio a los servicios de apoyo, tales como patrones de programas electrónicos.</i></p>	<p>SE RECOGE PARCIALMENTE.</p> <p>No establece una reserva concreta aunque alude a una “garantía”: <i>La Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios.</i></p>

	AMARC: Reserva de frecuencias: Los planes nacionales de gestión del espectro deben incluir, en todas las bandas de radiodifusión, una reserva significativa y equitativa respecto a las otras modalidades de radiodifusión, para el acceso de medios comunitarios y otros no comerciales como forma de garantizar su existencia. Este principio es extensivo a las nuevas asignaciones de espectro para emisoras digitales.	
Los estados deben dar frecuencias a los medios comunitarios valorando su interés social, no el económico. (PARLAMENTO UE)	Pide a los Estados miembros que pongan a disposición el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa.	NO SE RECOGE.

<p>La asignación de frecuencias debe hacerse mediante concurso público y transparente. (AMARC)</p>	<p><i>Procedimientos de asignación: El principio general de asignación del uso de frecuencias radioeléctricas debe ser el concurso abierto, transparente y público. Diferenciados o no según los sectores, a través de cláusulas y criterios específicos, los concursos deberán tomar en consideración la naturaleza y las particularidades del sector de los medios comunitarios para garantizarles una participación efectiva y no discriminatoria. Las condiciones de las licencias, los criterios y mecanismos de evaluación de las propuestas para la asignación de frecuencias y los cronogramas del proceso estarán establecidos en forma clara en la normativa y ampliamente divulgados antes del inicio del procedimiento. El proceso puede comenzar por iniciativa estatal o como respuesta a solicitudes de comunidades organizadas o entidades sin fines de lucro interesadas. Las audiencias públicas constituyen una buena práctica tanto para los procesos de adjudicación como para su evaluación y eventual renovación.</i></p>	<p>SE RECOGE PARCIALMENTE SU NATURALEZA, PERO NO LA CUESTIÓN DE LOS CONCURSOS</p> <p><i>Las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la</i></p>
---	--	--

		<i>vertebración del tejido asociativo.</i>
<p>Los estados deben reconocer a los medios comunitarios como a los otros tipos de medios. (PARLAMENTO UE)</p> <p>Los medios comunitarios no deben encontrar requisitos severos para acceder a frecuencias. (ONU / OSCE)</p>	<p>PARLAMENTO UE: Recomienda a los Estados miembros que den reconocimiento legal a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como grupo definido, junto a los medios de comunicación comerciales y públicos, cuando no exista este reconocimiento legal, sin que ello vaya en detrimento de los medios de comunicación tradicionales;</p> <p>ONU / OSCE: <i>Los medios de comunicación comunitarios por ondas deben ser reconocidos explícitamente en la ley como una forma distinta de comunicación masiva por ondas, deben beneficiarse de procesos para conseguir licencias que sean justos y sencillos, no deben enfrentarse a criterios tecnológicos o de otro tipo que sean severos para conseguir licencia, deben beneficiarse de una cuota de licencias por concesión y deben tener acceso a la publicidad.</i></p>	<p>SE RECOGE MUY ESCASAMENTE</p> <p>Simplemente, al ser la primera vez que se recogen los medios comunitarios en una ley nacional, se cumpliría el reconocimiento normativo de los mismos, aunque en condiciones diferentes a cómo sugieren la recomendaciones.</p>

<p>Los medios comunitarios deben tener reconocimiento legal. (CONSEJO DE EUROPA)</p> <p>Los medios comunitarios deben ser promovidos. (UNESCO)</p>	<p>CONSEJO DE EUROPA: Llama a crear una infraestructura legislativa sin la cual los medios comunitarios no podrán desarrollarse.</p> <p>UNESCO: <i>Pedimos a los estados miembros que creen un entorno que promueva el desarrollo de las tres categorías de emisoras de radiotelevisión y, en particular, mejoren las condiciones para el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios y la participación de las mujeres en dichos medios.</i></p>	
<p>Los estados deben reconocer a los medios comunitarios como a los otros tipos de medios (AMARC)</p>	<p>AMARC: Diversidad de medios, contenidos y perspectivas. La diversidad y pluralismo en la radiodifusión es el principal objetivo de cualquier marco regulatorio de radiodifusión democrático. Esto implica la existencia de medidas efectivas para impedir la concentración en la propiedad de los medios, garantizar la expresión de una diversidad de contenidos y perspectivas en los medios, y</p>	<p>SE RECOGE PARCIALMENTE</p> <p><i>Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como</i></p>

	reconocer una diversidad de formas jurídicas en la propiedad de los medios, finalidad y lógica de funcionamiento, con tres sectores o modalidades de radiodifusión diferenciadas: público-estatal, privado-comercial y social-sin fines de lucro, donde se incluyen los medios propiamente comunitarios.	<i>comunitarios.</i>
Definición: los medios comunitarios tienen una finalidad social, gestionados por asociaciones, la comunidad participa en la propiedad, financiación y contenidos y son independientes. (AMARC)	<i>Definición y características: Las radios y televisiones comunitarias son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales sin fines de lucro de diverso tipo. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales, que no responden a partidos políticos ni empresas comerciales, ni están vinculados a ellos.</i>	SE RECOGE MUY ESCASAMENTE
Definición: Los medios	Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta	SE RECOGE MUY

<p>comunitarios no tienen ánimo de lucro, son independientes, contribuyen al diálogo intercultural, son responsables ante su comunidad y abiertos a la comunidad en la gestión y creación de contenidos.</p> <p>(PARLAMENTO UE)</p>	<p>los elementos contenidos en la Resolución al definir los medios del tercer sector de la comunicación como medios:</p> <p><i>a) Sin ánimo de lucro, independientes de los poderes tanto nacionales como locales y dedicados fundamentalmente a actividades de interés público y de la sociedad civil, con objetivos claramente definidos que siempre incluyen un beneficio social y contribuyen al diálogo intercultural;</i></p> <p><i>b) Responsables ante la comunidad a la que tratan de servir, lo que significa que han de informar a la comunidad de sus acciones y decisiones y justificarlas y que serán objeto de sanciones en caso de conducta indebida, de modo que el servicio ha de permanecer bajo el control de los intereses de la comunidad para impedir la creación de redes "de arriba abajo";</i></p> <p><i>c) Abiertos a la participación de los miembros de la comunidad en la creación de contenidos, y en todos los aspectos operativos y de</i></p>	<p>ESCASAMENTE</p>
---	---	--------------------

	<i>gestión, aunque las personas responsables del contenido editorial deberán ser profesionales.</i>	
Los medios comunitarios fortalecen la diversidad y la identidad local. (PARLAMENTO UE)	Subraya que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) son un medio eficaz de fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la identidad local, lo que explica la diversidad del sector.	SE RECOGE PARCIALMENTE Los medios comunitarios atienden necesidades sociales y fomentan el desarrollo local.
Los medios comunitarios fomentan la tolerancia, el pluralismo y el diálogo intercultural. (PARLAMENTO UE)	Señala que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) contribuyen a reforzar las identidades de grupos de intereses específicos, a la vez que permiten que los miembros de estos grupos establezcan vínculos con otros grupos de la sociedad, por lo que desempeñan una función importante para fomentar la tolerancia y el pluralismo en la sociedad y contribuyen al diálogo intercultural.	NO SE RECOGE
	Subraya asimismo que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) promueven el diálogo intercultural mediante la	NO SE RECOGE

<p>Los medios comunitarios luchan contra los estereotipos que sufren colectivos en riesgo de exclusión.</p> <p>(PARLAMENTO UE)</p> <p>Los medios comunitarios fomentan el acceso a la información de los excluidos.</p> <p>(UNESCO)</p>	<p>educación del público en general, la lucha contra los estereotipos negativos y la corrección de las ideas divulgadas por los medios de comunicación de masas respecto de las comunidades de la sociedad amenazadas de exclusión, como los refugiados, los inmigrantes, la población romaní y otras minorías étnicas y religiosas; hace hincapié en que estos medios son uno de los instrumentos existentes para facilitar la integración de los inmigrantes y asimismo permitir a las personas desfavorecidas en la sociedad convertirse en participantes activos al intervenir en debates importantes para ellas.</p> <p>Destacando la contribución específica a la diversidad de los medios de comunicación que aporta cada categoría de emisoras de radio-televisión, en particular, la función de las emisoras comunitarias que fomentan el acceso a la información de los grupos de población insuficientemente representados o marginados, la expresión de sus ideas y la participación en la adopción de decisiones.</p>	
---	--	--

Los medios comunitarios fomentan la participación ciudadana y el uso de servicios públicos. (PARLAMENTO UE)	Celebra que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) puedan hacer a los ciudadanos más conscientes de la existencia de determinados servicios públicos y puedan contribuir a fomentar la participación ciudadana en el discurso público.	NO SE RECOGE
Los medios comunitarios ayudan en la formación. (PARLAMENTO UE)	Señala que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) pueden desempeñar un papel significativo en los programas de formación con la participación de organizaciones externas, incluidas las universidades, y miembros de la comunidad no cualificados, como valioso centro de experiencia laboral; señala que la formación en competencias digitales, de red y editoriales que se adquiere mediante la participación en actividades de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) aporta conocimientos útiles y transmisibles.	NO SE RECOGE
Los medios comunitarios potencian a los creadores locales.	Señala que los medios de tercer sector de la comunicación (TSC) actúan como catalizador de la creatividad local, al ofrecer a artistas y	NO SE RECOGE

(PARLAMENTO UE)	empresarios creativos una plataforma pública para ensayar ideas y conceptos nuevos.	
Los medios comunitarios alfabetizan mediáticamente a la ciudadanía. (PARLAMENTO UE)	Considera que los medios de comunicación del tercer sector (TSC) contribuyen a alcanzar el objetivo de mejorar la alfabetización mediática de los ciudadanos mediante su participación directa en la creación y la difusión de contenidos y preconiza la creación de canales comunitarios en los centros de enseñanza con el fin de desarrollar el civismo entre los jóvenes, incrementar los conocimientos mediáticos y crear una serie de competencias que se podrán utilizar para la participación en los medios del tercer sector de la comunicación.	NO SE RECOGE
Los medios comunitarios están vinculados a su comunidad, a la que sirven, y son plurales. (AMARC)	<i>Objetivos y fines:</i> <i>Los medios comunitarios deben su razón de ser a satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la</i>	SE RECOGE PARCIALMENTE Los medios comunitarios

	<p><i>información y libertad de expresión de los integrantes de sus comunidades. Sus finalidades se relacionan directamente con las de la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del desarrollo social, de los derechos humanos, de la diversidad cultural, de la pluralidad de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios pluralistas y por tanto deben garantizar el acceso, diálogo y participación de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales y religiosas, edades o de cualquier otro tipo.</i></p>	<p>atienden necesidades sociales y fomentan el desarrollo local.</p>
<p>Los medios comunitarios garantizan la información local. (PARLAMENTO UE)</p>	<p>Señala que, habida cuenta de la supresión o la inexistencia de medios de comunicación públicos y comerciales en determinadas zonas, incluidas las periféricas, y la tendencia de los medios de comunicación comerciales a reducir el contenido local, los medios del</p>	<p>NO SE RECOGE</p>

	tercer sector de la comunicación (TSC) podrían constituir la única fuente de noticias e información locales y la única voz de las comunidades locales.	
Se debe potenciar la participación de la mujer en los medios comunitarios. (UNESCO)	<i>Pedimos a los estados miembros que creen un entorno que promueva el desarrollo de las tres categorías de emisoras de radiotelevisión y, en particular, mejoren las condiciones para el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios y la participación de las mujeres en dichos medios.</i>	NO SE RECOGE
Los medios comunitarios refuerzan el pluralismo en los medios de comunicación. (PARLAMENTO UE)	Destaca que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) contribuyen a reforzar el pluralismo de los medios de comunicación por ofrecer perspectivas adicionales sobre asuntos de importancia central para una comunidad determinada.	NO SE RECOGE
Los medios comunitarios garantizan	<i>Reconocimiento y promoción:</i>	NO SE RECOGE

el derecho a informar y asegurar la pluralidad. (AMARC)	<i>El reconocimiento y diferenciación de los medios comunitarios en el marco normativo nacional tiene como objetivo garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, asegurar la diversidad y pluralidad de medios y promover este sector. Su inclusión en los textos legales necesita acompañarse con procedimientos, condiciones y políticas públicas de respeto, promoción y protección para garantizar su existencia y desarrollo.</i>	
Los medios comunitarios están vinculados a su comunidad, a la que sirven. Son plurales. (AMARC)	<p><i>Objetivos y fines:</i></p> <p><i>Los medios comunitarios deben su razón de ser a satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los integrantes de sus comunidades. Sus finalidades se relacionan directamente con las de la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del desarrollo social, de los derechos humanos, de la diversidad cultural, de la pluralidad de informaciones y opiniones, de</i></p>	SE RECOGE ESCASAMENTE

	<i>los valores democráticos, de la satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios pluralistas y por tanto deben garantizar el acceso, diálogo y participación de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales y religiosas, edades o de cualquier otro tipo.</i>	
Los medios comunitarios tienen que ser independientes de los partidos políticos (PARLAMENTO UE).	Subraya la necesidad de la independencia política de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC).	NO SE RECOGE
Los medios comunitarios son un indicativo del pluralismo. (PARLAMENTO UE)	Pide a la Comisión que tenga en cuenta a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como solución alternativa surgida en la base para aumentar el pluralismo de los medios de comunicación cuando establezca indicadores relativos a dicho pluralismo.	NO SE RECOGE

<p>Los medios comunitarios son una vía de comunicación con la ciudadanía que el Estado puede aprovechar. (PARLAMENTO UE)</p>	<p>Considera que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) pueden constituir un instrumento eficaz para acercar la Unión a sus ciudadanos al dirigirse a grupos de público específicos; recomienda a los Estados miembros que colaboren más activamente con los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) para entablar un diálogo más estrecho con los ciudadanos.</p>	<p>NO SE RECOGE</p>
<p>Es necesaria una financiación adicional para los medios comunitarios, especialmente de cara a la digitalización. (PARLAMENTO UE)</p>	<p>Señala que la buena calidad de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) es esencial para desarrollar su potencial y destaca que sin los recursos financieros adecuados no puede haber tal calidad; observa que los recursos de financiación de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) son objeto de grandes variaciones, aunque en general escasos, y reconoce que una financiación adicional y la adaptación digital permitiría al sector aumentar su perfil innovador y prestar nuevos y esenciales servicios que aportarían un valor añadido a los servicios analógicos existentes.</p>	<p>NO SE RECOGE</p>

Los medios comunitarios deben tener apoyos para actuar ante la UE y los Estados miembros. (PARLAMENTO UE)	Observa que el sector carece de apoyo para emprender mayores esfuerzos por mejorar su representación y sus contactos ante la UE y los responsables nacionales de la adopción de decisiones.	NO PROCEDE TRANSPOSICIÓN
Los estados deben apoyar más a los medios comunitarios. (PARLAMENTO UE)	Pide a los Estados miembros que apoyen más activamente a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) para sostener el pluralismo de los medios de comunicación, si bien dicho apoyo no se ha de prestar en detrimento de los medios de comunicación públicos.	NO SE RECOGE
Las autoridades pueden incluir medios comunitarios en sus acciones. (PARLAMENTO UE)	Subraya el papel que pueden desempeñar las autoridades locales, regionales y nacionales a la hora de reforzar y promover los medios del tercer sector de la comunicación (TSC), poniendo a su disposición la adecuada infraestructura e integrando su apoyo en programas destinados a fomentar el intercambio de buenas prácticas, como el programa comunitario "Regiones por el Cambio Económico"	NO SE RECOGE

	(antiguamente Interreg).	
Los medios comunitarios deben rendir cuentas económicas ante su comunidad de forma transparente y tienen derecho a la sostenibilidad económica. (AMARC)	<p><i>Financiamiento:</i></p> <p><i>Las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión comunitaria tienen derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a través de recursos obtenidos mediante donaciones, auspicios, patrocinios, publicidad comercial y oficial y otros legítimos. Todo ellos deberán ser reinvertidos íntegramente en el funcionamiento de la emisora para el cumplimiento de sus objetivos y fines. Cualquier límite en el tiempo o cantidad de publicidad debe ser razonable y no discriminatorio. Los medios deben rendir cuentas de forma periódica a la comunidad a la que representan haciendo transparente y público el manejo de sus recursos.</i></p>	<p>EN CONTRA:</p> <p>Los medios comunitarios deben rendir cuentas financieras ante la autoridad audiovisual gubernamental.</p> <p>Los medios comunitarios tienen limitado su presupuesto anual.</p>
	ONU / OSCE: Los medios de comunicación comunitarios por ondas	EN CONTRA

<p>Los medios comunitarios deben tener acceso a la publicidad (ONU/OSCE).</p> <p>Los medios comunitarios pueden hacer publicidad. (AMARC)</p>	<p>deben ser reconocidos explícitamente en la ley como una forma distinta de comunicación masiva por ondas, deben beneficiarse de procesos para conseguir licencias que sean justos y sencillos, no deben enfrentarse a criterios tecnológicos o de otro tipo que sean severos para conseguir licencia, deben beneficiarse de una cuota de licencias por concesión y deben tener acceso a la publicidad.</p> <p>AMARC: Financiación:</p> <p><i>Las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión comunitaria tienen derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a través de recursos obtenidos mediante donaciones, auspicios, patrocinios, publicidad comercial y oficial y otros legítimos. Todo ellos deberán ser reinvertidos íntegramente en el funcionamiento de la emisora para el cumplimiento de sus objetivos y fines. Cualquier límite en el tiempo o cantidad de publicidad debe ser razonable y no discriminatorio. Los medios deben rendir cuentas de forma periódica</i></p>	<p>Los medios comunitarios no pueden emitir publicidad.</p>
---	---	---

	<i>a la comunidad a la que representan haciendo transparente y público el manejo de sus recursos.</i>	
Los medios comunitarios deben tener ayudas económicas públicas y reducciones de tasas. (AMARC)	<p><i>Fondos públicos:</i></p> <p><i>La existencia de fondos públicos con recursos suficientes es un elemento clave para promover la creación y desarrollo de los medios comunitarios. Es deseable que se exonere o reduzca el pago de tasas e impuestos para adecuarlos a las características no lucrativas de las emisoras.</i></p>	<p>EN CONTRA</p> <p>Los medios comunitarios deben pagar lo mismo en tasas, cánones y derechos que otros operadores.</p>
Los medios comunitarios pueden financiarse mediante fondos públicos, cánones o parte de las tasas públicas. (CONSEJO DE EUROPA)	<p>A reconocer que el valor social de los medios comunitarios y su papel como servicio público local gracias a los fondos de la comisión para sostener el sector, con esquemas como el canon francés al sector audiovisual comercial (FSER), la asignación de una parte de las tasas de las frecuencias (Irlanda, algunos estados alemanes) o reduciendo los costes de las licencias e indirectamente, mediante la financiación</p>	<p>NO SE RECOGE</p>

	de proyectos como parte de programas gubernamentales dirigidos a la salud, el desarrollo de la comunidad, educación, inclusión social, ayuda a comunidades de minorías étnicas, etc.	
Los medios comunitarios no deben tener limitaciones tecnológicas previas que limiten los objetivos de los proyectos (AMARC).	<p>Acceso tecnológico:</p> <p>Todas las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro tienen derecho a utilizar cualquier tecnología de radiodifusión y telecomunicaciones disponible, sea por cable y otros medios físicos, señales satelitales o por cualquiera de las bandas de radio y TV y otros usos del espectro radioeléctrico, y en sistemas analógicos como digitales. Las características técnicas de la emisora dependerán únicamente de las necesidades de la comunidad que sirve y representa, la propuesta comunicacional de la emisora y la disponibilidad y planes nacionales de gestión del espectro.</p>	<p>EN CONTRA, YA QUE ESTABLECE UNA POSIBILIDAD NO PREVISTA PARA OTROS TIPOS DE OPERADORES</p> <p>Los medios comunitarios pueden compartir un mismo canal.</p>
Los medios comunitarios deben estar	CONSEJO DE EUROPA: A preservar frecuencias analógicas que	NO SE RECOGE

<p>en la era digital (CONSEJO EUROPA) Se debe apoyar a los medios comunitarios en la transición a lo digital (ONU/OSCE).</p>	<p>podrían, en algunos países, seguir siendo necesitadas después del apagón digital y asegurarse de que los medios comunitarios no son desterrados del entorno digital.</p> <p>ONU/OSCE: <i>En consideración con el impacto sobre el acceso a los medios de comunicación masivos y a los diferentes tipos de emisores, deben ser tenidos en cuenta al planificar la transición de las emisiones analógicas a las digitales. Esto requiere un diseño transparente para el intercambio que promueva, en lugar de limitaciones, los intereses públicos en la comunicación masiva por ondas. Las medidas deben ser tomadas para garantizar que los costes de la transición digital no limitan la capacidad de los emisores comunitarios para emitir. Donde sea apropiado, esta consideración debe ser otorgada reservando parte del espectro radioeléctrico para los emisores de radio en el medio plazo. Finalmente parte del espectro liberado mediante la “brecha digital” debe ser reservado para los usos de difusión masiva por ondas.</i></p>
--	---

Los estados deben garantizar que los medios comunitarios se digitalicen. (AMARC)	<p>AMARC: <i>Inclusión digital:</i></p> <p><i>El compromiso de los Estados para superar la brecha digital y garantizar la inclusión de todos los sectores a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, supone mecanismos que garanticen el acceso y migración de los medios comunitarios y otros no comerciales a las nuevas tecnologías y a los retos que plantea la convergencia de medios y la digitalización de los soportes analógicos.</i></p>	
Los medios comunitarios no tendrán restricción a una cobertura local o potencia determinada. (AMARC)	<p><i>Acceso universal:</i></p> <p><i>Todas las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro tienen derecho a fundar medios comunitarios, sean de carácter territorial o de intereses y estén ubicadas en zonas rurales o urbanas.</i></p> <p><i>La radiodifusión comunitaria no implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida y, por tanto, no debe haber limitaciones previas o arbitrarias de cobertura, potencia o de</i></p>	NO SE RECOGE

	<i>cantidad de emisoras comunitarias en una localidad, región o en el país, excepto restricciones razonables para evitar la concentración en la propiedad de medios.</i>	
El organismo que otorga las frecuencias debe tener presencia social. (AMARC)	<p><i>Autoridades competentes:</i></p> <p><i>El uso de las frecuencias deberá ser asignado, supervisado, revocado o prorrogado por organismos estatales independientes del gobierno y de grupos económicos y empresariales, que contarán con integración y participación de la Sociedad Civil. El debido proceso y la provisión de recursos adecuados para recurrir sus decisiones son garantías necesarias en un Estado de Derecho.</i></p>	NO SE RECOGE
No se impondrán requisitos económicos injustificados a los medios comunitarios (AMARC)	<p><i>Requisitos no discriminatorios:</i></p> <p><i>Los requisitos administrativos, económicos y técnicos exigidos a las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro interesadas en fundar medios comunitarios serán los estrictamente necesarios</i></p>	<p>EN CONTRA:</p> <p>La ley española sólo establece explícitamente el pago de derechos y cánones a los medios</p>

	para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de sus derechos.	comunitarios
<p>Los Estados deben pedir prioritariamente a los proyectos de medios comunitarios viabilidad social, aunque también unos mínimos económicos</p> <p>(AMARC)</p>	<p><i>Criterios de evaluación:</i></p> <p><i>Los criterios de evaluación serán diferenciados según las diversas modalidades de radiodifusión. En el caso de los medios comunitarios se calificarán prioritariamente la pertinencia del proyecto comunicacional, social y cultural, la participación de la comunidad en la emisora, los antecedentes de trabajo comunitario de la organización proponente y el aporte que hará la emisora a la diversidad en el área de cobertura. Si bien debe haber una exigencia razonable de viabilidad económica para sostener el emprendimiento, la capacidad económica del proponente no debe ser un criterio de evaluación. El aporte de dinero o la capacidad económica del interesado no debe ser un criterio de evaluación, aunque puede haber exigencias económicas razonables para garantizar el funcionamiento</i></p>	<p>NO SE RECOGE</p>

	<i>de la emisora.</i>	
Se deben potenciar las buenas prácticas en los medios comunitarios (UNESCO).	Se pide a los órganos de prensa, las asociaciones profesionales y los miembros de la industria de los medios de comunicación que promuevan las prácticas idóneas en los medios de comunicación comunitarios y asociativos, así como en la prensa nacional y de interés general.	NO SE RECOGE
Los medios comunitarios deben pedir apoyo a la UE y los funcionarios deben ser sensibles a su utilidad. (PARLAMENTO UE)	Reconoce que, por un lado, solamente una pequeña parte del sector dispone de los conocimientos y la experiencia necesarios para solicitar apoyo de la UE y beneficiarse del mismo, mientras que, por otro lado, los funcionarios responsables de la financiación no son conscientes del potencial de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC).	NO PROCEDE SU TRANSPOSICIÓN
Los medios comunitarios pueden acceder a más financiación de la UE.	Reconoce que el sector podría hacer mayor uso de los instrumentos de financiación comunitarios en la medida en que contribuyan a los	NO PROCEDE SU

(PARLAMENTO UE)	objetivos de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC), mediante la aplicación de unos programas específicos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo así como de las oportunidades de educación y formación para periodistas que ofrecen los programas de aprendizaje permanente y otros; insiste, sin embargo, en que las principales fuentes de financiación deberán ser de carácter nacional y local u otros recursos.	TRANSPOSICIÓN
Los medios comunitarios deben crear una plataforma web europea. (PARLAMENTO UE)	Insta a que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) establezcan una plataforma europea de Internet para difundir información útil y pertinente para el sector y facilitar el establecimiento de redes y el intercambio de mejores prácticas.	NO PROCEDE SU TRANSPOSICIÓN

Tabla 7.1. La Ley General de la Comunicación Audiovisual frente a las recomendaciones internacionales (Elaboración propia).

7.2. APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Como hemos podido comprobar en la comparativa realizada en la tabla del epígrafe anterior, la legislación española no contempla ni una especial protección ni especiales menciones hacia la existencia de medios comunitarios -más allá de unas definiciones demasiado generales y unas cuantas restricciones-, tal y como están recomendando los diversos organismos internacionales, algunos de los cuales (como la Unión Europea o la ONU) se supone que España ha aceptado escuchar y valorar sus recomendaciones como miembro que es de sus diferentes Consejos y grupos de trabajo.

Bien es cierto que la Ley General de la Comunicación Audiovisual es una ley marco la cual cada autonomía debe adaptar a su propia idiosincrasia –eso sí, sin salirse del marco general- y que de ella han de derivar una serie de decretos específicos entre los que se encontraría uno dedicado exclusivamente a los medios comunitarios. Por tanto, la separación que hemos realizado en la tabla sobre las recomendaciones que se recogen escasamente o de forma muy parcial, las que no se recogen o las que incluso contradicen alguna directriz internacional se han comparado con la ley general porque, cuatro años después de la aprobación de esta, el Tercer Sector de la Comunicación en el Estado español no tiene una normativa propia para esta materia. La tuvo en forma de borrador en el último año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, 2010-2011) y, de hecho, esta cuestión será comentada en el capítulo siguiente.

Así, nos encontramos que de los 41 aspectos que se tratan en las recomendaciones internacionales, existen 37 directrices o supuestos sobre medios comunitarios que podrían haber sido susceptibles de transposición o adaptación a la Ley General de la Comunicación Audiovisual (hay cuatro que se refieren a la totalidad del continente europeo, no a los Estados miembros, por lo tanto no procede su mención en una ley estatal).

De esos 37 aspectos susceptibles de haber sido adoptados por los legisladores españoles, el 62% (23) directamente no se recogen en la ley. En el 24% (9) de los casos, la redacción y el espíritu legal se recoge de forma parcial o muy escasamente, e incluso en el 14% (5) de la norma española se contradice alguna directriz internacional.

	Se recogen parcial o escasamente	No se recogen	Contradice	Total
Número	9	23	5	37
Porcentaje	24%	62%	14%	100%

Tabla 7.2. Adecuación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual a las recomendaciones internacionales (elaboración propia).

Vistos entonces ya, todos los factores teórico-legales y los práctico-legales (lo que refleja la legislación, por un lado, y la realidad del desarrollo del sector de medios comunitarios, por otro) en los once países que hemos analizado, cabe finalizar con una cuestión que ya apuntábamos en el capítulo de introducción de esta tesis: ¿Cómo es posible que países como, por ejemplo, Países Bajos o Austria, que no tienen una legislación específica en el Tercer Sector de la Comunicación, se encuentren en los primeros puestos (3 y 4, respectivamente) de la clasificación del CMFE analizada y tomada como muestra para este estudio; y sin embargo un país como España, que sí que ha aprobado recientemente cuestiones específicas sobre esta materia continúe en la práctica actuando como antes de la ley general y penalizando a los proyectos de comunicación que emiten sin concesión porque la propia administración no se las otorga?

Para contestar a esta pregunta hemos decidido consultar mediante correo electrónico a las autoridades audiovisuales de los once países analizados cuál era su opinión al respecto. Los interrogantes que les hemos planteado son los siguientes:

1. ¿Por qué, con su experiencia del tema, opina que una regulación audiovisual en medios comunitarios en la teoría no siempre va de la mano de buenas prácticas políticas o un mayor desarrollo del sector? (por ejemplo, en la concesión de licencias y similares).

2. Así que, si un país tiene un reconocimiento en sus regulaciones de medios comunitarios, ¿es necesario algo más para desarrollar el sector o es suficiente con tener una legislación propicia?

Las personas y autoridades que han atendido nuestras peticiones son las siguientes:

País	Autoridad audiovisual u organismo de comunicación	Persona de contacto
España	CNMC	No contesta
Uruguay	Telecomunicaciones del Gobierno de Uruguay	Gustavo Gómez
Argentina	Comisión Nacional de Comunicaciones	No contesta
Venezuela	Dirección General de Medios Alternativos, Comunitarios y Organizaciones Sociales	Reinaldo Escorcía
Bolivia	Ministerio de Comunicación	No contesta

Ecuador	Secretaría Nacional de Comunicación	Fernando Alvarado - No contesta
Suecia	Myndigheten för radio och tv	Ola Vigström
Dinamarca	Radio og tv-naevnet	No contesta
Irlanda	Broadcasting Authority of Ireland (BAI)	Ciarán Kissane
Noruega	<i>Medietilsynet Norwegian Media Authority</i>	Lars Erik Krogsrud
Alemania (Baja Sajonia)	Niedersächsische Landesmedienanstalt (NML)	Klaus-Jürgen Buchholz
Alemania (Baviera)	Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM)	No contesta
Alemania (Baden – Württemberg)	Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK)	No contesta
Alemania (Renania del Norte – Westfalia)	Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LFM)	No contesta
Alemania (Hessen)	Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LRP)	No contesta
Alemania (Berlín - Brandeburgo)	Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MBB)	No contesta
Alemania (Sachsen - Anhalt)	Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA)	No contesta
Alemania (Sajonia)	Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue medien (SLM)	No contesta

Alemania (Turingia)	Thüringer Landesmedienanstalt (TLM)	No contesta
---------------------	--	-------------

Tabla 7.3. Cuestionario autoridades u organismos audiovisuales (Elaboración propia)

Y las respuestas que nos han facilitado son las siguientes:

1. Uruguay (Gustavo Gómez) (se han respetado las mayúsculas del original):

Que haya reconocimiento legal para medios comunitarios no significa que este sea bueno. Muchas veces encuentras leyes de medios comunitarios pero estas son restrictivas y discriminatorias. Caso Brasil donde hay ley hace muchos años pero las limita a ocupar frecuencias en FM, no puede haber en TV, no pueden pasar publicidad y su alcance no puede llegar a más de un kilómetro.

Lo que es necesario es una BUENA y JUSTA legislación, de acuerdo a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión aprobados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La legislación debe incluir el reconocimiento expreso del sector; mecanismos adecuados para el acceso a concesiones y licencias; permitir acceso tanto a radio AM como FM, como TV; no limitar de manera discriminatoria en cantidad ni en potencia a las emisoras comunitarias; definirlas como sin fines de lucro y participativas; permitirles acceso a fuentes económicas (incluida la publicidad) y establecer reservas de espectro para que tengan lugar para desarrollar su trabajo; entre otras.

Una buena legislación, no obstante, es NECESARIA pero no es suficiente.

Es cierto que hay casos como puede ser Austria que haya radios comunitarias fuertes, pero sin una ley expresa. Son casos seguramente no hay legislación específica pero los procedimientos de acceso son razonables. Cuando en algunos países de América Latina el ingreso es por subasta (el que paga más), se hace imprescindible separar los procedimientos para medios comerciales y comunitarios, y esto pasa por reconocer las especificidades de ese sector.

También es cierto que, incluso con una buena legislación, no es posible garantizar el desarrollo de los medios comunitarios. Una razón es la no aplicación de las leyes aprobadas. En Argentina pasa un poco eso. Son buenas, pero si no se usan es lo mismo que nada. Otra razón tiene que ver con las propias debilidades del sector (organizativas, económicas, de proyecto, etc.). Hay buenas intenciones e ideas, pero son colectivos pésimos para gestionar una emisora. E incluso muchas veces tampoco logran insertarse bien en su comunidad y terminan siendo un grupo de bienintencionados que hacen un trabajo voluntarioso pero testimonial.

Pero hay una responsabilidad fuerte del Estado justamente para ayudar a enfrentar estas debilidades (producto de su origen social, muchas veces), que no se puede hacer el tonto y solo dejar en el reconocimiento formal y legal. Los Estados deben complementar la buena legislación con activas políticas públicas de apoyo de distinto tipo: acceso a equipamiento (gratis o accesible), fondos concursables para producción de programas, planes de capacitación (técnicos, en producción pero también en gestión), etc., con la condición de que estos les permitan desarrollar sus capacidades propias y no sea una forma de amarrarlos al gobierno para que sean funcionales a él y pierdan su independencia.

2. Suecia (Ola Vigström):⁵⁴

Estas cuestiones son difíciles de contestar, máxime cuando los estudios en Suecia sobre medios comunitarios no ahondan en estas cuestiones, por el momento. Si tuviera que especular los motivos acerca de por qué han descendido en los últimos tiempos las radios comunitarias en Suecia (esto es, el número de organizaciones que poseen una licencia de este tipo para emitir) diría que puede ser por los costes asociados con esta actividad. Actualmente no hay subsidios directos hacia los medios comunitarios, pero sí que algunos gobiernos locales están apoyando esta actividad.

Otro factor puede ser que actualmente es muy duro atraer a personas para que se involucren en actividades sin ánimo de lucro.

3. Alemania, Hannover (Klaus-Jürgen Buchholz):

Creo que la respuesta es tan corta como simple: una buena práctica para promocionar a los medios comunitarios requiere no tanto de una regulación y legislación exhaustiva, sino de voluntad política.

4. Irlanda (Ciarán Kissane).

La estructura regulatoria sólo es un elemento más en toda la infraestructura relacionada con los medios comunitarios. Es un elemento vital, y tradicionalmente ha sido la clave que sin un reconocimiento y sin licencias hacia el sector, este no podía desarrollarse. Sin embargo, una

⁵⁴ La persona responsable nos contesta indicando que la autoridad audiovisual no tiene una posición firme al respecto de esta respuesta, pero que Mr. Vigström nos contesta de forma “especulativa” basándose en sus conocimientos y experiencia.

vez que el reconocimiento legal ha ocupado su lugar, por sí mismo no garantiza el desarrollo de la salud del sector. Esto depende de una variedad de apoyo y, más importante, de un entendimiento de todas las comunidades de los beneficios de los medios comunitarios y de su capacidad para llevarlos a cabo. Esto no puede darse por asumido. En mi experiencia, la definición y la distribución de los beneficios comunitarios es el mayor reto. Sin clarificar esto, los proyectos de medios comunitarios tenderán a replicar las estructuras y las relaciones de los medios convencionales, mientras que su desarrollo en la comunidad será secundario. Sin una propiedad, control y acceso reales, la legislación no va a conseguir todo esto por su sola existencia.

5. Venezuela (Reinaldo Escorcía).

El Gobierno venezolano apoya a medios alternativos y comunitarios de los formatos de radio, TV, impresos, digitales, cine club, unidades de comunicación de calle (grupo de personas que ejercen la comunicación a través de megáfonos) y también trabajamos en la conformación de comités de comunicación popular en las comunidades organizadas (Consejos Comunales y Comunas).

En la actualidad estamos abordando las escuelas en las que estamos impartiendo talleres de educomunicación a los niños, niñas y adolescentes, para prevenir el riesgo social.

Desde el año 2011, el movimiento de comunicadores alternativos y comunitarios introdujo en el parlamento venezolano una propuesta de Ley de Comunicación del Poder Popular, con la intención de mejorar las condiciones del sector.

El Estado venezolano ha apoyado desde el año 2004 a los medios de comunicación alternativos y comunitarios con equipamiento de estudio y transmisión, gracias a los

convenios de cooperación que se dan a través de la ALBA [Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos].

6. Noruega (Erik Lars Krogsrud):

Las funciones de la Autoridad Audiovisual Noruega son principalmente reforzar la legislación existente en materia de medios de comunicación. Por lo tanto, encontramos difícil tener una opinión acerca de si es la legislación o si son otros factores los que tienen el impacto necesario para desarrollar el sector.

Nuestro consejo es que usted realice estas cuestiones en un ámbito más académico de Noruega, por ejemplo, en la Universidad de Oslo (Departamento de Medios y Comunicación).

CONCLUSIONES

Tal y como hemos podido comprobar a lo largo de todo el estudio, los medios comunitarios en el mundo -y desde luego también en el Estado español- no son un fenómeno nuevo ni reciente, sino que estos proyectos audiovisuales llevan décadas existiendo, algunos de ellos mucho antes incluso que otro tipo de canales privados de más reciente aparición. Sin embargo, esta experiencia histórica por el momento no ha servido para otorgarles un estatus legal al menos estable, con garantías de emisión, sino que por el contrario los medios comunitarios son o bien ignorados o bien perseguidos por el Estado.

En esta última fase de la tesis pasamos a enumerar, por tanto, cuáles son las conclusiones más importantes a las que hemos llegado tras analizar toda la ingente documentación recogida y trabajada.

1. Lo primero de todo hemos de observar si se han **cumplido los objetivos generales y específicos** que nos habíamos marcado al inicio de este largo y meditado proyecto:

Objetivos generales	Objetivos específicos	Valoración del alcance del objetivo
1. Identificar cuáles son las legislaciones europeas y latinoamericanas que mejor regulan los medios de comunicación del Tercer Sector según diversos organismos y estudios	1. Conocer las actuaciones realizadas por diversos gobiernos y organismos internacionales en materia de legislación de acceso a la comunicación por parte de la ciudadanía.	Muy positiva.
	2. Identificar los años en los que fueron elaboradas diversas legislaciones internacionales para	Muy positiva.

comparativos ya realizados, para contraponer sus contenidos al de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	comparar la madurez de los procesos de acceso al derecho de la comunicación con la regulación audiovisual de la historia de la democracia del Estado español.	
2. Detallar de forma tanto descriptiva como analítica el proceso de elaboración, el entramado y los contenidos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	3. Conocer las actuaciones y debates llevados a cabo por el Gobierno español y las dos Cámaras legislativas en relación a la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	Positiva, aunque consideramos que hay aspectos que, debido a la falta de transparencia gubernamental, no hemos conseguido averiguar, como el inicio exacto de los primeros borradores de la ley.
	4. Averiguar si el Gobierno español se ha reunido con todos los agentes interesados e implicados en el sector audiovisual para redactar y dar el visto bueno a la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	Mejorable, puesto que por el mismo motivo que en el objetivo anterior se hace casi imposible la obtención de información en este sentido.
3. Comparar y determinar si la legislación española, tanto	5. Investigar y dar a conocer el hecho de que el Estado español y las autonomías no han concedido	Muy positiva.

estatal como autonómica, referida al Tercer Sector de la Comunicación se acerca o se aleja de las legislaciones europea y latinoamericanas, y de las posiciones que los relatores internacionales de la libertad de expresión tienen ante este fenómeno.	frecuencias del espacio radioeléctrico a los medios comunitarios, excepto en tres ocasiones a lo largo de las últimas tres décadas.	
	6. Identificar el grado de coherencia y correspondencia de la legislación audiovisual española y autonómica con resoluciones y dictámenes de los organismos supranacionales a los que pertenece, tales como la Unión Europea, y su adecuación a recomendaciones internacionales sobre cómo legislar la materia del Tercer Sector de la Comunicación.	Muy positiva.
4. Describir qué procesos sociales y/o legales han permitido a los colectivos civiles participar en las modificaciones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.	7. Mostrar los procesos concretos de diversos movimientos sociales y la descripción de su desarrollo e influencia para aportar cambios desde la sociedad civil a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, por si pudiera servir de ejemplo para otro tipo de demandas de la ciudadanía organizada hacia la clase legisladora.	Positiva.
5. Poner en valor las movilizaciones más importantes que han realizado esos mismos colectivos civiles durante la tramitación de la Ley General de la		Positiva.

Comunicación Audiovisual.		
6. Analizar si en la práctica han cambiado las condiciones de desarrollo y reconocimiento del Tercer Sector de la Comunicación en el Estado español en estos cuatro años en los que la nueva norma audiovisual ya ha estado en vigor y en funcionamiento.	8. Analizar los últimos concursos de licencias y legislaciones autonómicas emanados de los poderes públicos tras la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para ver si han redundado en cambios en la práctica y la legalidad de los medios comunitarios del Estado español.	Muy positiva.

2. Evolución de la hipótesis inicial: en los primeros pensamientos de gestación de esta tesis, y viendo la vorágine de desregulación en materia audiovisual que ha sido tradición en el Estado español, nos planteábamos la pregunta de hasta qué punto una adecuada legislación de la materia está relacionada con un alto desarrollo del Tercer Sector de la Comunicación en un país. En aquellos momentos no parecía descabellado pensar que una mayor y/o mejor regulación desembocaba en un alto desarrollo de los medios comunitarios, entendiendo esto como un mayor número de medios, un mayor número de licencias, proyectos más estables económicamente y una alta participación social en los mismos.

Sin embargo, en este caso hemos de concluir que es muy importante realizar una diferenciación entre la teoría (leyes establecidas en la materia) y la práctica (cómo esas leyes son o no aplicadas y utilizadas). En este caso, no ha habido una correlación en todos los casos de que la hipótesis inicial fuera cierta y nos hemos encontrado con tres tipos de situaciones:

- Países en los que la legislación concreta sobre medios comunitarios no existe, pero su desarrollo es elevado según los informes tomados como referencia (por ejemplo, Holanda o Austria).
- Países en los que dicha legislación existe desde hace años, pero apenas se ha aplicado todavía y, por tanto, el sector comunitario sigue ciertamente inestable (como Argentina o el propio Estado español).
- Países en donde existe una legislación concreta y además se aplica, dotando a los medios comunitarios de una estabilidad que les permite realizar sin problemas legales diarios el servicio público de comunicación al que están dedicados (como Dinamarca, Noruega o Bolivia).

En este sentido, podemos concluir que no necesariamente una presencia, reconocimiento y tratamiento del Tercer Sector de la Comunicación en las legislaciones nacionales tienen como consecuencia su aplicación en el campo. Aquí ha sido muy significativa la respuesta de la autoridad audiovisual del *länder* alemán de Hannover, que recordamos fue

Una buena práctica para promocionar a los medios comunitarios requiere no tanto de una regulación y legislación exhaustiva, sino de voluntad política.

Creemos que esta voluntad política a la que alude Klaus-Jürgen Buchholz tiene dos aspectos fundamentales, como son el conocimiento de la materia de derecho a la comunicación y la priorización de este por encima de otros aspectos. Puede incluso que el segundo sea consecuencia del primero, puesto que cuando los diferentes gobiernos se enfrentan a la redacción de legislaciones o bien a su aplicación, si desconocen un tema es muy probable que no lo prioricen entre la inmensa maraña de asuntos que siempre tienen que tratar.

En este sentido, hemos podido ver cómo diferentes entidades del tejido social (la Red de Medios Comunitarios, la Asociación de Usuarios de Comunicación, los sindicatos, etc.) han

intentado influir en los procesos de decisión de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. La entrega de enmiendas es un factor importante para ese conocimiento y priorización de la que estamos hablando, pero a la vez no nos podemos olvidar de otras herramientas como las manifestaciones, la difusión de los mensajes a través de las nuevas tecnologías, las clásicas campañas con eventos, recogida de firmas, visibilización... Y para todo esto es necesario el trabajo en equipo y la creación de redes entre los diferentes agentes afectados por la legislación audiovisual y/o portadores del derecho a la comunicación de la ciudadanía.

3. **No todas las recomendaciones internacionales** están incluidas en todas las legislaciones europeas y latinoamericanas analizadas, pero sí es cierto que estas regulan de manera más pormenorizada a los medios comunitarios que el Estado español. Son más específicos en cuanto a su estructura (qué es un medio comunitario y qué no lo es), su financiación (imponiendo la mayoría de ellos menos o ninguna traba al uso de patrocinios o publicidad), sus contenidos (una programación social amplia) y también su control por parte de las autoridades audiovisuales y las personas responsables del medio.

4. A lo largo de nuestro estudio, y sobre todo en el marco teórico y los antecedentes expuestos, hemos podido apreciar el **baile de denominaciones que tiene el Tercer Sector de la Comunicación** y sus medios. Consideramos que, aunque las descripciones y las clasificaciones son indudablemente necesarias para ordenar el mundo que nos rodea, no hemos de caer tampoco en la esquizofrenia de compartimentar tanto el campo que al final nos encontremos con tantas denominaciones como medios comunitarios existan. Ya hemos comentado que, desde un punto de vista legal, parece que el término "comunitario" o sus derivados son los preferidos por los legisladores. Por lo tanto, las líneas rojas mínimas que podemos marcar, a nuestro entender, para diferenciar a los proyectos ciudadanos han de ser su posesión (por un colectivo de ciudadanos sin ánimo de lucro y separadas del Estado), su dirección y su gestión (con una toma de decisiones horizontal y consensuada entre todos los participantes de dicho colectivo) y su difusión (de contenidos sociales de transformación

alternativos al discurso hegemónico y a través de equipos y transmisiones que pertenezcan al mismo). Si, cumpliendo con estas características, se les denomina alternativos, libres, radicales, comunitarios, populares, etc. no nos parece excesivamente relevante puesto que no cambia la naturaleza (líneas rojas) del medio. Ahora bien, es cierto que haremos una excepción con el término "pirata" puesto que, al menos en el Estado español, nació hace décadas con una connotación despectiva de ilegalidad e ilegitimidad de la cual aún no se ha librado, con lo que no consideramos que deba utilizarse para dirigirse a este tipo de medios que, lejos de perseguir un lucro y un reparto de beneficios monetarios a costa de utilizar ilícitamente el espacio radioeléctrico, pretende amplificar un derecho humano reconocido en numerosas constituciones y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

5. Consideramos fundamental una **adecuada estructura legal y reconocimiento por parte de las autoridades** de los proyectos de comunicación comunitarios porque, de lo contrario, en el Estado español estos no podrán constituir una alternativa viable a los medios convencionales. Sin dicha estructura y permisos de emisión, la estabilidad, la formación y cierta profesionalización del medio es prácticamente inviable, y los proyectos que utilizan el espacio radioeléctrico se ven condenados a un *amateurismo* perpetuo y a la insostenibilidad de sus plantillas (aquellos que deseen tenerlas), así como a problemas de estructuración internos y continuamente cambiantes en cuanto a recursos humanos se refiere.

6. En el caso del Estado español y de las autonomías, **la preocupación de los legisladores está centralizada en el aspecto de control financiero**. De los siete puntos o párrafos que contiene el artículo 32 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, el que afecta a los medios comunitarios, cuatro tratan alguna cuestión económica o de negocio, y solo uno le confiere al Estado alguna obligación para con ellos y su desarrollo (garantizar la disponibilidad del espacio radioeléctrico). Podemos pensar que una ley general tiene que tener un espíritu más amplio, puesto que para lo demás ya están los reglamentos específicos, pero en este caso nos encontramos con el problema de que a día de hoy no existe ninguna

normativa de medios comunitarios a pesar de que se tenía que haber creado dentro del primer año tras la aprobación de la ley (es decir, antes de abril de 2011).

7. Criticamos la **histórica desregulación del campo audiovisual** por su falta de voluntad política y la **eficacia de un sistema legal *ex post***, que penaliza a los medios de comunicación en el caso (no siempre, como demuestra la maraña existente de canales comerciales ilegales en la FM y en la televisión) de que se salten las normas en lugar de prevenir estas situaciones y de ordenar adecuadamente un acceso al espacio radioeléctrico y una calidad adecuada de servicio público. Las posibles sanciones son inferiores al beneficio obtenido por los operadores con lo que resulta rentable ignorar el orden y la ley. Esta desregulación no se realiza solo a un nivel español sino que también la Unión Europea parece reacia, a tenor de los datos explicados, a realizar directivas vinculantes relativas al sector audiovisual y de la comunicación.

8. Es un imperativo legal que las regulaciones autonómicas no contradigan las legislaciones estatales, pero **las autonomías por el momento no se han esforzado** en ampliar las posibilidades de los medios comunitarios en sus regiones y se han limitado a copiar la Ley General de la Comunicación Audiovisual y sus artículos. Es más, aquellas que no han adaptado sus normas regionales a la estatal, y el hecho de que el Estado no haya regulado mediante reglamentos a los medios comunitarios constituye una ilegalidad manifiesta por parte de los poderes públicos. La esperanza por el momento en este sentido de ampliación del derecho a la comunicación se encuentra en Andalucía y en su Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía que está desarrollando actualmente su normativa, habrá que ver qué tratamiento legal describen para este tipo de medios en el caso de que finalmente se apruebe una nueva ley en esta autonomía.

9. Resulta inadmisibles que el Estado español sea el único país de la Unión Europea que no tenga dedicado exclusivamente un **regulador audiovisual independiente** que vele por una correcta regulación, desarrollo y control de la materia. No es suficiente haber integrado estas

obligaciones dentro de un superregulador y resulta muy esclarecedor que organizaciones como el Instituto de Prensa Internacional ya esté incluyendo esta situación anómala en sus estudios como una realidad indeseable para la independencia de los medios en un país.⁵⁵

10. Las experiencias y vivencias del Tercer Sector de la Comunicación en este país aún tienen que recorrer un camino para que en todas las **universidades españolas** este conocimiento esté incluido en los planes de estudio. Es cierto que como hemos comentado ya hay algunas de ellas que contienen posgrados en los que se trata y se valora el Tercer Sector de la Comunicación, pero en los estudios más básicos -los grados- el alumnado no suele aprender sobre estas enseñanzas, produciéndose también en este campo una invisibilización importante en dos sentidos principales:

- El periodismo y la comunicación audiovisual no suelen tratarse desde el punto de vista del derecho a comunicar de toda la ciudadanía, como un derecho reconocido internacionalmente, sino que se tratan como una mercancía con las que se puede negociar y donde el profesional (entendiéndolo como el graduado en estas ramas) tiene arrogada la única potestad de trabajar con la información. Esta "categoría de mercancía" está deducida de los intereses políticos y económicos que el estudiante aprende sobre los conglomerados mediáticos, y apenas tiene la oportunidad de aprender y de tratar la comunicación desde una vertiente más humana, de cambio social y de servicio público.
- Aunque es un tema que podría ser perfectamente tratado en otra tesis y que aquí no hemos valorado en profundidad, los medios comunitarios funcionan en ocasiones con personal contratado (sobre todo fuera del Estado), con lo que limitando el conocimiento de los estudiantes en este campo se está impidiendo también su

⁵⁵ *IPI Project Page: Europe, defamation laws and press freedom*. International Press Institute. Disponible en <http://www.freemedia.at/ecpm> [Recuperado el 13 de octubre de 2014].

conocimiento y acceso a un mercado laboral que podría ser muy útil, sobre todo en los tiempos actuales que vivimos con altas cifras de desempleo.

Parece claro que con la llegada del nuevo siglo y los nuevos modelos y paradigmas comunicacionales, y las numerosas críticas a los modelos caducos del pasado se hace necesario actualizar las teorías y posibilidades impartidas en las facultades. Las nuevas tecnologías han irrumpido en ellas como herramienta de uso (*community manager*, maquetación, producción a bajo coste de vídeo y audio, diseño de páginas web, etc.) pero no como herramienta de cambio o transformación del periodismo y la comunicación, más allá del continente y de las formas de recepción. Hay que introducir en el aula las nuevas reflexiones sobre el derecho fundamental de la ciudadanía a la comunicación por cualquier canal y como sujeto (no objeto) de estos procesos. Estas aproximaciones no suponen de ninguna manera la eliminación de la figura del periodista, y mucho menos del periodista formado en la universidad (más necesario que nunca), sino cambios y adaptaciones en alguno de sus roles y en la manera de entender el acceso a la información.

11. En el caso sobre todo de la legalidad, la falta de un estatus reconocido de facto (y no solo teórico en las reglamentaciones pertinentes) podría tener a **medio plazo una consecuencia fundamental**. Cuando en el año 2010 y coincidiendo con la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual se produjo el apagón analógico en televisión, las televisiones comunitarias afrontaron numerosas dificultades para poder realizar este cambio. Tanto en un nivel económico como, sobre todo, en un nivel legal dado que la nueva tecnología y la supuesta multiplicación del número de canales y del pluralismo no trajeron aparejados en realidad permisos legales de emisión para este tipo de medios. Esto sienta un peligroso precedente en el campo audiovisual español, en el sentido en el que cabe preguntarse: ¿Qué sucederá cuando se produzca el encendido digital en la radio? ¿Serán las radios comunitarias eliminadas del nuevo espectro que se derive de estos cambios? Resultaría muy paradójico, puesto que la tecnología siempre ha acompañado a los medios comunitarios positivamente: donde antes había que invertir no pocas cantidades de dinero en la compra de aparatosos y

analógicos equipos tanto de televisión como de radio, la última década ha servido para que un ordenador, unos micrófonos y una conexión a internet sean suficientes para expandir el derecho a la comunicación y los mensajes, con cantidades ínfimas de dinero en comparación con décadas anteriores. Y sin embargo, son los cambios tecnológicos los que ya han hecho peligrar la emisión de las televisiones y podría hacer lo propio con las radios en un futuro no muy lejano. O mejor dicho, el peligro serían los cambios tecnológicos en manos de legisladores con intereses espurios y de *lobbies* de comunicación.

12. La **legislación y posterior fiscalización** de los tres tipos de medios por los poderes públicos es una cuestión difusa que el Estado español no parece tener muy clara o, mejor dicho, no parece concederle excesiva prioridad. El primer síntoma de esto ha sido el baile de opciones que ha sufrido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales desde su mención en la ley de 2010 hasta finalmente su integración en un *superregulador* junto con otros tantos departamentos y Consejos que poco o nada tienen que ver con este sector. El segundo síntoma es que de las 17 Comunidades Autónomas existentes sólo dos mantienen en funcionamiento constante (y no solo sobre el papel) su propio Consejo Audiovisual. Y el tercero sería, muy revelador, por cierto, que si nos preguntamos a modo de cultura general, ¿cuáles son los organismos encargados de las cuestiones audiovisuales? si sabríamos responderlo. A nivel estatal, la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información pertenece al Ministerio de *Industria*. La cursiva es para remarcar la consideración que recibe, por tanto, el sistema de medios audiovisuales español. Es industria, mientras que en algunos países, como por ejemplo Estonia, Grecia, Finlandia, Irlanda, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia... estos asuntos son tratados desde el Ministerio de Cultura.

Si nos vamos hacia las autonomías, el tema es más difuso. De los asuntos de la comunicación y audiovisuales se encarga o se ha encargado desde Presidencia (Andalucía, Cataluña, Galicia...) hasta Obras Públicas (Aragón en el pasado), pasando por Innovación e Interior (Baleares), nuevamente Industria (Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha...), Fomento

(Castilla y León), Infraestructuras (Extremadura), Economía y Hacienda (Murcia) y, ahora sí, Cultura (solo el País Vasco).

Este compendio de autoridades (sobre todo la autoridad estatal) ha pasado de perseguir a los medios comunitarios (aunque alguna región todavía está en ello, como Asturias y Cataluña) a regular su actividad de manera que legalmente se limite su actividad (pero que se pueda decir que ya está reconocida legalmente). Existen, como hemos visto, restricciones muy importantes referidas con la economía y, por tanto, con la capacidad de desarrollo de estos proyectos, y se llegaron a plantear en un borrador de reglamento (que de momento nunca se ha aprobado, pero está escrito) limitaciones a la cobertura e incluso al número de emisoras comunitarias que podían operar en la misma zona. ¿Quién entiende que a los servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro se le impongan muchas más obligaciones que a las emisoras comerciales y públicas, y que además se le recorten ciertos derechos? Hemos pasado de que las normas específicas sobre telecomunicaciones, cuestiones audiovisuales y periodísticas primen el concepto de ciudadano como mero receptor y recipiente de la información y las noticias, y a las empresas y al Estado mediante sus periodistas profesionales como únicos emisores válidos y reconocidos, a una ciudadanía con posibilidad de emitir de manera mutilada. Que debido a los gastos de explotación impuestos, por ejemplo, una emisora tenga que elegir un año entre renovar su emisor o renovar su mesa de mezclas, o entre contratar a una persona o no, porque si realiza todo el gasto entonces sobrepasa los gastos de explotación impuestos por la Ley General de la Comunicación Audiovisual para su proyecto. ¿Alguien puede imaginar esta misma situación, pero para las empresas comerciales?

Por tanto, aunque el reconocimiento legal nunca debería ser peor que el no reconocimiento (puesto que en este último caso siempre imperará la ley de la selva), lo cierto es que la Ley General de la Comunicación Audiovisual no ha venido a desarrollar más el Tercer Sector de Comunicación, ni a aumentar sus posibilidades de emisión, ni a fomentar el mantenimiento y la creación de este tipo de medios en el Estado español.

13. La **llegada de internet** ha abaratado mucho los costes de emisión y, además, aún no está regulada la emisión de *podcasts* y *streaming* en este canal (salvando los aspectos que estén relacionados con los derechos de la propiedad intelectual). Por tanto, los costes más elevados de la compra y mantenimiento de antenas y emisores, sumado a la complicación legal de obtener una licencia de radio o televisión comunitaria en este Estado, puede plantear el pensamiento de ¿por qué motivos no podría la ciudadanía centrarse en la emisión por internet y, de esta manera, ahorrarse problemas legales y costes económicos? Es una pregunta legítima, pero tras el estudio realizado creemos que no se debe renunciar al espacio radioeléctrico voluntariamente por los siguientes motivos:

- El espacio radioeléctrico es de titularidad pública, propiedad de la ciudadanía aunque gestionado por el Estado a cambio de una tasa de utilización legal, mientras que las conexiones a internet son provistas por empresas privadas que compiten entre sí a cambio de un pago mensual y cuyo servicio puede fallar sin querer o intencionalmente.
- A pesar de que el Estado español es un país desarrollado en la cual gran parte de la ciudadanía tiene o puede tener acceso a internet, lo cierto es que según los Estudios Generales de Medios que se publican cada trimestre, así como en el Instituto Nacional de Estadística, todavía existe una brecha tanto económica como generacional en muchos hogares que provoca que no todo el mundo acceda a contenidos *online* regularmente.
- Además, si nos centramos en aquellas personas que sí consultan y tienen acceso a internet, hemos de analizar también si lo utilizan para acceder a la radio y a la televisión mediante este soporte, cuál es por el momento la costumbre en este sentido. Y los datos apuntan a que según el Instituto Nacional de Estadística (octubre de 2014), de las personas usuarias de internet en el Estado (76,2%), solo casi el 37%

escuchan la radio por internet actualmente (en este estudio no aparece la variante "televisión").

- Por último, y a la vista de los datos, si los medios comunitarios tienen una vocación de servicio público para el conjunto de la población donde se ubican, así como de transformación de la sociedad a través de la información independiente y del derecho a la comunicación, ¿cómo puede esto encajarse con la renuncia, voluntaria o forzosa por las circunstancias, de los proyectos a emitir por ondas y, por tanto, de limitar su difusión y su mensaje solo a una parte de la población?

AMPLIO RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN

INTRODUCTION

The alternative, free and community media (Third Media Sector) is a phenomenon which has been developed all over the world. The implementation of these kind of communication projects permits us to observe how each society has built its own communication system and how the different governments have acted facing this situation: have they recognized and supported the Third Media Sector or have they put obstacles to its existence and development?

One of the most important walls that community media has hit in most countries are the communication policies. In this sense, in the last years some states have changed and reviewed their regulations and laws. In Latin America, there are countries like Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador or Venezuela which are putting in place the Third Media Sector, the same as European countries like Norway, Denmark, Sweden, Germany or Ireland; meanwhile in Spain, Hungary, Chile or Brazil the community radio and television have a very weak legal recognition and their future is unknown. This hole causes, additionally, lots of problems in the economic sustainability of this kind of citizen projects or the impossibility to get frequencies from the radio-electric spectrum tenders.

For all these reasons we have considered as vital importance the analysis of the audiovisual regulations from different countries, having as a core of the research the spanish media system and its laws, because the media plays an essential role in the structure of a democratic and plural society.

OBJECTIVES

The main objective of this thesis is to research if the audiovisual spanish laws regarding the Third Media Sector, in both levels regional and state, are moving closer or are moving away from the European and Latin American regulations, and if the different Spanish Governments have taken into account the international recommendations when it comes time to regulate the audiovisual sector.

We will start by breaking down this main objective into the following specific objectives:

- To identify which are the European and Latin American laws that regulate better the Third Media Sector according to the opinion of diverse key organizations and comparative researchs done by some experts, in order to contrast their contents with the Spanish General Law of Audiovisual Communication (2010).
- To describe in detail the process of creation, the involved agents, the contents and the framework of the Spanish General Law of Audiovisual Communication.
- To analyse which social and legal processes have been carried on by the citizens and the non-profit associations to participate and affect the changes and the amendments of the Law.
- To research if in the last four years since the entry into force of the new Spanish Audiovisual Law the conditions and development of the community media in this country have been improved or not.
- To list how many Spanish regions and in which years and contexts have given legal frequencies to community media for broadcasting.
- To identify how many and which international recommendations or good practices have been included, copied or ignored in the Spanish audiovisual regulations.

RESULTS

The field and the comparison of the audiovisual regulations have been divided in three main sections:

- Regional and state audiovisual laws in Spain in democracy (the period between 1975-2014).
- International recommendations about the laws of the Third Media Sector done by supranational organizations where Spain is member: OSCE, European Parliament, UNESCO, Council of Europe, World Association of Community Broadcasters.
- Examples of audiovisual laws in Europe and Latin America, heading the different rankings explained in the thesis and with explicit references to the community media: Norway, Denmark, Sweden, Germany, Ireland, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador and Venezuela.

This analysis has lead into different results regarding:

Spanish Audiovisual General Law: creation process, agenda, political, social and economical agents involved, kind of amendments, authority regulator and changes in the different drafts proposed.

Community media in Spain and regulations: legal situations of citizen radio and television before and after the Law, legal and illegal practices about broadcasting, adaptations of the regional regulations to currently situations, and radio-electric tendering processes.

Community media in Europe and Latin America: protection on the Third Media Sector in the ten foreign countries analysed, number and type of international recommendations and trends in community media taken into account to regulate the Spanish case and opinions about these issues from different authorities media regulators.

CONCLUSIONS

From the results obtained during the research, our study has come to a number of key findings which we present below, just outlined (without being developed):

1. There is not a necessary interrelationship between a specific regulation about community media in one country and a better development of its Third Media Sector, or a bigger number of community broadcasting licenses given.
2. Not all of the international recommendations about regulating community media are gathered in the countries analyzed, but Spain is the more careless of the sample in this regard. It doesn't copy or adapt the most of these recommendations.
3. Spain has inherited its currently media system from the years of the Franco regime and the decade after, also in the community media issues and regulations.
4. There is a lot of names to designate the phenomena of the citizen media, but the most of the recommendations and regulations talk about "community media" above all the rest of denominations.
5. Without a properly legal structure and recognition from the political authorities towards the Third Media Sector, it could be almost impossible to make up an alternative information to the conventional media.
6. In the Spanish case, the political concernings about regulating community media are focused in the financial and economical aspects, not in the information as a human right, the development of the sector, the opportunities to get access to legal broadcasting licenses or the possibilities to increase the freedom of expression of the citizens.
7. Taking into account that in the last four years since the entry into force of the Spanish Law, regionals and state Governments have not legalized the existing community media, and they have refused to create an independent audiovisual regulator, we can say that the Spanish authorities are failing to comply with the audiovisual laws they approved.
8. If community media all over the world is legally abandoned by the governments while they are broadcasting through analog technology, it doesn't ever have a chance to broadcast in the future through digital one and after the switch off.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA ACADÉMICA

Aguilera, M. (1985). *Radios libres y radios piratas*. Madrid: Forja.

Ananthakrishnan, S. (1987). "Freedom in the air: community radio and minorities in Norway." *Economic and Political Weekly*, 22 (36/37). Recuperado el 13 de marzo de 2012 de <http://www.jstor.org/discover/10.2307/4377480?uid=2&uid=4&sid=21104046179117>

Arboledas, L. (2009). "Clientelismo y concentración en la radio española. Comparación entre cuatro comunidades autónomas." *Revista Latina de Comunicación Social*, 64, pp. 909-925. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna. Recuperado el 17 de marzo de 2012 de http://www.revistalatinacs.org/09/art/870_UGR/71_107_Luis_Arboledas.html

Asociación de la Prensa de Madrid (2014). *Informe de la Profesión Periodística 2013*. Madrid: APM.

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) (2009). *Principios para un marco regulatorio democrático sobre TV y radio comunitaria*. Recuperado el 20 de enero de 2010, de <http://legislaciones.amarc.org/Principios/PrincipiosMarcoRegulatorio.htm>

Atton, Ch. (2002). *Alternative media*. Londres: Sage.

Badillo, Á. (2003). *La desregulación de la televisión local en España: el caso de Castilla y León*. Dirigida por Emili Prado. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, 2003.

Barranquero, A. (2012). *Comunicación participativa y dominios del Vivir Bien. Una aproximación conceptual*. Trabajo presentado en el IV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, realizado en Tenerife del 4 al 7 de diciembre de 2012. Publicado en actas. Recuperado el 8 de abril de 2013 de http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/2012_convocatoria_4_congreso.html

Barranquero, A. (2011) "El espejismo de la comunicación para el cambio social. Radiografía de un concepto insostenible. Hacia una comunicación de cambio ecosocial." En Pereira, J.M. y Cadavid, A. (Eds.). *Comunicación, desarrollo y cambio social: interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios*, pp.81-100. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Barranquero, A. (2007): "Concepto, instrumentos y desafíos de la educomunicación para el cambio global". *Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación*, vol. XV, nº 19, pp. 115-120.

Barranquero, A. y Sáez, Ch. (2010). *Comunicación alternativa y comunicación para el cambio social democrático: sujetos y objetos invisibles en las enseñanzas de las teorías de la comunicación*. Trabajo presentado en el Congreso Internacional AEIC 2010, realizado en Málaga del 3 al 5 de febrero de 2010. Publicado en actas. Recuperado el 14 de marzo de 2012 de <http://www.ae-ic.org/malaga2010/esp/home.html>

Barranquero, A. y Herrera, E. (2012). "Un panorama de la formación especializada en comunicación, desarrollo y cambio social." *Razón y Palabra*, 80 (3). Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/22_BarranqueroHerrera_M80.pdf

Bassets, Ll. (1981). *De las ondas rojas a las radios libres*. Barcelona: Gustavo Gili.

Beltrán, L.R. (1979). *Farewell to Aristotle: horizontal communication*. UNESCO.

Recuperado el 14 de marzo de 2013 de

<http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000393/039360eb.pdf>

Beltrán, L.R. (2005). *La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo*. III Congreso Panamericano de la Comunicación, celebrado en Buenos Aires del 12 al 16 de julio de 2005. Recuperado el 8 de septiembre de 2012 de

<http://www.portalcomunicacion.com/both/temas/lramiro.pdf>

Bergés, L. (2012). "Spain: An Information Society Without Traditional Offline Community Media?". *Journal of Radio & Audio Media*, vol. 19, nº 2, 134-151.

Bergés, L. Reguero, N. (2013). "Spain". En Sousa, H. *et al* (eds.). *Media regulators in Europe: a cross country comparative analysis*. Braga: CECS.

Buckley, S. (2011). *Community media: a good practice handbook*. France: UNESCO.

Recuperado el 15 de marzo de 2010 de

<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215097e.pdf>

Buckley, S. *et al*. (2008). *Broadcasting, voice and accountability. A public interest approach to policy, law and regulation*. EEUU: The World Bank Group. Recuperado el 17 de marzo de 2011 de

http://www.amarc.org/documents/books/Broadcasting_Voice_and_Accountability.pdf

Bustamante, E. (2013). *Historia de la radio y la televisión en España*. Barcelona: Gedisa.

Bustamante, E. (2007) (Coord.) *Cultura y comunicación para el s. XXI*. Tenerife: IDECO.

Bustamante, E. (2006). *Radio y televisión en España. Historia de una asignatura pendiente de la democracia*. Barcelona: Gedisa.

Calvo, E. (2011). "Las radios comunitarias tras la nueva Ley de Comunicación Audiovisual". *Derecom*, 7, pp. 1-11. Recuperado el 15 de julio de 2012 de <http://www.derecom.com/numeros/articulo0407.html>

Camacho, C. (2003). *El derecho a la información como práctica de formación y desarrollo de la ciudadanía comunicativa*. Colección Documentos. Barcelona: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya.

Camacho, C. (2002). *Las radios populares en la construcción de ciudadanía. Enseñanzas de la experiencia de ERBOL en Bolivia*. La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar.

Campos Freire, F. (coord.) (2011). *El nuevo escenario mediático*. Zamora: Comunicación Social.

Candón Mena, José (2013): *Toma la calle, toma las redes. El movimiento 15M en internet*. Sevilla: Atrapasueños.

Carrión, H. (2007). *Situación de las radios comunitarias en Ecuador*. Quito: Infodesarrollo.

Castells, Manuel (2013): *Redes de indignación y esperanza*. Madrid: Alianza.

Chaparro, M. (2005). "Claves para entender el marco audiovisual español: errores y perversiones en torno al uso de un servicio público. En García, J.F. y Casado, J.M. (eds). *El servicio público de televisión*, pp. 81-126. Granada: Universidad de Granada.

Chaparro, M. (2002). *Sorprendiendo al futuro: comunicación para el desarrollo e información audiovisual*. Barcelona: Los libros de la frontera.

Clua, A. (2006). *De las radios libres al Tercer Sector Audiovisual*. Conferencia en el II Encuentro de la Red Estatal de Medios Comunitarios celebrado en Toledo. Recuperado el 23 de febrero de 2011 de http://www.medioscomunitarios.net/files/regulacion_tsa.doc

Clua, A. et al. (2006). *Medios sin ánimo de lucro en la regulación del audiovisual. El caso de España: del vacío legal al espacio marginal*. Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Pensamiento Crítico, Comunicación y Cultura celebrado en Sevilla el 17 de noviembre de 2006. Recuperado el 23 de febrero de 2011 de http://www.medioscomunitarios.net/files/remc_para_eptic.doc

Community Media Forum of Europe (CMFE) (2012). *Community media in Europe: first country ranking*. Investigación presentada en la Conferencia Media Diversity for Democracy, celebrada en República Checa del 4 al 6 de octubre de 2013. Recuperado el 15 de octubre de 2013 de <http://www.cmfe.eu/60-uncategorised/206-first-country-ranking-of-community-media>

Consejo de Europa (2009). *El rol de los medios comunitarios para promover la cohesión social y el diálogo intercultural*. Estrasburgo: Consejo de Europa. Disponible en [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/H-Inf\(2008\)013_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/H-Inf(2008)013_en.pdf) (Recuperado el 8 de julio de 2014).

Consejo de la Juventud de España (2014). “Informe Calidad y Empleo Joven, Becarios y Prácticas”. Impacto. Disponible en <http://www.cje.org/descargas/cje5465.pdf> (Recuperado el 13 de julio de 2014).

Day, R. (2008). *Community radio in Ireland. Participation and multi-flows of communication*. Nueva York: Hampton Press.

Díaz Muriana, J. "La Comunicación como Eje de Transformación Social". En *Revista Pueblos*, número 60, pp. 43-46. Disponible en <http://www.revistapueblos.org/?p=15630> (Recuperado el 13 de julio de 2014).

Downing, J. (2010). *Nanomedios de comunicación*. Conferencia de Medios Comunitarios, Movimientos Sociales y Redes, organizada por la Cátedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB en Barcelona el 15 de marzo de 2010.

Downing, J. (Ed.) (2010). *Encyclopedia of Social Movement Media*. California: Sage – Thousand Oaks.

Downing, J. (2008): "Social movement theories and alternative media: An evaluation and critique". *Communication, Culture & Critique*, 1 (1), pp. 40-50.

Downing, J. (2001). *Radical media: rebellious communication and social movements*. London, Thousand Oaks, California y Nueva Delhi: Sage.

Downing, J. (1984). *Radical media: the political experience of alternative communication*. Boston: South End Press.

Fair, J.E. y Shah, H. (1997). "Continuities and discontinuities in communication and development research since 1958". *Journal of International Communication*, 4 (2), 3-23.

Fernández Viso, A. (2012). "Historia de una travesía inconclusa: la comunicación para el desarrollo y el cambio social en la investigación y la docencia universitarias en España". *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, 17, pp. 41-62.

Ferron, B. (2012). *Les répertoires médiatiques des mobilisations altermondialistes (Mexique-Chiapas, Israël/Palestine, 1994-2006). Contribution à une analyse de la société transnationale*. Dirigida por Erik Neveu. Tesis doctoral. Université de Rennes, Institut d'Etudes Politiques de Rennes, 2012.

Fleischman, L., Reguero, N., Sáez, Ch. (2010). "Movilización social y políticas del tercer sector en Cataluña. El caso del decreto para los medios sin fines de lucro en el contexto español y europeo 2009-2010." Conferencia de IAMCR celebrada en Braga del 18-22 julio de 2010.

Fleischman, L., Reguero, N., Sáez, Ch. (2009). *Políticas de comunicación y sustentabilidad del Tercer Sector de la Comunicación: el caso catalán en el contexto español y europeo*. VII Congreso internacional ULEPICC (Políticas de cultura y comunicación: creatividad, diversidad y bienestar en la sociedad de la información). Celebrado del 7 al 9 de octubre de 2009 en Madrid.

García Castillejo, Á. y Chaparro, M. (2012). "Desregulación y concentración. Presente inmediato del audiovisual en España". *Revista Audiovisual Comunicación para la Inclusión*, 1. Buenos Aires. Recuperado el 15 de enero de 2013 de http://comandalucia.files.wordpress.com/2012/04/mch-angel-castillejo-desregulacion-en-espac3b1a-argentina-def_editado-para-aceptar-x-autores-2.pdf

García, J. (2013). "Transformaciones en el Tercer Sector: el caso de las radios comunitarias en España". *AdComunica, Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 5, pp. 111-131. Recuperado el 12 de septiembre de 2013 de <http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/90>

García, J. (2008). "Medios comunitarios en España. De las radios libres al Tercer Sector". En VV.AA. *Políticas de comunicación en España y Latinoamérica. Medios convencionales, Tercer Sector Audiovisual y alfabetización digital*. Madrid: Dykinson.

García, J., Reguero, N., Sáez, Ch. (2012). "Radios y televisiones del tercer sector de la comunicación en la historia de la legislación española: ¿Un proceso reversible?". Congreso de la AE-IC celebrado en Tarragona los días 18-20 de enero de 2012.

García, T. (2008). *Políticas públicas y televisión digital. El caso de la TDT en España y el Reino Unido*. Madrid: CSIC.

Gavara, J.C. y Pérez, J.M. (2012). *La alfabetización mediática y la Ley General de Comunicación Audiovisual en España*. Barcelona: UNESCO/UOC.

Gubern, R. (1992). "Retos al audiovisual catalán. Entre la desregulación y las nuevas tecnologías". *Revista Telos*, 30, pp. 62-68.

Guimerá, J.A. (2006). *La TV local a Catalunya: gestació, naixement i transformacions (1976-2005)*. Dirigida por Maria Corominas. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació. Recuperado el 2 de octubre de 2011 de <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4192/jago1de1.pdf?sequence=1>

Gumucio-Dagron, A. (2004). "El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social". *Revista Investigación y Desarrollo*, 12 (1), pp. 2-23. Recuperado el 3 de octubre de 2012 de <http://www.redalyc.org/pdf/268/26800101.pdf>

Gumucio-Dagron, A. (2001). *Haciendo olas. Historias de comunicación participativa para el cambio social*. Nueva York, NJ: The Rockefeller Foundation.

Gumucio-Dagron, A. y Tufte, T. (Eds.) (2006). *Communication for Social Change Anthology: Historical and Contemporary Readings*. Nueva Jersey, SO: Communication for Social Change Consortium.

Hartmann, P., *et al* (1989). *The mass media and village life: an indian study*. California y Nueva Delhi: Sage.

Hedërstrom, Ch. (2012). "Community TV and digitalization in the Nordic Countries". Ponencia para el seminario *Community TV and digital transition in Europe* organizado por la Cátedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB en Barcelona el 31 de mayo de 2012. Recuperado el 7 de julio de 2012 de http://www.portalcomunicacion.com/catunesco/download/ComTV_nordic_countries.PDF

Howley, K. (Ed.) (2009). *Understanding Community Media*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Howley, K. (2005). *Community Media: People, Places and Communication Technologies*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Ibarra, Pedro (2013): "Introducción". En M. Cruells y P. Ibarra (Coords.) (2013): *La democracia del futuro. Del 15M a la emergencia de una sociedad civil viva*. Barcelona: Icaria, pp. 5-15.

Jankowski, N. (Ed.) (1992). *The People's Voice: Local Television and Radio in Europe*. Luton, UK: John Libbey Press.

Juppi, P. (2009). *Community radio in Europe and Finland*. Presentación Slideshare. Recuperado el 16 de septiembre de 2013 de <http://www.slideshare.net/PiritaJuppi/community-radio-in-europe-and-finalnd>

Kaplún, M. (1998). *Una pedagogía de la comunicación*. Madrid: Editorial de la Torre.

Kaplún, M. (1985). *El comunicador popular*. Quito: CIESPAL.

Koselleck, R. (2001). *Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Kuttab, D. (2011). "Media and political pluralism after the Arab Spring". En 1st Conference and General Assembly of the Community Media Forum of Europe, realizada en Chipre del 17 al 19 de noviembre de 2011.

Labio, A. *et al.* (2011). "Políticas de comunicación y medios comunitarios en Europa. Análisis de la situación en Reino Unido, Francia y Países Bajos." *Revista Derecho a Comunicar*, 1, pp. 52-79. Recuperado el 5 de abril de 2013 de http://www.academia.edu/2382522/LABIO_Aurora_FERNANDEZ_Isabel_DIAZ_M._Jesus_GUIMERA_J._Angel_REGUERO_Nuria_2011_.Politicas_de_comunicacion_y_medios_comunitarios_en_Europa._Analisis_de_la_situacion_en_Reino_Unido_Francia_y_Paises_Bajos_.Derecho_a_comunicar._Num._1_Enero_-_Abril_2011._Pp._52-79._ISSN_2077137X

Langlois, A. y Dubois, F. (2005). *Autonomous media. Activating resistance and dissent*. Montreal: Cumulus Press.

La Tele (2010). *Decreto de la Generalitat de Cataluña de regulación de los medios sin ánimo de lucro*. Recuperado el 7 de enero de 2014 de <http://latele.cat/es/b-decreto-de-la-generalitat-de-catalu-de-regulaci-n-de-los-medios-sin-nimo-de-lucro>

Lessig, L. (2005). *Por una cultura libre. Cómo los grandes grupos de comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la creatividad*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Nowak, K., *et al.* (1977). "Communication privilege and the realization of human values". En *Communication, Social Organization, Human Resources* (MIKS Project). Estocolmo: Committee for Future Oriented Research.

MacBride, S., *et al.* (1980). *Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo*. México: Fondo de Cultura Económica. Recuperado el 21 de febrero de 2013 de <http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf>

Malerba, J. (2012). *Panorama da situação legal na América Sul*. Observatório da Imprensa, 712. Recuperado el 20 de diciembre de 2012 de http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/ed712_panorama_da_situacao_legal_na_america_sul

Malerba, J. y Nils, B. (2013). *Un ar mais livre? Uma breve abordagem comparativa da situação legal das rádios comunitárias na Europa e América do Sul*. Comunicación presentada en la IX Confêrencia Brasileira de Mídia Cidadã celebrado en Paraná del 6 al 8 de agosto de 2013.

Marí, V. (2013). *Participatory communication for development in practice: the case of community media*. Development in partice, 23 (4), pp. 549-561. Recuperado el 14 de noviembre de 2013 de http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09614524.2013.790941-.VCpt6yt_uok

Martín Barbero, J. (2008). "Políticas de la comunicación y la cultura: claves de investigación." Documentos del CIDOB. Serie Dinámicas Interculturales. N° 11. Barcelona: Fundació CIDOB.

Mattoni, Alice (2013): "Repertoires of communication in social movement processes". En B. Cammaerts, A. Mattoni y P. McCurdy (Eds.). *Mediation and protest movements*. Bristol, UK: Intellect, pp. 39-87.

Mayugo, C. (2006). "El tercer sector audiovisual irrumpe en la agenda política española." *Revista Pueblos*, 20. Recuperado el 23 de febrero de 2011 de <http://www.revistapueblos.org/pdf/pueblos20.pdf>

Mayugo, C. (2004). "Per un nou sistema de mitjans". *Revista Illacrua*. Recuperado el 23 de febrero de 2011 de <http://www.okupemlesones.org/artIllacrua04.php>

Meda, M. (2012). "Del arte de cambiar para que todo siga igual: El Tercer Sector de la Comunicación y la Ley General Audiovisual en España." *Commons, Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital*, 1 (1), pp. 58-84. Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de <http://reuredc.uca.es/index.php/cayp/article/viewFile/431/436>

Meda, M. (2010). *La Ley UTECA y el Tercer Sector de la Comunicación: comparativa internacional de las fallas de la legislación española audiovisual y respuesta de la sociedad civil*. Trabajo fin de máster. Recuperado el 4 de junio de 2012 de <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/883>

Meda, M. (2009). *Emisoras comunitarias: ejerciendo el derecho a la comunicación en las ondas*. VII Congreso internacional ULEPICC (*Políticas de cultura y comunicación: creatividad, diversidad y bienestar en la sociedad de la información*). Madrid.

Montes, F.J. (2012). "Una peculiaridad en la radiodifusión española." *Anuario jurídico y económico escurialense*, 45, pp. 711-736. Recuperado el 4 de julio de 2013 de <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3867675.pdf>

Moragas, M. (1988). *Espais de comunicació. Experiències i perspectives a Catalunya*. Barcelona: Edicions 62.

Moragas, M. y Fernández, A. (2005). "Les politiques de comunicació". En Corominas, M. *et al* (Eds.) *Informe de la comunicació a Catalunya 2003-2004*. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Parlamento Europeo (2008). *Resolución de 25 de septiembre de 2008 sobre medios comunitarios*. Recuperado el 8 de julio de 2014 de <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0456+0+DOC+XML+V0//ES>

Pasquinelli, M. (2002). *Mediactivismo (activismo en los medios). Estrategias y prácticas de la comunicación independiente*. Roma: Derive Approdi. Recuperado el 3 de diciembre de 2011 de http://matteopasquinelli.com/docs/Pasquinelli_Media_Activism_cas.pdf

Pavarala, V. y Malik, K. (2007). *Other Voices: The Struggle for Community Radio in India*. Nueva Delhi: Sage.

Peinado, F. (1998). "La radiodifusión sonora en España: evolución jurídica". *Revista General de Información y Documentación*, 8 (2), pp. 173-192. Recuperado el 21 de febrero de 2013 de <http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID9898220173A/10748>

Pérez Martínez, J.E. (2012). "Libertad en las ondas. La radio libre madrileña (1976-1986)". En Carlos Navajas y Diego Iturriaga (Coord.). *Coetánea: III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo*. La Rioja: Universidad de La Rioja, pp. 333-342.

Pérez Martínez, J.E. (2010) "La radio libre española (1975-1986): una institución subcultural". Primero Congreso Interuniversitario de Historia Contemporánea de la UAB, celebrado en Barcelona los días 9-11 de junio de 2010.

Petit, M. (2008). "Argumentos para una intervención pública correctora del mercado audiovisual." Actas y memoria final del Congreso Internacional Fundacional AE-IC, celebrado en Santiago de Compostela los días 30 de enero a 1 de febrero de 2008. Recuperado el 4 de octubre de 2012 de <http://www.ae-ic.org/santiago2008/contents/pdf/comunicaciones/99.pdf>

Price-Davies, E. y Tacchi, J. (2001). *Community radio in a global context: a comparative analysis in six countries*. Londres: CMA. Recuperado el 4 de junio de 2013 de http://www.amarc.org/documents/articles/Community_Radio_Global.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002). *Informe sobre desarrollo humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado*. Madrid: Mundiprensa. Recuperado el 8 de julio de 2013 de http://desarrollohumano.org.gt/sites/default/files/IDDH_Mundial_2002.pdf

Ramos, J. y Gómez, A.M. (2013). "Legislación y medios comunitarios: análisis comparativos de Bolivia y Venezuela". *Palabra clave*, 17 (2), pp. 484-516. Recuperado el 12 de septiembre de 2014 de <http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/download/3360/3444>

Ramos, J. (2012). "Políticas públicas y radiodifusión comunitaria en Bolivia: proceso de cambio, control del proceso. *Redes.com Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación*, 1 (6), pp. 249-269. Recuperado el 4 de enero de 2013 de <http://revista-redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista-redes/article/view/204/197>

Ramos, J. (2010). *De viejos y nuevos actores. Cambios en la estructura “alterradiodifusora” boliviana*. Dirigida por Ángel Badillo. Tesis para la obtención del título de Máster.

Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamérica. Recuperado el 6 de septiembre de 2011 de

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/82555/1/TFM_Estudioslatinoamericanos_Ramos_Juan.pdf

Reguero, Nuria (2011). “Los medios ciudadanos ante la digitalización en Francia y España. Una aproximación desde el derecho a comunicar”. *Eptic Online*, vol. 13, nº 3.

<http://www.seer.ufs.br/index.php/epitic/article/view/307/849>

Reig, R. (2010): *La telaraña mediática. Cómo conocerla, cómo comprenderla*. Zamora: Comunicación Social.

Relatores especiales de la ONU, OSCE, OEA y CADHP (2007). *Declaración conjunta sobre la diversidad de la radiodifusión*. Recuperado el 8 de julio de 2014 de

<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=719&>

Rennie, E. (2006). *Community Media. A global introduction (Critical Media Studies)*.

Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Reporteros Sin Fronteras (2013). *Ajustes y un nuevo reto para la Ley de Comunicación Audiovisual aprobada por los diputados*. Recuperado el 22 de septiembre de 2014 de

<http://es.rsf.org/uruguay-ajustes-y-un-nuevo-reto-para-la-12-12-2013,45602.html>

Rodríguez, C. (2010). "De medios alternativos a medios ciudadanos: trayectoria teórica de un término." *Revista Folios*, 21, pp. 13-25. Recuperado el 3 de marzo de 2013 de

<http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/issue/view/658>

Rodríguez, C. (2001). *Fissures in the mediascape. An international study of citizens' media*. Cresskill, Nueva Jersey: Hampton Press.

Roksa, A. (2013). *Local and community media. Final comparative report*. Estrasburgo: European Platform of Regulatory Authorities. Recuperado el 8 de enero de 2014 de <http://www.epra.org/attachments/local-community-media-final-comparative-report>

Roncagliolo, R. (1999): “Las redes de cooperación y la radio comunitaria” en M. Chaparro (Ed.) *La democratización de los medios de comunicación*. Sevilla: EMA-Diputación de Sevilla.

Sáez, Ch. y García, J. (2011). *¿Algo nuevo bajo el sol? Distribución de frecuencias de radio y discriminación contra radios libres y comunitarias en España (1979-2011)*. Comunicación presentada para la Conferencia de la International Association for Media and Communication Research, celebrada en Turquía del 13 al 17 de julio de 2011.

Sáez, Ch. (2010). *Conceptualización y contextualización del tercer sector de la comunicación: aportes al debate legislativo sobre televisión comunitaria en la transición digital chilena*. Chile: CNTV. Recuperado el 8 de julio de 2011 de http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20101129/asocfile/20101129112315/tvdigital_tsc_final.pdf

Sáez, Ch. (2009): “Invisibilización de la comunicación alternativa: propuestas de entrada y salida”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 64, pp. 416-423.

Sáez, Ch. (2008). *Tercer Sector de la Comunicación. Teoría y praxis de la televisión alternativa*. Dirigida por Pere Oriol. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació. Recuperado el 8 de julio de 2011 de <http://www.alterinfos.org/spip.php?article2741>

Sanmartín, J. y Reguero, N. (2009): "La regulación de los medios audiovisuales de proximidad ante la digitalización en España. Antecedentes y perspectivas". *Revista Latina de Comunicación Social*, 64, pp. 437-443.

Santos Díez, María Teresa (2003): "Origen y desarrollo de las emisoras de FM que emiten sin concesión administrativa en el País Vasco". *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, vol. 9, pp. 315-328.

Shmucler, H. (2005). "Recuerdo de lo que fue." *Quaderns del CAC*, 21, pp. 29-30.

Recuperado el 8 de mayo de 2013 de

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q21_ES.pdf

Schramm, W. (1964). *Mass media and national development*. Stanford, California: Stanford University Press.

Segovia, A. y Luján, L. (2010). "Concentración y pluralismo en España ante el cambio digital". Congreso Internacional de AE-IC celebrado en Málaga durante los días 3-5 de febrero de 2010. Recuperado el 25 de abril de 2012 de <http://www.ae-ic.org/malaga2010/upload/ok/130.pdf>

Sennit, A. *Community Radio on Europe want to keep FM, prefer DRM+ not DAB+* (2011). Netherlands: Media Network. Recuperado el 15 de julio de 2012 de <http://blogs.rnw.nl/medianetwork/community-radio-in-europe-want-to-keep-fm-prefer-drm-not-dab>

Servaes, J. (1999). *Comunicación para el desarrollo: tres paradigmas, dos modelos*. Temas y problemas de comunicación, 8, (10), pp. 5-24. Recuperado el 12 de septiembre de 2013 de http://www.unescoafricom.es/wp-content/uploads/2012/11/Servaestemasyproblemas_2000.pdf

Sierra, F. (2004). "Sociedad de la información y movimientos sociales. Alternativas democráticas al modelo de desarrollo social dominante". En Marí Sáez, V.M. (2004). *La red es de todos: cuando los movimientos sociales se apropian de la red* (pp. 91-115). Madrid: Editorial Popular.

Soengas, Xosé (2013): "Retos de la radio en los escenarios de la convergencia digital". *Adcomunica*, 5, 23-36.

Soria, C. (1974). *Los orígenes del Derecho de radiodifusión en España*. EUNSA: Pamplona.
Tascón, M. y Quintana, Y. (2012): *Ciberactivismo: Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas*. Madrid: Catarata.

Toret, J. (Coord.) (2013). "Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida". *IN3. Working paper series*. Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado el 12 de diciembre de 2013 de http://www.uoc.edu/ojs/index.php/in3-working-paper-series/article/view/1878/n13_toret

Tresserras, J.M. (Ed) (2005). "XXV Aniversario del Informe MacBride. Comunicación internacional y políticas de comunicación." *Especial Quaderns del CAC*, 21. Barcelona: InCom UAB. Recuperado el 8 de marzo de 2013 de http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q21_ES.pdf

UNESCO (2008). *Declaración de Maputo sobre promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas*. Mozambique: UNESCO. Recuperado el 8 de julio de 2014 de http://portal.unesco.org/ci/fr/files/26736/12133672327Maputo_Declaration_-_Sp.pdf/Maputo%2BDeclaration%2B-%2BSp.pdf

Valcke, P. (2012). "Desafíos de la regulación del pluralismo en los medios de la Unión Europea: el potencial de la regulación basada en el riesgo." *Quaderns del CAC*, 15 (1), pp. 25-36.

Vidal, A. (2013). *El servicio público audiovisual y la construcción del Estado autonómico: RTVE 1980-2006*. Dirigida por Armand Balsebre. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació. Recuperada el 4 de abril de 2014 de <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117784/av1de1.pdf?sequence=1>

Villalobos, O. (2011). "Medios comunitarios e inclusión social en Venezuela". Congreso INVECOM, celebrado en Mérida (Venezuela) durante los días 18-20 mayo de 2011.

Villamayor, C. (2008). "La dimensión político cultural en la sostenibilidad de las radios comunitarias". *Question*, 1(28), pp. 1-12.

Vinelli, N. (2011). "Alternative media heritage in Latin America". En Downing, J. (Ed). *Encyclopedia of social movement media*, pp. 28-31. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Zallo, R. (2010). *La política de Comunicación Audiovisual del gobierno socialista (2004-2009): un giro neoliberal*. Revista Latina de Comunicación Social, 65, pp. 14-29: Universidad de La Laguna. Recuperado el 7 de marzo de 2011 de http://www.revistalatinacs.org/10/art/880_UPV/02_Zallo.html

Zibechi, R. (2008). "Los movimientos sociales como sujetos de la comunicación". En Albornoz, M.B. y Cerbino, M. (Eds). *Comunicación, cultura y política*. Ecuador: FLACSO.

ARTÍCULOS DE PRENSA

ABC (1975). "La donación de acciones al Estado, resultado de unas negociaciones que duraron varios años". Abc, 6 de septiembre de 1975. Recuperado el 8 de enero de 2013 de <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1975/09/06/020.html>

Arabí Valencia, F. (2011). "El Consell anula el concurso de FM tras una investigación judicial a un aspirante". Levante-emv.com Recuperado el 31 de agosto de 2012 <http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/09/13/consell-anula-concurso-fm-investigacion-judicial-aspirante/839144.html>

Blanco, A. (2013). "Los medios públicos esquivan su obligación de dar presencia a las asociaciones en la programación". Eldiario.es, 26 de mayo de 2013. Recuperado el 7 de junio de 2013 de http://www.eldiario.es/andalucia/publicos-obligacion-permitir-asociaciones-programas_0_134736766.html

Casqueiro, J. (1994). "Leguina será el responsable de la creación de más emisoras y regulará las radios libres". El País, 19 de mayo de 1994. Recuperado el 17 de octubre de 2012 de http://elpais.com/diario/1994/05/19/madrid/769346696_850215.html

Clúa, A. (2008). "El servicio público de comunicación". El País. Recuperado el 9 de diciembre de 2013 de http://elpais.com/diario/2008/03/06/catalunya/1204769240_850215.html

Cretaz, J. (2011). "La TV comunitaria busca su futuro". La Nación, 19 de septiembre de 2011. Recuperado el 24 de septiembre de 2014 de <http://www.lanacion.com.ar/1407292-la-tv-comunitaria-busca-su-futuro>

Coordinadora de Radios Libres (2012). "Manifiesto de apoyo a las radios asturianas". Radio QK. Recuperado el 31 de agosto de 2012 de

<https://docs.google.com/document/d/1SE2c86J4DNBtrBUtSPUh8ScDnvEdDXIES4w18HpPHK0/edit>

D.D. (2012). "La Xunta anula el concurso para conceder 84 licencias de radio por incompatible con una norma estatal". El Faro de Vigo. Recuperado el 31 de agosto de 2012 de <http://www.farodevigo.es/galicia/2012/05/19/xunta-anula-concurso-conceder-84-licencias-radio-incompatible-norma-estatal/649890.html>

EFE (2012). "La fiscalía denuncia el tráfico de influencias en el concurso de FM de Canarias". Elcorreo.com. Recuperado el 30 de agosto de 2012 de http://www.elcorreo.com/agencias/20120621/fiscalia-denuncia-traffic-influencias-concurso_201206211615.html

EFE (2011). "Jáuregui anuncia la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales antes del verano". El Mundo. Recuperado el 14 de julio de 2012 de <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/17/comunicacion/1295261669.html>

EFE (2009). "Fernández de la Vega dice que no se ha pactado por detrás con la Unión de Televisiones". Soitu.es, 20 de mayo de 2009. Recuperado el 4 de enero de 2013 de http://www.soitu.es/soitu/2009/05/20/info/1242819622_972277.html

Europa Press (2014). *Pablo Iglesias propone regular los medios de comunicación a través de mecanismos de control público*. Recuperado el 7 de julio de 2014 de http://www.eldiario.es/politica/Pablo-Iglesias-comunicacion-mecanismos-publico_0_277523127.html

Garea, F. (2009). "Los grupos fuerzan al PSOE a aplazar la ley audiovisual". El País, 23 de diciembre de 2009. Recuperado el 8 de septiembre de 2012 de

http://elpais.com/diario/2009/12/23/sociedad/1261522811_850215.html

González, J. (2013). "El Gobierno argentino no aplica la Ley de Medios hasta que la Corte Suprema decida sobre su constitucionalidad" (entrevista a Martín Becerra). Nueva Tribuna, 25 de agosto de 2013. Recuperado el 17 de abril de 2013 de

<http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/gobierno-argentino-no-aplica-ley-medios-corte-suprema-decida-constitucionalidad/20130825132212095819.html>

Llobet, G. *et al.* (2013). "Superregulador: ¿expertos independientes?". El País, 12 de septiembre de 2013. Recuperado el 19 de abril de 2013 de

http://elpais.com/elpais/2013/09/11/opinion/1378893667_253607.html

Mercader, J. (1983). "RTV Cardedeu, los amigos del lunes". El País, 3 de abril de 1983.

Recuperado el 8 de enero de 2013 de

http://elpais.com/diario/1983/04/03/espana/418168819_850215.html

Montalvo, J. (2010). El Gobierno plantea confiar a la CMT la regulación audiovisual.

Expansión.com. Recuperado el 14 de julio de 2012 de

<http://www.expansion.com/2010/12/27/empresas/tmt/1293410716.html?a=b476516a8b1367d568831900aaff9c6&t=1342259324>

Montoya, V. (2014). "Réquiem para los caídos en la masacre minera de Milluni". Rebelión, 31 de mayo de 2014. Recuperado el 6 de junio de 2014 de

<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185311>

Piqué, M. (2009). "Es lo más avanzado que he visto en el continente". Página 12, 15 de julio de 2009. Recuperado el 8 de octubre de 2012 de <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-128260-2009-07-15.html>

PSOE, nota de prensa (2009). "El PSOE señala que la ley ha de entrar en vigor antes del encendido digital y destaca el esfuerzao de consenso". Psoe.es, 22 de diciembre de 2009. Recuperado el 17 de marzo de 2012 de <http://www.psoe.es/ambito/cordoba/news/index.do?action=Print&id=423730>

Sáez, I., Vargas, J. (2012). "Ofensiva contra las radios de Barcelona". Periódico Diagonal. Recuperado el 31 de agosto de 2012 de <http://www.diagonalperiodico.net/Ofensiva-contra-radios-de.html>

Ridruejo, C.C. (1982). "Critican el método de concesión de emisoras de FM". El País, 8 de diciembre de 1982. Recuperado el 17 de marzo de 2012 de http://elpais.com/diario/1982/12/08/radiotv/408150002_850215.html

Vicente, I. (1990). "RTV Cardedeu, la decana". El País, 11 de junio de 1990. Recuperado el 8 de enero de 2013 de http://elpais.com/diario/1990/06/11/radiotv/645055202_850215.html

Vitoria, J.M (1986). *El Gobierno vasco aprueba un tercer decreto para la concesión de emisoras en FM*. El País. Recuperado el 3 de diciembre de 2013 de http://elpais.com/diario/1986/11/14/sociedad/532306809_850215.html

FUENTES JURÍDICAS

Andalucía. Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 24 de enero de 2006, núm. 15. p. 14. Recuperado el 24 de abril de 2012

<http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/15/boletin.15.pdf>

Andalucía. Decreto 75/1989, de 4 de abril, por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 18 de abril de 1989, núm. 30, p. 1434. Recuperado el 24 de abril de 2012 de <http://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/30/boletin.30.pdf>

Andalucía. Decreto 86/1982, de 27 de agosto, por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión - institucionales y privadas- en ondas métricas con frecuencia modulada. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 7 de septiembre de 1982, núm. 22, p. 371.

Recuperado el 24 de abril de 2012 de

<http://www.juntadeandalucia.es/boja/1982/22/boletin.22.pdf>

Andalucía. Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 27 de junio de 2002, núm. 75, p. 11342. Recuperado el 24 de abril de 2012 de

<http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/75/boletin.75.pdf>

Andalucía. Decreto 414/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 2 de diciembre de 2000, núm. 139, p. 18008. Recuperado el 24 de abril de 2012 de

<http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/139/boletin.139.pdf>

Andalucía. Orden del 24 de septiembre de 2003, por la que se regula el procedimiento de concesión de emisoras culturales de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 2 de octubre de 2003, núm. 190, p. 20934. Recuperado el 24 de abril de 2012 de <http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/190/boletin.190.pdf>

Aragón. Decreto 15/1997, de 25 de febrero, por el que se regula el régimen concesional del Servicio Público de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia. *Boletín Oficial de Aragón*, 5 de marzo de 1997, núm. 26, p. 995. Recuperado el 3 de febrero de 2011 de <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=100184845438>

Argentina. Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 10 de octubre de 2009. *Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual*. Recuperado el 12 de diciembre de 2012 de <http://www.afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2014/04/Ley-26522-Servicios-de-Comunicacion-Audiovisual.pdf>

Asociación de Usuarios de la Comunicación (2009). *Observaciones de la AUC ante el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual*. Madrid: AUC. Recuperado el 8 de enero de 2012 de <http://www.auc.es/Paginas/Documentos AUC/Documentos AUC.htm>

Asturias. Decreto 31/1997, de 15 de mayo, por el que se regula el régimen concesional del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y se crea el registro de empresas radiodifusoras del Principado de Asturias. *Boletín Oficial del Principado de Asturias*, 31 de mayo de 1997, núm. 125, p. 5963. Recuperado el 8 de mayo de 2012 de <https://sede.asturias.es/bopa/1997/05/31/19970531.pdf>

Baja Sajonia. Directiva de la NLM sobre la concesión de ayudas para promover la radiodifusión ciudadana, de 26 de septiembre de 2001. *NLM*. Recuperado el 4 de febrero de 2012 de http://www.nlm.de/fileadmin/dateien/infothek/pdf/VI.2._FoRi_Buergerrundfunk.pdf

Baja Sajonia. Ley de Medios de Baja Sajonia, versión revisada del 11 de octubre de 2010. *GVBL*, número 25/2010, p. 480 y ss. Recuperado el 4 de febrero de 2012 de http://www.nlm.de/fileadmin/dateien/infothek/pdf/NMedien_01.01.2011.pdf

Bremen. Ley Estatal de Medios de Bremen de 25 de julio de 2012. *GBI*, número 23, p. 377. Recuperado el 4 de febrero de 2012 de http://www.bremische-landesmedienanstalt.de/fileadmin/user_upload/content/dateien/20120925_G_BremLandesmedienG_In_Kraft_getretene_Fassung_Stand_August_2012.pdf

Bolivia. Decreto Supremo 29174, Reglamento de provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales del territorio nacional, de 20 de junio de 2007. *Gaceta Oficial de Bolivia*, edición especial número 0100, publicado el 22 de junio de 2007. Recuperado el 4 de marzo de 2012 de <http://mena.amarc.org/sites/default/files/Bolivia.2007.Decreee.pdf>

Bolivia. Ley 164, General de Telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, de 8 de agosto de 2011. *Gaceta Oficial de Bolivia*. Recuperado el 4 de marzo de 2012 de http://att.gob.bo/images/files/L0164_Ley_de_Telecomunicaciones_y_TICs.pdf

Canarias. Decreto 37/1989, de 16 de marzo, por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de Canarias*, 5 de abril de 1989, núm. 47, p. 706. Recuperado el 8 de abril de 2012 de <http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/047/boc-1989-047-001.pdf>

Canarias. Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual. *Boletín Oficial de Canarias*, 16 de julio de 2010, núm. 139, p. 18403. Recuperado el 8 de abril de 2012 de <http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/139/002.html>

Canarias. Decreto 89/2009, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la concesión administrativa del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de Canarias*, 1 de julio de 2009, núm. 126, p. 14024. Recuperado el 8 de abril de 2012 de <http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/126/boc-2009-126-001.pdf>

Canarias. Decreto 163/2006, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que regula el procedimiento de otorgamiento de las concesiones y el régimen de gestión directa, por corporaciones municipales insulares, de canales digitales de televisión de ámbito local. *Boletín Oficial de Canarias*, 16 de noviembre de 2006, núm. 223, p. 25641. Recuperado el 8 de abril de 2012 de <http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/223/boc-2006-223-001.pdf>

Cantabria. Decreto 46/2013, de 11 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual. *Boletín Oficial de Cantabria*, 26 de julio de 2013, núm. 142. Recuperado el 14 de noviembre de 2013 de <http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=252054>

Cantabria. Decreto 112/1997, de 14 de octubre, por el que se establece el régimen jurídico de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de Cantabria*.

Cantabria. Decreto 127/2004, de 18 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de Cantabria*, 13 de diciembre de 2004, núm. 238, p. 11827. Recuperado el 4 de marzo de 2012 de <https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=74393>

Castilla-La Mancha. Decreto 59/1998, de 9 de junio, por el que se regula la gestión indirecta del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Diario Oficial de Castilla-La Mancha*, 26 de junio de 1998, núm. 29, p. 4551. Recuperado el 15 de julio de 2011 de

<http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1998/06/26&idDisposicion=123061651569231485>

Castilla-La Mancha. Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. *Boletín Oficial de Castilla-La Mancha*, 19 de abril de 2007, núm. 82, p. 9653.

Recuperado el 15 de julio de 2011 de

<http://www.cortesclm.es/paginas/verley.php?id=10/2007>

Castilla y León. Decreto 12/1998, de 22 de enero, por el que se regula el Régimen Jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de Castilla y León*, 28 de enero de 1998, núm. 18. Recuperado el 14 de noviembre de 2012 de

<http://www.jcyl.es/web/jcyl/SociedadInformacion/es/Plantilla100Detalle/1246988232579/Normativa/1144425206179/Redaccion>

Castilla y León. Decreto 64/2005, de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico del servicio público de televisión digital local por ondas terrestres. *Boletín Oficial de Castilla y León*, 14 de septiembre de 2005, núm. 178. Recuperado el 14 de noviembre de

<http://www.jcyl.es/web/jcyl/SociedadInformacion/es/Plantilla100Detalle/1246988232579/Normativa/1144236007431/Redaccion>

Castilla y León. Decreto 71/2008, de 9 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de Castilla y León*, 16 de octubre de 2008, núm. 200. Recuperado el 14 de noviembre de

<http://www.jcyl.es/web/jcyl/SociedadInformacion/es/Plantilla100Detalle/1246988232579/Normativa/1224057711706/Redaccion>

Cataluña. Decreto 15/2003, de 8 de enero, por el cual se regula el régimen jurídico transitorio de las televisiones locales por ondas terrestres. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 16 de enero de 2003, núm. 3801, p. 915. Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de <http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/3801/312913.pdf>

Cataluña. Decreto 80/1989, de 4 de abril, de regulación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 12 de abril de 1989, núm. 1130, p. 1567. Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de <http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/1130/23210.pdf>

Cataluña. Decreto 175/1980, de 3 de octubre, que regula la concesión de emisoras de radiodifusión, institucionales y privadas, en ondas métricas con modulación de frecuencias. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 12 de noviembre de 1980, núm. 93, p. 1442. Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de <http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/86/1464.pdf>

Cataluña. Decreto 269/1998, de 21 de octubre, del régimen jurídico de las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia para las emisoras comerciales. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 2 de noviembre de 1998, núm. 2756, p. 13484. Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de <http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/2756/127155.pdf>

Cataluña. Decreto 320/1996, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia para las emisoras comerciales. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 14 de

octubre de 1996, núm. 2268, p. 10404. Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de

<http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/2268/92774.pdf>

Cataluña. Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, 27 de febrero de 2012, núm. 6075, p. 9085. Recuperado el 15 de abril de 2013 de

<http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/6075/1226673.pdf>

Cataluña. Ley 22/2005, de 29 de diciembre de la comunicación audiovisual de Cataluña.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 3 de enero de 2006, núm. 4543, p. 84.

Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de

<http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/4543/531253.pdf>

Cataluña. Proyecto de Decreto de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro en Cataluña. 29 de julio de 2010, *La Tele*. Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de

http://latele.cat/sites/default/files/projecte_de_decret_serveis_de_comunicacio_audiovisuals_sense_anim_de_lucre_21_6_2010.pdf

Comisiones Obreras (2009). *Enmiendas al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual*. Madrid: CCOO. Recuperado el 12 de noviembre de 2012 de

www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/17554/23249.pdf

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (2009). *Propuestas de enmiendas del sector social de la discapacidad presentado por el CERMI al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, para garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad*. Madrid: CERMI. Recuperado el 12 de noviembre de 2012 de

<http://www.cermi.es/es-ES/Novedades/Paginas/Historico-2009.aspx?TSMEIdPub=17>

Comunidad Valenciana. Decreto 38/1998, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 6 de abril de 1998, núm. 3218, p. 4659.

Recuperado el 8 de septiembre de 2012 de

http://www.docv.gva.es/datos/1998/04/06/pdf/1998_2612.pdf

Comunidad Valenciana. Decreto 40/1989, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, 13 de marzo de 1989, núm. 1028, p. 1687. Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de

http://www.docv.gva.es/datos/1989/03/17/pdf/1989_813422.pdf

Comunidad Valenciana. Ley 1/2006, de 19 de abril de la Generalitat, del sector audiovisual.

Boletín Oficial del Estado, 7 de junio de 2006, núm. 135, p. 21675. Recuperado el 8 de

septiembre de 2011 de <https://www.boe.es/boe/dias/2006/06/07/pdfs/A21675-21691.pdf>

Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Resolución del recurso de reposición interpuesto por la asociación Red de Medios Comunitarios contra el Acuerdo 66/2013, de 15 de mayo, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, de aprobación de las bases del concurso público para la adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia de titularidad privada en Cataluña y contra el anuncio de licitación del concurso para la adjudicación de 23 licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia. 29 de julio de 2013.

Dinamarca. Orden Ejecutiva número 881 del 17 de septiembre de 2009, Reglamento de radiodifusión local. *Gaceta A* de 19 de septiembre de 2009. Recuperado el 5 de diciembre de 2012 de <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126145&exp=1>

Dinamarca. Orden Ejecutiva número 1102 del 16 de septiembre de 2013, Decreto para el apoyo a la formación para las actividades de radio y televisión locales no comerciales. *Gaceta A* del 18 de septiembre de 2013. Recuperado el 8 de noviembre de 2013 de <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158258&exp=1>

Dinamarca. Orden Ejecutiva número 1423 del 20 de diciembre de 2011, Reglamento de televisión no comercial en múltiplex digital. *Gaceta A* de 5 de enero de 2012. Recuperado el 5 de diciembre de 2012 de <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139691&exp=1>

Ecuador. Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Comunicación de 21 de junio de 2013. *Registro Oficial Órgano del Gobierno de Ecuador*, Año I, Número 22, publicado el 25 de junio de 2013. Recuperado el 4 de diciembre de 2013 de http://www.asambleanacional.gob.ec/system/files/ley_organica_comunicacion.pdf

España. Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 31/2014 de 7 de julio. Recuperado el 8 de septiembre de 2014 de <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/cat452.html>

España. Boletín Oficial de las Cortes Generales (2012). Preguntas para respuesta escrita (184/000475). Congreso de los Diputados, X Legislatura, número 32, serie D, del 8 de febrero de 2012, pp. 90. Recuperado el 20 de noviembre de 2013 de http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_032.PDF

España. Boletín Oficial de las Cortes Generales (2012). Preguntas para respuesta escrita (184/004557). Congreso de los Diputados, X Legislatura, número 82, serie D, del 25 de abril de 2012, pp. 98. Recuperado el 20 de noviembre de 2013 de http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_082.PDF

España. Boletín Oficial de las Cortes Generales (1998): Preguntas para respuesta escrita (184/014332). Congreso de los Diputados, VI Legislatura, número 244, serie D, del 18 de febrero de 1998, pp. 59. Recuperado el 19 de noviembre de 2013 de http://www.congreso.es/public_oficiales/L6/CONG/BOCG/D/D_244.PDF

España. Boletín Oficial de las Cortes Generales (2007): Preguntas para respuesta escrita (184/115134). Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, número 531, serie D, del 27 de marzo de 2007, pp. 56. Recuperado el 19 de noviembre de 2013 de http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_531.PDF

España. Boletín Oficial de las Cortes Generales (2007): Preguntas para respuesta escrita (184/115134). Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, número 553, serie D, del 17 de mayo de 2007, pp. 56. Recuperado el 19 de noviembre de 2013 de http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_553.PDF

España. Boletín Oficial de las Cortes Generales (2009): Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual (121/000045). Congreso de los Diputados, IX Legislatura, número 45-1, serie A, del 23 de octubre de 2009, p. 1. Recuperado el 5 de febrero de 2011 de http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_045-01.PDF

España. Boletín Oficial de las Cortes Generales (2012). Respuestas para pregunta escrita (184/000475). Congreso de los Diputados, X Legislatura, número 76, serie D, del 17 de abril de 2012, pp. 42. Recuperado el 20 de noviembre de 2013 de http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_076.PDF

España. Boletín Oficial de las Cortes Generales (1998): Respuestas para pregunta escrita (184/014332). Congreso de los Diputados, VI Legislatura, número 261, serie D, del 2 de abril de 1998, pp. 345. Recuperado el 19 de noviembre de 2013 de http://www.congreso.es/public_oficiales/L6/CONG/BOCG/D/D_261.PDF

España. Decreto del 24 de enero de 1908, Bases para el establecimiento en España del servicio radiotelegráfico. *Gaceta de Madrid*, 25 de enero de 1908, núm. 25, pp. 333-335.

Recuperado el 15 de noviembre de 2012 de

<http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1908/025/A00333-00335.pdf>

España. Gaceta de Madrid (1907). Ley autorizando al Gobierno para que proceda a plantear o desarrollar los servicios de radiotelegrafía, cables y teléfonos. Ministerio de la Gobernación, 28 de octubre de 1907, núm. 301, pp. 359. Recuperado el 15 de noviembre de 2012 de

<http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1907/301/A00359-00359.pdf>

España. Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión. *Boletín Oficial del Estado*, 12 de enero de 1980, núm. 11, p. 844. Recuperado el 11 de diciembre de 2012 de

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1980-724

España. Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. *Boletín Oficial del Estado*, 1 de abril de 2010, núm. 79. Recuperado el 11 de abril de 2014 de

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292>

España. Ley 11/1991, de 8 de abril, de organización y control de las emisoras municipales de radiodifusión sonora. *Boletín Oficial del Estado*, 9 de abril de 1991, núm. 85, p. 10607.

Recuperado el 12 de diciembre de 2012 de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-8479>

España. Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. *Boletín Oficial del Estado*, 6 de junio de 2006, núm. 134. Recuperado el 11 de abril de 2014 de

<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9958>

España. Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. *Boletín Oficial del Estado*, 19 de diciembre de 1987, núm. 303, p. 37409. Recuperado el 11 de diciembre de 2012 de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1987-28143

España. Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. *Boletín Oficial del Estado*, 4 de noviembre de 2003, núm. 264. Recuperado el 12 de diciembre de 2012 de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20253>

España. Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres. *Boletín Oficial del Estado*, 27 de diciembre de 1995, núm. 309, p. 36940. Recuperado el 12 de diciembre de 2012 de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-27707

España. Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. *Boletín Oficial del Estado*, 29 de diciembre de 2007, núm. 312, p. 53701. Recuperado el 11 de abril de 2014 de <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22440>

España. Orden del 15 de noviembre de 1967 por la que se establece el régimen provisional de prórroga del contrato de arrendamiento vigente en favor de los actuales adjudicatarios de emisoras comarcales de radiodifusión. *Boletín Oficial del Estado*, 21 de noviembre de 1967, núm. 278, p. 16156. Recuperado el 18 de noviembre de <http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1908/025/A00333-00335.pdf>

España. Orden de 20 de julio de 1954, acordada en Consejo de Ministerios, por la que se convoca el concurso para organización y ejecución de programas en emisoras comarcales de radiodifusión. *Boletín Oficial del Estado*, 28 de agosto de 1954, núm. 240, pp. 5925 a 5928. Recuperado el 18 de noviembre de <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1954/240/A05925-05928.pdf>

España. Real Decreto 169/1898, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia. *Boletín Oficial del Estado*, 21 de febrero de 1989, núm. 44, p. 5043. Recuperado el 11 de diciembre de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-4070

España. Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. *Boletín Oficial del Estado*, 3 de abril de 2010, núm. 81, p. 30750. Recuperado el 11 de septiembre de 2012 de <http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/03/pdfs/BOE-A-2010-5400.pdf>

España. Real Decreto 765/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Medias (hectométricas). *Boletín Oficial del Estado*, 11 de junio de 1993, núm. 139, p. 17894. Recuperado el 12 de diciembre de 2012 de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-15065

España. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. *Boletín Oficial del Estado*, 30 de julio de 2005, núm. 181, p. 27006. Recuperado el 11 de septiembre de 2012 de <http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf>

España. Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial del Estado*, 18 de septiembre de 2006, núm. 223, p. 32718. Recuperado el 12 de diciembre de 2012 de <https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/18/pdfs/A32718-32760.pdf>

España. Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueba un incremento de frecuencias para gestión indirecta de emisoras, dentro del Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial del*

Estado, 13 de septiembre de 1997, núm. 22, p. 27154. Recuperado el 12 de diciembre de 2012 de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-19786

España. Real Decreto 1433/1979, de 8 de junio, por el que se establece el Plan Técnico Transitorio del Servicio Público de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial del Estado*, 18 de junio de 1979, núm. 145, p. 13500. Recuperado el 11 de septiembre de 2012 de <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-14372>

España. Real Decreto 2648/1978, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. *Boletín Oficial del Estado*, 9 de noviembre de 1978, núm. 268, p. 25636. Recuperado el 11 de septiembre de 2012 de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-27959

España. Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Borrador de Anteproyecto de Ley General Audiovisual. 23 de junio de 2006.

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª). Auto del recurso ordinario 442/2010 de 25 de marzo de 2014. Recuperado el 30 de abril de 2014 de [http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7014239&links="442/2010"&optimize=20140407&publicinterface=true](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7014239&links=)

Extremadura. Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Diario Oficial de Extremadura*, 22 de noviembre de 1994, núm. 133, p. 4548. Recuperado el 3 de octubre de 2011 de <http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1994/1330o/94040151.pdf>

Extremadura. Decreto 134/2013, de 30 de julio, de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura. *Diario Oficial de Extremadura*, 2 de agosto de 2013, núm. 149, p. 18559. Recuperado el 18 de diciembre de 2013 de <http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1490o/13040155.pdf>

Francia. Ley 2004-669, de 9 de julio de 2004, relativa a las comunicaciones electrónicas y otros servicios de comunicación audiovisual. *Journal Officiel de la République Française*. Recuperado el 12 de diciembre de 2013 de http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D8A492CB8AC14E1B5D1B6AE95348BDE.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000439399&dateTexte=20040710

Francia. Ley 2006-1067, de 25 de agosto, para la aplicación del artículo 80 de la ley número 86-1067 de 30 de septiembre de 1986 relativa a la libertad de comunicación. *Journal Officiel de la République Française*. Recuperado el 12 de diciembre de 2013 de <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000459724&fastPos=2&fastReqId=1193869770&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

Francia. Orden de 5 de julio de 2012 relativo a los baremos de subvención. *Journal Officiel de la République Française*, de 28 de agosto de 2012. Recuperado el 12 de diciembre de 2013 de http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120828&nu

Foro de Investigación para el desarrollo de la Cultura Audiovisual. *Enmiendas parciales al texto de Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual*. Madrid: FIDECA. Recuperado el 8 de enero de 2012 de <https://fideca.wordpress.com/>

Foro de Organizaciones de Periodistas (2009). *Consideraciones del FOP al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual*. Madrid: FOP. Recuperado el 12 de noviembre de 2012 de <http://www.xornalistas.com/mediateca/documentos/leyaudiovisualfop.pdf>

Galicia. Decreto 102/2012, de 29 de marzo, por el que se desarrolla el servicio de comunicación audiovisual radiofónica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. *Diario Oficial de Galicia*, 2 de abril de 2012, núm. 64, p. 11564. Recuperado el 11 de abril de 2014 de http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120402/AnuncioC3C1-290312-14197_es.html

Galicia. Decreto 156/1989, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Diario Oficial de Galicia*.

Galicia. Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del audiovisual de Galicia. *Diario Oficial de Galicia*, 8 de septiembre de 1999, núm. 174, p. 11032. Recuperado el 11 de abril de 2014 de http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990908/AnuncioED6A_es.html

Hamburgo-Scheleswig-Holstein. Ley de Medios de Hamburgo y Scheleswig-Holstein, de 13 de junio de 2006. *Hmb GVB*, 6 de febrero de 2007, núm. 47, p. 1. Recuperado el 14 de diciembre de 2012 de http://www.ma-hsh.de/cms/upload/downloads/Rechtsvorschriften/1.1_MStV_HSH_Internet.pdf

Hesse. Estatuto del Instituto Estatal de Hesse para la Radiodifusión Privada y Nuevos Medios sobre la recaudación de tasas y costes, de 29 de octubre de 2012. *Stantz*, número 47, publicado el 19 de noviembre de 2012, p. 1254 y ss. Recuperado el 14 de diciembre de 2012 de http://www.lpr-hessen.de/files/Kostensatzung_LPRHessen_2012.pdf

Hesse. Ley de Radiodifusión Privada de Hesse de 27 de septiembre de 2012. *GVBl*, p. 290 y ss. Recuperado el 12 de noviembre de 2012 de http://www.lpr-hessen.de/files/HPRG_270912.pdf

Irlanda. Ley Audiovisual de 12 de julio de 2009. *Departamento de Comunicaciones, Energía y Recursos Naturales*. Recuperado el 12 de diciembre de 2012 de <http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/DE7C0393-76C1-42A5-A176-88C512F7AB9C/0/BroadcastingAct2009.pdf>

Islas Baleares. Decreto 36/2008, de 4 de abril, por el que se regula el régimen jurídico aplicable al otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por ondas terrestres. *Boletín Oficial de las Islas Baleares*, 12 de abril de 2008, núm. 50, p. 6. Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de <http://boib.caib.es/pdf/2008050/mp6.pdf>

Islas Baleares. Decreto 62/1997, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto 86/1995. *Boletín Oficial de las Islas Baleares*, 24 de mayo de 1997, núm. 63, p. 7340. Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de <http://boib.caib.es/pdf/1997063/mp7340.pdf>

Islas Baleares. Decreto 86/1995, de 7 de septiembre, por el que se regula el régimen y procedimiento de adjudicación de concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de las Islas Baleares*, núm. 303, p. 5869.

Islas Baleares. Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de las Illes Balears. *Boletín Oficial de las Islas Baleares*, 3 de octubre de 2013, núm. 136, p. 46884. Recuperado el 2 de septiembre de 2014 de <http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8203/524893/ley-5-2013-de-1-de-octubre-audiovisual-de-las-ille>

La Rioja. Decreto 44/1997, de 29 de agosto, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de La Rioja*, 30 de agosto de 1997, núm. 104. Recuperado el 8 de septiembre de 2011 de

<http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=1997/08/30&referencia=566071-1-HTML-180410-X>

La Rioja. Decreto 64/2012, de 9 de noviembre, por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual y el registro de prestadores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. *Boletín Oficial de La Rioja*, 19 de noviembre de 2012, núm. 140. Recuperado el 15 de diciembre de 2012 de

<http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2012/11/19&referencia=989197-2-HTML-456825-X>

Navarra. Decreto Foral 5/2012, de 25 de enero, sobre servicios de comunicación audiovisual en la Comunidad de Navarra. *Boletín Oficial de Navarra*, 13 de febrero de 2012, núm. 30. Recuperado el 14 de noviembre de 2014 de

<http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=25576>

Navarra. Decreto Foral 313/1996, de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de la gestión, mediante concesión administrativa, del servicio de televisión local por ondas terrestres. *Boletín Oficial de Navarra*, 23 de septiembre de 1996, núm. 116. Recuperado el 14 de noviembre de 2012 de

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/116/Anuncio-0/

Navarra. Decreto Foral 336/1997, de 10 de noviembre, por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de Navarra*, 28 de noviembre de 1997, núm. 143. Recuperado el 14 de noviembre de 2012 de <http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28223>

Noruega. Reglamento sobre radiodifusión y servicios audiovisuales, de 28 de febrero de 1997. *Lovdata*. Recuperado el 8 de junio de 2012 de <http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-02-28-153>

Madrid. Decreto 29/2003, de 13 de marzo, de modificación del decreto 57/1997 relativo al régimen de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, 22 de abril de 2003, núm. 94, p. 6. Recuperado el 4 de marzo de 2012 de http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/20030422_B/09400.PDF

Madrid. Decreto 57/1997, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, 13 de mayo de 1997, núm. 112, p. 3. Recuperado el 4 de marzo de 2012 de http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/19970513_B/11200.pdf

Murcia. Decreto 17/1995, de 7 de abril, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras y de inscripción en el registro de empresas de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, 10 de mayo de 1995, núm. 107, p. 5496. Recuperado el 2 de febrero de 2011 de <http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=507713>

Murcia. Decreto 47/2002, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, 11 de febrero de 2002, núm. 35, p. 2119. Recuperado el 2 de febrero de 2011 de <http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=43595>

Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (2009). *Propuesta de enmiendas a la Ley General de la Comunicación Audiovisual*. Madrid: OCTA. Recuperado el 10 de noviembre de 2012 de <http://www.iniciativaocta.org/>

País Vasco. Decreto 190/2006, de 3 de octubre, por el que se regula el servicio de televisión local por ondas terrestres. *Boletín Oficial del País Vasco*, 23 de octubre de 2006, núm. 202, p.

20409. Recuperado el 14 de enero de 2012 de

<http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2006/10/0605209a.pdf>

País Vasco. Decreto 231/2011, de 8 de noviembre, sobre la Comunicación Audiovisual.

Boletín Oficial del País Vasco, 23 de noviembre de 2011, núm. 222, p. 05689. Recuperado el 14 de enero de 2012 de [http://www.euskadi.net/cgi-](http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000106495&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf)

[bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000106495&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf](http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000106495&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf)

País Vasco. Decreto 240/1986, de 11 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión en ondas métricas con frecuencia modulada.

Boletín Oficial del País Vasco, 19 de noviembre de 1986, núm. 227, p. 05866. Recuperado el 14 de enero de 2012 de [http://www9.euskadi.net/cgi-](http://www9.euskadi.net/cgi-bin_k54/concor?c=&FRASE=V%E9ase+DECRETO+198600240+de+11%2F11%2F1986+publicado+con+fecha+19%2F11%2F1986+&BOTON.x=10&BOTON.y=9)

[bin_k54/concor?c=&FRASE=V%E9ase+DECRETO+198600240+de+11%2F11%2F1986+publicado+con+fecha+19%2F11%2F1986+&BOTON.x=10&BOTON.y=9](http://www9.euskadi.net/cgi-bin_k54/concor?c=&FRASE=V%E9ase+DECRETO+198600240+de+11%2F11%2F1986+publicado+con+fecha+19%2F11%2F1986+&BOTON.x=10&BOTON.y=9)

Países Bajos. Ley de Medios, de 29 de diciembre de 2008. *WIPO*. Recuperado el 8 de marzo de 2011 de http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=228693

Red de Medios Comunitarios (2009). *Enmiendas de la Red de Medios Comunitarios*. Madrid:

Red de Medios Comunitarios. Recuperado el 8 de agosto de 2011 de

<http://www.medioscomunitarios.net/legal/>

Renania del Norte-Westfalia. Ley de Medios de Renania del Norte-Westfalia del 14 de

diciembre de 2009. *GV NRW*, número 35, p.728 y ss. Recuperado el 4 de febrero de 2012 de

<http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Medienrecht/lmg2009.pdf>

Sajonia-Anhalt. Directiva del Instituto de Medios de Sajonia-Anhalt sobre la concesión de ayudas para la promoción de canales abiertos, emisoras de radio no comerciales y proyectos

de educación en medios, de 4 de noviembre de 2011. *MSA*. Recuperado el 4 de febrero de 2012 de http://www.msa-online.de/cms/upload/downloads/01r_BMFoeRili_11-2011.pdf

Sajonia-Anhalt. Ley de Medios de Sajonia-Anhalt, de 18 de noviembre de 2004. *GVBl*, núm. 18. Recuperado el 4 de febrero de 2012 de http://www.djv-sachsen-anhalt.de/fileadmin/DJV_SACHS_A/Downloads/Dokumente_von_Dritten/MedienG_LSA

Suecia. SFS número 2010:696 de 17 de junio de 2010, Radio and Television Act. *Autoridad para radio y televisión*. Recuperado el 5 de diciembre de 2011 de http://www.radioochtv.se/documents/styrdokument/radio_and_television_act.pdf

Turingia. Ley de Medios del Estado de Turingia, de 15 de julio de 2014. *TLM*. Recuperado el 11 de septiembre de 2014 de http://www.tlm.de/tlm/die_tlm/rechtsgrundlagen/gesetze/thueringer_landesmediengesetz/ThruingerLandesmediengesetz_endg.pdf

Unión General de Trabajadores (2009). *Propuesta de enmiendas de la Federación de Servicios de UGT al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual*. Madrid: UGT. Recuperado el 12 de noviembre de 2012 de <http://www.revistalatinacs.org/09/alma/02nov/audio1.pdf>

Uruguay. Ley Número 18.232 de Servicio de Radiodifusión comunitaria de 22 de diciembre de 2007. *D.O.* publicado el 9 de enero de 2008, número 27401. Recuperado el 10 de diciembre de 2013 de <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18232&Anchor=>

Uruguay. Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 10 de diciembre de 2013. *Ministerio de Industria, Energía y Minería*. Recuperado el 14 de marzo de 2014 de http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2013/05/cons_min_682_anexo.pdf

Venezuela. Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Telecomunicaciones, de 20 de diciembre de 2010. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, número 39.610, publicada el 7 de febrero de 2011. Recuperado el 5 de mayo de 2011 de http://www.conatel.gob.ve/files/Reforma_Ley_Organica_Telecomunicaciones_2011-G.O.3.pdf

Venezuela. Presidencia de la República. Decreto número 1.521, de Reglamento de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, de 3 de noviembre de 2001. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, número 37.359, publicada el 8 de enero de 2002. Recuperado el 5 de mayo de 2011 de http://www.conatel.gob.ve/files/solicitudes/habilitaciones/Reglamento_de_Radiodifusion_Sonora_y_Television_Abierta_Comu.pdf

Venezuela. Presidencia de la República. Decreto número 1.522, mediante el cual se exonera del pago de todos los tributos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones a los operadores debidamente habilitados de servicios de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria, en los términos que en él se establecen, de 3 de noviembre de 2001. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, número 37.359, publicada el 8 de enero de 2002. Recuperado el 5 de mayo de 2011 de http://www.conatel.gob.ve/files/comunitarias/Decreto_Exoneracin_de_Comunitarias.doc

